

Isla de impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley



Índice

Glosario de abreviaturas	5
I. Resumen	7
II. Antecedentes: La Policía de Puerto Rico	21
III. Disparar a matar: Uso injustificado de la fuerza mortal	26
a. Asesinatos de civiles por la PPR reportados entre 2007 y 2011	28
b. Estudio de caso: Miguel Cáceres Cruz	41
c. Estudio de caso: Jorge Luis Polaco Jiménez.....	43
IV. Uso excesivo de la fuerza contra comunidades de bajos ingresos, afrodescendientes y dominicanas.....	45
a. Fuerza excesiva contra comunidades de bajos ingresos	46
b. Fuerza excesiva contra comunidades afropuertorriqueñas	49
c. Fuerza excesiva y otros abusos policiales contra inmigrantes dominicanos y puertorriqueños de origen dominicano	50
V. Macanas contra la expresión: Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión.....	54
a. Efecto disusivo sobre la libertad de palabra y libertad de expresión protegidas por la Constitución	56
b. Uso indiscriminado de gas CN lacrimógeno tóxico	57
c. Uso indiscriminado de gas pimienta.....	58
d. Uso indiscriminado de macanas.....	59
e. El uso sin control ni reglamentación del estrangulamiento de la carótida y técnicas de puntos de presión.....	60
f. Uso de munición “menos mortal” inadecuadamente reglamentado: Balas de goma y granadas de perdigones, proyectiles con bolsas rellenas de perdigones.....	60
g. Uso inadecuadamente reglamentado de pistolas paralizantes	61
h. Manoseo y acoso sexual de mujeres manifestantes	62
i. Trauma psicológico provocado por el abuso policiaco contra manifestantes.....	63
VI. Casos documentados de abuso policial contra manifestantes	64
a. Causas fundamentales que provocaron la oleada de protestas.....	65
b. Incidentes documentados de abuso policial contra los manifestantes frente al Capitolio.....	67
i. Primera protesta frente al Capitolio	67
ii. Segunda protesta frente al Capitolio.....	74
c. Abuso policial contra manifestantes estudiantiles, líderes y miembros del Hotel Sheraton.	76

d. Incidentes documentados de abuso policial contra líderes y miembros de sindicatos que se manifestaron en otros lugares	79
i. La mansión del Gobernador	80
ii. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico	81
iii. El Tribunal Supremo de Puerto Rico.....	81
e. Incidentes documentados de abuso policial contra manifestantes estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico	82
i. Avenida Universidad.....	82
ii. Huelga estudiantil de abril a junio de 2010	83
iii. Huelga de estudiantes de diciembre de 2010 a febrero de 2011	85
VII. Falta de control policial de los delitos de violencia doméstica y agresión sexual	93
a. Falta de prevención de los homicidios de compañeras íntimas	93
b. Fracaso para responder a incidentes de violencia doméstica.....	103
c. Fallo en respuesta a las violaciones sexuales.....	106
d. Violencia doméstica por agentes de la PPR.....	107
VIII. Impunidad total: Falta de investigación y castigo de la brutalidad policial	108
a. Graves deficiencias en el proceso de investigación: Fracaso para registrar querellas civiles y para investigar las quejas registradas de abusos policiales	110
b. Fracaso del procedimiento disciplinario de la policía: Falta de rendición de cuentas a los agentes	115
c. Falta de registro, presentación de informes y exámenes adecuados sobre el uso de la fuerza, disparos con agentes involucrados y otros incidentes críticos	119
d. Falta de enjuiciamiento de incidentes de uso excesivo de la fuerza	120
e. Abusadores anónimos: No asegurar que los agentes abusivos puedan ser identificados por las víctimas.....	120
IX. Una fuerza policial sin ley: Falta de directrices para regir el uso de la fuerza y de supervisión, capacitación y transparencia	121
a. Falta de directrices para regir el uso de la fuerza.....	122
b. Falta de implementación total de un peso normalizado del gatillo.....	124
c. Falta de supervisión independiente.....	125
d. Falta de adiestramiento y supervisión.....	126
e. Falta de transparencia: Falta de mantenimiento y publicación de estadísticas sobre la brutalidad policial	127
X. Derecho constitucional y de derechos humanos relevante	127
a. Normas constitucionales sobre el uso de la fuerza	127

b.	Normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza.....	128
c.	Normas constitucionales sobre la libertad de palabra, expresión y reunión	131
d.	Normas de derechos humanos sobre la libertad de palabra, expresión y reunión	134
XI.	Recomendaciones	136
XII.	Metodología y agradecimientos.....	148

Glosario de abreviaturas

ACLU	<i>American Civil Liberties Union</i> / Unión Americana de Libertades Civiles
AFL-CIO	<i>American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations</i> / Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales
APPU	Asociación de Profesores Universitarios de Puerto Rico
ASPRO	Asociación de Periodistas de Puerto Rico
ATF	<i>United States Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives</i> / Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos
CCT	Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
CEDR	Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
CIC	Cuerpo de Investigaciones Criminales
CIPA	Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación
DDE	Dispositivo de descarga eléctrica
DJPR	Departamento de Justicia de Puerto Rico
DOE	División de Operaciones Especiales
DOJ	<i>United States Department of Justice</i> / Departamento de Justicia de Estados Unidos
DOT	División de Operaciones Tácticas
DTE	División de Tácticas Especializadas
DUDR	Declaración Universal de los Derechos Humanos
FBI	<i>Federal Bureau of Investigations</i> / Buró Federal de Investigaciones
FCT	Federación Central de Trabajadores
FTPR	Federación de Trabajadores de Puerto Rico

FURA	División de Fuerzas Unidas de Rápida Acción
LAPD	<i>Los Angeles Police Department</i> / Departamento de Policía de Los Ángeles
MdE	Memorando de Entendimiento
NIE	Negociado de Investigaciones Especiales
NDNV	Negociado de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios y Armas Ilegales
NYPD	<i>New York City Police Department</i> / Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York
OPEIU	<i>Office and Professional Employees International Union</i> / Unión Internacional de Empleados de Oficina y Profesionales
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PNP	Partido Nuevo Progresista
PPD	Partido Popular Democrático
PPR	Policía de Puerto Rico
SARP	Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional
SEIU	<i>Service Employees International Union</i> / Sindicato Internacional de Empleados de Servicios
UFCW	<i>United Food and Commercial Workers International Union</i> / Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales
UGT	Unión General de Trabajadores de Puerto Rico
UOE	Unidad de Operaciones Especiales
UOT	Unidad de Operaciones Tácticas
UPR	Universidad de Puerto Rico
UTE	Unidad de Tácticas Especializadas

I. Resumen

La Policía de Puerto Rico (PPR), encargada de la labor policial en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el segundo departamento de policía más grande de Estados Unidos, siendo el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) el primero. Más de 17,000 agentes de la PPR se ocupan de los 3.7 millones habitantes de la isla. Con alrededor de 4.6 agentes de la PPR por cada 1,000 residentes, la proporción de agentes activos de la PPR por habitante en Puerto Rico constituye más del doble del promedio nacional de Estados Unidos.

La PPR ejerce esencialmente una función de seguridad pública y, sin embargo, la fuerza policial está plagada por una cultura de violencia y corrupción. Este departamento de policía disfuncional y recalcitrante lleva años causando estragos. El uso de la fuerza excesiva o mortal es habitual, y proliferan las violaciones de los derechos civiles y humanos. Los años de abusos incontrolados han provocado pérdidas prevenibles e injustificadas de vidas civiles, y daños graves y duraderos para otras incontables víctimas. Aunque, históricamente, el abuso policial ha afectado principalmente a los puertorriqueños y puertorriqueñas de bajos ingresos, los de afrodescendencia y los inmigrantes de origen dominicano, en los últimos tres años, los participantes en manifestaciones pacíficas también han sufrido el maltrato.

Puerto Rico, y su fuerza policial, se enfrentan actualmente a una crisis de seguridad pública con un aumento vertiginoso de la delincuencia y una tasa de homicidios sin precedentes. La cifra de 1,130 asesinatos en 2011 —casi tres muertes violentas al día— fue la más alta en la historia del país, aunque en el año anterior se había registrado la segunda cifra más alta de asesinatos de la historia de Puerto Rico. Puerto Rico tiene la décimo novena tasa de asesinatos per cápita más alta del mundo. En 2009, la tasa de homicidios superó a la de los otros 50 estados, casi duplicó la siguiente tasa estatal más alta, registrada en el estado de Luisiana.

La reducción de la delincuencia violenta representa un reto de enormes proporciones y a veces peligroso para la PPR. Con demasiada frecuencia, en lugar de frenar la violencia, la PPR contribuye a ella mediante el uso injustificado de la fuerza mortal y excesiva.

Después de una investigación exhaustiva por un periodo de seis meses de las prácticas policiales en Puerto Rico, basada en ocho años de trabajo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico documentando casos de brutalidad policial, la ACLU ha concluido que la PPR comete cada vez más abusos graves que violan la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y los compromisos de Estados Unidos en materia de derechos humanos. La PPR comete habitualmente abusos tales como el uso injustificado de la fuerza mortal contra civiles que no oponen resistencia y están retenidos o desarmados; las palizas y otras formas de violencia contra personas de origen africano, pobres y dominicanos que dejaron a algunos casi muertos y a otros paralizados o con lesiones cerebrales traumáticas; y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, como el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos, gas pimienta, macanas, balas de goma y granadas de perdigones, proyectiles con bolsas

rellenas de perdigones, pistolas paralizantes, estrangulamiento de la carótida y técnicas de puntos de presión. La PPR tampoco responde a los delitos de violencia doméstica y violación, ni protege a las mujeres frente a la violencia por parte de sus parejas íntimas.

Estos abusos no constituyen incidentes aislados o una conducta aberrante de unos cuantos agentes descontrolados. Dicha brutalidad policial es generalizada y sistémica, y se produce continuamente en toda la isla. La PPR está imbuida en una cultura de abuso incontrolado e impunidad casi total. El origen de los problemas que plagan la PPR es anterior al mandato del gobernador actual, Luis Fortuño, y los abusos continuarán si no se adoptan reformas de gran alcance.

Las siguientes conclusiones están basadas en evidencia recopilada por medio de las entrevistas realizadas por la ACLU entre marzo y septiembre de 2011 en Puerto Rico, así como el estudio pormenorizado de la documentación de los casos y la información publicada sobre incidentes que tuvieron lugar ya incluso en mayo de 2012, y los datos cuantitativos del Gobierno.

Antecedentes: Corrupción generalizada, violencia doméstica y otros delitos cometidos por los agentes de la PPR

Dentro de la fuerza policial existe una corrupción generalizada y otros delitos, tales como la violencia doméstica cometida por agentes de la PPR. El hecho de que la PPR no se enfrente a la conducta delictiva dentro de sus filas es sintomático de una disfunción institucional más amplia de los sistemas de vigilancia y disciplina del departamento.

Durante un período de cinco años que va de 2005 a 2010, más de 1,700 agentes de policía fueron detenidos por actividades criminales como asalto, robo, violencia doméstica, tráfico de drogas y asesinato. La cifra equivale al 10% de la fuerza policial, y constituye casi tres veces el número de agentes del NYPD detenidos en un período comparable de cinco años, a pesar de que el tamaño de este departamento duplica al de la PPR. En octubre de 2010, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a 61 agentes de la PPR como parte del operativo contra la corrupción policial más grande en la historia del FBI, y desde entonces el FBI ha arrestado a más agentes de la PPR. Se ha condenado a agentes por plantar drogas y fabricar cargos relacionados con narcóticos contra residentes de un residencial público (caserío), así como por otros delitos relacionados con narcóticos y armas de fuego.

Es más, la PPR ha registrado un espantoso número de denuncias de violencia doméstica contra agentes de la PPR. Entre 2005 y 2010, la PPR registró 1,500 denuncias de violencia doméstica contra agentes de policía. Al menos 84 agentes todavía activos han sido arrestados dos o más veces por incidentes de violencia doméstica. Han recibido mucha publicidad múltiples casos en los que agentes de la PPR dispararon a sus esposas con sus armas reglamentarias, y en algunos casos acabaron con su vida.

Disparar a matar: Uso injustificado de la fuerza mortal

Desde 2007, los agentes del DPPR han matado a tiros, golpeado o paralizado con sus armas a hombres desarmados, personas con discapacidad mental y personas que no suponían ninguna amenaza para los agentes o los transeúntes, y a personas que podrían haber sido retenidas con menos fuerza. Una serie de asesinatos a manos de la policía de los que se informó ampliamente a lo largo de un período de nueve meses en 2007, uno de los cuales se grabó en vídeo, arrojó luz sobre el problema constante del uso de la fuerza mortal por los agentes del DPPR, pero no resultó en reformas para frenar estos abusos.

Según las estadísticas suministradas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), los agentes del DPPR mataron a 20 personas en 2010 y 2011. La ACLU documentó 28 casos en los que se denunció que agentes del DPPR habían matado a civiles desde 2007 a 2011. En la mayoría de estos casos, las muertes no estuvieron justificadas, pudieron evitarse y/o no fueron necesarias para proteger la vida de un agente o un civil. Sabemos de al menos otros ocho casos en los que los agentes de la PPR mataron a tiros a civiles durante el mismo período, pero la ACLU no pudo documentar las circunstancias de estos asesinatos.

La ACLU ha documentado casos recientes en los que la policía mató a tiros a un joven desarmado de tan sólo 14 años y disparó contra un anciano de 77 años cuando entró en su casa para entregar y ejecutar una orden de registro. Dada la dificultad para obtener información sobre estos casos, salvo al producirse un escándalo público o un litigio relacionado, la investigación de la ACLU sobre el uso de la fuerza mortal se basa mayormente en los casos denunciados por los medios de comunicación locales. No cabe duda de que por cada uno de estos casos que ocuparon los titulares de la prensa, hay muchos otros que se desconocen.

Uso excesivo de la fuerza contra comunidades de bajos ingresos, negras y dominicanas

Los agentes de la PPR asignados a unidades tácticas hacen uso excesivo de la fuerza cuando patrullan y monitorean comunidades pobres, afrodescendientes y dominicanas. Durante encuentros con civiles en estas comunidades, habitualmente, los agentes hacen uso excesivo de la fuerza o recurren de manera innecesaria e inadecuada a la fuerza, y persiguen de manera desproporcionada a las minorías raciales y los pobres. La PPR hace uso excesivo de fuerza en lugar de cumplir con sus deberes y obligaciones policiales dentro de estas comunidades.

La policía hace uso excesivo de la fuerza mediante acciones tales como golpear con macanas, propinar patadas y puñetazos, arrojar al suelo o contra paredes y objetos, inmovilizar con técnicas de estrangulamiento y disparar armas de fuego. En los casos documentados por la ACLU, la policía infligió lesiones como las siguientes: fractura de mandíbula, pérdida de dientes, fractura de huesos, hemorragia interna, contusión grave, laceraciones, desgarres, daño en los órganos vitales, fallo de órganos vitales, lesión cerebrales, parálisis, muerte cerebral y muerte. En los casos documentados por la ACLU,

las víctimas no se habían resistido al arresto o ya habían sido detenidas, desarmadas y representaban muy poco o ningún riesgo a los agentes o los transeúntes en el momento en que los agentes usaron la fuerza. La ACLU documentó casos en los que la policía golpeó gravemente a personas que ya estaban esposadas. En algunos casos, la policía no se llevó bajo arresto a las víctimas después de haberlas lesionado y se limitaron a abandonarlas lesionadas y ensangrentadas en la calle o sus casas.

El uso excesivo de la fuerza es un fenómeno generalizado. De acuerdo con los datos facilitados por la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP), la cual supervisa las investigaciones administrativas internas de los agentes de la PPR, determinaron que entre 2004 y agosto de 2010, la población civil presentó al menos 1,768 denuncias contra agentes por uso excesivo e injustificado de la fuerza o agresión. Es probable que estas cifras sean bajas y no representen con precisión el alcance del problema: la investigación realizada por la ACLU demuestra que con frecuencia los civiles deciden no denunciar el abuso policial debido a la falta de confianza que existe en el sistema de investigación y disciplinario de los agentes, la impunidad ampliamente reconocida para el abuso policial, y el temor a las represalias por denunciar violaciones de los derechos civiles y humanos.

El uso excesivo de la fuerza es común entre los agentes de múltiples unidades tácticas de la PPR. Hemos determinado que algunas de las unidades especialmente problemáticas son la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), cuya labor se efectúa por la División de Operaciones Tácticas (DOT), conocida coloquialmente como Fuerza de Choque, en cada una de las 13 regiones policiales; y la División de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios y Armas Ilegales (NDNV), la cual es representada cada una de las 13 regiones policiales de la isla por una División de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios, denominada normalmente como División de Drogas. También llama la atención la Unidad de Tácticas Especializadas (UTE), conocida comúnmente como el Grupo de los Cien. Es una unidad de élite de agentes agrupados en equipos multidisciplinarios procedentes de varias unidades policiales diferentes, como drogas, tráfico, robo de vehículos y la UOT, para combatir el tráfico de drogas. Además de sus operaciones antidroga, la UTE ha colaborado estrechamente con la UOT en la respuesta a protestas.

Macanas contra la expresión: Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión

Desde 2009, la PPR también ha hecho uso excesivo de la fuerza contra manifestantes no violentos. Aunque la represión policial provocada movimiento de Ocupación (“Occupy”) ha centrado la atención en el problema del abuso policial contra manifestantes en Estados Unidos, la PPR no ha abordado su uso frecuente y sistemático de la fuerza contra manifestantes. Los agentes de la Policía utilizan la fuerza para reprimir derechos constitucionales protegidos como lo son la libertad de palabra y la libertad de expresión: indiscriminadamente utilizan sustancias químicas como un compuesto tóxico de gases lacrimógenos y gas pimienta, macanas, pelotas y perdigones de goma, granadas de perdigones de goma, proyectiles con bolsas rellenas de perdigones, pistolas paralizantes, estrangulamiento de la carótida y técnicas de puntos de presión contra los manifestantes. Comúnmente la Policía ha utilizado fuerza excesiva al intervenir con manifestantes, de

este modo violentando los derechos de libertad de expresión, palabra y reunión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como el derecho a no ser sometido a arrestos y detenciones irrazonables, protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La ACLU documentó numerosos casos de abuso policial contra manifestantes que se encontraban organizados en predios públicos como el Capitolio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la mansión del Gobernador, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y el campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La PPR frecuentemente responde a las protestas pacíficas con la movilización de numerosos agentes de la Fuerza de Choque totalmente equipados con armadura acolchada, cascos con viseras, botas de combate y escudos de plástico. Es común que los agentes estén armados con macanas antidisturbios, cilindros de gas pimienta, pistolas de gases lacrimógenos, escopetas de balas de goma y/o pistolas de perdigones; y armas de fuego con munición real.

En respuesta a manifestaciones políticas total o mayoritariamente pacíficas, la policía disparó cilindros de gas lacrimógeno contra los manifestantes con escopetas antidisturbios o “lanzaderas menos mortales”, un arma de fuego con aspecto similar a un lanzagranadas. La policía también arrojó gases lacrimógenos desde helicópteros, y en las imágenes de vídeo y las fotografías aparecen los manifestantes rodeados de densas nubes de gases lacrimógenos. La policía roció a escasos centímetros de distancia a los manifestantes con gas pimienta, cayéndole directamente en los ojos, la nariz y la boca. Los manifestantes señalaron a la ACLU que la policía los roció con tanto gas pimienta que quedaron cubiertos por un líquido anaranjado, que les caía por la cara y el cuerpo y los cegó temporalmente y provocó un horrible dolor que en algunos casos se prolongó durante días.

Los agentes han golpeado, apuñeteado o apaleado a los manifestantes con macanas de 36 pulgadas de largo, que utilizan como armas de impacto contundente especiales para las operaciones antidisturbios. Para provocar un mayor impacto, los agentes sujetaron las macanas con ambas manos mientras levantaban ambos brazos sobre sus cabezas para obtener mayor fuerza. En numerosos casos, los agentes de la Fuerza de Choque llegaron incluso a perseguir a los manifestantes que huían y los golpearon por detrás en la cabeza, la espalda y los hombros. Los agentes también utilizaron dolorosos estrangulamientos de la carótida y técnicas de puntos de presión para provocar dolor a los manifestantes que se resistieron pacíficamente. Los agentes ejercieron presión en puntos de la mandíbula, cerca del cuello o directamente en los ojos y las cuencas de los ojos. Las tácticas de puntos de presión no sólo provocan un dolor severo, sino que también bloquean el flujo sanguíneo normal al cerebro y pueden ser mortales si no se realiza adecuadamente. En algunos casos, estas técnicas han provocado que los manifestantes estudiantiles pierdan el conocimiento.

Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la PPR, numerosos manifestantes tuvieron que recibir atención médica por golpes contundentes y penetrantes, contusiones, lesiones en la cabeza, roturas de ligamentos y torceduras,

dificultad para respirar y quemaduras de segundo grado provocadas por las sustancias químicas.

A pesar del generalizado uso de violencia por parte de la PPR contra manifestantes durante varios de los incidentes documentados por la ACLU, como lo fue la protesta frente al Capitolio el 30 de junio de 2010 y la manifestación a las puertas de un evento político para recaudar fondos en el Hotel Sheraton el 20 de mayo de 2010, muy pocos manifestantes fueron detenidos durante estos incidentes. La escasez de arrestos tras estos incidentes demuestra que los manifestantes no constituyeron una amenaza para la seguridad pública y que el uso de la fuerza no era necesario ni estaba justificado.

En otros casos relacionados con las protestas estudiantiles en la UPR, especialmente durante las huelgas de estudiantes de abril a junio de 2010 y de diciembre de 2010 a febrero de 2011, se documentaron un sinnúmero de detenciones injustificadas de estudiantes de la UPR para poner fin a sus protestas, reprimiendo de este modo su derecho a la libertad de palabra y de expresión. Muy pocos arrestos y detenciones de estudiantes fueron basados en causa probable. De los aproximadamente 200 estudiantes de la UPR que fueron detenidos, algunos en múltiples ocasiones, la fiscalía sólo fueron formulados cargos contra aproximadamente 17 de ellos. En repetidas ocasiones los manifestantes estudiantiles fueron arrestados y recluidos durante horas en una celda policial para finalmente ser dejados en libertad luego de que los tribunales no encontraran causa probable para justificar su arresto.

Estos abusos han tenido un efecto paralizador sobre el derecho a protestar protegido por la Primera Enmienda, y numerosos estudiantes universitarios, líderes y miembros de sindicatos señalaron a la ACLU que han dejado de protestar, o reducido significativamente sus actividades de protesta, debido al temor a volver a sufrir la violencia policial y arrestos injustificados. Una serie de estos autodenominados activistas, que han participado en protestas anteriores en numerosas ocasiones, indicaron que ya no se sienten seguros participando en manifestaciones. Dijeron tener miedo que la PPR vuelva a hacer uso excesivo e injustificado de la fuerza para reprimir sus manifestaciones, y se muestran reticentes a expresar públicamente sus ideas políticas por temor a las represalias de la PPR.

Todos los manifestantes entrevistados por la ACLU informaron creer que el objetivo del uso de la fuerza por parte de la PPR fue reprimir su derecho a la libertad de palabra y expresión, esto dirigido directamente contra los puntos de vistas críticos contra el gobierno actual y sus políticas. Sin excepción alguna, todos los ciudadanos afectados, líderes comunitarios, activistas estudiantiles universitarios, líderes y miembros de sindicatos que entrevistamos indicaron que consideraban que la policía los había perseguido debido a las opiniones que habían intentado expresar.

Falta de control policial de los delitos de violencia doméstica y agresión sexual

De manera sistemática, la PPR no protege a las víctimas de violencia doméstica ni investiga las denuncias de delitos de violencia doméstica, agresión sexual e incluso los

asesinatos de mujeres y jóvenes por sus compañeros o esposos. La PPR no protege a las mujeres y las jóvenes frente al abuso de sus compañeros y ex compañeros íntimos, ni tampoco responde a estos crímenes cuando se cometen.

A nivel mundial, Puerto Rico tiene la tasa más alta de asesinatos de mujeres mayores de 14 años cometidos por sus compañeros. Las cifras son inquietantes y continúan subiendo: 107 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros íntimos durante el período de cinco años que va de 2007 a 2011. El número de mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos aumentó significativamente en 2011 a 30 asesinatos, esto frente a los 19 registrados en 2010. En 2006, la PPR informó de 23 asesinatos de mujeres a manos de sus compañeros o esposos, colocando a Puerto Rico en el primer puesto dentro de una lista internacional que compara el número de mujeres asesinadas por sus compañeros anualmente en cada país/territorio por cada millón de mujeres mayores de 14 años.

Del número de mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos desde 1991 a 1999, sólo el 17% tenían órdenes de protección, un escaso 2% de los asesinos tenían órdenes de arresto pendientes y en el 4% de los casos había vencido el plazo de las órdenes de protección. En 2007, el 25% de las mujeres asesinadas por sus compañeros habían denunciado incidentes de violencia doméstica al DPPR. Debido a la falta de confianza en el sistema por no ofrecer una protección adecuada a las víctimas, el número de mujeres que acuden a la PPR en un intento de protegerse de sus compañeros abusivos, se continúa reduciendo.

La PPR ha fallado en asegurar que las mujeres que se enfrentan a la violencia doméstica utilicen las opciones legales de las cuales disponen, y no ejecuta las órdenes de protección vigentes mediante el arresto de los agresores que violan sus condiciones.

En julio de 2011, durante la sesión para su confirmación ante la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, se le preguntó al recién sustituido Superintendente de la Policía, Díaz Colón, acerca de las muertes provocadas por la violencia doméstica que habían ocurrido en la isla. Respondió que la violencia doméstica es una cuestión privada y está fuera de la competencia de la PPR.

Más aún, la PPR no está respondiendo ni investigando adecuadamente los crímenes de violación, e informa una cantidad menor a la realmente ocurrida. La PPR informó que sólo se cometieron 39 violaciones sexuales en 2010, mientras que registró también 1,000 homicidios durante ese mismo año. Basado de los datos de los departamentos de policía de todo Estados Unidos, es probable que la cifra de violaciones sea 100 veces superior a la registrada por la PPR, ya que otras jurisdicción de Estados Unidos registran alrededor de cuatro veces más violaciones que homicidios.

El número de violaciones sexuales denunciadas ha disminuido exponencialmente: de 426 en 1990 a 39 en 2010. Mientras la tasa de violaciones denunciadas se ha reducido considerablemente en los últimos diez años, de 228 violaciones sexuales en 2000 a 39 en 2010, la tasa de asesinatos ha experimentado un marcado aumento durante el mismo

período, lo que indica que la disminución del crimen no es la causa del reciente nivel sospechosamente bajo de las estadísticas sobre violaciones.

La sorprendente diferencia entre las violaciones y los asesinatos denunciados se debe a que la PPR no cumple con los protocolos para responder, documentar e investigar los delitos de violación y agresión. En el caso de la violencia sexual, las fuentes oficiales estiman que sólo se denuncian el 16% de las violaciones. En su último estudio, publicado en 2007, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud de Puerto Rico estimó que anualmente 18,000 personas, sobre todo mujeres y niñas, son víctimas de violencia sexual en Puerto Rico.

Impunidad total: Falta de investigación y castigo de la brutalidad policial

Hay numerosos factores que contribuyen a estos amplios y profundos abusos contra los derechos humanos, abusos que se hubiesen podido prevenir. Nuestra investigación ha concluido que los sistemas existentes de investigación, disciplina y presentación de informes resultan enormemente inútiles para abordar, y por lo tanto prevenir, los abusos policiales. En concreto, hemos documentado el fracaso de los siguientes sistemas: los procesos de disciplina y otros sistemas para responsabilizar a los agente, que no sancionan la mala conducta de los agentes; el proceso de investigación, ya que no examina de manera eficaz el uso de la fuerza y las denuncias de mal conducta policial; y el sistema de presentación de informes, que no recopila ni da seguimiento a los datos que podrían utilizarse para corregir estos problemas graves.

Estos sistemas prácticamente garantizan la impunidad: en lugar de disuadir los abusos exigiendo cuentas a los agentes responsables, la PPR permite que los agentes eviten el castigo y cualquier otra consecuencia, volviéndolos a armar y movilizar en el servicio activo, donde con frecuencia repiten sus malas conductas. Las denuncias ciudadanas de brutalidad y el uso de fuerza excesiva y mortal languidecen durante años sin resolverse. Es raro que se sancione administrativamente o se enjuicie criminalmente a los agentes abusivos. La PPR da seguimiento a la conducta reincidente de los agentes que violan la ley y acumulan largos historiales de denuncias hechas por ciudadanos. El hecho de que no se apliquen sistemas de alerta temprana para detectar a los agentes abusivos y localizar a los agentes con un alto riesgo de cometer abusos ha provocado la lamentable y evitable pérdida de numerosas vidas.

Los sistemas de investigación, disciplina y presentación de informes de la PPR dan el visto bueno al uso de la fuerza, encubren el abuso cometido por sus agentes y fomentan un código de silencio. Documentamos un sistema disciplinario que retiene, protege e incluso asciende a los agentes que hacen uso mortal o excesivo de la fuerza. Se trata de un sistema disciplinario que mantuvo en la fuerza policial a un agente abusivo después de que un psicólogo de la policía lo calificara como una “bomba de tiempo”. Ese mismo agente más adelante ejecutó a un hombre desarmado en la calle. Además es un sistema que otorgó medallas de valor a agentes involucrados en la muerte a tiros de un hombre enfermo mental e incluso cuando se había comenzado una investigación sobre el uso de la fuerza. Un sistema que restituye a un agente que había retenido al jefe de la policía

local a punta de pistola, después de este agente haber sido detenido en ocho ocasiones diferentes. La PPR lo vuelve a armar y es enviado nuevamente a patrullar un residencial público donde mató a tiros a un joven desarmado de 18 años.

También se documentó un sistema de investigación en el que no se entrevista a las víctimas y se ignoran los testimonios de testigos presenciales los cuales contradicen la versión de los agentes, como ocurrió en un caso en el que la investigación sobre unos disparos mortales contra un hombre desarmado sólo informó la versión de los hechos de los agentes involucrados y declaró someramente que se entrevistó a los transeúntes en la escena de los hechos, “pero hicieron comentarios adversos contra la policía”.

Una fuerza policial sin ley: Falta de directrices para gobernar el uso de la fuerza y de supervisión, capacitación y transparencia

La ACLU ha detectado una serie de políticas y prácticas problemáticas de la PPR que contribuyen al patrón de abuso policial, como la falta de directrices para regular el uso de la fuerza; la falta de control, supervisión y capacitación adecuada; la falta de recopilación, investigación y seguimiento de datos; y la falta de implementación de un peso estandarizado del gatillo compatible con las normas nacionales de Estados Unidos.

Los agentes de la PPR realizan una función esencial de seguridad pública, y la ACLU reconoce la importante labor que desempeñan todos los días los agentes del departamento. Sin embargo, la PPR no ofrece orientación básica a su personal acerca del desempeño de sus deberes de manera compatible con las normas constitucionales y de derechos humanos. Hasta el 31 de enero de 2012, la PPR no contaba con una política integral sobre el uso de la fuerza. Dicha política es un aspecto normal de los departamentos de policía de todo Estados Unidos, y una práctica policial estándar en todo el mundo. Hasta la fecha, la PPR no ha implementado totalmente la nueva política y todavía no ha capacitado a todo su personal acerca de esta política.

La PPR sigue careciendo de protocolos estándar que regulen el tipo de fuerza que pueden emplear los agentes, lo que incluye orientaciones acerca del uso de sustancias químicas, armas contundentes y munición “menos mortal” como balas de goma y granadas de perdigones. La PPR tampoco cuenta con protocolos para el control policial de protestas o manifestaciones a gran escala, la debida intervención con personas con enfermedades mentales y el manejo de denuncias de violencia doméstica y sexual.

Las políticas existentes de la PPR incumplen las normas constitucionales y las prácticas policiales de Estados Unidos. Por ejemplo, las políticas de la PPR sobre el uso de armas de fuego, pistolas paralizantes y macanas no incorporan los requisitos legales actuales que gobiernan el uso de la fuerza por parte de los agentes, no insisten en el uso de alternativas a la fuerza física y no exigen que se recurra a medidas para evitar o minimizar el uso de la fuerza. Las políticas existentes no establecen un protocolo claro sobre los niveles de fuerza permitidos para responder a los diferentes niveles de resistencia que manifiestan los sospechosos. Las políticas existentes tampoco ofrecen ningún tipo de orientación acerca de otros tipos de fuerza, que no involucran armas de

fuego, que pueden considerarse mortales, como los estrangulamientos, la presión sobre la carótida, los golpes en la cabeza con macanas y otras armas contundentes. Las políticas existentes ni siquiera reconocen que estos tipos de uso de fuerza pueden ser mortales, lo que supone una omisión grave. Adicional a esto, las órdenes de la PPR que regulan sus prácticas no son fácilmente accesibles ni comprensibles para los agentes, a los cuales no se les provee con copias de estas órdenes.

Los agentes reciben una formación y entrenamiento inadecuado, una supervisión insuficiente y una orientación mínima sobre los límites legales del uso de la fuerza y su conducta. La PPR ni siquiera aplica los protocolos y las leyes vigentes para regular la conducta de los agentes. Aún más, la supervisión pública y la transparencia de las políticas y las prácticas de la PPR son mínimas, y tampoco existe un mecanismo de examen independiente.

Hasta febrero de 2011, la PPR no utilizaba una norma sobre el peso del gatillo, y dejaba la configuración de fábrica de 5.5 y 6.5 libras en todas las armas de servicio, lo que es considerablemente más liviano a los pesos estándar de los departamentos metropolitanos de policía de Estados Unidos, como el NYPD, que requiere un peso de 12 libras del gatillo en todas las armas de servicio. La PPR no había prestado atención al peso del gatillo de sus armas de servicio hasta el 2010 luego de la muerte a tiros de un joven de 22 años que estaba desarmado, había presenciado un robo y decidió quedarse en el lugar de los hechos para ofrecer su testimonio a la Policía. En ese caso, luego de que accidentalmente se disparara el arma de uno de los cinco agentes en el lugar, otro agente abrió fuego y disparó diez veces, impactando mortalmente al joven en la nuca.

En febrero de 2011, el superintendente de la PPR emitió una orden para que se fijara un peso estándar del gatillo a 8.5 libras en todas las armas de servicio de la PPR. Sin embargo, el superintendente ordenó un cambio gradual de los resortes que regulan el peso del gatillo de las armas de servicio y, en junio de 2011, la PPR todavía estaba usando 9,000 armas de servicio cuyo peso del gatillo no se había modificado. El exceso de sensibilidad de los gatillos provoca disparos no intencionados durante la interacción de la policía con civiles y situaciones con disparos excesivos, en las que los agentes disparan más tiros de los que dispararían con armas con mayor peso en el gatillo. A mediados de la década de 1990, el NYPD incrementó el peso obligatorio del gatillo de las armas de servicio de 8 a 12 libras, con el fin de minimizar los disparos no intencionados. Es esencial que la PPR modifique el gatillo de todas sus armas de servicio para que tenga un peso mínimo de 8.5 libras, y que idealmente aumente su peso estándar del gatillo a un nivel comparable al de los departamentos de policía de ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

El camino por recorrer

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) comenzó una investigación sobre la PPR en julio de 2008 y, en septiembre de 2011, publicó sus conclusiones en un informe denominado técnicamente como una “carta de conclusiones”. La investigación del DOJ se centró en el período de cuatro años que va de 2004 a 2008, y se amplió para

cubrir la respuesta policial a las protestas en 2009 y 2010. El DOJ encontró un patrón y una práctica de violaciones de la Constitución por parte de la PPR, que incluyen el uso excesivo de la fuerza en violación a la Cuarta Enmienda, el uso irrazonable de la fuerza y otras malas conductas que reprimen los derechos protegidos por la Primera Enmienda, y concluyó que “la PPR está viciada en varios aspectos críticos y fundamentales”¹. El superintendente en ese momento, Emilio Díaz Colón, quien sólo llevaba tres meses en el cargo cuando el DOJ publicó su informe, respondió rechazando las conclusiones del DOJ y negando cualquier violación de la Constitución por parte de la PPR. En una demanda judicial, el Departamento de Justicia de Puerto Rico denunció que el informe del DOJ era poco confiable, deficiente y parcializado². El 29 de marzo de 2012, el gobernador Luis Fortuño nombró a Héctor Pesquera como superintendente de la PPR, tras la renuncia de Díaz Colón. Pesquera, el octavo superintendente de la PPR en 11 años, dijo a los periodistas en abril de 2012 que la PPR no viola los derechos humanos, al ser presionado reconoció que algunos agentes sí habían cometido dichas violaciones³.

La PPR ha demostrado que ni quiere ni puede vigilarse a sí mismo, y el liderazgo político de Puerto Rico no han tomado cartas en el asunto. La PPR lleva tiempo prometiendo reformas y ha declarado públicamente su compromiso de reformar algunas de sus políticas, pero en la mayoría de los casos no ha cumplido estas promesas. Inmediatamente después de la publicación de las conclusiones de la investigación del DOJ, el Gobernador Fortuño anunció un plan que prevee una serie de reformas, muchas de estas superficiales y la mayoría de las cuales no se habían aplicado nueve meses después del anuncio. Cabe reconocer que la PPR ha contratado a un equipo de expertos cualificados para que asistan en la formulación de nuevas políticas, lo que resultó en la publicación de una nueva política general sobre el uso de la fuerza a finales de enero de 2012. Sin embargo, la nueva política de Puerto Rico sobre el uso de la fuerza no cumple las normas constitucionales y nacionales de Estados Unidos, es vaga y carece de criterios objetivos sobre el uso de la fuerza mortal por parte de agentes de la PPR. No se han materializado la mayoría de las reformas prometidas por el gobernador Fortuño y la PPR. Inclusive, aunque la adopción del nuevo protocolo sobre el uso de la fuerza es un paso necesario, la nueva política no tiene sentido sin medidas eficaces que responsabilicen a los agentes en relación al uso de la fuerza y una capacitación y aplicación adecuadas.

Desde que entró en vigor la nueva política sobre el uso de la fuerza, se han producido al menos cinco incidentes recientes de posible uso de fuerza excesiva por parte de agentes de la PPR. Estos incidentes, entre abril y mayo de 2012, cobraron la vida de un joven de 19 años, provocaron lesiones graves a cuatro jóvenes al ser disparados por agentes y lesionaron a un joven como consecuencia de una paliza que le propinó un agente de la PPR. Estos incidentes también incluyen el tiroteo de la policía el 27 de abril de 2012 en el estacionamiento de un centro comercial en Manatí, en el que el agente de la PPR Alfredo Delgado disparó contra dos hermanos y mató a Saúl Medina Figueroa, de 19 años, e hirió de gravedad a Adrián Medina Figueroa, de 21 años. Se alega que el agente detuvo a la hermana pequeña de los jóvenes por rebasar un semáforo en rojo frente al restaurante de tacos donde trabajaban los hermanos. Posteriormente, sus hermanos y su madre, que no portaban armas, tuvieron un altercado verbal con el agente. El agente informó que intentó usar su macana contra la familia, pero uno de los hermanos se la arrebató y le

golpeó con esta, mientras que el otro hermano le golpeó con un tubo de su automóvil. El agente disparó 14 veces, mató a Saúl disparándole dos tiros en el abdomen y la pierna e hirió gravemente a Adrián con tres impactos de bala, uno de ellos en el pecho. En otro incidente reciente ocurrido el 7 de mayo de 2012 en Puerta de Tierra, el agente de la PPR Juan Nieves disparó contra el joven de 21 años Héctor Núñez Morla, que iba desarmado, esto luego de que el joven supuestamente le propinara un puñetazo en la cara. Según se informó, el agente había parado al joven por una presunta infracción de tráfico y le disparó dos veces, en el brazo y el costado derecho. Ambos incidentes despiertan serias dudas sobre hasta qué punto fue razonable el nivel de fuerza usado por los agentes. Tras estos incidentes, el Superintendente Pesquera hizo unas inquietantes declaraciones a la prensa, en las que aparentemente justificó el uso de la fuerza mortal contra atacantes desarmados que agreden a agentes de policía, y señaló que “cualquier ataque a un policía tiene que ser repelido por fuerza y cualquier consecuencia que ocurra va a ser responsabilidad del atacante”⁴.

La PPR requiere una revisión, no una simple reforma gradual, y ciertamente no necesita las promesas vacías de reforma que se han ofrecido hasta la fecha. La PPR tiene que abordar las cuestiones estructurales identificadas en los informes de la ACLU y el DOJ, y un tribunal federal debe supervisar estas reformas de gran alcance. Aunque las conclusiones del DOJ son un paso fundamental, si no se establecen mecanismos de aplicación para asegurar que la PPR adopte las reformas esenciales recomendadas por el DOJ y la ACLU, no se producirá un cambio y los agentes de la policía abusivos seguirán quitando y destruyendo vidas. Para poder detener el continuo abuso policial y traducir las reformas programadas en un cambio real, es necesario un acuerdo entre el DOJ y el Gobierno de Puerto Rico, que pueda ser ejecutado y supervisado por un tribunal y que incluya un plan integral de reforma.

Desde 2004, la ACLU de Puerto Rico ha estado documentando numerosos casos de brutalidad policial en la isla. Entre marzo y septiembre de 2011, la oficina nacional de la ACLU realizó una investigación documental sobre derechos humanos en Puerto Rico para continuar la documentación de las denuncias de brutalidad policial. Este informe se basa en una investigación integral de seis meses. Durante los meses de marzo, abril, mayo y septiembre de 2011 la ACLU realizó entrevistas en Puerto Rico con funcionarios del Gobierno y víctimas de la brutalidad policial, sus familiares y/o abogados. Nos concentramos en los incidentes ocurridos durante un período de cinco años que va de 2007 a 2011, y hemos continuado el seguimiento de los incidentes, las políticas y las prácticas. En junio de 2011, publicamos un informe preliminar sobre las observaciones de nuestra investigación⁵. Esta versión ampliada del informe contiene todos nuestros hallazgos basados en la investigación de campo e información documental adicional del continuo abuso policial en Puerto Rico, como lo son los incidentes de uso excesivo de la fuerza que tuvieron lugar tan reciente como mayo 2012.

Este informe no abarca otras categorías sobre mala conducta policial que predominan dentro de la PPR y despiertan serias preocupaciones, como lo son los registros y las incautaciones ilegales, los perfiles raciales, y las retenciones y cacheos inconstitucionales. En su informe, el DOJ concluyó que la PPR está involucrada en un

patrón y una práctica de registros e incautaciones inconstitucionales, un problema que los activistas comunitarios en Puerto Rico llevan planteando por mucho tiempo. Entre otras categorías de abuso policial que no se documentan en este informe, pero que han sido documentadas por la ACLU de Puerto Rico y los medios de comunicación y que deben investigarse, son el abuso policial contra las personas sin hogar en las zonas urbanas (especialmente en Aguadilla, San Juan y Bayamón) y el abuso policial contra la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBTT).

Basados en nuestra investigación, la cual incluye nuestras observaciones de numerosas políticas y prácticas problemáticas que contribuyen al patrón de abuso policial, hemos formulado recomendaciones claras para las tan necesarias reformas. Estas reformas no sólo ayudarán a que la PPR respete las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico y los derechos humanos, sino que también contribuirán a combatir la crisis de seguridad pública a la que se enfrenta actualmente el país. La labor policial constitucional es un componente esencial de la seguridad pública. Las prácticas policiales que respetan los derechos civiles y humanos de los puertorriqueños son esenciales para sembrar la confianza del público en el departamento de policía, un elemento fundamental para mejorar la seguridad pública.

La ACLU formula las siguientes recomendaciones. Al final del informe se incluye una lista completa de recomendaciones.

- Desarrollar, revisar e implementar políticas integrales sobre el uso de la fuerza mortal y menos mortal y los encuentros con la población civil compatibles con las normas nacionales, constitucionales y de derechos humanos. Éstas deben incluir políticas sobre el disparo de armas de fuego, las sustancias químicas irritantes, las presiones sobre la carótida y los estrangulamientos, las técnicas de puntos de presión, los perdigones y otros proyectiles “menos mortales”, escopetas de bolsas rellenas de perdigones, perros, macanas, pistolas paralizantes y otros dispositivos conductores de electricidad, retenciones físicas y la manera de sacar y apuntar armas de fuego. También debe incluir políticas sobre el trato hacia los manifestantes y el manejo de las protestas públicas, así como el trato a personas con condiciones médicas, enfermedades mentales o menores de edad.
- Desarrollar e implementar totalmente procedimientos integrales para investigar denuncias de abuso policial y otras denuncias de la población civil. Esto debe incluir procedimientos que requieran a los investigadores identificar, entrevistar y registrar las declaraciones de todos los agentes involucrados y los testigos presenciales. También debe incluir protocolos sobre la recopilación de denuncias de la población civil para asegurar que todos los civiles que quieran denunciar situaciones de conducta abusiva de agentes puedan hacerlo.
- Crear y aplicar los sistemas de presentación de informes para documentar *todos* los usos de la fuerza por parte de la PPR, como sucede normalmente en todos los departamentos de policía metropolitana dentro del continente de Estados Unidos. Desarrollar e implementar totalmente una política de presentación de informes sobre el uso de la fuerza que incluya protocolos detallados para los informes sobre tiroteos con agentes involucrados y la preparación y registro de informes de

- incidentes en campo. Desarrollar e implementar una política para examinar los informes sobre el uso de la fuerza e incidentes críticos.
- Crear y aplicar procedimientos de disciplina justos y expeditos para imponer sanciones disciplinarias a los agentes que no cumplan los protocolos, lo que incluye desarmarlos, expulsarlos del servicio activo y suspenderlos permanentemente, cuando proceda. Reformar el sistema de disciplina interna para examinar periódicamente los expedientes disciplinarios de los agentes con el fin de detectar conductas reincidentes y evaluar el riesgo de una futura conducta ilegal.
 - Implementar eficazmente las políticas mediante la capacitación de los agentes de la PPR para que cumplan todas las políticas y leyes aplicables sobre el uso de la fuerza, y disponer una supervisión adecuada para asegurarse de que se cumplen las políticas sobre el uso de la fuerza.
 - Adoptar medidas para abordar los problemas graves la vigilancia policial sobre asuntos de violencia doméstica y sexual. Dichas medidas deben incluir la adopción de políticas claras y mejoradas sobre la respuesta policial, la investigación y la recopilación de evidencia, la clasificación de los delitos y las determinaciones de cargos imputables, la capacitación de los agentes, la supervisión y la rendición de cuentas por la mala conducta policial con respecto a la violencia doméstica y sexual, y la respuesta a los casos de violencia domésticas o sexual cometidos por agentes.
 - Recopilar e informar públicamente las estadísticas sobre el uso de la fuerza por parte de la PPR, las investigaciones internas iniciadas y completadas y las medidas disciplinarias adoptadas contra agentes de policía.
 - La Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe crear un organismo de supervisión eficaz e independiente para dar seguimiento al cumplimiento de todas las leyes aplicables por parte de la PPR. El organismo de supervisión debe contar con plena autoridad y fondos adecuados para cumplir su mandato, y debe ser totalmente independiente de la PPR y la Oficina del Gobernador de Puerto Rico.
 - El DOJ debe contraer un acuerdo con la PPR que pueda ser ejecutado y monitoreado por un tribunal. El acuerdo debe incluir un plan detallado y ejecutable por un tribunal para la adopción de reformas integrales que aborden todas las observaciones y recomendaciones contenidas en la carta de conclusiones del DOJ y este informe.

II. Antecedentes: La Policía de Puerto Rico

La PPR es el segundo departamento de policía más grande del país, siendo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el primero. Los más de 17,000 agentes de la PPR se ocupan de los 3.7 millones habitantes de la isla. Con alrededor de 4.6 agentes de la PPR por cada 1,000 residentes, la proporción de agentes en activo por habitante en Puerto Rico constituye más del doble en comparación con el promedio nacional de los departamentos de policía que se ocupan de poblaciones de más de 250,000 habitantes⁶. La PPR está dividida en 13 regiones policiales: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado⁷. Diversas unidades tácticas están representadas en cada región por una división cada unidad. Hay 80 comisarías en toda la isla⁸.

El Gobernador de Puerto Rico tiene la autoridad última sobre la PPR: nombra al superintendente para que administre la PPR, el cual está sujeto a la confirmación del Senado de Puerto Rico. El Gobernador aprueba las designaciones de puestos superiores en la PPR, desde los inspectores hasta los coroneles.

La fuerza policial ha sido dirigida por ocho superintendentes distintos en 11 años. El 29 de marzo de 2012, el gobernador Luis Fortuño nombró a Héctor Pesquera como superintendente de la PPR, tras la renuncia de Emilio Díaz Colón. El Superintendente Pesquera, que fue confirmado en el cargo el 9 de abril de 2012, tiene una licencia temporera de su puesto como subdirector para la Oficina de Seguridad en el Puerto de Miami, y trabajó previamente en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) durante 27 años, en la que ejerció como jefe de la oficina local de Miami y como agente especial a cargo de la oficina en Puerto Rico. Díaz Colón, antiguo ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, ejerció de superintendente durante menos de nueve meses tras su nombramiento el 6 de julio de 2011. Díaz Colón sustituyó al superintendente José Figueroa Sancha, antiguo agente especial adjunto de la División del FBI en San Juan, quien renunció al cargo el 2 de julio de 2011. Figueroa Sancha había sido precedido por Pedro Toledo Dávila, que ejerció de superintendente de 1993 a 2001, y de nuevo de 2005 a 2009 luego de cuatro superintendentes diferentes que ejercieron entre 2001 a 2005.

La PPR, conocida originalmente como la Policía Insular, se creó menos de un año después de que Estados Unidos invadiera Puerto Rico y tomara posesión de la isla como territorio estadounidense al final de la Guerra entre España y Estados Unidos en 1898. La Policía Insular se creó oficialmente el 21 de febrero de 1899, bajo el mando del Coronel Frank Thacher, un oficial de la Marina de Estados Unidos durante la Guerra entre España y Estados Unidos. El departamento de la policía sirvió de instrumento para ejercer el poder colonial de Estados Unidos, y durante las primeras décadas desde su creación, sus jefes de policía fueron estadounidenses designados por los gobernadores coloniales.

Históricamente, el departamento de policía ha estado implicado en actos de violencia y otras acciones para reprimir la disidencia. En 1935, la Policía Insular mató a casi dos docenas de nacionalistas en dos incidentes conocidos como la Masacre de Ponce y la

Masacre de Río Piedras⁹. En 1978, la división de inteligencia de la policía emboscó y asesinó a dos activistas independentistas en la cumbre del Cerro Maravilla. En 1987, se confirmó que la división de inteligencia de la policía llevaba tres décadas manteniendo archivos de al menos 135,000 simpatizantes de la independencia; estos archivos, denominados carpetas, revelaron una práctica sistemática de vigilancia y hostigamiento de organizaciones independentistas y presuntos simpatizantes de la independencia puertorriqueña ante el control de Estados Unidos.

La PPR ha sido históricamente reconocida por sus tácticas abusivas contra independentistas, sindicalistas, estudiantes universitarios, activistas antimilitares y ambientales y residenciales públicos. La Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitió un informe especial en 1967 en relación con las violaciones de derechos civiles por la PPR, en el que concluyó que la violencia policial era habitual en Puerto Rico¹⁰.

En los últimos años, la PPR ha estado plagada de episodios generalizados de corrupción, violencia doméstica y otros crímenes dentro de la fuerza policial. Según el DOJ, más agentes de la PPR han estado involucrados en actividades criminales que en cualquier otra agencia de orden público en Estados Unidos¹¹. La alta incidencia de conducta criminal dentro de la PPR es sintomática de un descontrol institucional a gran escala sobre los sistemas de vigilancia y disciplina en el departamento. Durante un período de cinco años que va de 2005 a 2010, más de 1,700 agentes de policía fueron detenidos por actividades criminales como asalto, robo, violencia doméstica, tráfico de drogas y asesinato¹². Esta cifra equivale al 10% de la fuerza policial, o un arresto de un agente de policía cada 30 horas. Según el DOJ, estas tasas de arrestos son significativamente superiores a las de jurisdicciones comparables de Estados Unidos¹³. Por ejemplo, el número de agentes de la PPR arrestados entre 2005 y 2010 equivale a casi tres veces el número de agentes de la NYPD arrestados en un período de cinco años (el NYPD registró arrestos de solo 607 agentes entre 2001 y 2006), una fuerza policial que casi duplica en tamaño a la PPR¹⁴.

En octubre de 2010, el FBI detuvo a 61 agentes de la PPR como parte del operativo contra la corrupción policial más grande e importante en la historia del FBI, y desde entonces el FBI ha arrestado aún más agentes de la PPR. Los agentes han sido condenados por numerosas infracciones relacionadas con drogas y armas de fuego. Por ejemplo, casi una docena de agentes de la División de Drogas de Mayagüez fueron condenados por plantar drogas y manipular cargos relacionados con drogas contra residentes de un residencial público en 2008. Estas sentencias provocaron el examen de cientos de condenas, y se cree que más de un centenar de personas siguen encarceladas o están cumpliendo condena como consecuencia de estos casos manipulados.

La PPR ha registrado un espantoso número de denuncias de violencia doméstica contra agentes de la PPR. Entre 2005 y 2010, la PPR registró 1,500 denuncias de violencia doméstica contra agentes de policía¹⁵. Es probable que la cifra real de crímenes de violencia doméstica cometidos por agentes sea significativamente superior al reportado debido a la falta de denuncia, ya que es improbable que las víctimas presenten denuncias

ante el mismo departamento de policía que emplea a su compañero o ex compañero agresor. Al menos 84 agentes, todavía en activo, han sido arrestados dos o más veces por incidentes de violencia doméstica¹⁶. Recientemente han recibido publicidad los múltiples casos en los que agentes de la PPR dispararon a sus esposas con sus armas reglamentarias, y en algunos casos acabaron con su vida.

La PPR se enfrenta actualmente a una crisis de seguridad pública que incluye un aumento vertiginoso de la delincuencia y una tasa de asesinatos sin precedentes¹⁷. La cifra de 1,130 asesinatos en 2011 —casi tres muertes violentas al día— fue la más alta en la historia del país, aunque en el año anterior se había registrado la segunda cifra más alta de asesinatos en la historia de Puerto Rico. Con 22.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en 2009, la tasa de homicidios de Puerto Rico superó a la de los otros 50 estados, y casi duplicó la siguiente tasa estatal más alta, registrada en el estado de Luisiana¹⁸. De acuerdo con las estadísticas de 2010, Puerto Rico ocupa el décimo noveno puesto mundial en términos del número de asesinatos por cada 100,000 habitantes¹⁹.

La reducción de la delincuencia violenta representa un reto de enormes proporciones y a veces peligroso para la PPR. Frecuentemente, en lugar de frenar la violencia, la PPR contribuye a ella mediante el uso injustificado de la fuerza mortal y excesiva.

En julio de 2008, tras una serie de asesinatos policiales en un periodo de varios meses en 2007 y tras una prolongada protesta pública tanto de las comunidades afectadas como por parte de los activistas y defensores, incluyendo a la ACLU de Puerto Rico, la División de Derechos Civiles del DOJ comenzó una investigación sobre la PPR. En septiembre de 2011, el DOJ publicó sus conclusiones en un extenso informe denominado como una “carta de conclusiones”. El DOJ encontró un patrón y una práctica de violaciones de la Constitución por la PPR, que incluyen el uso excesivo de la fuerza en violación a la Cuarta Enmienda, y el uso irrazonable de la fuerza y otras malas conductas que reprimen los derechos protegidos por la Primera Enmienda, y concluyó que “la PPR está viciada en varios aspectos críticos y fundamentales”²⁰.

El superintendente en ese momento, Emilio Díaz Colón, que sólo llevaba tres meses en el cargo cuando el DOJ publicó su informe, respondió rechazando las conclusiones del DOJ y negando cualquier violación de la Constitución por parte de la PPR. En una demanda judicial, el Departamento de Justicia de Puerto Rico denunció que el informe del DOJ era poco confiable, deficiente y parcializado.²¹ Pesquera, el octavo superintendente de la PPR en 11 años, dijo a los periodistas en abril de 2012 que la PPR no viola los derechos humanos, al ser presionado por los medios, reconoció que algunos agentes y oficiales sí habían cometido dichas violaciones²².

Inmediatamente después de la publicación de las conclusiones de la investigación del DOJ, el Gobernador Fortuño anunció un plan que prevé una serie de reformas, muchas de estas superficiales, y la mayoría de las cuales nueve meses después del anuncio aún no se habían promulgado. Cabe reconocer que la PPR ha contratado a un equipo de expertos cualificados para que le asistan en la formulación de nuevas políticas, lo que resultó en la publicación de una nueva política general sobre el uso de la fuerza a finales de enero de

2012. Sin embargo, la nueva política de Puerto Rico sobre el uso de la fuerza no cumple las normas constitucionales y nacionales de Estados Unidos, y ha sido criticada por activistas de derechos civiles y derechos humanos por ser vaga y carecer de criterios objetivos sobre el uso de la fuerza mortal por parte de agentes de la PPR. Además, no se han materializado la mayoría de las reformas prometidas por el gobernador Fortuño y la PPR. Es más, aunque la promulgación de un nuevo protocolo sobre el uso de la fuerza es un primer paso positivo, sin medidas eficaces para responsabilizar a las agente por el uso de la fuerza, la promulgación de una nueva política no garantiza que los agentes vayan a cumplirla ni que se vaya a exigir responsabilidad a los agentes cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos y constitucionales.

Si la PPR está considerando seriamente instituir las reformas, se enfrentará a un obstáculo presupuestario significativo, ya que dedica la mayor parte de sus recursos a los salarios de los agentes, en lugar de los sistemas necesarios para garantizar que los agentes obedezcan la ley. El antiguo superintendente José Figueroa Sancha dijo a la ACLU que el 93% del presupuesto anual de \$700 millones de la PPR se dedica al pago de honorarios y salarios, y que sólo el 7% del presupuesto se asigna a otras partidas como equipo, tecnología y capacitación²³. Esta asignación presupuestaria hace que sólo se disponga de una pequeña fracción del presupuesto para financiar reformas muy necesarias como la capacitación sobre los protocolos que gobiernan el uso de la fuerza o tecnología informática para registrar las denuncias de la población civil y hacer un seguimiento de la conducta reincidente de agentes abusivos. La proporción de agentes activos de la PPR por habitante de Puerto Rico supera en más del doble a la media nacional de Estados Unidos, lo que indica que el departamento puede estar dedicando una cantidad desproporcionada de sus recursos a contratar y mantener una fuerza policial demasiado cuantiosa, en lugar de asignar fondos a reformas necesarias. Un experto en la función policial que analizó el Departamento de la Policía de Puerto Rico sugirió que el departamento podría funcionar eficazmente con 13,000 agentes, en lugar de los 17,000 agentes que emplea actualmente²⁴.

En los últimos años se ha experimentado un aumento en la federalización de la PPR. Poco después de la publicación del informe del DOJ, el 20 de septiembre de 2011, el gobernador Fortuño anunció un acuerdo de cooperación entre la PPR, el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR) y las agencias federales de seguridad, como el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que amplía las categorías de crímenes sobre los cuales las agencias federales tienen jurisdicción. El acuerdo incluyó también la creación conjunta, a nivel estatal y federal, de una Fuerza de Choque contra las Armas de Fuego Ilegales y el Crimen Violento (Illegal Firearms and Violent Crimes Strike Force). En Puerto Rico se consideró que el acuerdo de cooperación formaba parte de una tendencia a la federalización de la PPR. Otro aspecto de esta federalización de la PPR ha sido el nombramiento de antiguos funcionarios del FBI para el puesto de superintendente; durante 14 de los últimos 18 años, la PPR ha estado dirigida por un antiguo funcionario del FBI.

El acuerdo de septiembre representó la ejecución de un Memorando de Entendimiento (MdE) de febrero de 2010 entre la PPR, el DJPR y el DOJ por el que se otorgaba a las

agencias federales de seguridad y la Fiscalía de Estados Unidos la jurisdicción principal sobre los procesos y las investigaciones de ciertas categorías de casos de posesión y tráfico de sustancias controladas en puntos de entrada a la isla, secuestros y robos de automóviles, robos de bancos con arma de fuego o resultantes en muertes o graves daños corporales, e interferencia con el comercio entre estado mediante robo o extorsión por un valor superior a \$50,000²⁵. El MdE también amplió significativamente la jurisdicción federal sobre los casos de armas de fuego y armas en general, y otorgó a las autoridades federales la jurisdicción principal sobre los casos relacionados con cualquier crimen de tráfico de drogas, disparos desde automóviles con resultado de muerte, así como cualquier caso en el que el acusado haya sido condenado por delitos o sea un miembro conocido de una ganga o grupo terrorista; cuando el delito conllevara el uso de un arma de fuego obtenida ilegalmente, un arma de asalto semiautomática o un arma de fuego modificada para que funcione de manera distinta a su diseño (es decir, metralletas y silenciadores); y cuando el delito conllevara transportar o recibir siete o más armas de fuego.²⁶ El MdE actualizó y sustituyó un acuerdo previo firmado en 1993.

Muchas personas en Puerto Rico han objetado la reciente federalización de la PPR, y han señalado los abusos cometidos por el FBI en Puerto Rico, como la ejecución extrajudicial de Filiberto Ojeda Ríos en 2005, líder de la milicia independentista de Los Macheteros; y el ataque en febrero de 2006 con gas pimienta y golpes contra más de una veintena de periodistas que intentaban cubrir una redada muy notoria del FBI en la casa de Liliana Laboy, una destacada activista política relacionada con el movimiento independentista de Puerto Rico²⁷. Antes de ocupar el cargo de superintendente de la PPR, durante su carrera en el FBI, José Figueroa Sancha participó en la operación de Filiberto Ojeda Ríos y dirigió la operación en el edificio del apartamento de Liliana Laboy (el uso de gas pimienta contra los periodistas, en la operación conocida en Puerto Rico como 444 De Diego, hizo que se ganara el apodo de “Pimienta”).

III. Disparar a matar: Uso injustificado de la fuerza mortal

Una serie de notorios asesinatos policiales de los que se informó ampliamente a lo largo de un período de nueve meses en 2007, uno de los cuales se grabó en vídeo, sacó a la luz el problema constante, aunque parcialmente oculto, del uso injustificado de la fuerza mortal por parte de agentes de la PPR. Desafortunadamente, los agentes de la PPR continúan usando fuerza mortal contra civiles desarmados²⁸ o civiles que no plantean un riesgo para la vida de un agente u otros civiles, y contra civiles que podían haber sido restringidos con métodos menos mortales.

Según las estadísticas suministradas por el DJPR, los agentes de la PPR mataron a 20 personas en 2010 y 2011. El DJPR informó que los agentes de la PPR habían matado a 27 personas entre 2009 y 2011: más del doble de la cifra registrada por el DJPR en los cuatro años anteriores, de 2005 a 2008.²⁹ Según las estadísticas suministradas por el Negociado de Investigaciones Especiales del DJPR, los agentes mataron a tiros a 12 personas tan sólo en el 2010³⁰.

La ACLU documentó 28 casos en los que se había informado que los funcionarios de la PPR habían matado a civiles entre 2007 y 2011 (esta cifra incluye muertes por disparos, y como consecuencia de palizas, descargas eléctricas y otros usos de la fuerza). Partiendo de las estadísticas facilitadas por la PPR, y los casos adicionales documentados por la ACLU y el DOJ, hemos inferido que los agentes de la PPR asesinaron como mínimo a 36 personas entre 2007 y 2010. Los activistas comunitarios consideran aún mayor la cifra de civiles asesinados por la policía. Los estudiantes investigadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) determinaron que 50 personas habían sido asesinadas por la policía entre 2006 y 2010, lo que incluye 17 casos tan sólo en 2010³¹.

En un número significativo de casos documentados por la ACLU, los hechos narrados en la prensa o en los litigios penales o civiles relacionados indican que el uso de la fuerza por la PPR fue injustificado, evitable y/o no fue necesario para proteger la vida de un agente o un civil. En algunos de los casos, los periodistas localizaron a testigos presenciales que desmintieron la versión de los hechos de los agentes de la PPR involucrados, y sugirieron que las víctimas de estos casos estaban desarmadas en realidad y no habían disparado un arma.

Tres de los casos que documentamos estaban relacionados con el uso de la fuerza mortal contra personas con enfermedades mentales, que quizá podrían haber sido restringidas mediante el uso de la fuerza no mortal. Cuatro de los casos que documentamos estaban relacionados con el asesinato de adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 19 años. Varios de los casos incluyen asesinatos cometidos por agentes fuera de servicios con sus armas reglamentarias, en los cuales aparentemente los agentes estaban intentando efectuar un arresto por una presunta actividad criminal. Estas estadísticas no incluyen los asesinatos de sus compañeras o esposas por agentes fuera de horas de servicio, una cuestión que se trata brevemente en la sección VII de este informe, el cual aborda la falta de atención de la PPR a los crímenes de violencia doméstica cometidos por sus agentes.

El asesinato policial más reciente documentado por la ACLU tuvo lugar el 27 de abril de 2012, en el estacionamiento de un centro comercial de Manatí. En este caso, el agente de la PPR Alfredo Delgado disparó contra dos hermanos, provocando la muerte de Saúl Medina Figueroa, de 19 años, e hiriendo gravemente a Adrián Medina Figueroa, de 21 años. Se alega que el agente detuvo a la hermana pequeña de los jóvenes por rebasar un semáforo en rojo frente al restaurante de tacos donde trabajaban, después de lo cual sus hermanos y su madre, que no portaban armas, se desató un altercado verbal con el agente³². El agente informó que intentó usar su macana contra la familia, pero uno de los hermanos se la arrebató y le golpeó con esta, mientras que el otro hermano le golpeó con un tubo de su automóvil³³. El agente disparó 14 veces, mató a Saúl con dos tiros en el abdomen y la pierna e hirió gravemente a Adrián con tres impactos de bala, uno de ellos en el pecho³⁴. La hermana de Saúl y Adrián desmintió la versión del agente que alegaba que había actuado en defensa propia³⁵. El incidente plantea serias dudas acerca de la razonabilidad de la fuerza usada por el agente, ya que según la información publicada por la prensa, las circunstancias sugieren que el agente pudo haber evitado el uso de la fuerza mortal.

Tabla 1: Civiles asesinados por la PPR, casos documentados por la ACLU, 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Casos documentados por la ACLU	5	7	4	7	5	28

Tabla 2: Civiles asesinados por la PPR, 2005-2011

Categoría de casos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Casos de civiles muertos por disparos de la PPR, según la información del Negociado de Investigaciones Especiales del DJPR ³⁶	3	2	6	1	3	12	N/A	27
Casos adicionales de civiles muertos por disparos de la PPR, documentados por el DOJ ³⁷	0	0	2	4	1	0	N/A	7
Casos adicionales de civiles muertos por disparos de la PPR, documentados por la ACLU ³⁸	N/A	N/A	0	2	0	0	5	7
Total	3	2	8	7	4	12	5	41

a. Asesinatos de civiles por la PPR reportados entre 2007 y 2011

La siguiente tabla expone en detalle las circunstancias de 28 asesinatos policiales de civiles entre 2007 y 2011. La información en algunos de los siguientes casos se basa en los datos públicamente disponibles y en la información publicada por los medios de comunicación. Todavía no se ha determinado la culpabilidad o la inocencia en una serie de estos casos, y algunos de ellos están pendientes del litigio penal y/o civil. La ACLU no presenta estos casos para acusar o atribuir la culpa a ciertos agentes, sino para describir los tipos de abusos denunciados por los civiles y los obstáculos para investigar en su totalidad estas alegaciones y exigir cuentas a los agentes por las muertes injustificadas. Estos casos plantean serias dudas acerca de la falta de mecanismos transparentes, independientes y responsables para investigar a los agentes de policía que hacen uso de la fuerza mortal.

Dada la dificultad para obtener información sobre estos casos, salvo cuando se produjo un escándalo público o un litigio relacionado, esta investigación se basa sobre todo en los casos denunciados por los medios de comunicación local. No cabe duda que por cada uno de estos casos que ocuparon los titulares de la prensa, hay muchos otros que no se informaron. Los casos que no han atraído atención pública o se no se han convertido en escándalos en los medios de comunicación, las medidas disciplinarias y los enjuiciamientos penales son aún menos habituales.

Esta tabla incluye dos casos de asesinatos por agentes de la policía municipal. Aunque estos agentes no forman parte oficialmente de la PPR, han recibido adiestramiento junto con agentes de la PPR en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico (la academia de policía de Puerto Rico), y sus presuntos crímenes se someten al mismo procedimiento de investigación. Estos dos casos se incluyen a continuación ya que los departamentos de la policía municipal de Puerto Rico están afectados por los mismos problemas en cuanto a inadecuada orientación de sus agentes en relación con el uso de la fuerza, impunidad por los abusos y adiestramiento inadecuado que son sistémicos en la PPR.

Tabla 3: Asesinatos de civiles a manos de la Policía reportados entre 2007-2011

Víctima reportada	Edad	Fecha	Descripción del incidente
Luis Alberto “Beto” Santos Figueroa	14	9 de diciembre de 2011	Un agente asignado a la División de Drogas de Vega Baja disparó en la nuca a Santos Figueroa, de 14 años, a unas dos cuadras de su casa. Según la versión de la PPR sobre el incidente, alrededor de siete agentes estaban realizando una operación en un presunto punto de tráfico de drogas en el barrio Brisas de Tortuguero cuando el joven se echó a correr y les apuntó con una pistola. El agente de la División de Drogas Iván Robles Varela, disparó al estudiante de noveno grado en la nuca. La policía informó que habían recuperado un arma de fuego y

			<p>drogas cerca del cuerpo de Santos Figueroa. La familia del joven desmintió la versión de los agentes y alegó que el agente Robles Varela había salido de un automóvil no identificado vestido de civil, con un arma de fuego en la mano. Indicaron que el agente disparó contra el joven cuando este se echó a correr por miedo al escuchar a los vecinos gritarle al agente que no disparara. También afirman que el joven no poseía un arma de fuego ni estaba involucrado en las drogas. Santos Figueroa fue pronunciado con muerte cerebral antes de que muriera como consecuencia de las heridas. Tras comenzar una investigación por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la PPR, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia de Puerto Rico asumió la jurisdicción de la investigación del incidente. La ACLU no pudo obtener ninguna información adicional sobre el estatus actual de la investigación³⁹.</p>
Sin identificar	Treintas	4 de diciembre de 2011	<p>Cuando estaba fuera de servicio, el agente de la PPR Orlando Abreu Flores mató a tiros a un hombre que alegadamente intentó robar el camión de sándwiches que operaba en la Avenida Luis Muñoz Marín de Caguas. El agente Abreu Flores usó su arma reglamentaria para disparar múltiples veces al presunto asaltante en varias partes del cuerpo. El agente Abreu Flores dijo que el presunto asaltante estaba armado y le disparó después de que se identificara como agente de la policía. Se informó que se habían hallado cinco casquillos de bala en el lugar de los hechos, y que todos pertenecían a un arma del calibre 40 consistente con el arma reglamentaria del agente⁴⁰. En las informaciones de prensa no se ha revelado el nombre de la víctima.</p>
Jaime Amell Ilaraza Ruíz ⁴¹	24	13 de noviembre de 2011	<p>El agente de la policía municipal Roberto Rodríguez Rodríguez disparó a este motociclista de 24 años en la espalda, lo que resultó en su muerte, después de perseguirlo cuando este no cumplió una orden de detenerse. Rodríguez Rodríguez y otro agente de la policía municipal de Guaynabo habían intentado detener a Ilaraza Ruíz por exceder el límite de velocidad y, de acuerdo con los casquillos de bala recuperados en el lugar de los hechos, alegadamente el agente Rodríguez</p>

			<p>Rodríguez disparó tres veces a Ilaraza Ruíz. Los agentes alegaron que Ilaraza Ruíz estaba armado y les disparó tres veces cuando se daba a la fuga en su motocicleta, pero la compañera de la víctima, Jamelyn González, que viajaba en la motocicleta con él y presencié los disparos, señaló que estaba desarmado y no hizo nada para provocar a los agentes. González dijo a los periodistas que se le había caído el casco en la carretera y, cuando se detuvieron y se bajaron de la motora, los policías empezaron a disparar de repente sin provocación. Dijo que no escucharon ninguna orden de parar y no se dieron cuenta de que los perseguía la policía. Según las informaciones de prensa, nunca se reveló ninguna prueba de que el joven estuviera armado, y todas las armas y casquillos de bala recuperados en el lugar de los hechos correspondían a los agentes de policía. Posteriormente, la policía afirmó públicamente que la razón por la que no recuperaron el arma de Ilaraza Ruíz era porque la habían robado del lugar de los hechos. La policía municipal de Guaynabo se negó a investigar el asesinato. Aparentemente, el NIE abrió una investigación del incidente. La ACLU no pudo obtener información adicional acerca de la situación actual de la investigación⁴².</p>
Alexander Roja Rivera	27	13 de septiembre de 2011	<p>Cuando se encontraba fuera de horario de servicio, el agente de la PPR Oscar Cortés Santiago, asignado a la División de Violencia Doméstica de Caguas, mató a tiros a un joven, que era uno de los dos hombres que presuntamente habían intentado robar una tienda de Pepe Ganga en Caguas. Según el agente, este ordenó a los dos jóvenes a que se detuvieran, y persiguió a Roja Rivera cuando no obedeció su orden. Según las informaciones de prensa, el agente Cortés Santiago, que persiguió a Roja Rivera a pie, alegó que le disparó con su arma reglamentaria después de que se atascara el percutor del arma de Roja Rivera. Se informó que Roja Rivera murió al instante⁴³.</p>
Rafael Estrada Berrios	42	9 de marzo de 2011	<p>Un agente de la PPR fuera de horario de servicio disparó tres veces a Estrada Berrios con su revólver reglamentario después de que Estrada Berrios alegadamente intentara robar una farmacia de Guaynabo con una pistola de juguete.⁴⁴</p>
George Edil Vega	32	30 de	Vega Mangual, un agente de la División de

Mangual		septiembre de 2010	Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) asignado a la Unidad Marítima de Fajardo, fue disparado por un compañero policía. El agente disparó mortalmente en la espalda a Vega Mangual con su revolver Glock reglamentario. Luego del incidente el agente alegó que había sido un accidente y que había sacado su pistola cuando Vega Mangual le pidió que le diera una herramienta denominada pistola de tiempo, mientras ambos reparaban un automóvil frente a una casa en Luquillo. Se informó que los testimonios de los testigos presenciales contradecían la versión del agente que ejecutó el disparo. Las informaciones de prensa señalan que el agente había sido desarmado en repetidas ocasiones en el pasado por múltiples violaciones, pero le habían vuelto a proporcionar un arma de fuego reglamentaria después de una evaluación psiquiátrica. Posteriormente se le radicarón cargos de asesinato en segundo grado y fue convicto por homicidio negligente en cuarto grado ⁴⁵ .
William Malaret Pagán	77	29 de septiembre de 2010	El anciano Malaret Pagán fue disparado cuando los agentes de la División de Drogas entraron en su casa de Ponce para entregar y ejecutar una orden de registro en busca de drogas. Cuando la familia no respondió a la llamada en la puerta a las 6:15 de la mañana, la policía entró por la fuerza a la casa y alegadamente Malaret Pagán les disparó una vez. Posteriormente la policía respondió disparándole al anciano en la cara y pecho cuatro veces. Después de registrar la casa no encontraron drogas. Los vecinos sugirieron que la policía había confundido la casa de Malaret Pagán con la casa de al lado, donde los vecinos creían que vivía un traficante de drogas. La prensa local informó que la información confidencial que llevó a la emisión de la orden señala a un hombre “grande”, con cerca de cuarenta años que usaba la casa para vender narcóticos ilegales, una descripción que no se ajusta a la del anciano de 77 años. La policía había ejecutado un registro en una casa vecina antes de entrar en la casa de Malaret Pagán. Según el vecino de la primera casa, la policía no le había mostrado una orden de registro antes de registrar su casa, y cuando le preguntaron por la casa de Malaret Pagán, les explicó que allí vivía un anciano y no

			era un punto de venta de drogas ⁴⁶ .
José Alberto Vega Jorge	22	25 de septiembre de 2010	El agente de la PPR Abimalet Natal Rosado disparó en la nuca a este transeúnte desarmado de 22 años. Después de haber presenciado un robo en un Burger King de Altamira, Vega Jorge se había quedado en el lugar para dar información a la policía y no era un sospechoso. Se informó que Natal Rosado, uno de los cinco agentes en la escena de los hechos, empezó a disparar cuando escuchó que la pistola de otro agente se disparaba por accidente. Según un experto forense en balística, el agente Natal Rosado efectuó diez disparos, uno de los cuales hizo impacto en la cabeza de Vega Jorge. La policía en el lugar de los hechos no llamó a una ambulancia para obtener atención médica de emergencia. Vega Jorge fue trasladado a un hospital una hora después del tiroteo; en esa zona una ambulancia habría acudido en menos de diez minutos. Natal Rosado, un agente novato que, según el superintendente en ese momento, sólo llevaba aparentemente un mes en el servicio activo, después de 8-10 meses de adiestramiento en la academia de policía, fue acusado posteriormente de asesinato en segundo grado ⁴⁷ .
Jirón Suero Pinales	19	21 de agosto de 2010	Tres agentes de la División de Operaciones Especiales de San Juan mataron a tiros a un inmigrante dominicano adolescente. Los agentes estaban respondiendo a un tiroteo suscitado en la madrugada durante una fiesta en El Coquí, un bar cafetería de Río Piedras. Suero Pinales estaba saliendo del establecimiento y se dirigía a una parada de autobús cuando la policía llegó y le ordenó que se detuviera. Según los agentes de policía, el adolescente les apuntó con una pistola y abrieron fuego contra él. Cuatro civiles resultaron heridos como consecuencia de los disparos dentro de El Coquí, uno de los cuales sufrió una perforación del pulmón y se encontraba en estado crítico luego del incidente. Se recuperaron más de una veintena de casquillos de bala dentro del bar cafetería, y alegadamente se recuperó un revolver y una pistola en la calle frente al establecimiento ⁴⁸ .
Luis Mártir Chévere ⁴⁹	36	30 de julio de 2010	Dos agentes de la policía municipal de Carolina respondieron a una llamada de la hija de Mártir Chévere, en la que solicitaba asistencia con su

			<p>padre enfermo mental, quien, según dijo, estaba amenazándola a ella y a su madre. Cuando la policía llegó la residencia familiar, el hombre esquizofrénico sacó dos machetes y les reclamó que se fueran. Se informó que la familia dijo a los policías que Mártir Chévere era esquizofrénico y les rogaron que no le hicieran daño. Según las informaciones de prensa, cuando Mártir Chévere golpeó el vehículo patrulla con un machete, los agentes salieron del vehículo y cortó a uno de los agentes en el brazo y la cabeza. Ambos agentes respondieron abriendo fuego simultáneamente y provocaron siete heridas mortales a Mártir Chévere delante de su familia. La hermana de Mártir Chévere, Wanda Mártir, criticó la actuación de la policía en una carta al periódico <i>Primera Hora</i>, en la que cuestionó las razones por las que los agentes no pidieron refuerzos cuando supieron que iban a tener que intervenir con una persona enferma mental. Señaló que los agentes dispararon a su hermano en el pecho y la mandíbula, no en las piernas, y se preguntó por qué dispararon a matar en lugar de para intentar inmovilizarlo. También cuestionó las razones por las que el departamento de la policía municipal de Carolina no equipó a sus agentes con pistolas paralizantes para usarlas en situaciones en las que tienen que inmovilizar a personas sin matarlas. No se formularon cargos contra los agentes⁵⁰.</p>
Michael Martínez Travieso	24	8 de mayo de 2010	<p>Martínez Travieso fue disparado en la espalda por un agente asignado a la División de Drogas de Humacao. Se informó que el agente, que se encontraba fuera de servicio en ese momento, persiguió a la víctima en su camioneta <i>pickup</i> y le disparó con su arma reglamentaria⁵¹.</p>
Luis L. Pérez Feliciano	56	26 de marzo de 2010	<p>Pérez Feliciano, un veterano de Vietnam con esquizofrenia y paranoia, fue disparado múltiples veces por uno de los tres agentes que respondieron a una llamada de su esposa, en la que aparentemente solicitaba ayuda para ingresar a su esposo en una institución psiquiátrica ya que creía que estaba sufriendo un ataque psicótico. Según la versión de los hechos de los agentes, Pérez Feliciano estaba armado cuando llegaron y se produjo un forcejeo para arrebatarle el arma, durante el cual Pérez Feliciano disparó e hirió al</p>

			<p>agente José Romero Quiñones en el antebrazo. El compañero del agente, el sargento Heriberto Acevedo Olavarría, disparó a la víctima cuatro veces en varias partes del cuerpo, lo que le provocó la muerte. La esposa de Pérez Feliciano y sus dos hijas contradijeron la versión de los agentes de policía y dijeron que era falsa. Según su esposa, no hubo forcejeo por el arma y ambos policías sacaron y dispararon sus armas antes de que su esposo disparara un solo tiro; también indicó que la policía no le permitió acercarse a su esposo e intentar calmarlo. Un año después del asesinato, Romero Quiñones y Acevedo Olavarría recibieron la Medalla de Oro al Valor a manos del gobernador Fortuño y el entonces superintendente Figueroa Sancha, aunque la investigación del NIE sobre su uso de la fuerza mortal aún no ha terminado⁵².</p>
Franklin Cáceres Osorio	31	Octubre de 2009	<p>Se informó de que Cáceres Osorio, un inmigrante indocumentado de la República Dominicana y padre de tres hijos, se había caído desde la ventana de un segundo piso cuando la policía entró en su casa de Santurce. Su familia alega que la policía lo arrojó a la calle después de propinarle una paliza. Aparentemente, la policía retrasó la llamada al servicio de emergencias médicas, lo que hizo que no llegara una ambulancia hasta después de su muerte. También se informó que la policía no llamó a la División de Homicidios ni al departamento forense, como hace habitualmente cuando se encuentra con un cadáver. En cambio, su familia dijo que tuvieron que llamar a una casa funeraria para que se llevaran el cuerpo. Nunca se realizó una investigación forense en la escena del crimen. Aunque el informe de la autopsia facilitado a la viuda de Cáceres por las autoridades puertorriqueñas afirmaba que su muerte había sido como consecuencia del uso de cocaína, una autopsia realizada cuando su cuerpo llegó a la República Dominicana concluyó que la causa de su muerte fueron los golpes y los fuertes traumas recibidos. El Comité Dominicano de Derechos Civiles ha calificado su muerte como crimen de odio. Según este Comité, el cual realizó una investigación del caso y colaboró estrechamente con la viuda de Cáceres Osorio, la organización localizó a un testigo que no fue entrevistado por la</p>

			policía y que dice haber visto a los policías golpear a Cáceres Osorio. Según el Comité Dominicano de Derechos Humanos, no existe un registro de este incidente en los archivos del departamento de policía ⁵³ .
Alvin Delgado Camacho	27	27 de diciembre de 2009	Se informó que Delgado Camacho fue asesinado por el agente de la División de Operaciones Tácticas Rigollot Colón. Colón disparó 15 veces contra el hombre de 27 años en la sala de billares El Terrible. Se informó que Colón siguió disparándole a Delgado Camacho cuando este ya estaba en el suelo. Los testigos dijeron que al agente no le gustó algo que dijo la víctima cuando estaban jugando billar.
Heriberto Marcial Hernández	44	17 de agosto de 2009	Un agente de tránsito de la PPR mató a tiros a Marcial Hernández después de detenerlo por una infracción de tránsito en Mayagüez. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Marcial Hernández echó mano de su pistola cuando estaba siendo esposado y disparó al agente, quien lo mató a tiros. Según las informaciones de prensa, Marcial Hernández había matado a tiros a un hombre delante de una panadería ese mismo día, pero el agente de tránsito que disparó posteriormente a Marcial Hernández no conocía el incidente cuando lo paró por exceso de velocidad ⁵⁴ .
Ramón Luis Martínez Rodríguez	23	25 de julio de 2009	Según los agentes involucrados, dos hombres armados y enmascarados entraron a un bar deportivo de Villalba y anunciaron un robo. Tres agentes armados de la PPR asignados a varias divisiones, como la División de Operaciones Tácticas de San Juan y la División de Homicidios de San Juan, se encontraban en el bar en ese momento. Según los agentes, estos se identificaron como policías y sacaron sus armas reglamentarias. Los agentes indicaron que Martínez Rodríguez apuntó su arma a uno de los agentes, el cual le disparó en la cabeza, el pecho y la mano. Martínez Rodríguez no disparó su arma, la cual alegadamente fue encontrada en el lugar de los hechos. El otro presunto asaltante se dio a la fuga, y se informó que uno de los agentes le disparó cuando huía pero no logró impactarle ⁵⁵ .
José Luis “Goldo” Irizarry	19	4 de noviembre	En la noche de las elecciones, en respuesta a las quejas por el ruido de los vecinos del barrio

Pérez		de 2008	<p>Colinas en Yauco, cinco agentes de la PPR llegaron a una fiesta en la que los invitados estaban celebrando los resultados electorales. Irizarry Pérez intentó intervenir cuando los agentes de policía hostigaron y macanearon a su padre. Según los familiares de Irizarry Pérez que presenciaron el ataque, algunos de los agentes, como Ángel Torres Quiñones, macanearon al adolescente desarmado hasta matarlo con reiterados golpes en la cabeza, cara y tórax. Según la familia de Irizarry Pérez, al menos uno de los agentes se quedó observando mientras ocurrían los hechos. El adolescente fue declarado muerto al llegar al hospital. Se informó que los agentes de policía afirmaron que la familia les estaba arrojando botellas y piedras, pero los testigos presentes en la fiesta lo desmienten. Según la familia de Irizarry Pérez, la PPR se negó a identificar a los agentes implicados en la muerte del adolescente. La familia no supo los nombres de los agentes hasta que posteriormente el NIE y el FBI pusieron en marcha una investigación. Según la versión de la familia, la PPR no les facilitó información sobre la situación disciplinaria de los agentes implicados. Sólo se formularon cargos contra un agente, Ángel Torres Quiñones, por su participación en el asesinato. Este fue hallado no culpable de asesinato en segundo grado. Un juez dictaminó que habían motivos para detener a otro de los agentes por presentar documentación falsa, debido a que presuntamente suprimió parte de las denuncias presentadas en relación con el incidente. No se formularon cargos contra los otros agentes involucrados. La familia de Irizarry Pérez presentó una demanda civil contra los agentes en abril de 2011⁵⁶.</p>
Diego Alberto Delgado Ferré	35	31 de agosto de 2008	<p>Delgado Ferré murió por disparos de la policía en una gasolinera de Saint Just, donde estaba lavando el automóvil de su esposa. Se informó que dos agentes asignados a la División de Drogas de Carolina estaban preparándose para una operación antidrogas en la zona cuando, según alegan, vieron a dos hombres con aspecto sospechoso. Según los agentes, cuando se acercaron a Delgado Ferré este sacó una pistola, por lo que lo mataron a tiros⁵⁷.</p>
Víctor Manuel Sanabria	29	5 de agosto de 2008	<p>En Las Piedras, un agente de la PPR asignado a la DOT de Humacao mató a tiros a Sanabria</p>

Martínez			Martínez, sospechoso de cometer un robo. Se informó que los agentes de la PPR ordenaron a Sanabria Martínez a que se detuviera, pero el hombre de 29 años huyó a pie. Al parecer, uno de los agentes le disparó en la nuca cuando se echó a correr. Un oficial superior de la PPR defendió públicamente la actuación de los agentes y dijo a la prensa que una persona que va a asaltar va a matar y va a hacer lo que sea, y que el policía hizo su trabajo. El agente que efectuó el disparo fue acusado posteriormente de asesinato en primer grado ⁵⁸ .
Antonio Rodríguez Bonet	31	29 de junio de 2008	Agentes de la PPR en Río Piedras paralizaron con descargas eléctricas a Rodríguez Bonet, un deambulante, que murió como consecuencia de la paralización. Los agentes asignados a la División de Operaciones Especiales habían arrestado a Rodríguez Bonet por un presunto robo, y le aplicaron una pistola paralizante cuando lo trasladaban a la comisaría. Rodríguez Bonet fue transferido a una celda, donde empezó a tener convulsiones y murió una hora y media después.
Carlos Alberto Santiago Berríos	41	6 de junio de 2008	En Bayamón, los agentes de la PPR mataron a tiros a Santiago Berrios, sospechoso de haber cometido un robo.
Marcos Montes Muñiz	38	28 de abril de 2008	Agentes de la policía mataron a tiros a Montes Muñiz, sospechoso de haber cometido un robo y de alegadamente portar una cuchilla o un arma similar. Los agentes respondían a una llamada de un residente de Mayagüez que pensó que un intruso estaba intentando entrar en su casa. Los agentes dispararon a Montes Muñiz en el corazón y provocaron su muerte ⁵⁹ .
Carlos William Carrasquillo Rodríguez	55	1 de abril de 2008	En San Lorenzo, un agente de la PPR mató a tiros a Carrasquillo Rodríguez, cuya enfermedad mental era conocida. Se informó que portaba un cuchillo. La familia de Carrasquillo Rodríguez había llamado a las autoridades para pedir que les ayudaran a controlar a este hombre esquizofrénico. Según su familia, cuando la policía llegó, se acercaron a él en un área exterior donde estaba sentado y, en lugar de intentar calmarlo, le golpearon con una macana. La familia también declaró que cuando llegó la policía Carrasquillo Rodríguez no planteaba una amenaza para la seguridad pública, ya que estaba en una zona

			cerrada. Carrasquillo Rodríguez aparentemente sacó un cuchillo después de que lo golpearan, y uno de los agentes le disparó 13 veces. Según la familia, la PPR nunca les informó los resultados de la investigación sobre el asesinato de Carrasquillo Rodríguez. Diez meses después del asesinato, un juez municipal de Caguas determinó que no había fundamento para acusar de asesinato en segundo grado al agente que efectuó los disparos ⁶⁰ .
Jorge Luis Polaco Jiménez	28	4 de octubre de 2007	Agentes de la PPR dispararon ocho veces a este joven desarmado de 28 años, siete de ellas en la espalda cuando este estaba detenido por la policía. Polaco había estrellado su automóvil contra el edificio en el que trabajaba su ex novia en Carolina, cuando los agentes de la División de Drogas le dispararon una vez en la parte frontal del hombro izquierdo y se lo llevaron detenido. Alegadamente los agentes de la PPR se llevaron a Polaco para que recibiera atención médica inmediata en un hospital situado a diez minutos de distancia. Polaco llegó al hospital una hora y media después del incidente con siete heridas de bala en la espalda, además de la herida de bala en la parte frontal del hombre. Al llegar al hospital fue declarado muerto. Posteriormente la policía afirmó que habían actuado en defensa propia, pero el investigador privado contratado por la madre de Polaco descubrió que este estaba desarmado, sólo llevaba un dólar y las llaves de su casa en los bolsillos. Como más adelante se describe detalladamente en el estudio de caso, la investigación policial del asesinato de Polaco fue superficial y totalmente inadecuada: la policía no entrevistó a testigos presenciales y no suministró un informe de su investigación a la madre de Polaco, quien había presentado múltiples quejas a la PPR pero no había recibido más respuesta que la afirmación de que la investigación estaba cerrada. Hasta la fecha, los agentes no han sido acusados de un crimen o sometidos a medidas disciplinarias por su participación en los disparos ⁶¹ .
Luis Andrés Rodríguez Maya	25	15 de agosto de 2007	El agente de la PPR Adrián Cardoza Cardoza mató a tiros a Rodríguez Maya durante la ejecución de una orden de registro en Cabo Rojo. La policía estaba llevando a cabo una redada en busca de armas ilegales cuando Rodríguez Maya

			<p>aparentemente le negó la entrada a cuatro agentes de la PPR que intentaban registrar su casa. Según los agentes, Rodríguez Maya hizo un disparo que impactó el techo de su casa, y uno de los agentes respondió disparando dos veces a Rodríguez Maya, lo que provocó su muerte. Los testigos señalaron que, a su llegada, los agentes de policía no se identificaron ni tocaron a la puerta. Una investigación del NIE concluyó que Rodríguez Maya había efectuado el primer disparo, y que lo había hecho bajo los efectos de la cocaína⁶².</p>
Miguel Cáceres Cruz	43	11 de agosto de 2007	<p>El 11 de agosto de 2007, Cáceres Cruz, un hombre de 43 años y padre de tres hijos, se encontraba ayudando a dirigir el tráfico en Humacao como parte de un club de motociclismo que proveía escolta vehicular a una fiesta. El agente de la Unidad Operaciones Tácticas Javier Pagán Cruz disparó cuatro veces al hombre desarmado, la cuarta vez en la cabeza cuando estaba bocabajo en el suelo y sangrando por las heridas en los brazos y el pecho. Los tres agentes de la PPR involucrados, sus superiores y el investigador del homicidio de la PPR intentaron encubrir el asesinato y afirmaron que los agentes habían actuado en defensa propia, alegando que Cáceres Cruz había intentado coger el arma del agente Pagán Cruz. Posteriormente se hizo público un vídeo grabado por un transeúnte en el que se observa claramente el asesinato. El caso, descrito con más detalle en el estudio de caso más adelante, provocó una indignación pública masiva y expuso una serie de problemas que han plagado a la PPR desde hace mucho tiempo.</p>
Nelson Santiago Rivera	21	4 de agosto de 2007	<p>Un agente de la PPR mató a tiros a Santiago Rivera, de 21 años de edad e hijo de un agente de la PPR, después de una pelea en la que estuvieron implicados varios civiles en un festival juvenil en Las Piedras. Se informó que, alegadamente después de participar en un altercado con la policía, un agente de la PPR le disparó seis veces a Santiago Rivera cuando éste estaba tumbado en el suelo. Cuando el padre de Santiago llegó al lugar de los hechos, la policía se negó inicialmente a permitirle que se acercara a su hijo, alegando que la zona estaba cerrada para la investigación. Finalmente, el padre de Santiago logró acceder al lugar y encontró a su hijo sangrando como</p>

			consecuencia de las múltiples heridas de bala, y descubrió que los agentes habían acordonado la zona sin prestar asistencia médica a Santiago. Otro agente presente, Javier Pagán, quien mató a tiros a Miguel Cáceres Cruz una semana después, aparentemente le indicó al padre de Santiago que no se molestara en ayudar al muchacho, ya que había “un criminal menos en las calles”. Javier Pagán y otro agente de la PPR presenciaron los disparos, y ninguno de ellos informó a su supervisor o a ningún otro funcionario del Gobierno lo que habían visto ⁶³ .
Christopher Rojas Miranda	N/A	10 de abril de 2007	La policía detuvo a Rojas Miranda por exceso de velocidad en Toa Baja. Se informó que parecía estar desorientado y alucinando, y que los agentes presuntamente le golpearon antes de arrestarlo y detenerlo. Rojas Miranda murió posteriormente en una celda. Según la prensa, en una autopsia realizada de manera independiente se determinó que su muerte había sido como consecuencia de la paliza y no una sobredosis de cocaína, como alegaron los agentes ⁶⁴ .

En las cifras y las tablas anteriores no se incluyen los casos de uso de la fuerza mortal por agentes de la ley asignados al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Al igual que los agentes de la PPR, los agentes del NIE reciben adiestramiento en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico (la academia de policía de Puerto Rico), y la PPR se encarga de investigar sus presuntos crímenes, como las alegaciones del uso injustificado de fuerza mortal. El asesinato en julio de 2011 de tres jóvenes por un agente del NIE plantea preocupación acerca del adiestramiento que reciben los agentes del NIE en relación con los límites para el uso legítimo de la fuerza, y el manejo de la PPR de los casos de uso de fuerza mortal por agentes asignados al NIE.

El 17 de julio de 2011, Ángel Fontáñez Torres, agente del NIE y guardaespaldas del Fiscal General de Puerto Rico, mató a tiros a Jesús Emanuel González Cardona, de 24 años, y a los hermanos Jean Carlos Palomares y Víctor Manuel Palomares, de 25 y 28 años respectivamente⁶⁵. Fontáñez Torres aparentemente disparó 14 veces contra los jóvenes con su arma reglamentaria cuando estaba fuera de servicio; se informó que un examen balístico determinó que los jóvenes no habían disparado sus armas⁶⁶. Uno de los hombres murió como consecuencia de heridas de bala en la cabeza y el pecho, otro por seis heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, y el tercero por cuatro heridas de bala en la pelvis, la espalda, el pecho y el hombro⁶⁷. Según la versión de los hechos del agente, este se encontraba a las puertas de un comercio en Santurce con su esposa cuando los tres jóvenes intentaron robarles a punta de pistola; el agente señaló que los jóvenes se llevaron algunas de sus pertenencias cuando este sacó su arma reglamentaria y les disparó.

Un vecino que había presenciado el incidente indicó a los periodistas, que Fontáñez Torres disparó a uno de los hombres en la cabeza después de que hubiera recibido un disparo en el pecho y estuviera en el suelo, y arrastró a otro hombre por el suelo antes de dispararle en el cuello⁶⁸. Los familiares dijeron que los jóvenes tenían lesiones atribuibles a golpes en la cara⁶⁹. González Cardona no murió en el lugar de los hechos. Su madre indicó a la prensa que no le notificaron del incidente hasta el día siguiente, y que su hijo tenía un ojo morado, lesiones en la nariz, laceraciones en los brazos y los codos, consistentes con la versión de que había sido arrastrado por el suelo⁷⁰. La División de Homicidios del CIC realizó una investigación, en la que se recrearon los disparos pero no se entrevistó a testigos presenciales. La investigación concluyó que el agente había actuado legítimamente en defensa propia⁷¹. La fiscalía de San Juan decidió no formular cargos penales contra el agente⁷².

b. Estudio de caso: Miguel Cáceres Cruz

La muerte de Miguel Cáceres Cruz a consecuencia de disparos de la policía expuso algunos de los numerosos problemas que han plagado la PPR durante años, y que continúan plagando el departamento de policía. Dado que los disparos fueron grabados en vídeo por un transeúnte, se pudo exponer el encubrimiento por los agentes involucrados en el asesinato al estilo de ejecución. El incidente provocó una protesta pública contra el abuso policial en Puerto Rico. El trágico asesinato de Miguel Cáceres demuestra claramente varias de las deficiencias institucionales de la PPR, que contribuyen a los abusos sistemáticos cometidos por sus agentes. Estas deficiencias incluyen que no se investiguen eficazmente incidentes, como el uso de fuerza mortal por los agentes; que no se haga un seguimiento de la conducta reincidente y se señale a los agentes que corren un alto riesgo de cometer abusos; que no se discipline a los agentes que cometen abusos y que impere la cultura general de impunidad en la fuerza policial.

El 11 de agosto de 2007, Cáceres, de 43 años de edad y padre de tres hijos, estaba ayudando a dirigir el tráfico en Humacao como parte de un club de motociclismo que estaba acompañando con sus vehículos en un quinceañero⁷³. Los agentes de la PPR Javier Pagán Cruz, Carlos Sustache Sustache y Zulma Díaz de León pasaban por el lugar, se detuvieron y ordenaron a Cáceres que moviera su motocicleta porque estaba supuestamente obstruyendo el tráfico. El agente de Operaciones Tácticas Pagán salió del vehículo policial, se puso el chaleco antibalas y se acercó a Cáceres⁷⁴. Los dos intercambiaron palabras y la agente Díaz dijo a Cáceres que estaba arrestado. Cáceres caminó hacia atrás con las manos levantadas y el agente Pagán lo agarró, le propinó un puño y lo arrojó al suelo⁷⁵. El agente Pagán siguió lanzando puños a Cáceres, que estaba en el suelo e intentó protegerse agarrando la pierna de Pagán⁷⁶. Cáceres tocó por accidente el revólver de Pagán cuando intentó levantarse sin éxito, mientras Pagán continuaba golpeándolo⁷⁷. Durante el forcejeo, Pagán accidentalmente se disparó en la pierna; sacó su arma y disparó a Cáceres⁷⁸. Durante el incidente se formó un grupo de personas que estaban gritando a los agentes de policía, pero los agentes Sustache y Díaz les impidieron que acudieran a ayudar a Cáceres⁷⁹.

Después del primer disparo, el cuerpo de Cáceres cayó a un lado. El agente Pagán disparó entonces a Cáceres tres o cuatro veces más cuando estaba tirado en el suelo, y le

disparó en la espalda y la cabeza⁸⁰. El último disparo fue efectuado al estilo de una ejecución en la nuca, cuando Cáceres estaba inmóvil bocabajo en el suelo y sangrando como consecuencia de los disparos en los brazos y el pecho⁸¹. Los agentes dejaron a Cáceres sangrando en la acera y se fueron en su vehículo sin informar al comando central de que habían disparado a un civil⁸².

Otro grupo de agentes llegaron después al lugar y encontraron a Cáceres agonizando en la acera; lo transportaron al hospital donde fue declarada su muerte⁸³. Dos testigos presenciales de los disparos le informaron lo que había sucedido a uno de los agentes, el teniente Luis Rodríguez. Posteriormente el teniente Rodríguez preparó un informe sobre lo que le habían relatado⁸⁴.

Los tres agentes de la PPR involucrados, sus superiores y el investigador de homicidios de la PPR intentaron encubrir el asesinato⁸⁵. El informe inicial de los tres agentes implicados afirmó que habían actuado en defensa propia, y que Cáceres se había resistido al arresto y había intentado arrebatarle la pistola al agente Pagán⁸⁶. En sus informes, los supervisores correspondientes repitieron la versión de los hechos ofrecida por los agentes involucrados⁸⁷. Un investigador de homicidios de la PPR asignado a investigar el asesinato no registró los nombres de los testigos presentes cuando se produjeron los hechos, los cuales habían ofrecido una versión distinta a la que informaron los agentes implicados⁸⁸. El informe preliminar del investigador de homicidios de la PPR consistió solamente en las declaraciones de los agentes Sustache y Díaz y el testimonio del único testigo que corroboró la versión del incidente de los agentes involucrados⁸⁹. El investigador del homicidio informó: “Además, varias personas en la escena fueron entrevistadas, pero dijeron cosas adversas sobre los agentes”⁹⁰.

Sin embargo, sin que los agentes tuvieran conocimiento, un transeúnte grabó el incidente e hizo público el vídeo, el cual expuso el encubrimiento por parte de los agentes de la PPR y sus supervisores⁹¹. El vídeo muestra claramente al agente Pagán de pie encima de Cáceres, disparándole cuando estaba bocabajo en el suelo. El video fue divulgado ampliamente en los medios de comunicación, lo que provocó una indignación pública masiva. Si no hubiera existido un vídeo, es probable que no se hubieran exigido responsabilidad por el asesinato de Cáceres.

El 14 de agosto de 2007, Pagán fue acusado de asesinato, fue condenado por asesinato en primer grado e infracciones relacionadas con armas y sentenciado a 109 años de cárcel; Sustache y Díaz fueron absueltos de todos los cargos⁹². Una demanda civil presentada por la viuda de Cáceres, Evelyn Ramírez Lluveras, y sus tres hijos contra el Superintendente y los supervisores de la PPR fue desestimada en diciembre de 2011 porque su actuación negligente no constituía una indiferencia deliberada, aunque continúa en trámite una demanda presentada por la familia de Cáceres contra Pagán⁹³. La familia tiene intención de apelar la decisión.

En el momento en que mató a tiros a Cáceres, el agente Pagán había sido objeto de siete denuncias disciplinarias que databan desde 9 años antes, cinco de las cuales todavía no se habían resuelto en el momento del asesinato⁹⁴. Estas denuncias incluían múltiples quejas

por agresiones contra civiles, una querrela presentada en 1999 por un supervisor por insubordinación, una querrela por falsificar un informe policial y una querrela por negarse a atender un ciudadano que intentaba presentar una denuncia⁹⁵. Otras de las denuncias presentadas contra el incluyeron una denuncia en 1999 por violencia doméstica, en la que se alegaba que Pagán había agredido físicamente y amenazado a su compañera íntima con un arma de fuego⁹⁶.

El expediente disciplinario de Pagán reveló que los psicólogos de la policía habían diagnosticado que era una “bomba de tiempo”, y que dos superintendentes distintos habían recomendado su expulsión⁹⁷. A pesar de su historial disciplinario, estando pendiente la segunda recomendación para su expulsión, Pagán fue ascendido a la División de Operaciones Tácticas de Humacao para trabajar en un grupo especializado y de élite dentro de la división, denominado como equipo de respuesta especial⁹⁸. Las dos recomendaciones de expulsión se rebajaron a suspensiones como consecuencia de una audiencia disciplinaria interna ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA)⁹⁹. Pagán estuvo suspendido de la PPR desde el 23 de agosto de 2006 hasta el 22 de octubre de 2006, y regresó al trabajo alrededor de nueve meses y medio antes de que se suscitara el incidente con Cáceres¹⁰⁰. La unidad de 44 agentes, de la cual Pagán era parte, estaba bajo la supervisión de dos sargentos, uno de los cuales llevaba varias semanas de ausencia cuando se produjo el asesinato de Cáceres¹⁰¹. Cuando Pagán fue finalmente expulsado tenía dos reclamaciones civiles pendientes, ambas presentadas ocho años antes¹⁰².

En adición, los agentes Pagán y Sustache habían presenciado el asesinato policial de un joven, Nelson Santiago, una semana antes, y no habían sido entrevistados acerca de este asesinato¹⁰³. También tenían conocimiento de que los agentes involucrados en ese asesinato injustificado habían gozado de total impunidad y, de hecho, ni siquiera les habían quitado las armas reglamentarias después del asesinato. En ese caso, Nelson Santiago, hijo de un agente de la PPR, murió a causa de varios disparos de la policía durante un festival juvenil en Las Piedras. Cuando el padre de Santiago llegó al lugar de los hechos, la policía inicialmente se negó a permitirle que se acercara a su hijo, alegando que la zona estaba cerrada para la investigación. Finalmente, el padre de Santiago logró acceder al lugar y encontró a su hijo sangrando como consecuencia de las múltiples heridas de bala, y descubrió que los agentes habían acordonado la zona sin prestar asistencia médica a Santiago. El agente Pagán, quien mató a tiros a Miguel Cáceres Cruz una semana después, alegadamente le indicó al padre de Santiago que no se molestara en asistir al joven, ya que había “un criminal menos en las calles”¹⁰⁴. Pagán y Sustache no informaron a su supervisor ni a ningún otro funcionario del Gobierno de lo que habían presenciado¹⁰⁵.

c. Estudio de caso: Jorge Luis Polaco Jiménez

El asesinato policial de **Jorge Luis Polaco Jiménez**, un afrodescendiente de 28 años ejecutado extrajudicialmente por agentes asignados a la División de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios de Carolina el 4 de octubre de 2007, expone de manera similar varios de los problemas sistemáticos que afectan a la PPR: la falta de investigación adecuada de los disparos de la policía contra civiles, la falta de exigir responsabilidad a los agentes

responsables del uso ilegítimo de fuerza mortal incluso en los casos en que estaba obviamente injustificado, y la falta de identificación por parte del sistema de disciplina interna de la PPR de los agentes que corren el riesgo de cometer abusos.

Polaco había estrellado su automóvil contra el edificio en el que trabajaba su ex novia en la Avenida Campo Rico de Carolina, cuando los agentes de la División de Drogas le dispararon una vez en la parte frontal del hombro izquierdo y se lo llevaron detenido¹⁰⁶. Los agentes de la PPR se llevaron a Polaco, aparentemente para que recibiera atención médica inmediata en un hospital situado a diez minutos de distancia en automóvil. Aún así, Polaco llegó al hospital sin vida y una hora y media después del incidente, con siete heridas de bala en la espalda adicionales a la herida de bala en la parte frontal del hombro¹⁰⁷.

Desde ese día, la madre de Polaco, Ruth Jiménez de Jesús, ha intentado incansablemente obtener justicia y descubrir la verdad de lo que le ocurrió a su hijo. La investigación policial del asesinato de Polaco fue superficial y totalmente inadecuada: la policía no entrevistó a testigos presenciales y no suministró un informe de su investigación a la madre de Polaco¹⁰⁸. Jiménez de Jesús presentó múltiples quejas a la PPR, pero no recibió respuesta solo le afirmaron que la investigación estaba cerrada¹⁰⁹. Gracias a su perseverancia, obtuvo finalmente los documentos de la autopsia, los cuales incluían un dibujo que indicaba la ubicación de las heridas de bala en el cuerpo de su hijo.

La madre de Polaco continuó buscando información sobre el asesinato de su hijo, y regresó al lugar en el que habían disparado y arrestado inicialmente a su hijo con la esperanza de encontrar a un testigo. Dijo a la ACLU: “Fui todos los días, todas las tardes, para poder aclarar lo que había pasado, porque la investigación estaba cerrada”¹¹⁰. Contrató a un investigador privado, quien descubrió que el primer disparo que los agentes le hicieron a su hijo fue a aproximadamente a las 7:00 de la noche, poco después Jiménez de Jesús recibió una llamada de la policía en la que le informaron que su hijo había sido trasladado a la comisaría local¹¹¹. El investigador localizó a un testigo presencial, el cual nunca fue entrevistado por la PPR, que vio a los agentes disparar a su hijo en el hombro y meterlo posteriormente en un vehículo patrulla¹¹².

Según las conclusiones del investigador privado, las otras siete heridas de bala en la espalda de Polaco se infligieron después de que los agentes lo metieran en el vehículo patrulla. Aunque el hospital de Carolina estaba a solamente diez minutos en automóvil del lugar donde la policía arrestó a Polaco, los agentes lo llevaron al hospital una hora y media después, a las 8:35 de la noche, y llegó muerto¹¹³. Los policías han alegado que actuaron en defensa propia, pero el investigador privado descubrió que Polaco estaba desarmado, sólo llevaba un dólar y las llaves de su casa en el bolsillo; y que los agentes llevaban chalecos antibalas y armas de fuego¹¹⁴.

Los agentes de la policía involucrados en el arresto y el asesinato de Polaco nunca fueron sometidos a medidas disciplinarias. La ACLU ha documentado que uno de los dos agentes involucrados en el asesinato de Polaco, recientemente también fue involucrado en haber participado en una paliza contra Julio Cirino de 62 años cuando este se encontraba

en su casa. La paliza por parte de los agentes de la policía le provocó la pérdida de conciencia y una hospitalización debido a un coágulo de sangre en el cerebro y otras lesiones. El agente responsable, Isaac Joel Pizarro Pizarro, murió posteriormente por disparos en un incidente diferente en diciembre de 2011. Se ha informado que el otro agente ahora trabaja para el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.

Adicional a esto, la ACLU de Puerto Rico recientemente obtuvo un memorando con el membrete de la PPR redactado por un psicólogo de la policía, fechado un año antes de que el agente disparara a Polaco, en el que se afirmaba que no se debía volver a armar a uno de los agentes involucrados en la muerte de Polaco. Esto sugiere que la PPR no desarmó a un agente de alto riesgo, un problema generalizado que documentamos en otros casos, como se explica en detalle en la sección VIII de este informe.

Ruth, la madre de Jorge Polaco, dijo a la ACLU: “Mi deseo es que pague el culpable, que los responsables paguen como deben y que acaben en la cárcel. Si yo hubiera matado a alguien estaría en la cárcel. Si mi hijo violó la ley, debería estar en una celda, no en un cementerio”¹¹⁵. Ella indica que continúa buscando justicia y no puede descansar hasta que sepa la verdad de lo que le pasó a su hijo. Dijo a la ACLU:

“Nunca he tenido paz o tranquilidad. He continuado buscando y buscando para saber lo que le pasó a mi hijo ese día... El dolor que tengo es enorme. Y mi dolor y mi miseria son peores porque la policía nunca hizo una investigación... Siempre me he preguntado por qué se lo llevaron y lo que le hicieron durante esa hora y media. Lo que necesito saber es: ¿qué pasó?”¹¹⁶

IV. Uso excesivo de la fuerza contra comunidades de bajos ingresos, afrodescendientes y dominicanas

Los agentes de la PPR asignados a unidades tácticas hacen uso excesivo de la fuerza cuando participan en patrullas y controles habituales en comunidades de bajos ingresos, afrodescendientes y dominicanas. Durante los encuentros con civiles en estas comunidades, los agentes comúnmente hacen uso excesivo de la fuerza o recurren a la fuerza cuando es innecesaria e inadecuada. Los agentes de la PPR emplean tácticas agresivas que afectan de manera desproporcionada a las minorías raciales y los pobres. Los jóvenes que viven en comunidades predominantemente de bajos ingresos, afrodescendientes y dominicanas señalaron a la ACLU que los agentes de la PPR los someten a un constante hostigamiento e intimidación. En lugar de usar técnicas para frenar la escalada de violencia, los agentes usan la fuerza como sustituto de la vigilancia policial comunitaria.

La policía hace uso excesivo de la fuerza con acciones tales como golpear con macanas, patear, dar puños, arrojar al suelo o contra paredes y objetos, retener con estrangulamiento y disparar armas de fuego. En los casos documentados por la ACLU, la policía infligió lesiones como las siguientes: fractura de mandíbula, pérdida de dientes,

fractura de huesos, hemorragia interna, contusión grave, laceraciones, desgarres, daño en los órganos, fallo de órganos vitales, lesión cerebral traumática, parálisis, muerte cerebral y muerte. En los casos documentados por la ACLU, cuando los agentes usaron la fuerza, las víctimas no estaban resistiéndose al arresto y ya estaban controladas, desarmadas y planteaban muy poco o ningún peligro de causar daños a los agentes o los transeúntes. La ACLU documentó casos en los que la policía golpeó gravemente a personas que ya estaban esposadas y, en algunos casos, la policía no arrestó a las víctimas después de lesionarlas. Los agentes se limitaron a abandonar a las víctimas, lesionadas y ensangrentadas, en la calle o sus casas.

El uso excesivo de la fuerza es un fenómeno generalizado. De acuerdo con los datos facilitados por la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP), que supervisa las investigaciones administrativas internas de los agentes de la PPR, entre 2004 y agosto de 2010, la población civil presentó al menos 1,768 denuncias contra agentes por agresión o uso excesivo e injustificado de la fuerza.¹¹⁷ Es probable que estas cifras sean bajas y no representen con precisión el alcance del problema: como se explica en detalle en la sección VIII de este informe, la investigación de la ACLU demuestra que en la mayoría de los casos los civiles deciden no denunciar el abuso policial debido a la falta de confianza en el sistema de investigación y disciplina, la impunidad ampliamente reconocida para el abuso policial, y el temor a las represalias por denunciar violaciones de los derechos civiles y humanos.

El uso excesivo de la fuerza es habitual entre los agentes de múltiples unidades tácticas de la PPR. Partiendo de la investigación de la ACLU, hemos determinado que algunas de las unidades especialmente problemáticas son la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), cuya labor es ejecutada por una División de Operaciones Tácticas (DOT), conocida coloquialmente como Fuerza de Choque, en cada una de las 13 regiones policiales; y el Negociado de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios y Armas Ilegales (NDNV), representado en cada una de las 13 regiones policiales de la isla por una División de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios, denominada normalmente División de Drogas. También es problemática la Unidad de Tácticas Especializadas (UTE), conocida habitualmente como el Grupo de los Cien, una unidad de élite de agentes agrupados en equipos multidisciplinarios procedentes de varias unidades policiales diferentes, como drogas, tráfico, robo de vehículos y la UOT, para combatir el tráfico de drogas. Otras unidades tácticas especializadas rutinariamente también hacen uso de la fuerza extrema.

a. Fuerza excesiva contra comunidades de bajos ingresos

Los agentes de la PPR asignados a unidades tácticas frecuentemente cometen abusos durante redadas en residenciales públicos de barrios urbanos y otras comunidades de bajos ingresos. Durante años, los líderes y los miembros de comunidades de bajos ingresos han criticado frecuente hostigamiento e intimidación por parte de la PPR a los residentes en retenes establecidos por agentes en sus comunidades; así como en las redadas en las que los agentes de la PPR, en busca de armas y drogas, realizan registros de múltiples casas sin la orden correspondiente, amenazan verbalmente a los residentes, y en algunos casos atacan físicamente, destruyen las pertenencias o arrestan a los residentes sin justificación.

Por ejemplo, el 25 de octubre de 2010, los agentes de la PPR, entre ellos algunos agentes asignados a la División de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) hicieron una redada con patrullas y helicópteros policiales en el residencial público de Villa Esperanza de San Juan¹¹⁸. Los vecinos del complejo residencial informaron posteriormente que los agentes de la PPR amenazaron verbalmente y hostigaron a los residentes, y arrestaron a algunos de ellos sin justificación. Según los residentes del residencial público de Candelaria, en San Juan, el 18 de abril de 2009, los agentes de la PPR entraron en el complejo y empujaron, golpearon e insultaron a los vecinos de manera indiscriminada¹¹⁹. De manera similar, los residentes del complejo residencial público de Las Gladiolas, en San Juan, señalaron que los agentes de la PPR efectuaron una redada abusiva en busca de drogas en la que no se produjeron arrestos, por lo que luego de esto los agentes llevaron a cabo lo que denominaron una ocupación policial de la zona¹²⁰.

Los agentes de la PPR asignados a la División de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios frecuentemente cometen abusos durante las denominadas operaciones antidroga. En un caso documentado por la ACLU, los agentes de la División de Drogas golpearon de manera salvaje a Mauricio Alejandro Castillo Shaw, de 28 años. El 29 de abril de 2010, los agentes de la División de Drogas de la PPR golpearon la puerta de la casa de Castillo Shaw y, cuando este abrió la puerta, aproximadamente una veintena de agentes de la División de Drogas entraron y le informaron que tenían una orden para entrar, aunque en ningún momento le enseñaron una orden.¹²¹ Los agentes inmediatamente lo esposaron antes de registrar su casa. Según Castillo Shaw, después de esposarlo con los brazos detrás de la espalda, cuatro de los agentes lo empujaron contra la pared, lo arrojaron al suelo y le golpearon la cara contra el suelo, lo que le provocó la pérdida de dos dientes y fractura del hueso de la mandíbula¹²². Posteriormente, los agentes lo levantaron tirando de las muñecas esposadas y empezaron a propinarle puños y macanazos cuando seguía esposado¹²³. Castillo Shaw dijo a la ACLU: “Me levantaron la cabeza y pude sentir que tenía la boca llena, y me di cuenta de que estaba llena de sangre. Me corría la sangre por la cara y me salía por la boca”¹²⁴.

Los agentes procedieron a registrar la casa. Castillo Shaw dice que posteriormente lo pusieron en libertad sin radicarle cargos ni multas, y que la policía no encontró, drogas ni armas, pero señaló que la policía encontró un arma de fuego, marihuana y material para el consumo de drogas en una casa a cinco puertas de la suya¹²⁵. Ese día los agentes de la División de Drogas arrestaron a 18 personas de diferentes residencias en la comunidad. Se informó que, dentro de la misma operación, los agentes de la División de Drogas habían golpeado al menos a otros dos jóvenes en sus casas de manera similar a la agresión perpetuada contra Castillo Shaw. Castillo Shaw requirió tratamiento médico de emergencia para sus heridas, y vio a los otros dos jóvenes los cuales la policía también golpeó mientras estaba en el hospital recibiendo tratamiento médico para sus heridas¹²⁶.

Castillo Shaw presentó una querrela a la PPR ese mismo día, en la que relató información detallada sobre el incidente y suministró fotos de sus lesiones tomadas cuando estaba en el hospital. No conocía el nombre del agente que lo golpeó, porque el agente no se había identificado. Ha expresado que la denuncia escrita preparada por el agente que le atendió no contenía ninguna de la información detallada que le había proporcionado, y no

mencionaba que los agentes le habían roto el hueso de la mandíbula. Informó a la ACLU: “La denuncia no incluyó nada de lo que dije. Sólo decía ‘Informe de Incidente’, pero no explicaba cómo me partieron la cara. Simplemente, no era la versión de los hechos que les di”¹²⁷. Una semana después, el 7 de mayo de 2010, los agentes de la PPR entraron en la casa de Castillo Shaw y le dijeron que estaba arrestado. Lo acusaron retroactivamente con dos cargos de posesión de sustancias controladas y un cargo de posesión de armas ilegales, basándose en la operación realizada una semana antes. Dijo a la ACLU: “Personalmente, creo que formularon cargos contra mí porque presenté la denuncia. Las únicas otras personas contra las que presentaron cargos fueron los otros dos hombres maltratados. Los acusaron el mismo día que a mí”¹²⁸. Castillo Shaw no ha sabido nada sobre la situación de su denuncia.

Castillo Shaw cree que es posible que no prosiga la causa penal contra él porque los agentes de la PPR que participaron en el operativo alegan que todos los vídeos y fotografías tomadas por la policía durante el operativo fueron borrados. Castillo Shaw dijo a la ACLU: “Todas las fotos de esa operación tomadas por la policía se han borrado porque demuestran que la policía está mintiendo. Estoy seguro de que tiene que haber fotos de la policía golpeándome”¹²⁹.

En otro incidente ocurrido el 13 de febrero de 2011, los agentes de policía llevaron a cabo un operativo en el sector Miñi-Miñi de Loíza, durante el cual una decena de agentes de la PPR entraron en la casa de Julio Cirino, de 62 años, y lo golpearon y patearon brutalmente en la cabeza y las costillas delante de su hija, lo que lo dejó inconsciente¹³⁰. Los agentes alegaron que estaban buscando armas y drogas, pero nunca presentaron una orden de registro de la casa¹³¹. Cirino, que estaba desarmado y simplemente hablaba con un vecino cuando llegó la policía, perdió la conciencia como consecuencia de la paliza y tuvo que ser transportado del lugar en ambulancia¹³². Según su hija, tuvo que ser hospitalizado posteriormente debido a un coágulo de sangre en el cerebro y otras lesiones provocadas por los agentes de policía¹³³. La ACLU de Puerto Rico entrevistó a la hija de Cirino, que presenció el incidente y dijo que su padre no se resistió ni forcejeó con la policía de ninguna manera¹³⁴. La hija de Cirino inicialmente presentó una querrela a la PPR denunciando la agresión contra su padre, pero la familia de Cirino posteriormente decidió no proseguir con la denuncia¹³⁵.

Recientemente, la ACLU de Puerto Rico ha documentado numerosos casos de abuso policial en La Perla, una de las comunidades de bajo ingreso más antigua y numerosa de Puerto Rico, situada en San Juan y construida en la época de la Segunda Guerra Mundial. En junio de 2011, agentes de la PPR efectuaron una redada abusiva y violenta contra los residentes de La Perla. En agosto de 2011, la ACLU de Puerto Rico celebró vistas públicas en las que residentes comunitarios denunciaron agresiones, registros ilegales, arrestos injustificados y hostigamiento por los agentes de la PPR. Rafael Ortíz, vecino de La Perla, dijo a la ACLU, “En estos tiempos [los policías] echan abajo puertas y ventanas y realizan registros ilegales, alegando que están buscando a un sospechoso”¹³⁶. Ortíz señaló que, después de la redada de junio de 2011, los agentes de policía inspeccionaron cochecitos de bebé y las carteras de los estudiantes sin órdenes ni autoridad legal¹³⁷. Tania Amigón, otra residente de La Perla, dijo a la ACLU que, el 24 de junio de 2011,

varios agentes entraron en la comunidad y macanearon a la gente en la calle. Dijo: “Hirieron al menos a cinco mujeres y dos niños”¹³⁸. Amigón agregó: “No me siento más segura cuando están [los policías] en la comunidad. De hecho, estoy más segura cuando no están”¹³⁹.

b. Fuerza excesiva contra comunidades afropuertorriqueñas

La ACLU documentó múltiples casos de violencia policial injustificada contra residentes en Loíza, una municipalidad predominantemente afropuertorriqueña. Según las estadísticas del censo de 2010, la municipalidad es predominantemente afropuertorriqueña, y casi el 65% de sus residentes se identifican como afrodescendientes. La mayoría de los residentes de la comunidad también tienen bajos ingresos: el 67% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el ingreso medio de los hogares es de \$8,962 anuales, según las estadísticas del censo de 2006.

La ACLU entrevistó a Luis Ayala Rivera, un joven afrodescendiente de 20 años que vive en Villa Cañona, una comunidad afropuertorriqueña del pueblo de Loíza. Ayala presenció cómo los policías asignados a la División de Operaciones Tácticas dispararon en la cabeza a su hermano de 22 años, José Amaury Ayala Rivera, cuando ambos regresaban a su casa luego de una fiesta un sábado en la noche en septiembre 2010¹⁴⁰. Ayala dijo a la ACLU: “Lo vi todo. Le dijeron que se parara y echó a correr, y le dispararon. El agente hizo dos disparos. El primero falló su objetivo y en el segundo impactó la cabeza de mi hermano. Entonces los agentes formaron una barrera y no dejaron pasar a nadie para llegar hasta mi hermano y ayudarlo. Dijeron que estaba muerto y no me dejaron acercarme a él, pero pude ver que se movía y seguía vivo”¹⁴¹. Las heridas cerebrales que sufrió el hermano de Ayala como consecuencia del disparo lo dejaron parapléjico y confinado a una silla de ruedas para el resto de su vida¹⁴².

Según Ayala, su familia presentó una querrela administrativa a la PPR, pero no ha recibido respuesta¹⁴³. Posteriormente, la familia interpuso una demanda civil contra la PPR reclamando una indemnización, y aceptó una oferta de acuerdo de \$90,000. Dijo: “No teníamos ningún otro testigo. Ofrecieron \$90,000 y los aceptamos porque somos pobres. Se aprovecharon del hecho de que no teníamos testigos. Es demasiado triste”¹⁴⁴. Ayala afirma que no se formularon cargos penales contra el agente, que sigue en el servicio activo en la PPR. Ayala dijo a la ACLU: “El abuso se repetirá: en nueve meses, un año, la policía lo volverá a hacer, y nuestras lágrimas serán las de otra persona”¹⁴⁵.

Ayala dijo a la ACLU que los agentes de la PPR constituyen una presencia casi constante en su comunidad, y que con frecuencia hostigan a los jóvenes. Dijo: “No puedes pasear por las calles en paz; casi nadie se atreve a pasear. Algunos de mis amigos han sido víctimas de la policía recientemente. Nadie puede vivir en paz en mi barrio”¹⁴⁶. Agregó:

“El racismo [de la policía] es muy, muy malo contra nuestra comunidad. Es terrible lo que nos está pasando. La policía hace su trabajo, pero no lo hacen como deberían. Si la gente se reúne en un comercio o una fiesta en nuestro barrio, todos haciendo lo suyo y sin violar la ley, la policía llega y lesiona a la gente sin ningún motivo. Es brutalidad policial sin ninguna razón ni justificación. Donde

vivo, la policía piensa que todos son traficantes de drogas, y eso no es así. La policía viene con violencia, las armas en la mano, disparando y golpeando a todos. La policía tiene que pensar de manera diferente, y no suponer simplemente que todos son malos en mi comunidad”¹⁴⁷.

Otros afrodescendientes residentes en Villa Cañona informaron de las agresiones, el constante hostigamiento e intimidación por parte de la policía. Evelyn Rivera, una madre soltera de dos hijos, uno de los cuales padece una grave deficiencia cognitiva, dijo a la ACLU que los agentes de la PPR habían golpeado y rociado con gas pimientas en reiteradas ocasiones a su hijo de 27 años, Edgar Pizarro Rivera, quien padece de una grave discapacidad del desarrollo¹⁴⁸. Según Evelyn Rivera, la policía había retenido y golpeado a su hijo con macanas cuando este paseaba por el barrio en su bicicleta en numerosas ocasiones entre 2007 y 2008, y de nuevo en 2011. Sufrió hematomas como consecuencia de las agresiones, incluyendo moratones alrededor de los genitales, y ahora le aterroriza jugar en la calle. Durante los ataques contra su hijo, quien tiene la capacidad mental de un niño de cinco años, la policía repetidamente ha utilizado expresiones racistas que sugieren que las agresiones tienen motivos parcialmente racistas¹⁴⁹. Evelyn Rivera presencié un ataque de la policía contra su hijo en el que los agentes de la PPR lo llamaron “un negro sucio”, y ha visto como los agentes usan las mismas expresiones contra otros residentes de su comunidad¹⁵⁰. Rivera presentó tres denuncias en relación al abuso policial contra su hijo, y no ha recibido ninguna respuesta sobre sus primeras dos denuncias. Simplemente recibió una carta que afirma que la denuncia ha sido “archivada” sin explicación alguna¹⁵¹. Rivera dijo a la ACLU: “No creo en el sistema de quejas de la policía. No se toman en serio ninguna de mis denuncias. Nunca tuve confianza en la policía, y cada día confío menos en ellos”¹⁵².

c. Fuerza excesiva y otros abusos policiales contra inmigrantes dominicanos y puertorriqueños de origen dominicano

Los líderes de comunidades dominicanas, la ACLU de Puerto Rico y otros defensores de los derechos civiles llevan muchos años denunciando las prácticas policiales discriminatorias, como los incidentes de abuso policial extremo por motivos de origen nacional en varias comunidades conocidas por estar habitadas predominantemente por inmigrantes dominicanos y personas de origen dominicano, como el sector de Santurce de San Juan. Según los líderes de las comunidades dominicanas, los agentes de la PPR centran sus ataques en comunidades predominantemente dominicanas y personas con aspecto físico dominicano o que cuyo origen puede identificarse por su acento. En estos casos, los agentes suelen utilizar adjetivos racistas e insultos xenófobos relacionados con su origen dominicano, lo que indica que estos agentes de la PPR discriminan por razones de raza u origen étnico.

José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de Derechos Civiles, dijo que llevaba 15 años documentando casos de brutalidad policial contra inmigrantes dominicanos y puertorriqueños de origen dominicano¹⁵³. Según Rodríguez, el Comité Dominicano de Derechos Civiles ha documentado 26 asesinatos policiales de inmigrantes dominicanos entre 2000 y 2011¹⁵⁴. También señaló que los agentes de la PPR frecuentemente registran las casas de inmigrantes dominicanos sin órdenes o autorizaciones, y piden a las

personas con aspecto dominicano documentos de identidad y prueba de su situación migratoria sin que exista una sospecha razonable ni una finalidad legal¹⁵⁵.

Las informaciones publicadas en la prensa de Puerto Rico han señalado de manera similar que la PPR selecciona de manera discriminatoria a los inmigrantes dominicanos y los somete a registros injustificados de sus casas sin autorización¹⁵⁶. Según estas informaciones de prensa, los agentes de la PPR reclaman los documentos de identidad y una prueba de su situación migratoria a los inmigrantes dominicanos, y cuando estos civiles se niegan a aportar pruebas de su ciudadanía o su residencia legal permanente, los agentes de la PPR los arrestan sin justificación y usan infracciones sin fundamento para imponerles multas cuantiosas¹⁵⁷.

Uno de los casos documentados por el Comité Dominicano de Derechos Civiles es el asesinato policial en octubre de 2009 de Franklin Cáceres Osorio, un inmigrante indocumentado de la República Dominicana y padre de tres hijos¹⁵⁸. Se informó que Cáceres Osorio había caído a la calle desde la ventana de un segundo piso después de que la policía entrara en su casa en una comunidad predominantemente dominicana de Santurce¹⁵⁹. La familia alega que la policía lo tiró a la calle y que no se cayó por accidente. La policía retrasó la llamada al servicio de emergencia médica, lo que hizo que no llegara una ambulancia hasta después de su muerte. La policía no llamó a la División de Homicidios ni el departamento forense, como habitualmente se hace cuando se encuentra con un cadáver. En cambio, su familia dijo que tuvieron que llamar a una casa funeraria para que se llevaran el cuerpo. Nunca se realizó una investigación forense en la escena del crimen. Aunque el informe de la autopsia facilitado por las autoridades puertorriqueñas a la viuda de Cáceres Osorio afirmaba que su muerte había sido como consecuencia de uso de cocaína, una autopsia realizada cuando su cuerpo llegó repatriado a la República Dominicana concluyó que la causa de su muerte fueron los golpes¹⁶⁰. El Comité Dominicano de Derechos Civiles ha calificado su muerte como crimen de odio. Según este Comité, que realizó una investigación del caso y colaboró estrechamente con la viuda de Cáceres Osorio, la organización localizó a un testigo al cual la policía no entrevistó y que dice haber visto a los policías golpear a Cáceres Osorio¹⁶¹. Según Rodríguez, no existe un registro del incidente en los expedientes del departamento de policía¹⁶².

Otro incidente documentado por el Comité Dominicano de Derechos Civiles fue el asalto del 12 de septiembre de 2010 y la detención masiva de alrededor de 75 inmigrantes dominicanos que estaban participando o asistiendo a una pelea de gallos en Río Piedras¹⁶³. Según el Comité Dominicano de Derechos Civiles, un grupo de aproximadamente una decena de agentes de la policía asignados a la División de Drogas entraron al edificio sin una orden y empezaron a disparar al aire “como *cowboys*”¹⁶⁴. Se informó que los agentes exigieron ver los documentos migratorios de los espectadores y arrestaron a todos los jóvenes dominicanos presentes en la pelea de gallos¹⁶⁵. Según Rodríguez, cuando los familiares acudieron a la comisaría en busca de los hombres que habían sido arrestados, los agentes de la PPR reclamaron hasta \$300 a cada familia para ponerlos en libertad y no deportarlos¹⁶⁶. Según el Comité Dominicano de Derechos Civiles, los agentes de la PPR golpearon y esposaron a una joven llamada Stefany Bello,

y le dijeron: “Cierra la boca, maldita dominicana”¹⁶⁷. Bello después dijo a los periodistas que la policía la abofeteó y le dijeron que sus documentos migratorios eran falsos. Ella afirmó que era una inmigrante legal¹⁶⁸.

La ACLU ha documentado numerosos casos de brutalidad policial cometidos por agentes de la PPR durante el transcurso de un intento del Gobierno, en agosto de 2009, de desalojar por la fuerza a los residentes de Villas del Sol, una comunidad de ocupantes ilegales compuesta mayormente por familias indigentes de origen dominicano. Los agentes de la policía atacaron violentamente a miembros de la comunidad, compuesta principalmente por mujeres cabeza de familia y niños, golpeándolos, rociándolos con gas pimienta y paralizándolos con descargas eléctricas, y en algunos casos arrojando a las mujeres por encima de barreras de concreto. Una residente de la comunidad, Laura Mota, dijo a la ACLU que durante el primer intento de desalojarlos por la fuerza, el 4 de agosto de 2009, los agentes de la Fuerza de Choque le rociaron la cara con gas pimienta, le tiraron del pelo, la arrojaron por encima de la una barrera de cemento más alta que su pecho, le dieron puños, la arrastraron y la patearon con sus botas¹⁶⁹. Mota indicó que se limitó a gritarle a la policía que debían irse y los denunció por la violencia que estaban usando contra otros miembros de la comunidad predominantemente dominicana. Indicó también que no estaba resistiéndose ni amenazando a la policía de ninguna manera y, de hecho, estaba tan debilitada por el gas pimienta inicial, que era incapaz de hacer nada contra la policía¹⁷⁰.

Mota también presenció cómo la policía arrastraba, pateaba, golpeaba con los puños y rociaba con gas pimienta a su amiga Maritza de la Cruz, embarazada de ocho meses, a la que dejaron inconsciente, y vio a la policía rociar con gas pimienta y macanear al hijo de cinco años de Maritza¹⁷¹. Mota también fue testigo de cómo un policía pateaba a un hombre en la espalda y le aplicaba electrochoques ocho veces mientras gritaba: “¡Van a matarme!”¹⁷² Mota dijo: “Esos gritos todavía me persiguen hoy. Le salía espuma por la boca y tenía sangre por toda la cara”¹⁷³.

Mota dijo a la ACLU que la policía usó adjetivos raciales y étnicos durante el intento de desalojo violento y continuó durante la subsiguiente ocupación policial de la comunidad a lo largo del siguiente año y medio, hasta el desalojo final de la comunidad en diciembre de 2010¹⁷⁴. Según Mota, la policía gritó en repetidas ocasiones a los residentes “malditos dominicanos”, “váyanse de regreso a su país”, “debíamos haberlos matado” y, cuando una mujer dominicana de 20 años requirió atención médica para un ataque de epilepsia, el agente que se negó a llamar a una ambulancia dijo: “una dominicana menos”¹⁷⁵. Mota dijo a la ACLU: “Era difícil escuchar esos comentarios todo el tiempo”¹⁷⁶. Entre el 4 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, los agentes de la PPR también pararon con frecuencia a los que salían en automóvil de la comunidad, les pedían sus tarjetas de residencia y no sus permisos de conducir, como una forma de hostigamiento infundado destinado a los inmigrantes dominicanos que viven en Villas del Sol¹⁷⁷.

La ACLU también documentó los casos de dos jóvenes dominicanos golpeados brutalmente por la policía en distintos incidentes en Santurce. En ambos casos, los jóvenes estaban desarmados y requirieron intervención quirúrgica de emergencia para sus

lesiones. En mayo de 2009, el inmigrante dominicano Joel Félix, de 24 años, caminaba a su casa sólo justo antes de la medianoche después de haber pasado la noche del sábado con amigos¹⁷⁸. Cuando caminaba debajo de un puente vio a unos seis a ocho agentes de la PPR, que salieron de sus vehículos y apuntaron las linternas a sus ojos. Uno de los agentes le dijo inmediatamente que se pusiera los brazos en la espalda, y lo esposaron sin decirle la razón para detenerlo y esposarlo. Posteriormente, los agentes le golpearon salvajemente con sus puños y guantes y lo patearon con sus botas. Felix cayó al suelo y perdió el conocimiento. Indicó que los agentes sabían con seguridad que era un inmigrante dominicano, ya que pudieron identificarlo por su acento¹⁷⁹.

Félix se despertó en la cama de un hospital, bocarriba y con un dolor severo. Aparentemente, los agentes lo habían abandonado el lado de la carretera, y habían usado su teléfono celular para llamar a su hermana y decirle que estaba tirado en el suelo. La hermana tardó una hora en encontrarlo e inicialmente no quiso llevarlo a recibir atención médica en el hospital por temor a que los agentes de policía vinieran a buscarlo¹⁸⁰. Sin embargo, el dolor era tan fuerte que no podía dormir ni comer, y dejó que su madre lo llevara de regreso al hospital¹⁸¹. El médico del hospital le dijo que necesitaba una intervención urgente debido a una hemorragia interna, daño en el bazo y el hígado provocados por la paliza de la policía¹⁸². El médico le dijo que moriría si no lo operaban, y habría muerto si hubiera seguido retrasando la asistencia médica. Félix estuvo hospitalizado durante un mes completo y tuvo que pagar todos sus gastos médicos¹⁸³.

Félix presentó una denuncia a la PPR cuando estaba en el hospital, pero tenía tanto miedo de las represalias policiales si proseguía con la denuncia que la retiró después de que los agentes de la PPR pasaron por su casa. Dado que los agentes no se habían identificado durante el ataque, no habían presentado un informe del incidente o el arresto y le habían deslumbrado con sus linternas, lo que hizo imposible que les viera la cara, Félix no pudo identificar a ninguno de los agentes responsables¹⁸⁴. Félix quiso presentar una demanda civil para reclamar una indemnización de la PPR, pero dice que no pudo costear los honorarios de un abogado, que cuesta un mínimo de \$5,000 para comenzar a trabajar en el caso¹⁸⁵.

Félix dijo a la ACLU: “Ahora, cuando veo a un grupo de policías, me pongo nervioso y me voy del lugar. Cuando los policías llegan mientras estás sólo en una esquina y escucha que eres dominicano, usan la fuerza brutal, pensando que no podemos hacer nada contra ellos. Cuando están en grupo son aún más agresivos”¹⁸⁶. Agregó: “Hay un racismo considerable contra los dominicanos, porque han habido muchos casos de abuso policial contra dominicanos. Muchas veces la policía detiene a los dominicanos por algo simple, como no llevar puesto el cinturón, y nos intimidan y nos acosan”¹⁸⁷.

V. Macanas contra la expresión: Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión

Desde 2009, la PPR también ha hecho uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. A pesar de que la represión policial del movimiento de Ocupación (“Occupy”) ha centrado la atención en el problema del abuso policial contra manifestantes en Estados Unidos, la PPR no ha abordado su frecuente y sistemático uso de la fuerza contra manifestantes. Los agentes frecuentemente reprimen con el uso excesivo de fuerza actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución: utilizan de manera indiscriminada sustancias químicas como un compuesto tóxico de gases lacrimógenos y gas pimienta, macanas, pelotas y perdigones de goma, granadas de perdigones de goma, proyectiles con bolsas rellenas de perdigones, pistolas paralizantes, estrangulamiento de la carótida y técnicas de puntos de presión contra los manifestantes. La policía ha hecho uso regular excesivo de la fuerza violando el derecho a la libertad de palabra, expresión y reunión, protegido por la Primera Enmienda, y el derecho a no ser sometido a registros, detenciones o incautaciones, protegido por la Cuarta Enmienda. Estas prácticas policiales violan también los derechos humanos de los manifestantes a la libertad de palabra, expresión y asamblea pacífica, y la prohibición estricta de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante dentro del derecho internacional.

La PPR responde regularmente a las protestas pacíficas con la movilización de numerosos agentes asignados a las Unidades de Operaciones Tácticas, conocidas coloquialmente como la Fuerza de Choque. Cuando responden a las protestas, los agentes de la Fuerza de Choque llevan normalmente equipo antidisturbios, como chalecos antibalas y protección corporal acolchado, cascos con viseras, botas de combate y escudos de plástico. Van armados con macanas largas antidisturbios, cilindros de gas pimienta, pistolas de gases lacrimógenos, escopetas de balas de goma y/o pistolas de perdigones; y armas de fuego con munición real. Los agentes de la Fuerza de Choque tienen un aspecto amenazante e imponente: son altos y musculosos, con una altura mínima de cinco pies y diez pulgadas (1,78 metros), según el reglamento de la PPR. La Fuerza de Choque también colabora estrechamente con la Unidad de Tácticas Especializadas (UTE), conocida habitualmente como el Grupo de Cien, una unidad élite de agentes agrupados en equipos multidisciplinarios procedentes de varias unidades policiales diferentes, como drogas, tráfico, robo de vehículos y la UOT. Con frecuencia, también se moviliza en las protestas a agentes asignados al Cuerpo de Investigaciones Especiales.

La ACLU documentó numerosos casos de abuso policial contra manifestantes en lugares en los que se han organizado tradicionalmente manifestaciones en Puerto Rico, como los predios públicos que rodean el edificio del Capitolio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la mansión del Gobernador, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y el campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Muchos de estos incidentes fueron fotografiados o grabados en video. En los casos documentados por la ACLU, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la PPR, numerosos manifestantes tuvieron que recibir atención médica por golpes contundentes y penetrantes, contusiones,

lesiones en la cabeza, ruptura de ligamentos y torceduras, dificultad para respirar y quemaduras de segundo grado provocadas por sustancias químicas.

En unos comentarios en febrero de 2011, el representante Luis V. Gutiérrez se dirigió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para atraer la atención sobre los ataques de la PPR contra manifestantes pacíficos:

“Quiero hablarles hoy acerca de una parte del mundo donde se están negando los derechos de los ciudadanos de todas las condiciones sociales a protestar y decir lo que piensan, con macanas y gas pimienta. Una parte del mundo en la que una huelga de estudiantes hizo que la universidad prohibiera las protestas en cualquier lugar y en cualquier momento en el campus, y donde, cuando los estudiantes protestaron la represión de la libertad de expresión, fueron atacados violentamente por policías antidisturbios fuertemente armados... ¿Qué tierra lejana ha presenciado la prohibición de las protestas estudiantiles, las palizas a los manifestantes sindicales y el encarcelamiento de defensores de la libertad de expresión? La colonia de Puerto Rico de los Estados Unidos de América”¹⁸⁸.

A pesar del uso de violencia por parte de la PPR contra manifestantes durante varios de los incidentes documentados por la ACLU, como lo fue una protesta frente al Capitolio el 30 de junio de 2010 y una manifestación a las puertas de un evento político para recaudar fondos en el Hotel Sheraton el 20 de mayo de 2010, muy pocos manifestantes fueron detenidos durante estos incidentes. La escasez de arrestos durante estos incidentes y los pocos arrestos durante otros incidentes basados en causa probable, indica que los manifestantes no constituían una amenaza para la seguridad pública, que **el uso de la fuerza fue excesivo e innecesario y no estuvo justificado**.

En otros casos relacionados con las protestas estudiantiles en la UPR, especialmente durante las huelgas de estudiantes de abril a junio de 2010 y de diciembre de 2010 a febrero de 2011, la ACLU documentó **detenciones masivas injustificadas** de estudiantes de la UPR para poner fin a sus protestas, reprimiendo de este modo su derecho a la libertad de palabra y de expresión. Un parte muy pequeña de estas detenciones de manifestantes estudiantes se basó en causa probable. Los activistas estudiantiles señalan que han sido arrestados aproximadamente 200 estudiantes de la UPR, algunos en múltiples ocasiones, pero la fiscalía sólo ha formulado cargos contra aproximadamente 17 de ellos. Una y otra vez, los manifestantes estudiantiles fueron arrestados y reclusos durante horas en una celda policial para que después los tribunales no encontraran causa probable que justificara su detención. Irónicamente, en algunos casos aislados en los que los estudiantes alegadamente sí violaron la ley al romper ventanas de vehículos en el campus, los estudiantes no fueron arrestados a pesar de la presencia policial en el lugar.

La ACLU ha identificado varias categorías de fuerza excesiva empleadas por la policía en los incidentes documentados: utilización indiscriminada de sustancias químicas como un compuesto tóxico de gases lacrimógenos y gas pimienta; uso indiscriminado de macanas; uso no reglamentario de estrangulamiento de la carótida y técnicas de puntos de presión; uso inadecuadamente reglamentado de “munición menos mortal” como pelotas y

perdigones de goma, granadas de perdigones de goma, proyectiles con bolsas rellenas de perdigones; uso inadecuadamente reglamentado de dispositivos de descarga eléctrica como pistolas paralizantes. Estas tácticas fueron innecesarias, irrazonables e inconstitucionales. Además, la ACLU documentó varios casos en los que la policía manoseó y acosó sexualmente a mujeres estudiantes que participaban en la protesta.

a. Efecto disuasivo sobre la libertad de palabra y libertad de expresión protegidas por la Constitución

El uso excesivo de la fuerza por parte de la PPR y los infundados arrestos en masa de manifestantes han tenido **un efecto disuasivo sobre las protestas protegidas por la Primera Enmienda**. Numerosos estudiantes universitarios, líderes y miembros de sindicatos señalaron a la ACLU que han dejado de protestar, o han reducido significativamente sus actividades de protesta, debido al temor a volver a sufrir la violencia policial y ser arrestados injustificadamente. Una serie de estos autodenominados activistas, que anteriormente habían participado en protestas en numerosas ocasiones, dijeron a la ACLU que ya no se sienten seguros participando en manifestaciones. Dijeron que tienen miedo de que la PPR vuelva a hacer uso excesivo e injustificado de la fuerza para reprimir sus manifestaciones, y se muestran reticentes a expresar públicamente sus ideas políticas por temor a las represalias de la PPR. La PPR también ha grabado abiertamente a los manifestantes estudiantiles con videocámaras, y los agentes de la PPR les han dejado claro a los estudiantes que la PPR está siguiendo personalmente sus actividades. De hecho, los agentes de la PPR se dirigen a menudo a los activistas estudiantiles por sus nombres, lo que les infunde temor a represalias. Los estudiantes señalaron que estas tácticas los intimidan, y han hecho que algunos abandonen o reduzcan significativamente sus intentos de participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda.

Todos los manifestantes entrevistados por la ACLU nos dijeron creer que **el objetivo del uso de la fuerza por parte de la PPR contra ellos es reprimir su derecho a la libertad de palabra y expresión**, y está dirigido directamente contra los puntos de vistas críticos contra el gobierno actual y sus políticas. Sin excepción alguna, todos los ciudadanos afectados, líderes comunitarios, activistas estudiantiles universitarios y líderes y miembros de sindicatos que entrevistamos nos dijeron que consideraban que la policía los había perseguido debido a las opiniones que habían intentado expresar, lo que sugiere que la policía está **discriminando inconstitucionalmente a los manifestantes en función de sus opiniones**. La líder sindical Luisa Acevedo Zambrano, que fue víctima de la fuerza excesiva de la policía en numerosas ocasiones cuando de manera legal protestaba, dijo a la ACLU que considera que la represión policial contra los manifestantes constituye una “violencia estratégica contra los que se oponen o confrontan al Gobierno”. Explicó:

“En nuestra opinión, la realidad es que los derechos civiles de los hombres y las mujeres trabajadores de Puerto Rico han decaído tremendamente en los últimos años. No se permite realmente la expresión pública, y no solo de los hombres y las mujeres, sino de los estudiantes, las mujeres y los periodistas —en términos generales, todos los sectores que puedan plantear algún tipo de disidencia. Esto ha menoscabado nuestros derechos y nos hemos visto obligados a no hablar o

hacer declaraciones públicas contando la realidad de lo que está pasando en Puerto Rico”¹⁸⁹.

Shariana Ferrer Núñez, estudiante de la UPR, dijo a la ACLU: “El mensaje de las palizas y la represión es que no puedes hablar con la prensa y no puedes manifestarte, criticando a la PPR, porque vas a criticar al Gobierno. ¿Dónde está nuestro espacio real? Si sacamos nuestras pancartas frente al Capitolio, nos rocían con gas pimienta y nos golpean, ¿entonces qué hacemos? No tenemos libertad de expresión. ¿Qué hago con los papeles que dicen que tenemos derecho a la libertad de expresión?”¹⁹⁰

En el informe del DOJ sobre las conclusiones de su investigación de la PPR, el DOJ determinó que el uso de la fuerza irrazonable y otras conductas empleadas contra los manifestantes estaban “dirigidas a suprimir el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda”¹⁹¹. El DOJ concluyó: “La frecuencia y severidad del uso de fuerza excesiva por parte de la PPR contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión está diseñada para acallar la expresión de los manifestantes, en violación de la Primera Enmienda”¹⁹².

b. Uso indiscriminado de gas CN lacrimógeno tóxico

En respuesta a manifestaciones políticas totalmente o parcialmente pacíficas, la policía frecuentemente dispara cilindros de aluminio de gas lacrimógeno contra los manifestantes con escopetas antidisturbios o “lanzaderas menos mortales”, un arma de fuego con aspecto similar a un lanzagranadas que se usa para disparar munición menos mortal. La policía también ha arrojado gases lacrimógenos desde helicópteros, y en las imágenes de vídeo y las fotografías recopiladas aparecen los manifestantes rodeados de densas nubes de gases lacrimógenos. El gas lacrimógeno provoca un intenso dolor, quemaduras e irritación de los ojos, la boca, la garganta, los pulmones y la piel. Los manifestantes afectados señalaron que habían sufrido ceguera temporal, dificultades para respirar, presión en el pecho, falta de aire, fatiga, tos y/o una sensación de ahogamiento debido a la exposición a los gases lacrimógenos. Algunos manifestantes dijeron a la ACLU que habían sufrido dolor de ojos, nariz y garganta durante días; otros señalaron que habían sufrido fatiga, irritación de la garganta y tos durante semanas después de que los rociaran con gases lacrimógenos.

El manifestante estudiantil de la UPR Roberto Morales describió los efectos de los gases lacrimógenos: “No puedes respirar profundo, no puedes llenarte completamente los pulmones. Y al mismo tiempo te duelen mucho los pulmones...Tienes la piel ardiendo y estás tosiendo, te salen mocos por todas partes y tienes lágrimas por toda la cara. No puedes abrir los ojos por el dolor”¹⁹³.

La ACLU supo que la PPR usó cantidades sustanciales de cloroacetofenona, o gas CN, contra los manifestantes¹⁹⁴. El gas CN es una forma tóxica de gas lacrimógeno que la mayoría de las agencias de seguridad no utilizan debido a su toxicidad. En general, las agencias de seguridad de Estados Unidos dejaron de usar el gas CN a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, y lo sustituyeron por otras sustancias químicas menos tóxicas. Un antiguo superintendente auxiliar de la PPR señaló a la ACLU que la

PPR prohibió el uso del gas CN a partir del 31 de enero de 2011, y que el departamento tenía la intención de destruir el millar de cilindros de gas CN que quedaban en su arsenal¹⁹⁵. La PPR utiliza ahora clorobenzilideno malononitrilo, o gas CS, un tipo de gas lacrimógeno más potente pero menos tóxico.

La exposición a grandes cantidades de gases lacrimógenos o la exposición durante períodos de más de una hora pueden causar ceguera, glaucoma, problemas respiratorios a largo plazo, quemaduras químicas graves en la garganta y los pulmones que pueden provocar la muerte y un fallo respiratorio que puede resultar mortal. Las personas con asma u otros problemas pulmonares corren un mayor riesgo de muerte como consecuencia de la exposición a los gases lacrimógenos. Los gases lacrimógenos pueden ser mortales para personas saludables que inhalan grandes cantidades, especialmente en espacios cerrados. En muchas ciudades del Reino Unido y de Europa continental ya no se usan gases lacrimógenos en las protestas debido al riesgo que plantean.

El gas lacrimógeno CN puede tener efectos mortales, y la principal causa de muerte tras la inhalación de gas CN son los daños pulmonares. Investigadores médicos del Ejército de Estados Unidos registraron múltiples muertes por inhalación de gas CN: como la muerte de un detenido expuesto al gas CN dentro de su celda; la muerte de un hombre que se encerró en una habitación de su casa durante un altercado con la policía, la cual lanzó una granada de gas CN dentro de la habitación; y otros casos en los que la inhalación de gas CN —en uno de ellos con una exposición de sólo diez minutos— resultó ser la causa de la muerte¹⁹⁶. Los estudios médicos realizados con ratas, conejillo de Indias y perros han descubierto que los animales que murieron por inhalación de gas CN sufrieron congestión pulmonar, edema, enfisema, traqueítis, bronquitis y bronconeumonía¹⁹⁷. Los animales que murieron como consecuencia de la inhalación de gas CN sufrieron congestión de los vasos capilares, hemorragia alveolar, secreciones excesivas en los bronquios y los bronquiolos y una infiltración celular inflamatoria aguda de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos.

Según la investigación médica del Ejército de Estados Unidos, el gas CS lacrimógeno puede provocar una disfunción prolongada de las vías respiratorias y se asocia con el desarrollo del síndrome de enfermedad reactiva de las vías respiratorias en algunas personas. Aunque no se ha reportado ninguna muerte atribuida al gas CS, los investigadores médicos han concluido que la exposición a esta sustancia podría provocar la muerte como consecuencia del daño pulmonar que conduce a un edema pulmonar¹⁹⁸.

c. Uso indiscriminado de gas pimienta

La policía también ha rociado de manera habitual e indiscriminada a los manifestantes con gas pimienta y a escasos centímetros de distancia, directamente en los ojos, la nariz y la boca. Los manifestantes señalaron a la ACLU que la policía los roció con tanto gas pimienta que quedaron cubiertos por un líquido anaranjado, que les caía por la cara, el cuerpo, los cegó temporalmente y provocó un horrible dolor que en algunos casos se prolongó durante días.

El gas pimienta es una sustancia inflamatoria potente, y provoca ceguera temporal y una insoportable sensación de quemazón en los ojos, la cara y la piel que puede persistir durante días; irrita y daña membranas, vías bronquiales y la pared del estómago; aumenta la sensibilidad alérgica; e inflama las vías respiratorias, lo que provoca hinchazón y restricción¹⁹⁹. El uso militar del gas pimienta en otros países está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas, que prohíbe el uso de “toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres humanos o animales”²⁰⁰.

El gas pimienta también puede causar la muerte. Un informe de 1995 de la ACLU del sur de California concluyó que el gas pimienta se asociaba con múltiples muertes en California, y observó que alrededor de una de cada 600 personas rociada con gas pimienta por agentes de policía de California había muerto²⁰¹. La mayoría de los fallecidos tenían trastornos ya existentes como asma, pero “estas conclusiones sugieren que el gas pimienta puede ser un grave factor de complicación cuando se aplica a personas con enfermedades cardiovasculares o cardiorrespiratorias —personas que la policía podría no reconocer fácilmente en una situación de emergencia”²⁰². Se sospecha que el uso de gas pimienta ha contribuido a una serie de muertes durante la detención policial, y a mediados de la década de 1990, el DOJ mencionó cerca de 70 muertes relacionadas con el uso de gas pimienta²⁰³.

El gas pimienta plantea un riesgo para las personas con asma y otros trastornos respiratorios, y puede provocar un paro respiratorio²⁰⁴. Los estudios también determinaron que la exposición prolongada puede provocar un daño permanente en la cornea²⁰⁵. Un estudio del Ejército de Estados Unidos en 1993 concluyó que el ingrediente activo del gas pimienta “es capaz de producir efectos mutagénicos y carcinógenos, sensibilización, toxicidad cardiovascular y pulmonar, neurotoxicidad, y posibles muertes en los seres humanos”²⁰⁶. Un estudio de 2004 sobre los peligros del gas pimienta para la salud, escrito por investigadores de la salud de la University of North Carolina y Duke University, señaló que el gas pimienta podría “producir efectos cardíacos, respiratorios y neurológicos adversos, como arritmias y muerte súbita”²⁰⁷.

d. Uso indiscriminado de macanas

La policía también ha golpeado o apaleado a los manifestantes con macanas de un metro de longitud, que usan como armas de impacto contundente para las operaciones antidisturbios. Los agentes de la Fuerza de Choque sujetaron las macanas con dos manos para golpear a los manifestantes con el máximo impacto. En numerosos casos, los agentes de la Fuerza de Choque incluso llegaron a perseguir a los manifestantes que huían y los golpearon por detrás de la cabeza, la espalda y los hombros. Estos macanazos y apaleamientos provocaron lesiones en la cabeza y múltiples contusiones a innumerables manifestantes, muchos de los cuales tenían claras marcas en la espalda y el pecho del tamaño y la forma de macanas.

En septiembre de 2007, el entonces superintendente de la PPR creó un comité encargado de realizar una evaluación externa de los problemas de violencia y corrupción en Puerto Rico. Esta institución denominada Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto

Rico publicó informes de sus conclusiones en diciembre de 2007 y mayo de 2008. El Comité Evaluador Externo concluyó que: “El uso indiscriminado del rotén en total desprecio al reglamento vigente para el uso de esa arma ha ocasionado lesiones múltiples y serias a ciudadanos, totalmente injustificadas”²⁰⁸.

e. El uso sin control ni reglamentación del estrangulamiento de la carótida y técnicas de puntos de presión

Los agentes también utilizaron estrangulamientos dolorosos de la carótida y técnicas de puntos de presión para provocar dolor a los manifestantes ejerciendo presión en puntos de las arterias de la carótida, debajo de la mandíbula, cerca del cuello, en las orejas o directamente en los ojos y las cuencas de los ojos. Los agentes también insertaron sus dedos debajo de las orejas o encima de la mandíbula de los estudiantes, para levantarlos por la fuerza y arrastrarlos ejerciendo una presión extrema en estos puntos sensibles. Las tácticas de puntos de presión no sólo provocan un terrible dolor, sino que también bloquean el flujo sanguíneo normal al cerebro y pueden ser mortales si no se aplican adecuadamente. En algunos casos, estas técnicas han provocado que los manifestantes estudiantiles pierdan el conocimiento.

La PPR usó estas técnicas cuando los estudiantes se resistieron pasivamente al arresto. En los casos documentados por la ACLU, la policía usó estas tácticas contra los estudiantes que participaban en sentadas y no hicieron otra cosa que cruzar sus brazos y piernas para resistirse al arresto. Los agentes de la policía también usaron estas técnicas crueles y dolorosas contra algunos estudiantes, incluso después de esposarlos o restringirlos de otro modo seguro. En los casos documentados por la ACLU, los agentes de la PPR asignados al CIC fueron los únicos que utilizaron estas técnicas de puntos de presión.

f. Uso de munición “menos mortal” inadecuadamente reglamentado: Balas de goma y granadas de perdigones, proyectiles con bolsas rellenas de perdigones

En múltiples ocasiones, el PPR ha disparado bolas de goma y otra munición “menos mortal” como granadas de perdigones y perdigones de goma contra los manifestantes. Las balas de goma consisten normalmente en una bala de metal recubierta de goma; la PPR ha usado otras variaciones como balas de plástico, balines de goma, conocidos normalmente como granadas de perdigones o perdigones de goma, y bolsas rellenas de perdigones que consisten en una bolsa de tela que contiene alrededor de 40 gramos de balines de goma. La finalidad de estos proyectiles es generar un impacto doloroso que incapacite. Se disparan a gran velocidad con pistolas para provocar un fuerte dolor a causa del traumatismo contundente.

Las balas de goma y los tipos relacionados de munición “menos mortal” pueden provocar lesiones contundentes, penetrantes graves, y pueden ser mortal si se disparan a la cabeza o a quemarropa²⁰⁹. En octubre de 2004, una estudiante universitaria de 21 años murió cuando la policía de Boston le disparó una bala de goma cargada con gas pimienta en el

ojo, cuando intentaba dispersar una multitud después de la victoria del equipo de béisbol, Red Sox, en las Series Mundiales. Las balas de goma se han relacionado a numerosas muertes y graves lesiones de manifestantes en Irlanda del Norte, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados²¹⁰.

En un estudio seminal de 2002 sobre el estudio de balas de goma por las fuerzas armadas israelíes publicado por *The Lancet*, los investigadores médicos concluyeron: “La imprecisión de las balas de goma y su uso con objetivos o distancias inadecuados provocaron lesiones graves y muertes de un número considerable de personas. Por lo tanto, esta munición no debe considerarse un método seguro para el control de multitudes”²¹¹. Teniendo en cuenta las muertes y las lesiones graves documentadas, la policía sudafricana prohibió el uso de balas de goma contra manifestantes en enero de 2012, y la Comisión Europea emitió una directiva que prohíbe el uso de balas de goma en todos los países de la Unión Europea a partir de finales de 2012²¹².

g. Uso de pistolas paralizantes inadecuadamente reglamentado

En al menos un incidente relacionado con una protesta pacífica y un estudiante de la UPR desarmado que ya estaba contenido y bocabajo en el suelo, la PPR le aplicó de manera innecesaria un dispositivo de descarga eléctrica (DDE). Los DDE, también conocidos como dispositivos electrónicos de control o pistolas paralizantes (*tasers*), efectúan descargas eléctricas de alto voltaje y bajo amperaje. Funcionan mediante la activación de dos púas de metal que emiten una descarga de 50,000 voltios sobre una persona, y provocan su colapso por la pérdida de control muscular. Las pistolas paralizantes pueden infligir lesiones graves e incluso mortales. Los riesgos del uso de DDE sobre el cuerpo humano incluyen arritmia cardíaca, alteración de la química sanguínea, deterioro de la respiración, alteración del sistema nervioso central, quemaduras y aumento del riesgo de lesiones por accidente²¹³.

En el caso documentado por la ACLU, que se explica más adelante en la subsección sobre el abuso policial contra manifestantes en un evento político para recaudar fondos en el Hotel Sheraton, un agente de la PPR aplicó múltiples descargas eléctricas a un manifestante estudiantil, José “Osito” Pérez Reisler. Según el abogado de Pérez Reisler, Enrique G. Juliá Ramos, el agente electrocutó seis a siete veces a Pérez Reisler, aplicándole descargas en la cadera y la espalda. Juliá Ramos dijo a la ACLU que Pérez Reisler tuvo que estar hospitalizado durante días, y que durante este período fue evaluado por un médico que concluyó que podía haber muerto como consecuencia de las descargas, ya que padece una condición médica que podría haberse agravado por las descargas²¹⁴.

La PPR no ofrece orientación adecuada a sus agentes sobre el uso de DDE. Según el informe del DOJ sobre sus conclusiones de la investigación, la orden de la PPR que rige el uso de DDE, GO 2008-2, es gravemente deficiente²¹⁵. La orden no especifica ninguna norma legal para el uso de DDE, ni ningún factor que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar el uso adecuado de DDE, como el nivel de resistencia del sujeto o la gravedad del presunto delito.

El problema mayor es que la orden de la PPR que rige el uso de DDE no reconoce que los DDE pueden ser mortales, en cambio los califica como armas “no mortales”. Según Amnistía Internacional, en 2001-2008, 334 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia de las descargas de DDE²¹⁶. Los examinadores médicos y forenses de Estados Unidos señalaron que la exposición a DDE era la causa o el factor que contribuyó a más de 50 muertes²¹⁷. Los dos indicadores más probables de la posibilidad de que una persona muera como consecuencia de una descarga de DDE es que las descargas sean múltiples o durante un período extendido, y que el corazón de la persona se encuentre en una situación de estrés inusual, como consecuencia del consumo de drogas, una condición cardiovascular preexistente o la aplicación de las púas del DDE encima o cerca del corazón. En el estudio de Amnistía Internacional de los informes de autopsias de muertes tras la aplicación de DDE, se observó que el 43% de los fallecidos habían sido electrocutados en el pecho y que el 52% sufrían enfermedades cardiovasculares²¹⁸.

Las pistolas paralizantes pueden provocar una arritmia mortal, especialmente en poblaciones vulnerables, como las personas con condiciones cardiovasculares preexistentes, cuyos corazones ya han sido debilitados por el consumo de drogas y personas más delgadas con menos distancia entre la piel y el corazón. Asimismo, los factores situacionales como el impacto de los dardos cerca o encima del corazón y las descargas múltiples pueden aumentar el riesgo de arritmia. Además, al menos un estudio, de una revista de ingeniería forense revisada por expertos, concluyó que las descargas de los DDE son mucho más potentes de lo que ha reconocido Taser International, y que estas descargas son lo suficientemente potentes para provocar arritmias mortales del corazón²¹⁹.

h. Manoseo y acoso sexual de mujeres manifestantes

Varias estudiantes universitarias señalaron a la ACLU que los agentes de policía habían manoseado sus pechos y genitales durante su arresto. Al menos dos de estos incidentes han sido grabados en vídeo. La estudiante de la UPR Victoria Carro Robledo dijo a la ACLU que cuando la arrestaron delante del Capitolio el 27 de enero de 2011, después de esposarla con los brazos detrás de la espalda con abrazaderas de plástico, un agente de la PPR le agarró los pechos cuando la trasladaba de un vehículo policial a otro²²⁰. Otra estudiante de la UPR dijo a la ACLU que un agente de policía le manoseó los pechos, los muslos y la región púbica mientras la arrestaba²²¹.

La estudiante de maestría de la UPR Adriana Mulero denunció públicamente al agente de la PPR que le agarró los pechos y los muslos cuando la arrestó en el campus el 19 de enero de 2011. Los testigos presenciales señalaron que, aunque estaba claro que el agente de la PPR podrían haberla trasladado fácilmente agarrándola por la cadera, se la llevó con una mano en su pecho y una mano en su entrepierna. Mulero dijo a la revista *The Nation* que cuando la arrestaron en una ocasión posterior: “[V]arios de ellos me atacaron apretándome el cuello y dijeron: ‘¡Esta es la que se quejó de que le cogimos la tetas!’ y me llamaron una puta. Eso me dolió más que cuando me pegaron”²²². Otra estudiante de la UPR, Yaritza Figueroa, dijo a la ACLU que, el 9 de febrero de 2011,

presenció como 10 o 12 agentes de la Fuerza de Choque rodearon a una estudiante, la arrojaron al suelo y la llamaron “puta”²²³. Cuando Figueroa intentó asistir a la joven, un agente dijo: “No es más que una ramera, una puta, arrésténla”, después de lo cual los agentes arrestaron a Figueroa²²⁴. Los agentes golpearon a Figueroa y le advirtieron que “iba a tener que sufrir las consecuencias porque iba a estar en su territorio”, es decir una celda²²⁵. Posteriormente, Figueroa fue puesta en libertad sin cargos.

Varias estudiantes de la UPR también dijeron a la ACLU que los agentes de la PPR las acosaron sexualmente cuando hacían sus quehaceres diarios en el campus, como cuando iban de una clase a otra, durante el período en que la policía ocupó el campus del diciembre de 2010 a febrero de 2011. Yaritza Figueroa dijo que le policía les mandó un beso a ella y a otras estudiantes a principios de 2011²²⁶. Otros estudiantes señalaron que los agentes de la PPR hicieron comentarios pícaros y piropos sexuales a las estudiantes, que consideraron que los comentarios eran intimidatorios. Se informó de que al menos una estudiante fue seguida por un agente de la PPR hasta el baño de mujeres en un edificio de la universidad.

Carro Robledo dijo a la ACLU que ella y otras dos estudiantes habían presentado una queja a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y que regresaron un mes después para comprobar el avance, pero que nunca supieron nada más de esta oficina. En el caso de Carro Robledo, pudo identificar al agente que le cogió los pechos, pero, hasta donde sabe, no se ha adoptado ninguna medida para disciplinarlo. Dijo: “No hay repercusión para ellos, ningún cambio” en su conducta²²⁷. Carro Robledo dice que la PPR debe adoptar medidas para asegurar que los agentes de la PPR tratan de manera adecuada a las mujeres arrestadas, y explicó: “Si la policía sabe que están interviniendo con mujeres estudiantes, necesitan un protocolo sobre la manera de arrestarlas. Hay maneras de prevenir ciertas situaciones, con adiestramiento y protocolos adecuados”²²⁸.

i. Trauma psicológico provocado por el abuso policiaco contra manifestantes

Numerosos estudiantes de la UPR dijeron a la ACLU que están sufriendo traumas psicológicos provocados por el abuso policial contra ellos. Los estudiantes describieron que experimentaron pesadillas recurrentes sobre el abuso policial, pensamientos obsesivos, llanto incontrolado, miedo a la policía y otros hombres uniformados, desconfianza general de los hombres y otras muestras de un trauma psicológico significativo. Varios estudiantes también señalaron que requirieron y recibieron orientación psicológica, terapia o tratamiento psiquiátrico por el trauma provocado por el abuso policial que sufrieron durante las protestas.

Por ejemplo, la estudiante de la UPR Rachel Hiskes, que fue rociada con gas pimienta y golpeada por la policía frente al Capitolio el 30 de junio de 2010, dijo que lo que ocurrió le cambió la vida y le arrebató la tranquilidad. Agregó:

“¿Qué daños he sufrido? Nada que tenga un precio visible. ¿Cómo se cuantifica la manera en que la violencia de género e institucional de los funcionarios del Gobierno y la represión política de la comunidad de inteligencia afectan a la

psique? ¿Cómo puedo explicar por qué ver a hombres uniformados me da miedo? ¿Cómo explicar que el que me detenga la policía en un estado y un continente alejado de Puerto Rico casi provoca que me dé un ataque de nervios? ¿Cómo puede ser que haya cambiado mi relación con los hombres, porque uno de ellos me puso las manos encima de una manera que nunca me había pasado antes? Ahora me cuesta mucho confiar en las buenas intenciones de las personas del Gobierno y los uniformados, porque conozco por experiencia propia la violencia y la conducta criminal de la que son capaces, ni siquiera quiero estar cerca de ellos. Hasta el día de hoy, no puedo pensar ni hablar del 30 de junio sin que me afecte”²²⁹.

El estudiante de la UPR Gamelyn Oduardo, que fue golpeado y arrestado por la policía el 13 de enero de 2011, cuando estaba protestando pacíficamente, dijo: “A veces, cuando me voy a dormir, veo a una multitud de unos 300 agentes de policía corriendo hacia mí y encima de mí”²³⁰. La estudiante de la UPR Mariana López Rosado contó como tenía “pesadillas de tortura” y “sueños de macanazos” y agregó: “No hay manera de olvidar lo que nos ha pasado”²³¹.

Durante una asamblea pública convocada por la ACLU en la Facultad de Derecho de la UPR, la ACLU escuchó los testimonios de numerosos estudiantes que describieron voluntariamente el abuso policial que habían sufrido. A lo largo de la sesión, muchos de los estudiantes reunidos en la sala de conferencias, que estaba llena a capacidad, lloraron o estaban visiblemente afectados por los acontecimientos que narraron sus compañeros, y algunos estudiantes dijeron a la ACLU que existe la necesidad de seguir examinando el trauma psicológico provocado por la violencia policial sistemática en el campus.

Otros manifestantes maltratados por la policía en otros lugares fuera del campus de la UPR también describieron que sufrían efectos psicológicos de la violencia policial que sufrieron. La estudiante de secundaria Elisa Ramos, una manifestante de 17 años atacada por la policía cuando protestaba pacíficamente con su madre frente al Capitolio, el 30 de junio de 2010, dijo a la ACLU: “He tenido pesadillas en las que la policía golpea a mi madre. Tristemente, voy a vivir toda mi vida con el recuerdo de esta horrible experiencia”²³².

VI. Casos documentados de abuso policial contra manifestantes

A continuación se ofrece una descripción detallada de los incidentes de abuso policial contra manifestantes documentados por la ACLU, incluyendo los incidentes documentados de violencia policial contra manifestantes frente al Capitolio, el 30 de junio de 2010 y el 27 de enero de 2011; contra manifestantes estudiantiles y líderes y miembros de sindicatos a la entrada de un evento político para recaudar fondos en el Hotel Sheraton; contra líderes y miembros de sindicatos que protestaron en otros lugares, como la mansión del Gobernador, el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Banco

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; y contra estudiantes que protestaron en la UPR, lo que incluye un incidente en la Avenida Universidad y numerosos incidentes durante las huelgas estudiantiles de abril a junio de 2010 y de diciembre de 2010 a febrero de 2011.

Para documentar los incidentes que se narran a continuación, la ACLU entrevistó a víctimas y testigos de la violencia policial y abogados representantes de las víctimas; y examinó denuncias y otros documentos legales presentados por las víctimas, informaciones de televisión y prensa sobre los incidentes, e imágenes de vídeo y fotografías que reflejan estos incidentes.

A continuación se ofrece una breve explicación de las causas fundamentales de la oleada de protestas que azotaron a la isla, como las medidas de austeridad fiscal impuestas recientemente y el cierre de las sesiones legislativas a la prensa y el público durante los debates sobre proyectos de ley de estas medidas polémicas en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

a. Causas fundamentales que provocaron la oleada de protestas

El 3 de marzo de 2009, en un discurso televisado al país, el Gobernador Fortuño reveló el Plan de Recuperación Fiscal y Económica, con el que prometía reducir el gasto público anual en Puerto Rico en más de \$2,000 millones para el año fiscal 2010. Para ello, el Gobierno de Puerto Rico decidió despedir a alrededor de 30,000 empleados públicos en un momento en el que el país ya estaba enfrentándose al aumento de la tasa de desempleo, que hasta entonces oscilaba en el 15%. Las estimaciones más conservadoras situaron el número de despidos en casi 19,000, alrededor del 14% de la fuerza laboral pública de Puerto Rico.

Para recortar el gasto, la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, que en Puerto Rico se conoce popularmente como la Ley Pública 7 o Ley 7, dispuso una serie de medidas que permitieron al Gobierno suspender la negociación colectiva y otras leyes laborales que habían impedido previamente el despido injustificado de empleados públicos²³³. Otra medida importante de la Ley 7 fue la legalización de las alianzas público-privadas, que autorizaron al Gobierno a subcontratar servicios públicos a empresas privadas. Además, la Ley 7 estipuló una reasignación de los ingresos fiscales que antes contribuían al Fondo General, de los cuales el 9.6% se destinan al presupuesto anual de la UPR, provocando efectivamente un recorte presupuestario a la universidad.

A los pocos días del mensaje del gobernador, el Congreso de Puerto Rico aprobó el Plan de Recuperación Fiscal y Económica, que allanó el camino para que el Gobernador Fortuño lo confirmara como ley el 9 de marzo de 2009. Desde el momento de su primer anuncio, la Ley 7 generó una oposición considerable, especialmente de líderes y miembros de sindicatos, y finalmente también de los estudiantes universitarios, lo que desencadenó una serie de protestas en toda la isla que duraron más de dos años.

En abril de 2010, después de que la Universidad de Puerto Rico anunciara que tenía previsto imponer una “cuota de estabilización fiscal” de \$800, conocida popularmente como cuota, para compensar los recortes presupuestarios relacionados con la Ley 7, la oposición a esta ley se intensificó en los recintos de la UPR. La implementación de la cuota que produjo un alza en la matrícula ocurrió inmediatamente después de la Certificación 98, una resolución de la Junta de Síndicos de la Universidad que limita el programa de exención de matrícula a los estudiantes que no se beneficiaron de programas financiados por el Gobierno como las Becas Pell.

La denominada “cuota de estabilización fiscal” representó un aumento del 50% de la matrícula para la universidad pública con respecto al año anterior, lo cual implicó que una parte significativa del cuerpo estudiantil no pudiera asistir a la universidad por razones económicas. Tanto el alza en la matrícula como la Certificación 98 fueron muy impopulares entre los estudiantes, una parte significativa de los cuales se unieron contras éstas y otras medidas de la administración. La oposición de los estudiantes a estas políticas y la negativa constante de la administración de la universidad a reunirse con el Comité Negociador elegido para representar a los estudiantes ante la dirección de la UPR hizo que los estudiantes convocaran una serie de protestas en el campus de Río Piedras. El campus de Río Piedras es el principal campus de la UPR, al cual asisten cerca de 20,000 de los 65,000 estudiantes de la universidad pública.

Las protestas de los estudiantes de la UPR incluyeron una marcha de 48 horas en abril de 2010, una huelga estudiantil de 62 días de abril a junio de 2010, una huelga de estudiantes de diciembre de 2010 a enero de 2011, y protestas a las puertas del Capitolio en junio de 2010 y enero de 2011. Estas protestas incluyeron sentadas pacíficas, actividades de desobediencia civil en las que los estudiantes se sentaron con los brazos entrelazados, coreando consignas y sosteniendo pancartas, marchas por el campus, reparto de panfletos explicando las quejas y las demandas de los estudiantes, y pintadas con mensajes políticos en las aceras y las calles del campus.

El 21 de junio de 2010, todos los recintos de la UPR firmaron un acuerdo alcanzado por los estudiantes y la dirección de la UPR para poner fin a la huelga estudiantil de abril a junio de 2010. Inmediatamente después, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una serie de medidas que fueron impopulares para muchos estudiantes, como el aumento del número de miembros de la Junta de Síndicos de la UPR, a lo que se opusieron muchos activistas estudiantiles porque lo consideraron una medida para sesgar la composición de la Junta por razones políticas. Los estudiantes consideraron que esta y otras medidas eran contrarias al acuerdo.

El 24 de junio de 2010 un reportero gráfico fue expulsado de la cámara legislativa y, al día siguiente, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, ordenó el cierre total de las sesiones legislativas a los periodistas y el público. El cierre de las sesiones legislativas provocó una protesta pública masiva y desencadenó una serie de demandas, entre ellas una presentada por miembros de la prensa y otra por un senador de un partido de la oposición²³⁴. El cierre de la sesión legislativa fue especialmente impopular porque la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estaba debatiendo en ese

momento cambios presupuestarios políticos de gran interés para los trabajadores públicos y los estudiantes de la UPR, quienes se verían afectados por los proyectos de ley que se estaban debatiendo. Debido a las protestas públicas, el 29 de junio de 2010, el día anterior a la conclusión de la sesión legislativa, el Senador Rivera Schatz emitió una notificación para permitir el acceso a las cámaras del Senado, pero limitando el acceso de la prensa a los periodistas que hubieran obtenido permiso por adelantado para entrevistar a miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y poseyeran credenciales verificadas. El propio edificio del Capitolio se mantuvo abierto al público.

b. Incidentes documentados de abuso policial contra los manifestantes frente al Capitolio

i. Primera protesta frente al Capitolio

Diversos ciudadanos y grupos preocupados, entre ellos estudiantes de la UPR, y líderes y miembros de sindicatos, convocaron manifestaciones frente al Capitolio el 30 de junio de 2010 para protestar durante el último día de la polémica sesión legislativa, durante la cual la Asamblea Legislativa de Puerto Rico iba a celebrar los debates finales sobre la legislación para ejecutar los recortes presupuestarios propuestos. Los manifestantes planearon reunirse frente al Capitolio para protestar contra la legislación que se estaba debatiendo, la expulsión del público y la prensa de la sesión legislativa del día anterior, los despidos masivos de trabajadores públicos conforme a la Ley 7, la decisión de ampliar la Junta de Síndicos de la UPR, y las políticas de la UPR que comprometerían la capacidad de muchos estudiantes para costearse los estudios y asistir a la universidad pública. Un grupo de estudiantes de la UPR también tenía previsto leer una proclama frente al Capitolio explicando sus quejas, que incluían el abuso policial contra manifestantes estudiantes en la universidad.

Los agentes asignados a la UOT (Fuerza de Choque) y la UOE (Grupo de Cien) se reunieron frente al Capitolio antes de que cualquier ciudadano hubiera intentado protestar. También se observó al coronel Leovigildo Vázquez, superintendente auxiliar de Operaciones de Campo de la PPR, dentro del edificio del Capitolio antes de que se convocaran los manifestantes. El superintendente de la PPR en ese momento, José Figueroa Sancha, también estuvo presente dentro del Capitolio durante toda la operación, pero los negociadores y los observadores legales del Colegio de Abogados de Puerto Rico señalan que no pudieron acceder al superintendente²³⁵.

Algunos estudiantes y periodistas independientes de medios alternativos, como IndyMedia, Rumbo Alterno, Onda Alterna y Radio Huelga, llegaron al Capitolio aproximadamente a las tres de la tarde. La intención de estos periodistas era observar el último día de sesiones, documentar la polémica legislación, e informar todo lo ocurrido durante la sesión a través de la prensa y radio.

Cuando los estudiantes y periodistas independientes intentaron entrar al Capitolio, sólo pudieron acceder al pórtico porque fueron detenidos por un guardia uniformado que les negó la entrada. Los estudiantes y periodistas independientes se identificaron como

miembros de la prensa, pero no les dieron la oportunidad de mostrar sus credenciales que llevaban consigo. En ese momento, la PPR no había establecido un perímetro ni había dado indicación alguna de que el acceso al Capitolio estaba prohibido o restringido de alguna manera. Los estudiantes y periodistas independientes observaron a miembros de la prensa tradicional dentro del Capitolio, y sintieron que les estaban negando la entrada por sus puntos de vista como miembros de medios de comunicación alternativos.

Cuando sus esfuerzos se vieron frustrados, cuatro de ellos improvisaron una sentada pacífica en el interior del vestíbulo de entrada al Capitolio. Los agentes de la Fuerza de Choque, que ya estaban en formación en la rotonda del Capitolio, rodearon a los estudiantes y los periodistas independientes. Sin previo aviso y sin darles la oportunidad de marcharse por su propia voluntad, los agentes de la Fuerza de Choque empezaron a golpear y empujar a los periodistas con macanas.

Los agentes de la Fuerza de Choque rociaron con gas pimienta a los estudiantes y periodistas a quemarropa, los patearon, empujaron y macanearon hasta arrojarlos a las escaleras exteriores de cemento del Capitolio. Una de estos periodistas era **Rachel Hiskes**, que entonces estudiaba la carrera de trabajo social y trabajaba como periodista en Rumbo Alterno, un periódico digital. Los agentes de la Fuerza de Choque rociaron con gas pimienta a Hiskes en los ojos, las orejas, el cuello, la cara y la espalda, lo que le provocó quemaduras en la piel, los ojos y la garganta. Cuando Hiskes intentaba levantarse del suelo, un agente de la Fuerza de Choque la golpeó en la espalda con la macana con tanta fuerza que salió disparada hacia el otro lado de la habitación. El agente de la Fuerza de Choque volvió a golpearla en el costado y en el brazo. La golpiza fue tan violenta que perdió sus dos zapatos.

El agente siguió macaneando a Hiskes en el cuello, y la arrojó hacia las escaleras de mármol de la entrada del Capitolio, aun cuando ésta seguía cegada y no podía respirar debido al gas pimienta. Dijo a la ACLU: “Me arrojaron por las escaleras del Capitolio con una fuerza que podría haberme partido literalmente el cuello. Estaba descalza, cegada por el gas pimienta y los pies por delante, casi no podía contener la fuerza de la caída mientras mi cuerpo daba precariamente tumbos. Sabía que si me caía, me iba a partir los huesos o la cabeza en la escalera de mármol. Estaba conmocionada y no podía creerme que estaba presenciando y experimentando tanta violencia”²³⁶. Hiskes terminó con dolores intensos en su cuerpo, el que quedó marcado con moretones en distintas partes. Como consecuencia del gas pimienta, experimentó picazón y una quemazón persistente, y sus intentos de lavar el gas pimienta sólo lograron intensificar la quemazón. Hiskes nunca fue arrestada ni acusada de ningún delito.

Otra de las estudiantes periodistas era **Shariana Ferrer Núñez**, también corresponsal de Rumbo Alterno que estaba presente para documentar la sesión legislativa²³⁷. Ella estaba sentada y tenía las manos levantadas para que no la agredieran. Los agentes de la Fuerza de Choque se le acercaron por detrás y empezaron a clavarle las rodillas en la espalda y rociarle la cara con gas pimienta. Dijo a la ACLU: “No podía respirar. No podía soportarlo. Quería irme, pero nos tenían rodeados”²³⁸.

Los agentes de la Fuerza de Choque también rociaron con gas pimienta al **reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez**, un observador de Amnistía Internacional, directamente en los ojos y en otras partes del cuerpo. Esto le provocó que se acurrucara en posición fetal, que rodara por el suelo y que gritara por el terrible dolor. Cuando el reverendo Gutiérrez Rodríguez estaba tirado en el suelo lamentándose por el dolor y cubriéndose la cara con las manos y una chaqueta, los agentes de la Fuerza de Choque procedieron a patearlo y a macanearlo brutalmente.

La **Representante Carmen Yulín Cruz Soto**, miembro de la Cámara de Representantes perteneciente al partido minoritario, el Partido Popular Democrático (PPD), intentó intervenir y también fue atacada por un agente de la Fuerza de Choque, que la golpeó con tanta fuerza con su macana que le rompió un ligamento del brazo. La Representante Yulín dijo a la ACLU que había presenciado como dos agentes de la Fuerza de Choque golpeaban y rociaban con gas pimienta a los estudiantes periodistas, y que le pegaron tan fuerte a una mujer “que el pecho le saltaba arriba y abajo”. Estaba consternada e intentó intervenir: “Dije: ‘no la toquen’, saqué mi tarjeta de identificación y dije: ‘Soy una oficial electa de la legislatura’”²³⁹. Recuerda que uno de los agentes de la Fuerza de Choque se giró hacia ella y dijo: “‘Carmen Yulín, esto es para ti’”²⁴⁰. En ese momento, un grupo de agentes de la Fuerza de Choque rodearon por detrás a la representante Yulín y a los estudiantes periodistas, y otro grupo de agentes de la Fuerza de Choque los rodearon por delante, por lo que quedaron atrapados dentro de un círculo de agentes dentro del vestíbulo.

Dos miembros del servicio de seguridad de la Cámara de Representantes intentaron sacar a la representante Yulín del cerco de los agentes de la Fuerza de Choque, mientras éstos la golpeaban con macanas en los brazos y la espalda. Acto seguido, los agentes de la Fuerza de Choque rociaron con gas pimienta a la representante Yulín y a los estudiantes y periodistas independientes. Estos últimos fueron rociados directamente en la cara a pocos centímetros de los ojos, la nariz y la boca. Dado que la mayoría de las puertas del vestíbulo estaban cerradas en ese momento, las nubes de gas pimienta nocivo llenaron la atmósfera. La representante Yulín, que sufre de asma severo, sintió como se le cerraba la garganta y tuvo dificultad para respirar como consecuencia del gas pimienta, y afirma que, si los agentes de la PPR la hubieran rociado con tanta cantidad como a los estudiantes, “podría haber muerto”²⁴¹. La representante Yulín recuerda que durante todo el ataque contra ella y los periodistas, los agentes de la Fuerza de Choque no dejaban de gritar: “¡Formación! ¡Formación!”²⁴². Recibió tratamiento médico de emergencia en la enfermería del Capitolio, donde le inyectaron cortisona y le suministraron oxígeno porque el gas pimienta había provocado que se le cerrara la tráquea. Los médicos concluyeron también que los macanazos le habían roto un ligamento del brazo izquierdo y provocado múltiples hematomas en las piernas, el tobillo derecho y en las costillas derechas. Cuando estaba en la enfermería del Capitolio, presenció cómo los estudiantes y periodistas ensangrentados recibían tratamiento médico de emergencia.

Frente al Capitolio, el grupo de estudiantes que planeaba hacer una proclama ante la Asamblea Legislativa también intentaron entrar de manera pacífica en el Capitolio, y fueron rechazados por la Fuerza de Choque. Los agentes de la Fuerza de Choque

golpearon a varios de estos estudiantes con sus macanas en la cara, la cabeza, los brazos, la espalda y otras partes del cuerpo. Varios de estos estudiantes se tambalearon por las escaleras de mármol como consecuencia de los empujones, y golpes indiscriminados de la Fuerza de Choque con sus macanas. Varios de los estudiantes requirieron tratamiento médico como consecuencia de la agresión.

Cuando corrió la noticia sobre la protesta frente al Capitolio, y los medios de comunicación empezaron a emitir imágenes de la policía golpeando a los manifestantes, de manifestantes ensangrentados cuando eran atendidos por los paramédicos, el tamaño de la protesta creció. Miles de ciudadanos se reunieron cerca del Capitolio para unirse a la protesta. Muchos de estos manifestantes se reunieron en la plazoleta frente a las escaleras del Capitolio y en otras zonas adyacentes al edificio del Capitolio.

Después de sacar a patadas y empujones a los manifestantes de las escaleras del Capitolio, la Fuerza de Choque creó un perímetro alrededor de la plazoleta que desemboca en las escaleras frontales del Capitolio, bloqueando la única zona vacía en la que podían reunirse los manifestantes y les obligaron a dispersarse por los estacionamientos laterales. La plazoleta es un foro público tradicional donde se convocan frecuentemente manifestaciones sin incidentes, y las personas que intentan ejercer sus derechos protegidos por la Primera Enmienda llevan años utilizándola.

Una vez instalados en los estacionamientos, los manifestantes continuaron la protesta pacífica, con pancartas y cánticos. Después de unas dos horas de protestar pacíficamente, un agente de la policía se acercó a la multitud y les pidió, a través de un megáfono, que colaboraran para que los vehículos pudieran salir de un estacionamiento. El agente de policía no ordenó que se disolvieran, ni les dio instrucciones sobre dónde debían trasladarse, y ni siquiera les advirtió de las consecuencias por no “cooperar”. La PPR, sin embargo, ya había movilizado a las unidades de policía montada y el Grupo de Cien.

Los manifestantes permanecían en los estacionamientos, cantando consignas de manera pacífica, cuando la Fuerza de Choque empezó a avanzar hacia ellos. Después de que un pequeño número de manifestantes arrojaron pequeños objetos, como botellas de agua, la Fuerza de Choque y el Grupo de Cien empezaron a golpear, empujar y rociar gas pimienta indiscriminadamente contra la multitud, que consistía de estudiantes, sindicalistas y otros ciudadanos. Los agentes dispararon gases lacrimógenos con escopetas antidisturbios y, en algunos casos, apuntaron los proyectiles de aluminio contra los manifestantes. Un helicóptero de la policía que volaba a baja altura arrojó gases lacrimógenos desde arriba, lo que envolvió a los manifestantes en un humo nocivo. La mayoría de los estudiantes, sindicalistas, periodistas y otros ciudadanos estaban intentando dispersarse y no representaban amenaza alguna para la policía o el público. La estudiante **Shariana Ferrer Núñez** describió los gases lacrimógenos en los que quedaron envueltos ella y otros manifestantes de la siguiente manera: “Comenzó con una nube tóxica muy grande. Me entró en los pulmones y sentí que me iba a morir —te agarra los pulmones y no puedes respirar. Es la sensación más horrible que he sentido nunca. Empecé a escupir, incluso escupí sangre, y se me encharcaron los ojos de lágrimas. Tuve un ataque de pánico, asustada porque no podía respirar”²⁴³.

Una de las personas atacadas por la policía fue **Betty Peña Peña**, una maestra de noveno grado y activista comunitaria, junto con su hija de 17 años **Elisa Ramos Peña**, estudiante de secundaria. Betty había llevado a su hija a la protesta para que aprendiera sobre democracia, y explicó: “Como madre, siento la responsabilidad de enseñar a mis hijos que cuando algo está mal en el país, tenemos que levantar nuestras voces”²⁴⁴. Elisa explicó: “Es un honor para nosotros, el valor de levantarnos y usar nuestras voces para defender nuestro Puerto Rico, y el sentimiento de poder decir: ‘No, no voy a dejarles destruir mi Puerto Rico. No voy a permitir que nadie me pisotee, pisotee a mi vecino, pisotee a todos mis compañeros’”²⁴⁵.

Betty y Elisa llegaron alrededor de las 4:45 de la tarde y se unieron a los manifestantes de la Asociación de Profesores Universitarios de Puerto Rico (APPU). La multitud a su alrededor estaba cantando y cantando consignas. Vieron a algunos estudiantes de la UPR sangrando a causa de las heridas provocadas antes por la policía, y vieron cómo una línea de agentes de la Fuerza de Choque empujaba a los estudiantes de la plazoleta a un estacionamiento adyacente. Betty y Elisa habían estado protestando alrededor de una hora y 45 minutos cuando vieron un helicóptero que volaba a escasa altura acercarse y rociarlas con gases lacrimógenos. Betty, que tiene problemas respiratorios, no podía respirar y salió en busca de un sitio que no estuviera inundado por los gases lacrimógenos, pero la línea de agentes de la Fuerza de Choque les impidió salir.

Oyeron a un agente con un megáfono que ordenó a la multitud que se moviera, pero no dio órdenes acerca de dónde debían ponerse ni de que se disolvieran. En cuestión de segundos, sin darles tiempo para responder, un muro de agentes de la Fuerza de Choque empezó a atacar a los manifestantes con macanas y gas pimienta. Betty describió lo que sucedió de la siguiente manera:

“Sin esperar una respuesta ni nada, empezaron. Estábamos todos sorprendidos porque comenzaron entonces con los empujones, las macanas y Elisa recibió un golpe y se cayó debajo de un automóvil, y entonces recibí otro golpe... Estaba intentando levantarla y continuaron agrediendo, golpeando, pisoteando y tirando... cuando de repente agarran a Elisa. Estaban diciendo: ‘Agárrenla, agárrenla, vas a la cárcel’. Perdí las sandalias, se me cayó todo, intenté ir con ella, arrojarla sobre ella para impedir que la policía le hiciera daño. Entonces vi que la policía seguía golpeándola, macaneándola y, en ese momento, llegaron y me rociaron la cara con gas pimienta. Me desmayé durante unos minutos porque no podía respirar. Sentí que todo mi cuerpo se quemaba y como si se estuviera quemando todo y por todas partes dentro de mí. Había perdido de vista a Elisa... puede que pasaran 20 o 25 minutos hasta que la encontré. No podía realmente respirar, era algo verdaderamente insoportable. Nunca, nunca pensé que viviría una experiencia así, y que mi hija viviría una experiencia como esa —tan, tan horrible”²⁴⁶.

Se cayeron debajo de un vehículo y la policía continuó golpeándolas incluso mientras estaban tumbadas en el suelo. Betty se echó encima de Elisa para intentar protegerla de

los golpes de la Fuerza de Choque, y la policía siguió golpeando a la madre y a la hija con sus macanas. Elisa explicó: “No me sentía bien, estaba mareada, me ahogaba y... Me sentí tan mal que pensé que iba a morir. En ese momento, pensé que ya estaba muerta y en lo único que podía pensar era en salir de ahí y coger a mi madre. Sólo podía pensar en irme de allí, y dije: ‘Oh Dios, Señor, ayúdame’”²⁴⁷.

Betty y Elisa quedaron seriamente afectadas por los gases lacrimógenos y el gas pimienta. Elisa sufrió un hematoma en la parte derecha de la cabeza, y Betty sufrió una contusión por uno de los macanazos. Betty no pudo hablar durante una semana debido a las sustancias químicas que le arrojó la policía, y después tuvo dificultades para hablar durante todo un año.

Betty dijo a la ACLU: “Viviendo en Estados Unidos con el derecho a la libertad de expresión, nunca pensé que esto pasaría cuando intentamos protestar. El Capitolio es la casa del pueblo. Es una casa abierta y cerrarla es un golpe contra la democracia”²⁴⁸. Elisa dijo: “En ningún momento de mi vida pensé que iba a pasar esto. En los años que llevo yendo a marchas y huelgas con mi madre nunca había pasado algo así. El Gobierno quiere que la gente se quede callada, y deje de protestar. Me ha criado alguien que conoce sus derechos, así que si conozco mis derechos, y continuaré expresándome porque este es mi país y seguiré haciéndolo para la próxima generación, para llevar a Puerto Rico al futuro”²⁴⁹.

La policía también roció con gas pimienta y empujó al observador legal del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogado y presidente del Colegio **Osvaldo Toledo**²⁵⁰. Toledo era uno de nueve observadores legales, identificados con chaquetas amarillas. Toledo presenció cómo los agentes de la Fuerza de Choque arrojaban a estudiantes por las escaleras del Capitolio y empujaban a los manifestantes por la plazoleta. Posteriormente, observó a la policía golpear a los manifestantes con macanas, y vio como un agente golpeaba a un estudiante directamente en la cabeza con una macana. Cuando Toledo intentó asistir a un estudiante herido, los agentes le rociaron la cara con gas pimienta y lo empujaron. Según Toledo, las acciones de la Fuerza de Choque parecían planeadas y, a pesar de sus intentos y de otros observadores legales de hablar con la policía, los agentes de la PPR se negaron a hablar o negociar con los observadores legales o los manifestantes. Aunque la policía afirmó posteriormente que los estudiantes estaban arrojándoles piedras, Toledo señala que no vio una sola piedra²⁵¹.

El teniente Juan D. Vargas desenfundó su arma y apuntó a los manifestantes: en una fotografía aparece el teniente con su arma desenfundada. Algunos manifestantes dijeron que escucharon disparos y creyeron que el teniente había disparado su arma. El entonces superintendente Figueroa Sancha declaró posteriormente que la PPR no pudo determinar si se había disparado en arma, debido a que las pruebas de balística no fueron concluyentes. El teniente Vargas había sido ascendido recientemente, a pesar de un historial de violencia contra ciudadanos y de que su expediente disciplinario contenía aparentemente más de una docena de denuncias presentadas contra él durante su carrera en la PPR.

En ese momento, la Fuerza de Choque, el Grupo de Cien y la policía montada disolvieron a la multitud en tres grupos y empezaron a conducir a un grupo hacia el océano, mientras perseguían a otro grupo a caballo hacia el Viejo San Juan, y forzaban al tercer grupo de manifestantes a huir hacia la zona de El Condado de San Juan. Mientras tanto, los helicópteros estaban arrojando gases lacrimógenos a los manifestantes aterrorizados que intentaban escapar. Los ciudadanos atemorizados, muchos de los cuales estaban cegados por el gas pimienta y los gases lacrimógenos, se vieron forzados a huir sin orden ni concierto en medio del tráfico y por las calles para intentar escapar de la violencia policial. Muchos de estos incidentes fueron grabados en vídeo o fotografiados²⁵².

El abogado Hans Perl-Matanzo, que estaba presente porque algunos estudiantes habían pedido tener a mano a abogados, dijo a la ACLU: “Hubo momentos en los que consideré seriamente que podía morir. Y no estoy exagerando. Los policías de la Fuerza de Choque me empujaron con tanta fuerza que me caí hacia atrás tres a cinco metros. Perdí mi zapato. Impusieron un perímetro y nos alejaron a la fuerza. La Fuerza de Choque pone en peligro más vidas de las que se supone que deben proteger”²⁵³.

Los manifestantes tenían tanto miedo de sufrir más violencia policial que muchos se pusieron en contacto con amigos y familiares que vivían en las cercanías y se refugiaron en sus casas. Incluso varias horas después de su expulsión por la fuerza del complejo del Capitolio, muchos seguían teniendo miedo de irse a casa. Una estudiante, **Xiomara Caro**, se escondió en casa de una amiga en Viejo San Juan, por temor a que la capturara la Fuerza de Choque. Se quedó allí hasta altas horas de la noche, sin poder salir por miedo a que la Fuerza de Choque u otros agentes de la PPR, que seguían merodeando por las calles, la persiguieran, la golpearan y la arrestaran sin razón por haber participado como líder estudiantil.

Ese día, la policía hirió a docenas de ciudadanos, varios de los cuales requirieron tratamiento para sus heridas en hospitales locales. Entre los heridos habían estudiantes universitarios y de secundaria, periodistas, abogados, observadores legales, profesores y turistas. Según Rachel Hiskes, quien recibió atención médica por las heridas provocadas por la PPR: “Tengo grabada en mi cerebro la imagen de un estudiante del Comité Negociador Nacional de Estudiantes con la camisa ensangrentada debido a una herida en la cabeza que seguía derramando sangre. Era como si estuviéramos caminando por un campo de batalla con todos los heridos, personas con ojos morados, todo el mundo tosiendo, caras y extremidades ensangrentadas que parecían irreales. Fui en busca de una ambulancia y no había realmente ninguna”²⁵⁴.

Posteriormente, el entonces superintendente Figueroa Sancha, quien había estado presente en el Capitolio durante el incidente, defendió y justificó públicamente el uso de la fuerza por los agentes. Figueroa Sancha declaró que era directamente responsable y “asumió toda la responsabilidad” por el uso de sustancias químicas en contra de manifestantes, declaró que había “dado todas las instrucciones personalmente” ese día y advirtió a los ciudadanos que si se enfrentaba a protestas similares, su respuesta sería la misma, “hoy, mañana... y el mes que viene”²⁵⁵. El teniente Vargas, el agente que desenfundó y desplegó su arma reglamentaria, fue suspendido temporalmente con salario

después del incidente del 30 de junio de 2010; se cree que ha sido el único agente de la PPR suspendido como consecuencia de los acontecimientos de ese día.

La estudiante Rachel Hiskes dijo a la ACLU que la agresión policial contra ella en el Capitolio le cambió la vida y le arrebató la tranquilidad, y consideró que las declaraciones públicas del superintendente eran especialmente inquietantes:

“Me afectó tanto que no pude reanudar mis actividades normales. Y mucho después de la quemazón del gas pimienta que duró varios días, estaba la angustia de haber sido una víctima. Me fui al psiquiatra, fui al médico y tomé medidas que me hicieron sentir mejor. Pero ver al superintendente de la policía decir en la televisión que era responsable de todas las órdenes, y que respondería de la misma manera hoy, mañana, el mes que viene y el próximo año me conmocionó. Era como si su dedo acusador y sus ojos penetrantes me perforaran la piel, y sentí que iba por mí, o por personas como yo, los disidentes políticos y los manifestantes civiles, así como los medios alternativos que cubrían las protestas”²⁵⁶.

A pesar del uso generalizado de la fuerza, sólo dos personas fueron detenidas por presuntamente dañar un vehículo policial; y fueron puestas en libertad cuando un juez no halló causa probable²⁵⁷. Se creó una Comisión Especial sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales para investigar los eventos del Capitolio. Los días 8 y 9 de julio de 2010, la Comisión Especial celebró vistas públicas, durante las cuales registró declaraciones de 48 personas involucradas en el incidente. La Comisión Especial publicó un informe preliminar el 12 de julio de 2010, en el que concluyó que la PPR había cometido numerosas violaciones de los derechos civiles²⁵⁸. El DOJ concluyó en su informe sobre la PPR: “es evidente que el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes estuvo dirigido a impedir la manifestación e intimidar a los manifestantes, en lugar de proteger la seguridad pública o la restauración del orden”²⁵⁹.

ii. Segunda protesta frente al Capitolio

El 27 de enero de 2011, los estudiantes de la UPR organizaron una segunda manifestación frente al Capitolio. Cuando los manifestantes llegaron, ya la Fuerza de Choque estaba formada y bloqueaba las escaleras del Capitolio. La protesta pacífica empezó con una lectura realizada por los líderes estudiantiles de un proyecto de ley, que crearía un fondo de becas para los estudiantes que no pudieran costearse el aumento de \$800 dólares de la matrícula. Después de leer el proyecto de ley, los estudiantes celebraron una protesta en la plazoleta adyacente a las escaleras del norte del Capitolio, en la que los estudiantes corearon consignas y mostraron pancartas. A pesar de que la protesta era pacífica y tuvo lugar en un lugar que tradicionalmente es un sitio de protestas públicas en Puerto Rico, los agentes de la PPR desalojaron por la fuerza a los estudiantes después de dejarles protestar durante cierto tiempo.

Los estudiantes se trasladaron entonces a la Avenida Constitución, directamente detrás del complejo del Capitolio, y algunos estudiantes comenzaron una sentada en la vía pública, que bloqueó parcialmente el tráfico, mientras que otros continuaron coreando consignas y mostrando pancartas. Tan pronto el grupo más pequeño de estudiantes

comenzó una sentada en la Avenida Constitución, los agentes de la policía empezaron a arrestar a los participantes uno a uno. Los policías nunca advirtieron a los estudiantes que debían moverse, y nunca les dijeron que podían protestar en otro lugar, y se limitaron a ordenarles “que se fueran”²⁶⁰.

Los agentes de la PPR asignados al CIC usaron técnicas dolorosas de puntos de presión para llevar a cabo los arrestos de los estudiantes que sólo se resistieron pasivamente entrelazando sus brazos y cruzando las piernas. Mientras los agentes de la policía disolvían a un grupo de estudiantes, otros estudiantes comenzaban una sentada pacífica en otra parte de la calle. Mediante el uso de las mismas técnicas crueles de puntos de presión empleadas en protestas anteriores, la PPR arremetió contra las partes más sensibles del cuerpo de los estudiantes —los ojos y las cuencas de los ojos, el cuello y la zona debajo de la mandíbula y la arteria carótida, y las orejas— con el fin de moverlos y arrestarlos. En algunos casos, la policía continuó usando técnicas de puntos de presión después de esposar a los estudiantes. Los agentes de policía usaron estas técnicas de puntos de presión sobre docenas de estudiantes ese día, las que provocaron lesiones. Algunos estudiantes experimentaron una disminución tan significativa del torrente sanguíneo al cerebro que perdieron el conocimiento. La policía arrestó a 36 estudiantes.

Una de las manifestantes sometida a la técnica de puntos de presión fue la estudiante de la UPR **Zulee Aguilar**, que se estaba resistiendo pasivamente al arresto. Los agentes del CIC le presionaron el cuello, la mandíbula y las cuencas de los ojos provocándole un “dolor indescriptible”²⁶¹. Perdió brevemente el conocimiento. Explicó: “Era una táctica de tortura. Ejercían presión sobre nuestro cuello y nuestra mandíbula, para detener el flujo de sangre a la cabeza. Era un dolor tan terrible que no podía soportarlo. Seguía presionándome la cara cada vez con más fuerza y empezó a presionarme los ojos. Empecé a perder el conocimiento. Era enorme, y ni siquiera intentó ponerme las esposas, pero habría sido fácil. Sentí un dolor tremendo, como un miedo terrible, e indignación por que estuvieran haciéndome todo eso por estar defendiendo la educación de mi país”²⁶². Sintió dolor durante días después de que la sacaran de la línea de desobediencia civil²⁶³. La estudiante **Shariana Ferrer Núñez** dijo: “Escuché los gritos por el dolor y la tortura de mis compañeros y supe que era la siguiente. Los dos agentes del CIC me pusieron las manos en el cuello y los dedos detrás de las orejas. Empecé a gritar porque no podía respirar —es una técnica de asfixia. Un agente estaba detrás de mí y me dobló los brazos y me esposó, pero al revés, y tenía las muñecas dolorosamente torcidas”²⁶⁴.

Los agentes de policía también utilizaron las macanas contra los estudiantes que participaron en la sentada y les pisaron los tobillos mientras los arrestaban. Un estudiante no fue tan sólo arrestado usando técnicas de puntos de presión, técnicas que le cortaron la circulación, sino que también lo ahogaron y lo arrastraron varios metros con una macana, con la que un agente le apretó el cuello. Un agente de la PPR agarró los senos de **Victoria Carro Robledo** cuando la trasladaba de un vehículo policial a otro después de arrestarla; tenía los brazos esposados detrás de la espalda con cintas de plástico cuando el agente la agarró por los senos²⁶⁵.

Después de que la policía arrestara y sacara del lugar a los estudiantes que participaron en la sentada, la Fuerza de Choque formó largas cadenas y avanzó hacia un grupo más numeroso de estudiantes que estaba protestando pacíficamente: coreando consignas, agitando banderas y sosteniendo pancartas en defensa de su causa. La policía empujó a estos estudiantes con grandes escudos de plástico, los roció indiscriminadamente con gas pimienta, les lanzó gases lacrimógenos de manera indiscriminada con escopetas de gases, les dispararon balas de goma y granadas de perdigones, y los macanearon. Algunos estudiantes señalaron que los agentes de la PPR habían disparado balas de goma directamente contra ellos, y en algunos casos dispararon a los estudiantes en la espalda cuando huían. Algunos estudiantes sufrieron heridas por impacto contundente en el pecho y la espalda provocadas por las balas de goma. El estudiante de la UPR **Ricardo Olivero** dijo: “Había una enorme cadena de agentes de la Fuerza de Choque formando una línea y cercando el área con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos”²⁶⁶.

La estudiante de la UPR **Amada García** dijo a la ACLU, “No nos dejaban salir. Estábamos buscando una manera de salir, pero ellos seguían empujándonos y disparando, disparando y disparando gases lacrimógenos. Éramos 20 estudiantes, con 40 agentes de la Fuerza de Choque detrás de nosotros y 20 agentes de la Fuerza de Choque detrás. Seguimos corriendo hasta llegar al parque, y nos persiguieron. Seguimos corriendo porque no nos sentíamos seguros”²⁶⁷. Agregó: “Sentí que si me veían podían matarme”²⁶⁸. García huyó con algunos estudiantes a un parque público, y alrededor de una decena de policías a caballo y 40 a 60 agentes de la Fuerza de Choque los dispersaron, a pesar de que hacía bastante tiempo que habían abandonado la protesta y estaban simplemente sentados en el parque”²⁶⁹.

La policía de manera indiscriminada disparó tantos gases lacrimógenos que una monja salió de una escuela parroquial cercana y regañó a los agentes por disparar gases lacrimógenos “sin aviso ni precaución” cerca de los salones de clases y la cancha de baloncesto, donde estaban jugando los niños²⁷⁰. Muchos estudiantes requirieron atención médica por inhalación de gas y otras lesiones. Los agentes de la Fuerza de Choque persiguieron a los estudiantes hasta Puerta de Tierra, a una distancia considerable del edificio del Capitolio.

c. Abuso policial contra manifestantes estudiantiles, líderes y miembros sindicalistas en el Hotel Sheraton.

El 20 de mayo de 2010, cuando la huelga de estudiantes de la UPR se acercaba a su cuarta semana, alrededor de dos centenares de estudiantes de la UPR y líderes y miembros de sindicatos se reunieron frente al Hotel Sheraton para protestar, pues en este se estaba llevando a cabo un evento de recaudación de fondos al que estaba invitado el Gobernador Fortuño. Mientras los manifestantes formaron pacíficamente un piquete y corearon consignas al otro lado de la calle frente a la entrada lateral del hotel, llegaron la UOT (Fuerza de Choque) y la UOE (Grupo de Cien), aunque después se dispersaron de manera inesperada.

Poco después, mientras los agentes de la PPR se mantenían cerca y observaban, un grupo de estudiantes entraron al vestíbulo del hotel, que estaba abierto al público. Los agentes

no intentaron impedir que los estudiantes entraran al vestíbulo ni dijeron a los estudiantes que no podían hacerlo. Los estudiantes entraron al vestíbulo porque querían que el gobernador viera su piquete. Dentro del vestíbulo, los estudiantes volvieron a formar pacíficamente un piquete, sostuvieron pancartas y empezaron a corear consignas. De repente y sin aviso, la Fuerza de Choque irrumpió en el vestíbulo y comenzó a golpear, patear y rociar con gas pimienta de manera indiscriminada a los estudiantes y a otros manifestantes. En las afueras del hotel, y parados cerca de cada puerta del hotel, agentes de la PPR bloquearon las salidas y golpeaban a los estudiantes con sus macanas a medida que ellos intentaban salir del vestíbulo; en algunos casos usando sus macanas como bates para golpear a los estudiantes.

La policía roció con gas pimienta y macaneó a **Iram Ramírez**, líder de la Unión Internacional de Empleados de Oficina y Profesionales (OPEIU), AFL-CIO-CLC de Puerto Rico, que había entrado en el vestíbulo del hotel para ayudar a los estudiantes a escapar de manera segura. Un agente le golpeó en la espalda con una macana. Presenció cómo los policías arrastraban a estudiantes por los pies de vuelta al vestíbulo cuando intentaban salir.

Varios agentes de policía arremetieron contra el estudiante de la UPR **José “Osito” Pérez Reisler**, al que tiraron al suelo, y al menos dos agentes se subieron a su espalda para ponerle bocabajo. Luego, uno de los agentes lo electrocutó repetidamente con una pistola eléctrica después de que estuviera contenido e incapacitado. Según el abogado de Pérez Reisler, el agente Enrique G. Juliá Ramos lo electrocutó de seis a siete veces aplicándole descargas en la cadera y en la espalda. Cuando los policías arremetieron contra él, Pérez Reisler estaba desarmado y se había limitado a sostener pacíficamente una pancarta que decía: “Soy un estudiante graduado y apoyo la huelga”. Las imágenes del vídeo del incidente muestran claramente que Pérez Reisler no planteaba ninguna amenaza y ya estaba bocabajo en el suelo cuando le aplicaron descargas²⁷¹. Juliá Ramos dijo a la ACLU que Pérez Reisler tuvo que ser hospitalizado durante días, y que durante este período fue evaluado por un médico que concluyó que podía haber muerto como consecuencia de las repetidas descargas eléctricas, ya que padece de una condición médica que podía haberse agravado por las descargas²⁷². Pérez Reisler no fue acusado de un delito.

El coronel José A. Rosa-Carrasquillo, entonces superintendente asociado y segundo en mando de la PPR, propinó una patada en los genitales a Pérez Reisler cuando éste estaba incapacitado en el suelo y siendo aguantado por al menos dos agentes de la PPR. Las fotografías publicadas por los medios reflejaron esta agresión injustificada.

Fuera del hotel, otros manifestantes, entre ellos líderes y miembros de sindicatos, continuaban piqueteando en la vía pública. De repente, agentes de la PPR acorralaron a estos manifestantes y comenzaron a alejarlos del hotel por la fuerza. En el proceso, la policía roció indiscriminadamente con gas pimienta y golpeó a los manifestantes con sus macanas, incluso cuando estaban intentando salir de la zona pacíficamente y rápidamente.

Las imágenes de vídeo muestran a los agentes haciendo un uso excesivo de la fuerza contra numerosos manifestantes que ya habían salido del vestíbulo y no planteaban ninguna amenaza ni peligro para la PPR ni los transeúntes. En las imágenes se ven claramente agentes de la Fuerza de Choque golpeando en la espalda con sus macanas a los estudiantes que huyen, levantando las macanas por encima de sus cabezas y dejándolas caer sobre los hombros y las espaldas de los estudiantes y, en algunos casos, persiguiendo a los estudiantes que están dispersando y golpeándolos en repetidas ocasiones²⁷³. Los agentes de la Fuerza de Choque también empujaron a los manifestantes estudiantiles, los arrojaron al suelo, les propinaron patadas y puñetazos, los rociaron con gas pimienta a quemarropa. Los agentes también dispararon de manera indiscriminada gases lacrimógenos con escopetas antidisturbios contra el grupo de manifestantes, y en las imágenes se ven las latas de gases volando por el aire y detonándose alrededor de los manifestantes.

Los agentes de la Fuerza de Choque también atacaron a líderes y miembros de sindicatos que se estaban manifestando pacíficamente a las puertas del hotel, en una calle adyacente con escaso tráfico y en la acera frente al hotel. Un agente de la Fuerza de Choque roció con gas pimienta y golpeó con una macana a **Luisa Acevedo Zambrano**, presidenta de la Federación Central de Trabajadores (FCT), la Delegación Local 481 de la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales (UFCW). Acevedo Zambrano había estado protestando pacíficamente con otros líderes y miembros de sindicatos a las puertas del Hotel Sheraton cuando presencié cómo la Fuerza de Choque atacaba a manifestantes estudiantiles dentro del hotel. Los agentes de la Fuerza de Choque salieron luego del hotel y empezaron a golpear y rociar con gas pimienta y gases lacrimógenos a los líderes y miembros de sindicatos que protestaban pacíficamente. Acevedo Zambrano explicó: “Cuando salieron la policía y la fuerza de choque... estábamos en la calle y la fuerza de choque simplemente arremetió contra nosotros. Toda esta fuerza se dirigió a los que estaban participando en el piquete”²⁷⁴.

Acevedo Zambrano intentó preguntar a los agentes qué estaba pasando y por qué los estaban atacando, y los agentes de la Fuerza de Choque le rociaron directamente los ojos y la cara con gas pimienta y la golpearon con una macana en el cuello. El golpe hizo que Acevedo se cayera en la calle, golpeándose la cabeza contra el suelo. Mientras estaba en el suelo, un agente de la PPR le pateó el hombro. Otros líderes y miembros de sindicatos intentaron ir en su ayuda para impedir que la policía la pisoteara y le rociara gas pimienta mientras estaba indefensa en el suelo. Explicó:

“Inmediatamente, la fuerza de choque me roció la cara con gas pimienta, directamente en la cara y en los ojos, tan sólo a unos pasos de distancia. Tenía la cara completamente bañada en gas pimienta —Estaba totalmente cegada, es algo tan horrible. Cuando me di la vuelta me golpearon el cuello con una macana y me caí al suelo. No dejaron que ninguno de mis camaradas, que estaban conmigo en ese momento, me ayudaran a levantarme y me auxiliaran, y arrojaban gas pimienta en la cara a todos los que se acercaban, para que no pudieran hacerlo. Me patearon cuando estaba en el suelo. Lanzaron golpes de manera

indiscriminada y usaron sus macanas, gases lacrimógenos y gas pimienta contra todos los participantes que estaban en la calle, y no teníamos nada que ver con lo que estaba ocurriendo dentro del vestíbulo del hotel”²⁷⁵.

La garganta de Acevedo se inflamó y tuvo dificultades para respirar como consecuencia del gas pimienta, y requirió atención médica urgente en un hospital. Tenía un chichón inflamado en la cabeza, hematomas en el brazo y en otras partes del cuerpo, y heridas en las rodillas y los codos. Sus gafas estaban rotas. En el hospital, los médicos le quitaron la ropa y le limpiaron el gas pimienta, la asistieron para ayudarlo a respirar y tomaron radiografías. Dada la gravedad de los golpes de macana, tuvo que permanecer hospitalizada hasta cerca de la medianoche. Acevedo continuó teniendo dificultades para hablar durante algún tiempo como consecuencia de que se le rociara gas pimienta a tan corta distancia. Un año después, tuvo que someterse a una resonancia magnética y a una tomografía computarizada debido a los problemas constantes provocados por los macanazos²⁷⁶.

José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR) de la AFL-CIO, fue rociado con gas pimienta y sufrió heridas tan graves que tuvo que recibir tratamiento médico urgente en un hospital. Rodríguez Báez dijo a la ACLU: “Cuando intentamos ayudar a nuestros compañeros caídos, nos rociaron con gas pimienta a corta distancia”²⁷⁷. De manera similar, la policía también golpeó y roció con gas pimienta a **Manuel Perfecto**, presidente de la Unión General de Trabajadores de Puerto Rico (UGT), la Delegación Local 1199 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU); a **Eric Sevilla**, otro líder de la UGT; y a **John Viguera**, un líder de la FTPR.

La PPR sólo detuvo a cuatro personas en el Hotel Sheraton: dos fueron puestas en libertad sin cargos y los fiscales decidieron no procesar a las otras dos²⁷⁸. Por ejemplo, un estudiante estuvo detenido al menos nueve horas, pero nunca se formularon cargos contra él. Aunque la prensa puertorriqueña se hizo ampliamente eco de las imágenes de vídeo y las fotos del incidente, que mostraban claramente el uso excesivo de la fuerza por los agentes de la PPR, el entonces superintendente de la policía Figueroa Sancha calificó de “héroes” a los agentes en declaraciones públicas posteriores.

d. Incidentes documentados de abuso policial contra líderes y miembros de sindicatos que se manifestaron en otros lugares

La Ley 7 fue tan impopular entre los sindicatos que, el 1 de mayo de 2009, un número estimado de 20,000 manifestantes respondieron a la llamada del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha para un paro laboral y marcharon delante del Departamento del Trabajo de Puerto Rico para protestar la aprobación de esta ley. Posteriormente, los líderes y los miembros de sindicatos participaron en múltiples protestas para reclamar la anulación de la Ley 7.

Según Luisa Acevedo, presidenta de la FCT, la represión por la fuerza de la PPR de las protestas de sindicalistas comenzó en serio en septiembre de 2009. Explicó: “Desde alrededor del mes de septiembre, que es cuando comenzaron los despidos más

numerosos, la policía movilizó a la Fuerza de Choque contra los trabajadores, y hubo muchas actividades en las que nos asaltó la Fuerza de Choque. La práctica policial era estar siempre presentes e intentar intimidar y castigar a todos los que formaban piquetes o protestaban. En todas las actividades, la Fuerza de Choque estaba presente intentando intimidarnos e impedirnos que anunciáramos públicamente las injusticias que se estaban cometiendo. La policía estaba haciendo esto constantemente en todas nuestras actividades”²⁷⁹.

i. La mansión del Gobernador

El 29 de septiembre de 2009, cuatro días después de que Carlos García, presidente de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, anunciara que el Gobierno tenía previsto despedir a 16,790 empleados públicos, además de los más de 8,000 trabajadores que ya habían sido despedidos ese año, los líderes y los miembros de los sindicatos participaron en una manifestación pública delante de la mansión del Gobernador, conocida como La Fortaleza. Los líderes sindicales y otros grupos han convocado manifestaciones y actos de desobediencia civil en el mismo lugar en el pasado, sin ningún incidente.

Alrededor de las ocho de la mañana de ese día, una treintena de líderes y miembros de sindicatos se reunieron cerca de una de las entradas laterales de La Fortaleza e instalaron un “campamento de protesta” en la calle Fortaleza, una pequeña calle peatonal adyacente a la mansión del Gobernador. Los manifestantes corearon consignas y sostuvieron pancartas. Los manifestantes no bloquearon en ningún momento el tráfico motorizado ni interfirieron con los transeúntes; de hecho, los que se dirigían al trabajo a primera hora de la mañana pudieron caminar por la acera alrededor de los manifestantes. En una muestra de determinación, un grupo de cuatro manifestantes se encadenaron a dos pequeños postes que flanquean la calle adoquinada, mientras que el resto de sindicalistas siguieron sosteniendo pancartas y coreando consignas. Cuando llegó la PPR, un grupo de líderes sindicales explicaron a los agentes que los cuatro manifestantes que se habían encadenado no se resistirían si intentaban arrestarlos.

En cuestión de minutos, la PPR movilizó a la Fuerza de Choque. Como era costumbre en la respuesta a las manifestaciones públicas, los agentes de la Fuerza de Choque iban totalmente equipados con chalecos antibalas, cascos con viseras, macanas antidisturbios y escudos de plástico. En cuanto llegaron, y sin ofrecer a los manifestantes una oportunidad adecuada de moverse del lugar, la Fuerza de Choque empezó inmediatamente a golpear a los manifestantes con sus macanas en el pecho, la cabeza, el estómago, los brazos y las piernas, hasta que aprisionaron a los manifestantes contra una barrera de cemento que separa La Fortaleza de la calle principal. Los que se cayeron contra la barrera no pudieron moverse y fueron pisoteados por la Fuerza de Choque.

Incluso cuando los manifestantes intentaron retroceder, la Fuerza de Choque los empujó y golpeó con sus macanas. Aunque se había informado a los agentes de que los cuatro manifestantes estaban encadenados entre sí y a los postes, y no podían moverse, los agentes de la Fuerza de Choque los golpearon repetidamente con sus macanas y los patearon con sus botas.

Varios manifestantes sufrieron heridas graves, como hematomas y contusiones, como consecuencia de la fuerza empleada por la Fuerza de Choque. Por ejemplo, un agente de policía golpeó a **Iram Ramirez**, líder de la OPEIU de Puerto Rico, con una macana en la cabeza cuando intentaba en vano rogar a los agentes que dejaran a un periodista que había caído al suelo ponerse de pie y evitar que la Fuerza de Choque lo pisoteara. Otro agente de policía golpeó con su macana en el pecho a **Luisa Acevedo Zambrano**, presidenta de la FCT.

Ninguno de los manifestantes fue arrestado. **José Rodríguez Báez**, presidente de la FTPR, dijo a la ACLU: “No había razón para enviar a la Fuerza de Choque”, y agregó: “[Nuestra protesta] era totalmente no violenta y nuestro plan era no ofrecer resistencia. Queríamos llamar la atención [sobre nuestras demandas] sin cometer ningún acto ilegal. Intentamos buscar un lugar donde no interrumpiríamos el tráfico y pudiéramos hacernos ver por el Gobierno, para expresarnos ante la sede del Gobierno, y por estas razones elegimos ese sitio”²⁸⁰. Explicó: “La Fuerza de Choque fue muy agresiva... No dejaron de empujarnos y golpearlos con las macanas para sacarnos de la zona”.

ii. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico

El 25 de septiembre de 2009, los líderes sindicales organizaron una protesta a la hora del almuerzo a la que asistieron cientos de sindicalistas y empleados públicos, por ser el día en el que se esperaba el anuncio de la segunda ronda de despidos de funcionarios en cumplimiento de la Ley 7. La protesta tuvo lugar delante de la sede del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico en Minillas, en un momento en que la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal se había reunido para aprobar los despidos de 16,790 trabajadores públicos. El grupo protestó pacíficamente y coreó consignas como “trabajadores unidos nunca serán vencidos” y “lucha sí, rendición no”. Un grupo más pequeño de líderes sindicales también intentó entrevistarse con el presidente del Banco Gubernamental de Fomento.

Los agentes de la PPR, entre ellos miembros de la Fuerza de Choque, rodearon a los manifestantes sindicalistas y los empujaron con sus macanas. La policía formó una barricada alrededor del edificio público, e impidió por la fuerza la entrada de los manifestantes al complejo. No se arrestó a ningún manifestante.

iii. El Tribunal Supremo de Puerto Rico

El 12 de febrero de 2010, alrededor de un centenar de líderes y miembros de sindicales protestaron delante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que había declarado constitucional la Ley 7. Los líderes y los miembros de sindicatos estaban manifestándose contra el fallo, y la reciente inclusión de tres magistrados adicionales nombrados por el Gobernador Fortuño en el Tribunal Supremo. Los sindicalistas y los trabajadores formaron un piquete y marcharon frente a la entrada del complejo del Tribunal Supremo, a unos 50 o 60 metros del propio edificio. No se acercaron a las escaleras ni al vestíbulo del tribunal.

La policía interceptó al piquete, se negó a permitirles la entrada a las puertas exteriores del complejo del Tribunal Supremo y les ordenó que se fueran y “salieran de ahí”²⁸¹. La policía empujó a los manifestantes con macanas y les impidió por la fuerza que se acercaran a las puertas exteriores²⁸². El líder sindical Federico Torres Montalvo dijo posteriormente a la prensa: “El único camino que nos queda es éste, la calle, y le advertimos a la Policía que no nos provoque, que nos permita hacer nuestras manifestaciones pacíficas porque vamos a llegar a los portones del Capitolio, de La Fortaleza y a donde sea necesario”²⁸³. La líder de la FCT Luisa Acevedo Zambrano dijo a la ACLU que, después de que la policía los obligara a abandonar la protestas delante del Tribunal Supremo: “Más que indignación, sentí frustración. Los policías no nos dejan expresarnos. Te sientes impotente por no poder siquiera expresarte sobre lo que está pasando, porque no te dejan. No ha habido ningún puente de comunicación con el Gobierno en los últimos dos años. Ninguna comunicación de ningún tipo: ni en las calles, ni en los tribunales ni en la Asamblea Legislativa”²⁸⁴.

e. Incidentes documentados de abuso policial contra manifestantes estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico

i. Avenida Universidad

A primera hora de la mañana del 21 de agosto de 2009, el primer fin de semana después del comienzo del trimestre, la policía intentó arrestar a un hombre, aparentemente por consumir una bebida alcohólica en la Avenida Universidad, una calle cercana al campus de la UPR donde los estudiantes universitarios frecuentan bares, cafés y restaurantes. Cuando los estudiantes se reunieron para protestar verbalmente contra la actuación de la policía, más de un centenar de agentes de la UOT pertenecientes a la División de San Juan se personaron en el lugar. Estaban armados con macanas, gas pimienta y gases lacrimógenos, y atacaron indiscriminadamente a los estudiantes. La policía golpeó a los estudiantes con macanas, les disparó gases lacrimógenos y los rociaron con gas pimienta. Los agentes arrestaron a cinco personas, pero se retiraron la mayoría de los cargos porque no existía una causa probable para justificar los arrestos²⁸⁵.

Posteriormente, los estudiantes se reunieron dentro del patio de la residencia universitaria de la UPR, Torre Norte, el cual está rodeado por rejas, y empezaron a corear: “¡Abusadores!” a los policías que se encontraban en las cercanías. Los estudiantes no estaban arrojando objetos ni presentaban ningún riesgo. De repente y sin advertencia, los agentes apuntaron una escopeta antidisturbios directamente a los manifestantes estudiantiles y dispararon una bomba de gases lacrimógenos, que hizo impacto en **Michelle Padrón Gauthier**, quien se encontraba pacíficamente en el patio de la residencia estudiantil donde vivía. La bomba le provocó una lesión grave en la pierna, al atravesarle los pantalones e infligirle una profunda herida en el muslo. La herida fue tan grave que cayó al suelo y no pudo caminar. Los agentes continuaron disparando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes estudiantiles, lo que impidió que otros estudiantes pudieran asistirle. La policía también bloqueó el acceso a la zona de vehículos de emergencia, incluyendo una ambulancia que acudió a asistirle. Padrón Gauthier, una atleta universitaria que tenía una beca de deportes para asistir a la UPR, estuvo confinada a una silla de ruedas durante alrededor de un mes debido a la lesión,

después de lo cual tuvo que usar un bastón para caminar, y no pudo terminar el trimestre y graduarse como tenía previsto. Requirió tratamiento médico de emergencia y terapia física y psicológica constante, y tiene un agujero de cuatro centímetros de profundidad en el muslo. Padrón Gauthier presentó una demanda por daños contra la PPR, y su abogada dijo: “Está intentando seguir con su vida, pero no es fácil”²⁸⁶.

ii. Huelga estudiantil de abril a junio de 2010

El 13 de abril de 2010, como respuesta a una llamada a los estudiantes para tomar acción, el Consejo General de Estudiantes de la UPR celebró una Asamblea General de Estudiantes en el campus de Río Piedras. La Asamblea General de Estudiantes aprobó una propuesta para la creación de un Comité Negociador encargado de representar a los estudiantes ante la administración de la UPR, y también decidió convocar una protesta de 48 horas si la administración no escuchaba sus preocupaciones. El 21 de abril de 2010, después de numerosos intentos de negociación con los funcionarios de la administración, el Consejo General de Estudiantes anunció el comienzo de una protesta de 48 horas.

Los administradores y los funcionarios de la UPR continuaron negándose a reunirse con el Comité Negociador. Como consecuencia, el 23 de abril de 2010, el Consejo General de Estudiantes anunció el comienzo de una huelga estudiantil indefinida. La participación y el respaldo a la huelga fueron creciendo y, a principios de mayo, 10 de los 11 recintos de la UPR se habían unido a la huelga. Casi tres semanas después, la Asamblea General de Estudiantes rechazó una propuesta presentada por los administradores de la universidad, y, en cambio, votaron a favor de continuar la huelga.

Los estudiantes establecieron un campamento temporal en el centro del campus de Río Piedras. Los estudiantes se reunieron para corear consignas y sostener pancartas contra la Ley 7, el aumento de las matrículas y diversas políticas de la administración de la UPR. Casi inmediatamente después de la segunda votación para extender la huelga, la Fuerza de Choque tomó control de las entradas del campus principal, limitando cualquier vía de entrada o salida del campus de la UPR. La Fuerza de Choque impidió que padres, profesores, estudiantes y otros simpatizantes reunidos a la entrada del campus entregaran cualquier cosa —incluso alimentos y agua— a los estudiantes rodeados por la policía en el interior.

La huelga duró 62 días en el campus de Río Piedras. A lo largo de la huelga, la policía cercó e hizo guardia en las entradas del campus de Río Piedras. Durante ese período, la Fuerza de Choque utilizó en múltiples ocasiones la fuerza y sustancias químicas irritantes contra los manifestantes estudiantiles, contra los estudiantes que se encontraban en el lugar y contra los simpatizantes, incluidos los padres de estudiantes. Los agentes de la PPR macanearon, golpearon, empujaron y rociaron con gas pimienta en repetidas ocasiones a los estudiantes que protestaron cerca de las entradas de la universidad y a los que intentaron ingresar al campus de Río Piedras por las entradas principales.

El **23 de abril de 2010, Hans Perl-Matanzo**, graduado recientemente de derecho, fue golpeado por agentes de la Fuerza de Choque en la entrada principal que conduce al museo y la biblioteca del campus. Los agentes de la Fuerza de Choque estaban

bloqueando la entrada y no permitían el ingreso de los estudiantes al campus. Perl-Matanzo, que estaba ejerciendo como representante legal de los estudiantes, se acercó a los agentes para decirles que un grupo de estudiantes de derecho querían entrar al campus a protestar y ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión²⁸⁷. Perl-Matanzo dijo a los agentes de la Fuerza de Choque que iba a entrar al campus y que podían arrestarlo si pensaban que estaban infringiendo la ley. Dió un solo paso hacia la entrada de la universidad cuando dos agentes de la Fuerza de Choque lo arrojaron al suelo y le golpearon de seis a ocho veces en el pecho y las costillas con sus macanas, las que utilizaron como puñales²⁸⁸. Lo patearon una o dos veces cuando se encontraba en el suelo, y un tercer agente de la Fuerza de Choque lo empujó con su macana. Los golpes le provocaron un colapso pulmonar parcial y le causaron dolorosos moratones e inflamación en el pecho y las costillas; posteriormente, Perl-Matanzo perdió el conocimiento y requirió asistencia médica de emergencia²⁸⁹.

El **14 de mayo de 2010**, cuando el estudiante **José “Osito” Pérez Reisler** intentó entrar a la UPR, los agentes lo agarraron, lo arrojaron al suelo, lo patearon, le golpearon con sus puños y macanas, lo esposaron y le rociaron la cara con gas pimienta a quemarropa. Pérez Reisler no se resistió al arresto en ningún momento. Los agentes lo retuvieron durante alrededor de nueve horas, pero no le acusaron de ningún delito. Cuando la policía lo paró y lo detuvo, Pérez Reisler llevaba una computadora portátil con una versión electrónica del borrador de su tesis de maestría; la policía le confiscó su bulto y la computadora cuando lo arrestaron y dijo no saber nada de la computadora cuando lo pusieron en libertad. Pérez Reisler nunca recuperó su computadora ni su tesis de manos de la policía.

También el 14 de mayo de 2010, uno o más agentes de la PPR golpearon en la cara con una macana al padre de un estudiante, el agente de libertad condicional **Luis Torrez**, cuando intentó llevar comida a su hijo y otros estudiantes para mostrar su apoyo a la huelga. Torrez acostumbraba llevar alimentos a los estudiantes de camino al trabajo, y aunque siempre vio a agentes de la policía en el perímetro del campus de Río Piedras, nunca ningún agente le informó que no podía llevar comida a los estudiantes que estaban protestando. Cuando llegó a la entrada del campus a las siete y media de la mañana del 14 de mayo, vio a alrededor de 30 agentes de la PPR, liderados por un sargento de la UOT. El sargento agarró a Torrez por el abrigo y lo arrojó al suelo, y cuando estaba en el suelo sintió que el agente o los agentes le golpearon en la cara un par de veces y le rompieron los espejuelos. Los agentes levantaron a Torrez y lo arrojaron al suelo antes de esposarlo y arrestarlo. Torrez sufrió una herida en la cabeza que hizo que le corriera sangre por la cara, arañazos en las muñecas y una contusión de 30 centímetros con la forma y el tamaño de una macana. Estuvo detenido en una celda durante una hora y media hasta que la policía lo transportó a la sala de emergencia del hospital de Río Piedras, donde recibió atención médica que incluyó una radiografía del cráneo. La policía volvió a encerrar a Torrez en una celda hasta las seis de la tarde, cuando le dejaron irse. Nunca le acusaron de un delito y la policía tampoco le informó de las razones para su arresto y detención. Torrez perdió 15 días de trabajo debido a las lesiones²⁹⁰.

Incidentes como éste fueron habituales a lo largo de la huelga de estudiantes. De hecho, los estudiantes de la UPR dijeron que habían leído publicaciones en Facebook de algunas personas que se identificaban como agentes de la PPR que decían que les entusiasmaba la posibilidad de darles una paliza a los estudiantes y poner fin a las manifestaciones estudiantiles.

iii. Huelga de estudiantes de diciembre de 2010 a febrero de 2011

En diciembre de 2010, ya cuando el segundo semestre se había puesto en marcha en la UPR, los estudiantes continuaron su campaña contra la imposición de la cuota de \$800, que debía entrar en vigor en enero de 2011. Ese mismo mes, el Gobernador Fortuño declaró en un discurso televisado que ya no se tolerarían las protestas de la extrema izquierda en el campus. El jefe de gabinete, Marcos Rodríguez Ema, declaró en una entrevista televisada que iban a sacar a patadas a los estudiantes y profesores que se atrevieran a protestar.

El 13 de diciembre de 2010, la rectora del campus de Río Piedras de la UPR, Ana Guadalupe, dictó una prohibición por 30 días de toda actividad relacionada con la Primera Enmienda, como las protestas y las actividades colectivas en cualquier lugar del recinto, y pidió al Gobierno del Estado Libre Asociado que le ayudara a aplicar la prohibición. Además, la rectora Guadalupe extendió la resolución que prohibía las protestas en el campus de la universidad, que iba a vencerse el 13 de enero de 2011, durante 30 días más, hasta el 13 de febrero de 2011. Cuando se cumplió el plazo de la prohibición, la rectora Guadalupe renovó la resolución durante un tercer período de 30 días a partir del 25 de febrero de 2011. La administración de la universidad también limitó cualquier protesta a pequeñas áreas designadas fuera del campus, denominadas “áreas de libre expresión”. Un grupo de cuatro estudiantes presentaron una demanda solicitando un mandato judicial, cuestionando la prohibición a las protestas y a otras actividades de expresión como una restricción inconstitucional a la libertad de expresión, pero tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones denegaron el mandato²⁹¹.

Los estudiantes dijeron a la ACLU que las zonas designadas como “áreas de libre expresión” fuera del campus les hacían imposible comunicar su mensaje. Los estudiantes dijeron que las “áreas de libre expresión” eran muy pequeñas y estaban completamente rodeadas de policías. Durante la prohibición de las protestas por la rectora y la reciente represión policial, los manifestantes estudiantiles de la UPR habían marchado habitualmente por el campus, a una distancia a la que podían escucharles sus compañeros, para advertirles de su mensaje y reclutar a simpatizantes en el proceso. La estudiante Zulee Aguilar explicó: “Esa área no está cerca de los estudiantes, que nos podrían oír y querían participar con nosotros. No podemos sensibilizar a estudiantes dentro del campus si estamos fuera. Además, ningún profesor ni funcionario de la administración de la universidad —las personas a las que queremos dirigir nuestro mensaje— podían oírnos o vernos desde esa área”²⁹².

Los manifestantes universitarios planearon y ejecutaron una marcha pacífica en los días **7 y 8 de diciembre de 2010**, en la que el personal de seguridad privada contratada por la universidad usó la violencia contra los estudiantes. Los guardias reclutados por Capitol Security, una empresa de seguridad privada contratada por la universidad, patrullaron el campus, algunos de los éstos portando cuchillos, palos, trozos de madera, tubos y otros objetos que habían recogido alrededor del recinto. Estos guardias contratados habían recibido muy poco o ningún adiestramiento y no llevaban tarjetas de identificación. Un estudiante dijo a la ACLU que presencié cómo unos cinco agentes de seguridad golpeaban salvajemente a un estudiante con palos y lo pateaban, provocándole heridas tan graves que tuvo que ser hospitalizado²⁹³. Se informó que una línea de policías fuera del campus había presenciado a los agentes de seguridad golpear salvajemente al estudiante, pero no intervinieron²⁹⁴. Los noticieros de los canales de televisión locales emitieron un vídeo en el que los estudiantes rompían presuntamente las ventanas de la camioneta de seguridad.

Antes de la marcha estudiantil, en las primeras horas del 6 de diciembre de 2010, la administración de la UPR hizo desmontar, retirar o soldar las diversas puertas del campus de Río Piedras para que quedaran abiertas, con la intención de impedir que los huelguistas estudiantiles pudieran impedir el acceso de otros estudiantes al campus. Después de la marcha estudiantil, la PPR tomó el interior del campus. Algunos estudiantes estimaron que ese día entraron más de 300 agentes al campus. Esta fue la primera vez en más de 31 años que la PPR entraba y ocupaba el campus de Río Piedras, el cual ha sido un foro tradicional para las protestas estudiantiles. La presencia policial en el campus puso fin a una antigua política de no confrontación promulgada por el Senado Académico, que prohibía la presencia de la PPR dentro del campus y que se dictó después de incidentes de abuso policial contra manifestantes, como la muerte por disparos de la policía a una estudiante de la UPR hace más de tres décadas.

El 14 de diciembre de 2010, los líderes estudiantiles anunciaron el comienzo de otra huelga indefinida, aprobada por la mayoría en la Asamblea General de Estudiantes que había sido convocada por el Consejo General de Estudiantes. La policía estuvo constantemente presente en el campus durante la huelga: los agentes patrullaron toda la universidad a pie, en vehículos y camionetas policiales, en motocicletas y en vehículos similares a los del golf; se estacionaron múltiples unidades móviles de la policía en cada uno de los estacionamientos del campus; y se ubicaron alrededor de una veintena de agentes de la PPR en cada entrada del campus. Algunos estudiantes calcularon que hubo entre 200 y 400 policías en el campus durante toda la huelga. Los estudiantes dijeron a la ACLU que se sintieron constantemente amenazados por los agentes, que los hostigaron con frecuencia. La estudiante **Gabriela Camacho** señaló que un agente le advirtió: “Las calles están oscuras y un día la prensa no va a estar ahí”²⁹⁵.

Durante la huelga, los estudiantes organizaron marchas y manifestaciones tanto dentro como fuera del campus. Las protestas de los estudiantes se desarrollaron en lugares como las entradas del campus de Río Piedras, en las calles dentro del campus, dentro y fuera de los edificios de varias facultades y centros administrativos del campus, y en las calles y aceras fuera del campus. En algunas ocasiones, los estudiantes entraron a los

edificios de los diversos departamentos para marchar y corear consignas, como llevaban haciendo históricamente durante años en el campus. A partir del 19 de enero de 2011, empezaron a organizar sentadas, además de las marchas habituales. A pesar de que la gran mayoría de estas marchas y manifestaciones eran totalmente pacíficas y legales, los agentes de la Fuerza de Choque atacaron a los manifestantes estudiantiles casi a diario con gases lacrimógenos, gas pimienta, macanas, granadas de perdigones y balas de goma. Además, durante la segunda huelga estudiantil, la PPR realizó arrestos injustificados para intimidar a los estudiantes e impedir que ejercieran su derecho protegido a la libertad de expresión.

Los manifestantes estudiantiles comenzaron las protestas con una marcha el **14 de diciembre de 2010**, durante la cual cantaron y corearon consignas como “¡No a la cuota!” y “¡Fuera policía!”. Mientras los estudiantes marchaban pacíficamente, los agentes de la Fuerza de Choque formaban un muro sólido, avanzaban hacia los estudiantes y usaban macanas, escudos antidisturbios de plástico, escopetas de gases lacrimógenos y gas pimienta para sacar a los estudiantes por la fuerza del campus y conducirlos a una “área de libre expresión” fuera del campus. La líder estudiantil **Xiomara Caro Díaz** explicó: “Marchábamos por la universidad y la policía nos decía que no podíamos protestar —tenían un megáfono con un amplificador y decían que no podíamos protestar en la universidad. Entonces agentes de la Fuerza de Choque en línea nos empujaban físicamente fuera del campus, pero cuando estábamos fuera seguían impidiendo que protestáramos, incluso delante de las entradas”²⁹⁶. Agregó: “En efecto, era una prohibición a la expresión en todas partes, específicamente para los estudiantes. No podíamos expresarnos en ningún sitio. Si estábamos dentro del campus, no podíamos protestar. Y cuando nos echaban fuera, tampoco nos dejaban protestar. Así que no pudimos”²⁹⁷.

A partir de entonces, durante toda la huelga, cada vez que los estudiantes intentaban protestar dentro del campus, la Fuerza de Choque los sacaba por la fuerza. Los agentes de la Fuerza de Choque dispararon gases lacrimógenos con escopetas semejantes a lanzagranadas, de manera indiscriminada contra la multitud de manifestantes estudiantiles, golpearon a los estudiantes con macanas, y los rociaron con gas pimienta. El estudiante de la UPR Roberto Morales explicó: “Era bien, bien frustrante. Estás en tu universidad y no estás haciendo nada ilegal en absoluto, y la policía te está obligando de manera amenazante y violenta a salir de tu universidad. Cada vez que marchamos, formaban sus líneas y nos sacaban de la universidad. Nunca pudimos continuar protestando”²⁹⁸.

Los estudiantes organizaron una gran marcha pacífica el **15 de diciembre de 2010**, desde el campus de la universidad hasta el Jardín Botánico, un edificio donde se encuentran la oficina del presidente de la UPR y otras oficinas de la administración central de la universidad, y que ha sido habitualmente escenario de protestas en el pasado. Delante del Jardín Botánico, en la Carretera Número Uno, los estudiantes organizaron un piquete, que bloqueó el tráfico. Llegaron más de un centenar de agentes de la Fuerza de Choque y, cinco minutos después, los estudiantes abandonaron el piquete y se marcharon de vuelta al campus para evitar que la policía los atacara. Cuando los manifestantes estudiantiles

estaban cerca del campus, doblaron en la Avenida Universidad, donde se toparon con un enorme muro formado por cientos de agentes de la Fuerza de Choque que caminaban hacia ellos. Aterrorizados, los estudiantes empezaron a caminar hacia atrás en dirección a la entrada de la universidad con los brazos entrelazados, y un grupo de profesores de la UPR salieron corriendo y formaron una cadena humana para proteger a los estudiantes del posible daño.

El **20 de diciembre de 2010**, el sexto día de la huelga, los estudiantes comenzaron una marcha pacífica en el edificio de Ciencias Naturales, donde corearon y cantaron consignas, y sostuvieron pancartas. Los agentes de la Fuerza de Choque volvieron a atacar a los manifestantes estudiantiles, a los que golpearon con largas macanas con puntas de metal, les dispararon gases lacrimógenos y arrestaron a estudiantes que estaban marchando y coreando consignas pacíficamente. Un agente de la Fuerza de Choque arrojó a la estudiante **Amada García** contra un muro, le rompió la cámara y le provocó una herida sangrante en un dedo, y le dijo: “Si no te estás quieta, te echo fuera [de la universidad]”²⁹⁹. García no pudo doblar dos de sus dedos durante dos meses y tiene una cicatriz en el dedo como consecuencia de la lesión sufrida ese día³⁰⁰.

Los agentes de la PPR dijeron a los estudiantes que tenían que irse porque estaban violando el reglamento que prohíbe las protestas en el campus, y forzaron violentamente a los manifestantes estudiantiles a salir del campus. Los estudiantes que intentaban huir de la violencia policial llegaron corriendo al edificio de Plaza Universitaria, situado frente a la entrada del campus. Allí, los agentes de la Fuerza de Choque acorralaron a los manifestantes estudiantiles, los macanearon, los agarraron con violencia y los arrojaron al suelo, y lanzaron gases lacrimógenos que crearon una densa nube de gas que los envolvió³⁰¹. Varios estudiantes sufrieron heridas. Arrestaron a 17 estudiantes durante el incidente y un juez determinó que sólo estaba justificado el arresto en ocho de estos casos.

En la mañana del **12 de enero de 2011**, un grupo de 15 estudiantes entraron en el edificio de Humanidades y colgaron pancartas que decían: “No hay razones para mantener la cuota, exigimos diálogo real”. Los estudiantes tocaban en las puertas de los salones y pedían permiso a los profesores para hablar con sus alumnos durante tres minutos y distribuir panfletos. Una treintena de agentes de la PPR llegó, entre ellos agentes del CIC. Los agentes del CIC dieron a los estudiantes un minuto para salir del edificio. Los estudiantes empezaron inmediatamente a caminar al piso inferior para salir del edificio, y 30 segundos después del aviso, los agentes arrestaron violentamente a los estudiantes. El estudiante **Roberto Morales** dijo a la ACLU que, mientras bajaba las escaleras para salir, dos agentes lo agarraron, uno por la espalda y otro por la camisa, los arrojaron violentamente al suelo bocabajo y lo esposaron apretándole de manera dolorosa las cintas de plástico³⁰². Los agentes lo pusieron de pie tirándole de los brazos, que tenía sujetos detrás de la espalda. El estudiante **Manuel Ortiz** dijo a la ACLU que los agentes lo arrestaron violentamente también, y que siguieron golpeándole aún luego de que hubiera levantado las manos como gesto de no resistencia³⁰³. Los agentes también golpearon a un estudiante con la punta de metal de una macana, y macanearon a otro.

Los agentes detuvieron a nueve de los varios estudiantes que estaban repartiendo panfletos y a una estudiante que simplemente iba al baño durante una clase y, cuando los agentes la arrestaron, se echó a llorar. En la comisaría de Hato Rey Oeste, los oficiales desconocían los nombres de los agentes que habían realizado los arrestos y la justificación para los mismos. Los estudiantes estuvieron encerrados en una celda durante ocho horas, hasta que los pusieron en libertad sin explicaciones. No les dieron comida mientras estuvieron recluidos y, cuando una de las estudiantes se quejó de que tenía hambre, un agente se agarró la entrepierna y le dijo: “Te puedes comer esto”. Uno de los estudiantes requirió tratamiento en un hospital y tuvo que tener el brazo inmovilizado debido a los macanazos que recibió. Ninguno de los estudiantes recibió denuncia y ninguno fue acusado de ningún delito.

El **13 de enero de 2011**, la fecha en que la universidad comenzó a tramitar el aumento de \$800 de la cuota, un numeroso grupo de estudiantes protestó frente a Plaza Universitaria, el edificio administrativo que alberga las oficinas en las que se procesan los pagos. Los estudiantes sostuvieron banderas que decían “¡no a la cuota!” y pancartas con consignas como “fuera la policía” y escudos caseros de madera y plástico, sobre algunos de los cuales se leía “a defender la UPR”. Los policías de la Fuerza de Choque desalojaron violentamente a los estudiantes con gases lacrimógenos, gas pimienta y macanas. Los estudiantes sufrieron lesiones, como el caso de una estudiante a la que partieron la ceja con un macanazo.

Estos estudiantes intentaron marchar pacíficamente por el campus de Río Piedras mientras coreaban consignas. Los agentes de la Fuerza de Choque continuaron persiguiéndolos y un agente comunicó por megáfono que la protesta era ilegal, y ordenó a los estudiantes que trasladaran la protesta fuera del campus. Luego, los agentes de la Fuerza de Choque obligaron a los estudiantes a salir del campus, hacia la Avenida Barbosa, una de las calles que delimitan el campus. Allí, la policía arrestó violentamente a algunos estudiantes. Los agentes de la PPR agarraron a los estudiantes con técnicas de estrangulamiento, usaron macanas para apretarles el cuello, y arrojaron a los estudiantes al suelo.

Ese día, la policía arrestó a seis estudiantes, cinco de los cuales fueron puestos en libertad posteriormente sin cargos. Uno de los arrestados fue el estudiante de derecho **Gamelyn Oduardo**, que marchaba pacíficamente por una acera cuando la policía lo golpeó con sus macanas y lo arrestó. Oduardo dijo: “Todavía lo veo en mis sueños. Vi a cientos de miembros de la Fuerza de Choque corriendo hacia nosotros. Nos bloquearon la salida. Un agente de la Fuerza de Choque me atacó con una macana, y los agentes gritaron: ‘¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo!’”³⁰⁴ Dijo: “En lugar de ponerme bajo arresto, me golpearon repetidamente...No estaban arrestándome, estaban golpeándome. No vi las esposas; lo que vi fueron macanas. Hasta que no me hicieron una llave [de estrangulación] no me arrestaron”³⁰⁵. Oduardo agregó: “En lugar de agentes de policía, parecían una banda de delincuentes”³⁰⁶. Durante su arresto, los agentes le ataron esposas de plástico a las muñecas de manera dolorosa y le dijeron reiteradamente que su protesta no servía de nada; experimentó dolores como consecuencia de los macanazos durante tres semanas. Oduardo también presenció cómo los agentes de la PPR arrojaban a otro estudiante

“como un saco de papas” y empezó a tener convulsiones cuando impactó el suelo. No obstante, los agentes de la PPR arrestaron al estudiante con convulsiones, quien empezó a vomitar en el autobús policial; y los agentes preguntaron a Oduardo y otros estudiantes arrestados si alguno de ellos sabían de medicina³⁰⁷. Un juez no halló causa probable para justificar el arresto de Oduardo.

El **19 de enero de 2011**, los estudiantes realizaron la primera sentada de la huelga. Se sentaron en las entradas de la universidad con los brazos entrelazados y las piernas cruzadas, mientras otros estudiantes estaban de pie cerca de ellos coreando consignas y sosteniendo pancartas. Mientras los estudiantes se sentaban y cantaban consignas con sus compañeros, la Fuerza de Choque les rodeó y formó un muro entre ellos y sus simpatizantes. Entonces, los agentes del CIC usaron puntos de presión como técnica de sometimiento violenta contra los estudiantes que participaban en la sentada. Estas técnicas dolorosas consistían en clavar los dedos debajo de las orejas y la mandíbula, para levantarlos por la fuerza y arrastrarlos ejerciendo una presión extrema en estos puntos. Otras técnicas de puntos de presión consistieron en causar dolor a los estudiantes apretándoles puntos debajo de la mandíbula, cerca del cuello o las orejas, o directamente en los ojos y la cuenca de los ojos. Los estudiantes se limitaron a resistirse pasivamente al arresto y no hicieron más que entrelazar los brazos y cruzar las piernas. En algunos casos, los agentes de la policía también usaron estas técnicas incluso después de esposarlos o restringirlos de otro modo seguro. Por ejemplo, los estudiantes presenciaron cómo la policía continuaba presionando la yugular y el cuello de **Ian Camilo Cintrón**, después de que cuatro agentes lo hubieran sometido y esposado sus brazos detrás de la espalda.

Uno de los estudiantes que participó en la sentada fue **Rafael Ojeda**, quien dijo a la ACLU que los agentes le habían aplicado presión en el cuello y la arteria carótida, y lo habían arrojado al suelo y pateado la espalda y el cuello cuando estaba bocabajo con los brazos detrás de la espalda. Un agente le torció la muñeca, lo que le provocó un dolor que duró dos semanas, y le dolieron las rodillas durante meses.

Arrestaron a 49 estudiantes en la sentada. Los estudiantes arrestados fueron denunciados por obstrucción de una vía pública, pero se informó que los jueces no hallaron causa probable para justificar sus arrestos y no se formularon cargos contra ninguno de ellos.

El **20 de enero de 2011**, los estudiantes realizaron la segunda sentada de la huelga. Alrededor de 20 a 25 estudiantes protestaron en cada entrada del campus. Los agentes de la PPR, incluyendo los de la Fuerza de Choque, aplicaron técnicas de puntos de presión contra los estudiantes que se resistían pacíficamente y estaban sentados con los brazos entrelazados. La estudiante de la UPR **Zulee Aguilar** explicó: “Era muy fácil ponerme las manos detrás de la espalda [y esposarme], pero en cambio me trataron como si fuera una criminal”; y agregó: “Las técnicas de tortura —porque eso es lo que son en realidad— me provocaron un dolor indescriptible, y me afectaron a la circulación y me dejaron una marca en el cuello”³⁰⁸.

El **25 de enero de 2011**, los estudiantes llevaron a cabo otra sentada en las puertas de la universidad. Los agentes de la PPR, entre ellos agentes de la Fuerza de Choque, arrestaron a los estudiantes uno por uno, y volvieron a aplicar técnicas de puntos de presión a cada uno de los estudiantes que se resistieron pasivamente. Uno de los arrestados fue un estudiante de derecho y fundador de la emisora estudiantil Radio Huelga, **Ricardo Olivero**, que estaba retransmitiendo en directo desde el evento y no estaba participando en la sentada. Los agentes de la PPR lo agarraron y, después de inmovilizarlo con los brazos detrás de la espalda, empezaron a aplicarle técnicas de puntos de presión sobre la arteria carótida. Olivero explicó: “Dolía una barbaridad —hay un nervio en el punto donde presionan— y me hizo marearme y perder totalmente el equilibrio”³⁰⁹. Según Olivero, cuando intentó hablar con los periodistas mientras se lo llevaban a rastras los agentes de la PPR, un agente lo agarró con fuerza por la cintura y le dijo: “Cierra la boca, no hables con la prensa”³¹⁰.

También el 25 de enero de 2011, los estudiantes intentaron organizar un piquete delante de las puertas de la universidad, en la calle, y los agentes de la policía montada los persiguieron. La estudiante de la UPR **Zulee Aguilar** dijo a la ACLU: “Estábamos corriendo, corrimos para protegernos y siguieron persiguiéndonos. Habían muchos caballos [de la policía]. Estábamos protestando sin ninguna violencia, ni siquiera estábamos deteniendo el tráfico ni interfiriendo con nada”³¹¹.

Durante el primer y el segundo día de clases del trimestre, **7 y 8 de febrero de 2011**, los agentes de la Fuerza de Choque impidieron por la fuerza que los estudiantes protestaran en diversos lugares, y disolvieron marchas pacíficas y una protesta que consistió en una lectura de poesía³¹².

El **9 de febrero de 2011**, la policía atacó violentamente a los estudiantes que estaban participando en una pintada delante de la Biblioteca Lázaro. Las pintadas, en las que los estudiantes pintan mensajes políticos de todo tipo en la acera y en la calle que queda frente a la biblioteca principal del campus, son una tradición en el campus de la UPR. La calle se denomina calle Consciencia en honor a esta tradición. Los estudiantes se reunieron para pintar mensajes como: “policía no”, “cuota no” y “defiende tu libertad, expresa lo que sientes”. Los agentes del CIC llegaron y empezaron a filmar a los estudiantes, mientras llegaban más policías. Los estudiantes empezaron a corear: “fuera, fuera, fuera policía”. Entonces llegó la Fuerza de Choque y roció en grandes cantidades a los estudiantes con gas pimienta. Los agentes de la Fuerza de Choque empezaron a golpear a los estudiantes con macanas y a perseguirlos. Los estudiantes corrieron al interior de la biblioteca con la intención de escapar de las golpizas; los agentes de la Fuerza de Choque intentaron perseguirlos, pero los empleados de la biblioteca ayudaron a los estudiantes a mantener las puertas cerradas. Los estudiantes estiman que alrededor de un centenar de agentes de policía, entre ellos agentes de la Fuerza de Choque y el CIC, participaron en el incidente.

La estudiante Shariana Ferrer Núñez dijo que la PPR fue tan violenta que pensó que la policía podía haber matado a un estudiante. Dijo: “La policía nos roció con gas pimienta cuando nos estábamos yendo, de espaldas a ellos. Desde ahí corrimos y corrimos por el

campus. Pero estábamos en el campus —una burbuja— por lo que no hay hacia dónde correr. La policía estaba en todas las entradas, en todos los edificios de las facultades. Podías intentar correr a un salón de clase, pero habría policía allí. No había donde esconderse. Éste es el incidente que más me marcó. Podías estar llorando en el suelo y sangrando por la cabeza, y la policía no paraba”³¹³. El estudiante **Roberto Morales** dijo a la ACLU: “Estábamos pintando tranquilamente y hablando entre nosotros, pero los policías estaban salvajes ese día. Estaban pegando y empujando a la gente sin razón. Fue bien malo, bien injusto y totalmente injustificado. Es obvio que no están de acuerdo con nosotros, y tienen el poder físico para pararnos. Ya que es político, es personal. El Superintendente de la Policía, la Rectora y el Gobernador están en contra de lo que creemos y lo que expresamos son nuestras creencias”³¹⁴.

Arrestaron a 28 estudiantes, entre ellos algunos que se dirigían simplemente a clase. Todos los estudiantes arrestados fueron puestos en libertad posteriormente sin cargos. **Zulee Aguilar** señaló que fue arrestada cuando los agentes de la Fuerza de Choque irrumpieron en uno de los edificios de las facultades donde resultó que estaba caminando, amenazaron a los estudiantes con macanas y les ordenaron que salieran del vestíbulo, a pesar de que muchos estudiantes estaban en clase o estudiando fuera del edificio en ese momento³¹⁵. **Guillermo Torres Grajales**, un estudiante de contabilidad que no formaba parte de la protesta, y que simplemente había llegado temprano para cambiar su horario de clases, fue golpeado y arrestado³¹⁶. Alrededor de cuatro agentes de la Fuerza de Choque golpearon con tanta fuerza a Torres Grajales con macanas que acabó con la cabeza y el brazo ensangrentados. Explicó que debido a la actuación de la PPR, se siente menos capaz de participar en protestas: “Tienes que quedarte callado o si no te arrestan”³¹⁷.

Muchos estudiantes, padres y otros familiares de estudiantes, profesores y otros funcionarios de la universidad estaban enfurecidos con la violencia policial, y marcharon junto con los estudiantes a la Rectoría. Esta gran multitud coreó pacíficamente consignas dentro del vestíbulo del edificio de la torre del reloj que alberga la oficina de la Rectora Guadalupe.

El presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, renunció al cargo el 11 de febrero de 2011. En una carta con fecha del 10 de febrero, el Presidente de la Torre solicitó al superintendente en ese momento, José Figueroa Sancha, que sacara a la policía. El 14 de febrero de 2011, se ordenó que la mayoría de la policía se retirara del campus, aunque quedaron algunos agentes.

En algunos casos aislados, ciertos estudiantes realizaron actividades ilegales. Sin embargo, estos incidentes no justifican el uso constante de la fuerza excesiva por la PPR contra manifestantes que no plantearon ninguna amenaza en otras ocasiones. El **11 de enero de 2011**, algunas personas que alegaron ser miembros de una pequeña organización militante del movimiento estudiantil, denominada “encapuchados” por llevar la cabeza cubierta, detonaron bombas de humo para interrumpir las clases que se estaban impartiendo a pesar de la huelga, rompieron ventanas y le dieron la vuelta a las mesas del comedor del Centro de Estudiantes. No se efectuaron arrestos, aunque la

policía estuvo presente durante todo el incidente. Los comités de coordinación del movimiento estudiantil emitieron declaraciones de repudio al vandalismo. El **7 de marzo de 2011**, los estudiantes rodearon el edificio de la facultad de Arquitectura, donde la Rectora Guadalupe asistía a una reunión, y algunos estudiantes la atacaron cuando intentaba salir del edificio. Estos estudiantes le halaron por el pelo y le rociaron con agua, a pesar del grupo de guardias de seguridad que la rodeaban. Los estudiantes también rompieron las ventanas de su automóvil.

VII. Falta de control policial de los delitos de violencia doméstica y agresión sexual

De manera sistemática, la PPR no protege a las víctimas de violencia doméstica ni investiga las denuncias de delitos de violencia doméstica y agresión sexual; incluso, no investiga los asesinatos de mujeres y jóvenes a manos de sus compañeros o esposos. La PPR no protege a las mujeres ni a jóvenes frente al abuso de sus compañeros y ex compañeros íntimos, ni tampoco responde a estos crímenes cuando se cometen. Además, la PPR no procura que las mujeres que se enfrentan a la violencia doméstica utilicen las opciones legales de que disponen, y no ejecuta adecuadamente las órdenes de protección vigentes mediante el arresto de los abusadores que las violan. La PPR tampoco está respondiendo ni investigando adecuadamente los crímenes de violación, e informa muchos menos de los que ocurren. Es más, la PPR ha registrado un número espantoso de denuncias de violencia doméstica a manos de agentes de la PPR, y el hecho de que la PPR no controle la violencia doméstica dentro de la misma policía es sintomático de una disfunción institucional más grande sobre la capacidad de vigilar esta conducta y otros delitos sexuales y crímenes basados en el género.

a. Falta de prevención de los homicidios de compañeras íntimas

La PPR no está previniendo los asesinatos de mujeres y jóvenes a manos de sus esposos, compañeros y ex compañeros. A nivel mundial, Puerto Rico tiene la tasa más alta de asesinatos de mujeres mayores de 14 años por sus compañeros. Las cifras son inquietantes y continúan subiendo: 107 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros íntimos durante el período de cinco años que va de 2007 a 2011. El número de mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos aumentó significativamente en 2011 a 30 asesinatos, esto frente a los 19 registrados en 2010. Según la prensa, 21 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros íntimos tan sólo en los primeros seis meses de 2011³¹⁸. En 2006, la PPR informó de 23 asesinatos de mujeres a manos de sus compañeros o esposos, lo que situó a Puerto Rico en el primer puesto dentro de una lista internacional que compara el número de mujeres asesinadas por sus compañeros anualmente en cada país/territorio por cada millón de mujeres mayores de 14 años³¹⁹.

Para poner en perspectiva las altas tasas de homicidios por violencia doméstica en Puerto Rico, la ACLU examinó el número de mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos en Los Ángeles, que tiene una población cercana a la de Puerto Rico (según el censo de 2010, la población de Puerto Rico era de 3,726 millones y la de Los Ángeles era 3,793 millones). En 2011, 30 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros íntimos en Puerto

Rico; mientras que en Los Ángeles, cinco mujeres fueron asesinadas por sus compañeros ese mismo año³²⁰. Durante el período de cinco años que va de 2007 a 2011, 107 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros íntimos en Puerto Rico, y, en Los Ángeles, 42 mujeres fueron asesinadas³²¹.

Las 30 mujeres asesinadas por sus compañeros tan sólo en 2011, no sólo constituye un incremento enorme en Puerto Rico, sino que es significativamente superior a la tasa que cabría esperar en función de las cifras nacionales para Estados Unidos. El DOJ estima que la tasa de homicidios por compañeros íntimos a víctimas mujeres equivale a 1.07 por cada 100,000 mujeres residentes al año (esta es la cifra de 2007, la estadística más reciente disponible).³²² Las cifras del censo reflejan que habían 2,063.918 mujeres en Puerto Rico en 2009. Basado en el índice nacional de Estados Unidos de homicidios por compañeros íntimos y la población de Puerto Rico, sería de esperar que el número de mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos durante el transcurso de un año fuese alrededor de un 27% más bajo (22 mujeres).

Tabla 4: Homicidios de mujeres por sus compañeros íntimos en Puerto Rico en comparación con Los Ángeles, 2006-2011³²³

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos en Puerto Rico	30 ³²⁴	19	16	26	16	23
Mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos en Los Ángeles ³²⁵	5	8	5	10	14	N/A

Desafortunadamente, la respuesta e intervención adecuadas de la PPR podrían haber prevenido estos trágicos asesinatos. El reciente asesinato de la enfermera de 44 años Wanda I. Camacho Meléndez es un ejemplo emblemático de la falta sistemática por parte de la PPR para proteger las mujeres de sus compañeros y ex compañeros violentos. Camacho Meléndez fue asesinada a cuchilladas, presuntamente por su ex compañero, Alexander Rodríguez Vélez, el 14 de febrero de 2012³²⁶. Camacho Meléndez había recurrido en repetidas ocasiones a la policía para pedir protección frente a su compañero, que la había amenazado de muerte y maltratado en numerosas ocasiones³²⁷. El 12 de noviembre de 2011, solicitó la asistencia de la división de violencia doméstica de la PPR en Fajardo, y señaló que su esposo le había clavado un cuchillo una semana antes, el 5 de noviembre de 2011³²⁸. La policía no puso en marcha ninguna investigación luego de su denuncia, y no tramitó el caso como una agresión o un crimen de violencia doméstica³²⁹. En cambio, la policía lo consideró un caso de acoso y procesó su petición de una orden de protección, la que fue concedida a Camacho Meléndez³³⁰.

El 16 de noviembre de 2011, Camacho Meléndez regresó a la policía para denunciar que Rodríguez Vélez había violado la orden de protección³³¹. Según las informaciones de prensa, denunció que había roto una tubería de gas y la había llamado al hospital donde trabajaba para decirle que iba a “verla muerta”³³². Un agente de la PPR dijo que consultó la oficina del fiscal de distrito, quien no halló causa probable para acusar a Rodríguez

Vélez de violar la orden de protección, porque el registro de llamadas del hospital no registró la llamada³³³. Desde entonces, la oficina del fiscal de distrito dijo a los periodistas que la PPR nunca les informó del incidente de acuchillamiento anterior³³⁴.

El 14 de diciembre de 2011, Rodríguez Vela volvió a violar la orden de protección al ir a la casa de Camacho Meléndez; donde había una vecina en ese momento. Se formularon cargos contra él por violar la orden, pero no lo llevaron preso³³⁵.

El 14 de febrero de 2012, Rodríguez Vélez volvió a violar la orden de protección acercándose a Camacho Meléndez³³⁶. Llevaba un grillete con dispositivo de GPS, que alertó a la policía de que había violado la orden de protección. La policía no siguió los protocolos, que requieren ponerse en contacto inmediatamente con la víctima de violencia doméstica para advertirle que su maltratador había violado la orden y estaba cerca³³⁷. Rodríguez Vélez apuñaló a Camacho Meléndez en la espalda, la cara y el abdomen, y murió como consecuencia de las heridas³³⁸. Rodríguez Vélez ha sido acusado de asesinato, intento de asesinato y violación de las leyes sobre armas, y se le ha impuesto una fianza de \$6.5 millones³³⁹.

En otros casos no se han revelado tan flagrantemente los fallos de la PPR, pero los siguientes casos plantean una seria preocupación por la falta de protección de las mujeres frente a sus abusadores. La información de los siguientes casos de mujeres presuntamente asesinadas por sus compañeros y esposos en 2011 se basa en informes públicos y de los medios de comunicación. No se ha determinado definitivamente la culpabilidad o la inocencia en algunos de estos casos, y en otros, el litigio penal está pendiente. Dada la dificultad para obtener información sobre estos casos, salvo cuando el caso apareció en los titulares de la prensa, esta investigación se basa sobre todo en los casos denunciados por los medios de comunicación locales.

Tabla 5: Mujeres asesinadas por sus compañeros y esposos en Puerto Rico en 2011

Nombre	Edad	Fecha	Descripción
María Margarita Ramos García	56	8 de enero de 2011	María Margarita Ramos García, de 56 años, fue la primera víctima de un homicidio a manos de un compañero íntimo en 2011. Según las informaciones de prensa, su esposo por más de 30 años, José Cruz Martínez, de 58 años, la mató mientras dormía. Después de disparar a su esposa en la cabeza se quitó la vida. La policía halló ambos cuerpos en la cama cuando respondió a una llamada de su hija, Yaska Cruz Ramos, quien aparentemente empezó a preocuparse cuando su madre no respondió al teléfono ³⁴⁰ .
Elisa Rosa ("Elirosa") Figueroa Pagán	29	9 de enero de 2011	Elirosa Figueroa Pagán, de 29 años y madre de una niña de siete años, recibió presuntamente 15 machetazos mortales de

			<p>su ex compañero, Víctor Amaro Texidor, en el municipio de Patillas. Amaro también hirió presuntamente al ex esposo de Figueroa Pagán en el ataque. Según las informaciones de prensa, Figueroa Pagán había dejado a Amaro unos días antes para reconciliarse con su ex esposo, quien también era el padre de su hija. Según se informó, se habían formulado cargos contra Amaro en 2007 por violar la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), basados en las denuncias de violencia doméstica presentadas contra él por una novia anterior. También se informó que Amaro tenía pendiente una orden de arresto dictada un mes antes del ataque, por no comparecer a una vista sobre cargos de agresión en contra del ex esposo de Figueroa Pagán. A Amaro se le radicarón cargos por asesinato en primer grado, dos cargos de intento de asesinato e infracciones relacionadas con armas³⁴¹.</p>
Moraima Muñiz Muñiz	39	15 de enero de 2011	<p>Moraima Muñiz Muñiz, de 39 años de edad, madre de cuatro hijos y estudiante de enfermería, fue presuntamente asesinada a cuchilladas por su ex novio, Modesto Tosado Nieves, de 56 años, en el Túnel de Guajataca, un túnel de ferrocarril al lado de la playa. Muñiz fue asesinada poco después de poner fin a su relación de tres años. Se informó de que Tosado Nieves la había asesinado delante de su hijo de 18 años, quien llamó al servicio de emergencia. Cuando, posteriormente, la policía se llevó detenido a Tosado Nieves, éste aparentemente tenía heridas que correspondían a un intento de suicidio. Según María, la hermana de Muñiz, antes del asesinato, Tosado Nieves había amenazado con hacerle daño a Muñiz si no regresaba con él. Tosado Nieves fue acusado de asesinato en primer grado y violación de la ley de armas³⁴².</p>
Sasha Hernández	30	22 de enero de 2011	<p>Sasha Hernández Alemar, de 30 años, fue presuntamente asesinada por su ex novio,</p>

Aleamar			<p>Abed Nego González Vélez, de 35 años. Según las informaciones de prensa, la acuchilló 26 veces en la cancha de béisbol del complejo residencial Río Cristal, en el centro urbano de Mayagüez, donde vivía con su abuela y sus hijas de 6 años y 12 años. Se informó que Hernández Aleamar había residido durante un tiempo en un albergue para mujeres maltratadas de Ponce, donde González Vélez la había encontrado y reanudado su relación. Según las informaciones de prensa, se había trasladado con su abuela cuando se separaron por segunda vez. González Vélez, aparentemente, confesó al periódico puertorriqueño <i>Primera Hora</i> que mató a Hernández Aleamar cuando le dijo que tenía un nuevo novio. González Vélez fue acusado de asesinato en primer grado y violación de la ley de armas³⁴³.</p>
Iris Nidia Lugo García	23	28 de enero de 2011	<p>Iris Nidia Lugo García, de 23 años, fue asesinada por su ex compañero, Francisco Mercedes, de 45 años, quien le disparó dos veces en la cara cuando estaba sentada en su automóvil. Ellos se habían separado varios meses antes. Mercedes se quitó la vida después en el mismo vehículo³⁴⁴.</p>
Wilmary Vázquez Hernández	24	4 de febrero de 2011	<p>Wilmary Vázquez Hernández, 24 años, fue presuntamente acuchillada mortalmente por su ex esposo, José Ramón Maldonado Bones, de 34 años, en Villa Kennedy, en el municipio de Loíza. Aparentemente, Maldonado Bones le propinó golpes y cuchilladas en el abdomen, la espalda, los brazos y las manos con dos cuchillos debido a una discusión sobre los pagos de la pensión de su hijo. Se informó que su hijo de tres años presenció parte del asesinato, y que una amiga que estaba con ella huyó con el niño durante el ataque. La suegra de Maldonado Bones dijo a un reportero de Wapa Televisión que tenía un historial de violencia doméstica contra mujeres. Maldonado Bones fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en tercer grado y violación de la ley de</p>

			armas ³⁴⁵ .
Claribel Rivera Wilson	38	9 de marzo de 2011	Claribel Rivera Wilson, con 38 años y cuatro hijos, falleció el 9 de marzo de 2011 en el Centro Médico de Río Piedras, siete días después de que su compañero, Reinaldo Díaz Alvarado, de 40 años, le disparara en la cabeza. Se informó que el hijo de 15 años de Rivera Wilson presenció el asesinato. Díaz se suicidó posteriormente, al parecer con la misma arma empleada para matar a Rivera Wilson ³⁴⁶ .
Marina Guiador Díaz	37	5 de marzo de 2011	Marina Guiador Díaz, de 37 años, fue asesinada a golpes por su compañero. Junto a su cuerpo, encontraron el cadáver de su compañero, José Manuel Ventura, de 38 años, quien murió ahorcado ³⁴⁷ .
Sandra Villafañe Silva	39	16 de marzo de 2011	Sandra Villafañe Silva, madre de dos hijos, fue acuchillada 50 veces por su esposo de 20 años, Alberto Bracero Morales, en la gasolinera que operaban juntos. Llevaban separados tres meses cuando se produjo el asesinato. Se informó que Bracero Morales se suicidó después de matar a su esposa ³⁴⁸ .
Helen Pérez Darnet	32	27 de marzo de 2011	Helen Pérez Darnet, de 32 años, fue asesinada a disparos por su compañero en su apartamento en el sector de Puerto Nuevo, en San Juan, donde llevaban viviendo juntos diez meses antes del asesinato. El asesinato tuvo lugar delante de al menos seis testigos, entre ellos sus tres hijos de 5, 14 y 16 años ³⁴⁹ .
María de Lourdes Cortés Rosado	45	29 de marzo de 2011	María de Lourdes Cortés Rosado, de 45 años, y un amigo fueron presuntamente asesinados a tiros por su ex esposo, con el que estuvo 15 años, Héctor Manuel Rivera Cruz, de 39 años, en el municipio de Añasco. Se informó que el esposo de Cortés Rosado disparó tres tiros contra su amigo y tres tiros contra ella cuando los vio besándose. Rivera Cruz, quien aparentemente confesó los crímenes, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado ³⁵⁰ .
Gloria Hernández Orsini	47	30 de marzo de 2011	La hija de Gloria Hernández Orsini, con 47 años y madre de cuatro hijos, encontró a su madre asesinada a cuchilladas en un

			estacionamiento de un centro comercial en Ponce. Su compañera íntima de cinco años, Madeline Gonzáles Torres, la acuchilló presuntamente diez veces. Gonzáles Torres fue acusada de asesinato ³⁵¹ .
Frances Feliciano Cappas	17	7 de abril de 2011	La estudiante de secundaria de 17 años Frances Feliciano Cappas presuntamente recibió un disparo en la cabeza por Kevin William Díaz Olán, su novio de 17 años, en Yauco. Se informó que una amiga de la adolescente había presenciado el disparo. Olán llevó a su novia, que ya sufría muerte cerebral al hospital, donde aparentemente ofreció versiones contradictorias de los hechos. Finalmente, los padres de la muchacha tomaron la decisión de remover la asistencia de vida artificial y donar sus órganos. Díaz Olán fue acusado posteriormente de asesinato en primer grado ³⁵² .
Aida Cruz Ivette Ortiz	47	23 de abril de 2011	Aida Cruz Ivette Ortiz, de 47 años y madre de dos hijos, quien trabajaba de secretaria en una clínica hospitalaria para niños y adolescentes, fue aparentemente asesinada a cuchilladas por su compañero, Hipólito Sevilla Sevilla, de 63 años, en el municipio de Gurabo. Según los familiares de Ivette Ortiz, en el pasado había denunciado a Sevilla ante la PPR por violencia doméstica. Se informó que Sevilla, quien trabajaba de guardia de seguridad, la había amenazado en múltiples ocasiones, y la había perseguido con una pistola durante un incidente anterior. Sevilla fue acusado de asesinato en primer grado, violación de la ley de armas y violencia doméstica ³⁵³ .
Rosaura Sánchez Cruz	28	6 de mayo de 2011	Según los reportes de prensa, Eduardo Feliciano Álvarez, de 32 años, escaló ocho pisos del edificio del condominio de su ex compañera por los balcones, para entrar en el apartamento donde su ex pareja, Sánchez Cruz, de 28 años, dormía con sus dos hijos de dos y seis años en el pueblo de Aguadilla. Según se reportó, ellos habían sido pareja desde que ella tenía 12 años. Al parecer, mató a tiros a Sánchez Cruz delante

			de sus hijos cuando intentaba escapar por un pasillo, e hirió a su hijo de dos años, el que ella llevaba en brazos. Feliciano Álvarez se suicidó después con la misma pistola que usó para matar a su ex compañera. Se informó que Feliciano Álvarez había sido acusado de violencia doméstica en 2010, como consecuencia de una denuncia presentada por una pareja anterior ³⁵⁴ .
Linda Rivera Cruz	44	8 de junio de 2011	Linda Rivera Cruz, con 44 años y cuatro hijos, fue hallada muerta por su hija de 12 años en el apartamento de su novio por aproximadamente un año, Rocafor Carrero Morales, de 56 años. Se reportó que la habían apuñalado ocho veces. Los vecinos dijeron a los periodistas que habían sido testigos de las amenazas de muerte de Carrero Morales a Rivera Cruz en ocasiones anteriores. Se informó que Carrero Morales había sido condenado por violencia doméstica como consecuencia de una denuncia presentada por su ex esposa en 2007 ³⁵⁵ .
Josmarie Serrano Fonseca	20	18 de junio de 2011	Josmarie Serrano Fonseca, de 20 años, fue asesinada a tiros por su esposo y padre de sus tres, Alvin Hermina Vélez, de quien estaba separada. Se informó que la pareja, cuyos tres hijos desde ocho meses hasta cinco años de edad, se había separado varias semanas antes del asesinato. Hermina Vélez fue acusado de asesinato en primer grado y violación de la ley de armas. Como parte del acuerdo con la fiscalía, Hermina Vélez se declaró culpable de asesinato en segundo grado y violación de la ley de armas, y fue condenado a 65 años en prisión ³⁵⁶ .
Brunilda Torres Sánchez	62	11 de julio de 2011	Brunilda Torres Sánchez, de 62 años, fue asesinada con un machete por su compañero de 10 años, Modesto Pérez Román, quien luego la enterró en el patio de la casa que compartían en Lajas. Pérez Román, se confesó a la policía, fue acusado de asesinato en primer grado, violación de la ley de armas y destrucción de evidencia. En diciembre de 2011, Pérez Román se declaró

			culpable de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia ³⁵⁷ .
Eulalia Texidor Ortiz	54	17 de julio de 2011	Eulalia Texidor Ortiz, madre de tres hijos y profesora de inglés a punto de retirarse; fue asesinada por su esposo de 30 años, Teddy Lugo Almodóvar de 55 años de edad, de quien llevaba dos años separada. Lugo Almodóvar le disparó diez veces mientras su nieto de cuatro años veía televisión en la habitación del lado y luego se quitó la vida. Se informó que Lugo Almodóvar amenazó y maltrató físicamente a Texidor Ortiz en ocasiones anteriores, y que su hija alegadamente presentó una querrela contra él en la PPR por abusar de su madre, aunque luego la retiró ³⁵⁸ .
Marta Iris Marrero Estrada	44	15 de agosto de 2011	Marta Iris Marrero Estrada fue asesinada por su esposo, José Meléndez Marrero, con un machete, quien había sufrido aparentemente episodios de paranoia en los días previos al asesinato. La pareja tenía cuatro hijos, que tenían de 6 a 24 años de edad. De acuerdo a sus hijos, Meléndez Marrero se encerró en una habitación con su esposa, Marrero Estrada desde hace 25 años. La hija de 18 años de la pareja intentó abrir la puerta cuando oyó gritar a su madre; dijo que su padre salió de la habitación con un machete en la mano mientras su madre yacía en el suelo con una herida sangrante en el cuello. Méndez Marrero se ahorcó en la terraza mientras su hija intentaba ayudar a su madre, quien murió a consecuencia de sus heridas. Se informó que la hija de 20 años se había ido de la casa la noche anterior e intentó convencer a su madre que se fuera con ella ³⁵⁹ .
Jennifer Toro Hurtado	26	11 de noviembre de 2011	Jennifer Toro Hurtado, de 26 años, recibió un disparo en la cabeza de su esposo, Nelson Crespo Feliciano, de quien estaba separada, delante de sus tres hijas en un supermercado de Aguadilla. Crespo Feliciano se disparó después en la cabeza y murió días más tarde. Toro Hurtado había obtenido una orden de protección temporera contra Crespo Feliciano en julio de 2011.

			<p>El 22 de septiembre de 2011, el Juez Rafael Ramos encontró culpable a Crespo Feliciano por violar la orden de protección debido a su acoso constante a su esposa, le impuso una fianza de \$5.000 y ordenó que le instalaran un dispositivo de vigilancia electrónica mediante un grillete. Sin embargo, Crespo Feliciano no cumplió la orden y no se le instaló el sistema de vigilancia con grillete. Seis días después, Toro Hurtado solicitó una extensión de la orden de protección, la cual iba a vencer ese día, y declaró que su esposo había violado la orden anterior y seguía amenazándola de muerte. El Juez Diomedes González retrasó la vista al 20 de octubre, y de nuevo al 8 de noviembre, para que Crespo Feliciano tuviera tiempo de encontrar un abogado. Wanda Vázquez Garced, Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha dicho que la decisión del Juez González fue “negligente” por no tomar en cuenta el testimonio creíble de Toro Hurtado, corroborado por el historial de violencia doméstica de Crespo Feliciano y las recientes amenazas de muerte. Según la Procuradora de las Mujeres, el día anterior a la vista del 8 de noviembre de 2011 en relación con la solicitud de Toro Hurtado de extender la orden de protección, Crespo Feliciano fue arrestado por no cumplir la orden de someterse al grillete electrónico, pero el 10 de noviembre, el Juez Rafael Ramos volvió a ponerlo en libertad con una fianza adicional de \$5.000. Toro Hurtado no fue informada de la puesta en libertad de su esposo, quien le disparó al día siguiente³⁶⁰.</p>
--	--	--	--

Además de los casos descritos anteriormente, se están investigando otros ocho casos, en los que se sospecha que las víctimas fueron asesinadas por sus compañeros: Julia García Cruz, de 21 años; Raisa González González, de 28 años; Lorenis Karen Mejías Contreras, de 30 años; Tayra Linnette Torres, de 22 años; Tatiana Delgado Flores, de 23 años; Marisol Rivera Rivera, de 49 años; Lizyeisha Reyes Marrero, de 25 años; y Eneida Montañez Beltrán, de 25 años³⁶¹. Los defensores de los derechos de la mujer de Puerto Rico han reclamado una investigación completa de estos y otros casos, y han citado

pruebas descubiertas por periodistas que indican que los compañeros o ex compañeros de las víctimas cometieron los homicidios.

b. Fracaso para responder a incidentes de violencia doméstica

La PPR no hace suficiente para asegurarse de que las mujeres que se enfrentan a la violencia doméstica utilicen las opciones legales disponibles, y fracasa en hacer cumplir las órdenes de protección vigentes mediante el arresto de los abusadores que violan sus condiciones. Los defensores de los derechos de la mujer han descrito la violencia doméstica en Puerto Rico como “un estado de emergencia nacional”, y la policía no está respondiendo adecuadamente a los crímenes de violencia doméstica³⁶². Según el DOJ: “El incesante fracaso de la PPR para afrontar efectivamente la violencia doméstica y violación en Puerto Rico es claro y, en conjunto con sus deficiencias institucionales, puede alcanzar el nivel de un patrón y práctica de violaciones de la Decimocuarta Enmienda y el Acta de Calles Seguras”³⁶³.

En julio de 2011, durante la vista de confirmación ante la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, le preguntaron al Superintendente de la Policía, Díaz Colón, recientemente sustituido, acerca de las muertes provocadas por la violencia doméstica que habían ocurrido en la isla; a lo que respondió que la violencia doméstica es una cuestión privada y está fuera de la competencia de la PPR. Dijo a los periodistas: “Bueno, estos dos temas que usted ha señalado son actividades que no son parte directa de las funciones que tiene la Policía de Puerto Rico. Posiblemente estén dirigidos a otras agencias que puedan trabajar con eso”³⁶⁴.

De las mujeres asesinadas por sus compañeros íntimos desde 1991 a 1999, sólo el 17% tenían órdenes de protección, un escaso 2% de los asesinos tenían órdenes de arresto pendientes y en el 4% de los casos había vencido el plazo de las órdenes de protección³⁶⁵. En 2007, el 25% de las mujeres asesinadas por sus compañeros habían denunciado incidentes de violencia doméstica a la PPR³⁶⁶. Muy pocas mujeres buscan protección de sus compañeros abusivos, en parte debido a la desconfianza y falta de fe en un sistema que no está ofreciendo protección adecuada a las víctimas.

Los activistas de Puerto Rico señalan que se están produciendo arrestos y la policía no está cumpliendo otras responsabilidades normativas. La policía no está aplicando la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54, promulgada en 1989. La Ley 54 es una ley integral sobre violencia doméstica que dispone medidas penales, civiles y preventivas. Con respecto a las sanciones penales, la ley restringe la discreción policial y requiere detención inmediata cuando hay un delito de maltrato doméstico³⁶⁷. También dispone el derecho a cuidado médico inmediato cuando sea necesario, el derecho a presentar una denuncia a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, y el derecho a obtener una orden de alejamiento, entre otras disposiciones.

Un estudio de 2006 sobre las prácticas de Puerto Rico en el manejo de casos de violencia doméstica identificó deficiencias significativas en los sistemas de justicia civil y penal, incluyendo la PPR, con respecto a la violencia doméstica. El informe observó que existen retrasos significativos en adjudicar órdenes de protección, debido en parte a

la confusión sobre la responsabilidad de la PPR en la entrega de ordenes *ex parte* y órdenes de comparecencia para órdenes finales de protección, que resultan en retrasos en el servicio; dramática insuficiencia en el cumplimiento de órdenes de protección; la contratación de personal inadecuado en las unidades especializadas en violencia doméstica, tanto de la PPR como de las fiscalías, que imposibilita atender todos los casos de violencia doméstica; la falta de adecuada recopilación de pruebas e investigación por parte de la PPR; y la falta de coordinación consistente entre la policía y la fiscalía en el desarrollo de casos de violencia doméstica³⁶⁸. Además, generalmente no se efectúan arrestos por violaciones de órdenes de protección judiciales.

Un porcentaje significativamente elevado de incidentes de violencia doméstica que se denuncian a la PPR no terminan en condenas, debido en parte a la falta de cooperación entre la policía y los fiscales en el desarrollo de los casos³⁶⁹. Según los datos facilitados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, se entregan alrededor de 20,000 órdenes de protección al año y se denuncia un número comparable de incidentes de violencia doméstica a la policía, mientras que menos de 500 condenas por violencia doméstica se imponen al año³⁷⁰. Según un estudio encargado por el DJPR y realizado por investigadores de la UPR, la violencia doméstica es el delito que más se comete en Puerto Rico, pero tiene la menor tasa de condenas, considerando el porcentaje de incidentes denunciados a la policía que resultan en condenas³⁷¹. El estudio halló que de los aproximadamente 20,000 incidentes de violencia doméstica que se denuncian a la policía cada año, sólo el 17% resultó en condenas³⁷². Las estadísticas del DJPR para el año fiscal 2003 a 2004 (que en Puerto Rico es del 1 de julio al 30 de julio) indican que de los aproximados 21,000 incidentes de violencia doméstica denunciados a la PPR ese año, el DJPR interpuso querellas criminales en el 19% (4,072) de ellos y sólo el 12.3% (2,586) resultaron en condenas³⁷³.

Estas cifras sobre condenas relacionadas a la violencia doméstica son inferiores al promedio nacional de Estados Unidos. Un informe del National Institute of Justice, que examinó las acusaciones y enjuiciamiento de compañeros íntimos entre 1973 y 2006 en 120 jurisdicciones mayormente urbanas en 44 estados y el Distrito de Columbia, concluyó que el promedio de arrestos era del 63.8%, y el promedio de enjuiciamientos penales del 27.4%³⁷⁴.

El estudio de 2006 sobre la respuesta a la violencia doméstica en Puerto Rico concluyó que, para resolver el problema de la escasez de arrestos y condenas por violencia doméstica, la policía y la fiscalía tienen que mejorar su colaboración en la tramitación de casos y crear procedimientos coherentes para desarrollar los casos. Esto incluye crear e implementar procedimientos congruentes para la redacción de informes exhaustivos de incidentes, fotografías de las escenas del crimen y de todas las lesiones, diagramas anatómicos que señalen la ubicación de las lesiones y documentación médica, con el fin de reunir pruebas adecuadas que fundamenten los cargos penales y posibiliten el enjuiciamiento con éxito de los casos³⁷⁵.

Además, es baja la tasa de denuncias de incidentes de violencia doméstica por parte de las víctimas, teniendo en cuenta la población de Puerto Rico y las tasas nacionales de

violencia doméstica en Estados Unidos. Como medida del desempeño de la respuesta de los departamentos de policía a la violencia doméstica, el National Institute of Justice ha observado que, partiendo de las tasas reales de violencia doméstica determinadas por las encuestas a las víctimas, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deberían estar respondiendo de 8 a 9 incidentes por cada 1,000 mujeres cada año, y de 2 a 3 por cada 1,000 hombres³⁷⁶. Partiendo de esta cifra y de las estadísticas del censo de 2010 que sitúan a la población de Puerto Rico en 1,785,171 hombres y 1,940,618 mujeres, la PPR debería estar recibiendo de 15,525 a 17,466 denuncias de mujeres y de 3,570 a 5,356 denuncias de hombres; es decir un total de 19,095 a 22,822 denuncias anuales, una cifra superior a las 16,962 denuncias que la PPR dijo recibir en 2010. El National Institute of Justice señaló: “si la incidencia de la violencia doméstica registrada en las encuestas a las víctimas es significativamente superior al nivel denunciado en realidad por las víctimas a las agencias de la ley, se debe aumentar la sensibilización comunitaria y se deben abordar los obstáculos para la presentación de denuncias. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen que fomentar que el resto de la comunidad cumpla con su parte, y los fiscales tienen que colaborar con los agentes si estos incidentes no están llegando a los tribunales”³⁷⁷.

Tabla 6: Incidentes de violencia doméstica registrados por la Policía de Puerto Rico³⁷⁸

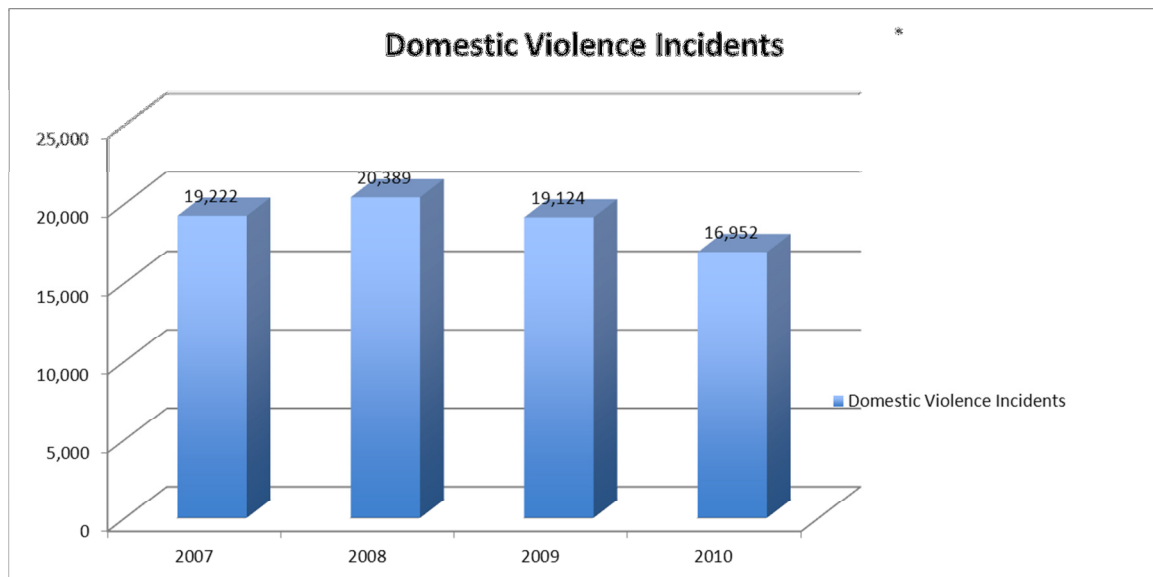


Tabla 7: Órdenes de protección solicitadas o dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en comparación con los incidentes de violencia doméstica registrados por la Policía de Puerto Rico³⁷⁹

	2011	2010	2009	2008	2007
Número de órdenes de protección solicitadas	27,934	29,089	28,971	30,552	30,620
Número de órdenes de protección dictadas	18,391	19,260	19,504	20,293	20,258
Número de incidentes de violencia doméstica registrados por la PPR	N/A	16,952	19,124	20,389	19,222

c. Fallo en respuesta a las violaciones sexuales

La PPR no está respondiendo ni investigando adecuadamente los crímenes de violación, e informa un número significativamente menor a los ocurridos. La PPR informó que sólo se cometieron 39 violaciones forzadas en 2010, mientras que registró también 1,000 homicidios durante ese mismo año. Partiendo de los datos de los departamentos de policía de todo Estados Unidos, sería de esperar que la cifra de violaciones fuera 100 veces superior a la registrada por la PPR, ya que otras jurisdicciones de Estados Unidos registran alrededor de cuatro veces más violaciones que homicidios.

El número de violaciones forzadas denunciadas ha disminuido exponencialmente: de 426 en 1990 a 39 —menos de una décima parte— en 2010. Mientras la tasa de violaciones denunciadas se ha reducido considerablemente en los últimos diez años, pasando de 228 violaciones forzadas en 2000 a 39 en 2010, la tasa de asesinatos ha experimentado un crecimiento marcado durante el mismo período, lo que indica que la disminución del crimen no es la causa del reciente nivel sospechosamente bajo de las estadísticas sobre violaciones.

La diferencia sin precedentes entre las violaciones forzadas y los asesinatos denunciados se debe con mucha probabilidad a que la PPR no cumple los protocolos para responder, registrar e investigar los delitos de violación. En el caso de la violencia sexual, las fuentes oficiales estiman que sólo se denuncia el 16% de las violaciones³⁸⁰. En su último estudio, publicado en 2007, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud de Puerto Rico estimó que 18,000 personas, sobre todo mujeres y niñas, son víctimas cada año de la violencia sexual en Puerto Rico³⁸¹.

Tabla 8: Violaciones forzadas registradas por la Policía de Puerto Rico³⁸²

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Violaciones forzadas	39	65	95	97	118	169	199	204	241	187	228

	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989
Violaciones forzadas	223	243	178	316	324	396	401	433	424	426	509

d. Violencia doméstica por agentes de la PPR

La PPR ha registrado un número preocupante de denuncias de violencia doméstica en contra de agentes de la PPR, y el hecho de que la PPR no controle la violencia doméstica entre sus propias filas, es sintomático de una disfunción institucional del departamento de la policía para monitorear esta conducta y otros delitos sexuales y delitos basados en el género. Entre 2005 y 2010, la PPR registró 1,500 denuncias de violencia doméstica contra agentes de policía³⁸³. Es probable que la cifra real de crímenes de violencia doméstica cometidos por agentes sea significativamente superior debido a la falta de denuncias, ya que es improbable que las sobrevivientes presenten o persigan denuncias ante el mismo departamento de policía que emplea a su compañero o ex compañero abusivo. El DOJ ha identificado al menos 84 agentes activos que han sido arrestados dos o más veces por incidentes de violencia doméstica³⁸⁴. Recientemente, múltiples casos en los que agentes de la PPR dispararon a sus esposas con sus armas reglamentarias, y en algunos casos acabaron con su vida, han recibido gran publicidad.

En su informe sobre sus conclusiones acerca de la PPR, el DOJ señaló: “las políticas y prácticas de la PPR son alarmantemente inadecuadas en prevenir y atender incidentes de violencia doméstica cometidos por agentes de la PPR. Encontramos que estas deficiencias ocasionarán violaciones constitucionales a menos que sean atendidas”³⁸⁵. Según el DOJ, la falta de respuesta de la PPR a los incidentes de violencia doméstica cometidos por agentes de la policía “puede considerarse como evidencia de una intención discriminatoria”³⁸⁶.

Con frecuencia, la violencia doméstica cometida por un agente en su casa ayuda a predecir la violencia que empleará durante el ejercicio de su deber fuera de casa. Los registros de denuncias de civiles en contra de agentes de la policía—que se han hecho públicas durante la fase de presentación y examen de pruebas previa al juicio de una serie de demandas civiles de indemnización por muertes y lesiones provocadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía—han revelado que, en numerosos casos, se habían formulado denuncias por violencia doméstica contra el agente demandado. Judith Berkan, una abogada de derechos civiles que ha representado a numerosas víctimas de brutalidad policial, dijo a la ACLU que, en la mayoría de los casos que había manejado de uso excesivo de fuerza, había denuncias previas por violencia doméstica contra el

agente demandado; según dijo, en un caso, un solo agente tenía registradas en su expediente disciplinario 24 denuncias hechas por civiles alegando agresión³⁸⁷.

VIII. Impunidad total: Falta de investigación y castigo de la brutalidad policial

Existen numerosos factores de peso que son responsables por los abusos profundamente enraizados, de amplio alcance y larga duración contra los derechos humanos que han sido documentados por la ACLU. Nuestra investigación ha observado que los sistemas existentes de investigación, disciplina y presentación de informes resultan enormemente inútiles para abordar, y por lo tanto prevenir, los abusos policiales. En concreto, hemos documentado el fracaso de los siguientes sistemas: el sistema de investigación, que no examina eficazmente el uso de la fuerza ni las alegaciones de mala conducta policial; los sistemas disciplinarios y otros sistemas de rendición de cuentas, que no sancionan de manera significativa la mala conducta de los agentes; y el sistema de presentación de informes, que no requiere que los agentes reporten los incidentes de uso de fuerza o incidentes críticos como la participación de agentes en tiroteos.

Estos sistemas garantizan virtualmente la impunidad: en lugar de disuadir los abusos exigiendo cuentas a los agentes responsables, la PPR permite que los agentes eludan el castigo y cualquier otra consecuencia, y vuelve a armarlos y movilizarlos en el servicio activo, donde con frecuencia repiten sus infracciones. Las quejas ciudadanas de brutalidad, fuerza letal y fuerza excesiva languidecen durante años sin resolverse. Es raro que se sancione administrativamente o se enjuicie criminalmente a los agentes abusivos. La PPR no hace un seguimiento de la conducta reincidente de los agentes que violan la ley o que acumulan historiales significativos de quejas de la población. El hecho de que no se apliquen sistemas de alerta temprana para detectar a los agentes abusivos y localizar a los agentes con un alto riesgo de cometer abusos ha provocado la pérdida evitable de numerosas vidas.

Los sistemas de investigación, disciplina y presentación de informes de la PPR dan el visto bueno al uso de la fuerza, encubren el abuso cometido por sus agentes y fomentan un código de silencio. Documentamos un sistema disciplinario que retiene, protege e incluso asciende a los agentes que hacen un uso letal o excesivo de la fuerza. Se trata de un sistema disciplinario que retuvo a un agente abusivo después de que un psicólogo de la policía lo calificara como “bomba de tiempo”, para que después ejecutara a un hombre desarmado en la calle; otorga medallas de valor a agentes involucrados en la muerte a tiros de un hombre que padecía de una enfermedad mental mientras la investigación oficial sobre el uso de fuerza en este caso estaba en proceso; y restituye a un agente que había retenido al jefe de la policía local a punta de pistola, lo vuelve a armar después de que hubiera estado detenido ocho veces y lo envía de nuevo a patrullar a pie un residencial público donde mató a tiros a un muchacho desarmado de 18 años.

También documentamos un sistema de investigación en el que no se entrevista a testigos o se ignoran las versiones de testigos presenciales que contradicen las de los agentes.

Documentamos un fracaso sistemático para investigar de manera exhaustiva y castigar el uso de la fuerza excesiva, incluyendo la fuerza letal. La PPR no investiga ni sanciona siquiera los casos en que personas desarmadas y que no representan amenaza alguna han sido asesinadas por agentes de la policía. Las quejas de ciudadanos sobre brutalidad, uso de fuerza letal y fuerza excesiva languidecen durante años sin resolverse. Las querellas administrativas presentadas por víctimas de brutalidad policiaca no suelen tener resultados, los agentes involucrados en los casos documentados por la ACLU no fueron sancionados administrativamente, y es raro que se formulen cargos penales contra los agentes infractores.

En 2007, como respuesta a los muchos casos escandalosos de violencia policiaca, incluyendo las ejecuciones y otras conductas negligentes, numerosas organizaciones como la ACLU de Puerto Rico, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y otras organizaciones no gubernamentales, exigieron que el Gobierno tomara medidas para abordar la crisis. En septiembre de 2007, el entonces superintendente de la PPR creó un comité encargado de realizar una evaluación externa de los problemas de violencia y corrupción en Puerto Rico y formular recomendaciones. El denominado Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico realizó una investigación de cinco meses sobre la organización, la estructura, el adiestramiento, el reclutamiento, la supervisión, la disciplina y otras políticas de la PPR. El comité publicó dos informes sobre sus observaciones en diciembre de 2007 y mayo de 2008, en los que concluyó que había una práctica de violaciones de los derechos civiles por miembros de la PPR y recomendó una serie de reformas para prevenir la violencia policial y mejorar los sistemas de investigación y disciplina³⁸⁸. Hasta la fecha, la PPR no ha adoptado medida alguna para implementar las recomendaciones del Comité Evaluador Externo de mejorar los mecanismos existentes de investigación y disciplina.

La impunidad del departamento de policía tiene consecuencias humanas, como la pérdida evitable de vidas. La ACLU documentó la implicación de agentes de la PPR en múltiples casos de uso de fuerza letal o excesiva. Por ejemplo, uno de los agentes de la policía involucrados en la muerte a tiros de Jorge Luis Polaco Jiménez, de 28 años de edad, (quien en octubre de 2007 recibió siete disparos en la espalda estando desarmado y bajo custodia policiaca), es también uno de los oficiales involucrados en la paliza propinada por la policía a Julio Cirino, de 62 años, el 23 de febrero de 2011. Julio Cirino se encontraba en su casa y quedó inconsciente y fue hospitalizado por un coágulo de sangre en el cerebro y por otras lesiones. La investigación policiaca del asesinato de Polaco había sido superficial y totalmente inadecuada; y hasta la fecha, los agentes no han sido acusados de ningún crimen ni sometidos a medidas disciplinarias por su participación en los disparos³⁸⁹.

En otro caso de un agente implicado en dos instancias de uso de fuerza letal, el mismo agente (Efraín Burgos Montes) estuvo presuntamente implicado en la muerte por disparos de Erick Sánchez Vargas, el 4 de septiembre de 2003, y en la muerte a golpes del joven de 19 años José Luis “Gordo” Irizarry Pérez, el 4 de noviembre de 2008, ambos en Yauco³⁹⁰. En el caso de agosto de 2007 de Miguel Cáceres Cruz, el padre de 43 años de tres hijos que recibió cuatro disparos cuando estaba bocabajo en el suelo, dos de los tres

agentes de policía involucrados habían presenciado el asesinato por parte de la policía de Nelson Santiago, de 21 años de edad, en un festival juvenil una semana antes, y no habían sido interrogados acerca de este suceso. Los dos agentes también eran conscientes de que los agentes involucrados en ese asesinato injustificado habían gozado de total impunidad y, de hecho, ni siquiera les habían quitado las armas reglamentarias después del asesinato.

a. Graves deficiencias en el proceso de investigación: Fracaso para registrar querellas civiles y para investigar las quejas registradas de abusos policiales

La ACLU documentó numerosos problemas con el proceso de admisión de quejas e investigación que provocaron una situación de impunidad por el uso excesivo de la fuerza y otros abusos policíacos, como los retrasos excesivos, la falta sistemática de una investigación exhaustiva de los casos, y la falta de aceptación y registro de querellas de ciudadanos que quieren denunciar los abusos cometidos por agentes de la PPR.

A menudo, **las querellas administrativas se tardan años en resolver**, debido en parte a los muchos pasos que existen para completar el proceso de investigación y los tremendos retrasos en el trabajo de los investigadores y los examinadores asignados por la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional y la División Legal (el largo proceso y los múltiples pasos se explican en detalle en la siguiente subsección C). Un antiguo superintendente auxiliar de la PPR dijo a la ACLU que cuando empezó un examen de las políticas de la PPR después de su nombramiento, en noviembre de 2010, la PPR tenía investigaciones pendientes desde la década de 1990, algunas de las cuales llevaban pendientes ocho años y sin resolverse³⁹¹. Según las conclusiones de la investigación del DOJ: “Muchos de los agentes y superintendentes informaron que las investigaciones podrían tardar hasta diez años o más en completarse”³⁹². En su informe de diciembre de 2007, el Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico constató que existe un retraso de 5,000 denuncias en cualquier momento dado, mientras que se presentan alrededor de 3,000 a 4,000 querellas al año³⁹³.

También se producen retrasos excesivos cuando las quejas se someten a la investigación de presuntos crímenes cometidos por agentes de la policía. Cuando existen evidencias de conducta criminal, el NIE del Departamento de Justicia de Puerto Rico asume jurisdicción de la investigación. Según un previo superintendente auxiliar de la PPR, el NIE es responsable de tremendos retrasos y sus investigaciones se alargan para “siempre”³⁹⁴. El Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico concluyó, de manera similar, que las investigaciones realizadas por el NIE pueden durar años³⁹⁵.

La PPR **tampoco realiza en absoluto una investigación exhaustiva de quejas** sobre el uso excesivo de la fuerza y otros abusos policiales. La ACLU documentó numerosas deficiencias graves en las investigaciones de la PPR de presuntos casos de mala conducta y abuso, como la falta de ejecución de tareas de investigación tan básicas como tomar fotos de las lesiones de los denunciantes infligidas por agentes o entrevistar a testigos de

incidentes de uso excesivo de la fuerza. Las deficiencias documentadas por la ACLU incluyen:

- no entrevistar a todos los agentes de policía involucrados en un asesinato u otro incidente de abuso o los testigos, y no hacerlo de manera inmediata y adecuada;
- no obtener información detallada, ni declaraciones escritas no concluyentes de los testigos o de todos los agentes involucrados en un asesinato u otro incidente de abuso.
- no consultar a testigos presenciales, que no son policías, o no registrar sus declaraciones;
- no recopilar ni preservar pruebas forenses como casquillos de bala, residuos de disparos y sangre de la ropa de las víctimas y los agentes;
- no realizar exámenes forenses de las pruebas pertinentes de la escena del crimen, de los agentes involucrados y de la víctima;
- no documentar las presuntas lesiones a la víctima, y no obtener y evaluar pruebas tales como la documentación médica de lesiones provocadas por el uso de la fuerza;
- no obtener ni examinar pruebas fotográficas o videográficas;
- no realizar investigaciones inmediatamente;
- no asegurarse de que los agentes de la policía investigados sean retirados de las labores de terreno y desarmados mientras estén pendientes investigaciones de abusos graves.

El asesinato por parte de la policía de Jorge Luis Polaco Jiménez, un afrodescendiente de 28 años de edad ejecutado extrajudicialmente por la policía el 4 de octubre de 2007, demuestra claramente que la PPR no realizó una investigación competente de una querrela civil. Polaco recibió siete disparos en la espalda cuando estaba bajo custodia de la policía, y la investigación policiaca de su asesinato fue superficial y totalmente inadecuada: la policía no entrevistó a testigos presenciales y no suministró un informe de su investigación a la madre de Polaco³⁹⁶. La madre de Polaco, Ruth Jiménez de Jesús presentó múltiples quejas a la PPR, pero no recibió respuesta alguna excepto que la investigación estaba cerrada³⁹⁷. Contrató a un investigador privado que localizó a un testigo presencial del arresto de su hijo no entrevistado por la policía. Este dijo haber presenciado cómo la policía disparó a su hijo una vez en la parte frontal del hombro antes de llevárselo arrestado, evento que ocurrió una hora y media antes de ingresarlo muerto en el hospital con siete heridas de bala en la espalda³⁹⁸. La policía afirmó posteriormente que habían actuado en defensa propia, pero el investigador privado descubrió que Polaco estaba desarmado y que sólo llevaba un dólar y las llaves de su casa en los bolsillos³⁹⁹. Según la madre de Polaco, los investigadores de la PPR no efectuaron ninguna prueba forense de la ropa de su hijo o de los agentes⁴⁰⁰. Teniendo en cuenta la declaración de los agentes de la policía de que habían actuado en defensa propia, la madre de Polaco se cuestiona por qué la PPR no realizó ninguna prueba de residuos de pólvora en los uniformes policiales y no examinó a los agentes para determinar si tenían heridas que indicaran que su hijo había opuesto resistencia⁴⁰¹.

El Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico evaluó las políticas y las prácticas de la PPR en relación con las quejas, las investigaciones y la disciplina, y publicó dos informes con conclusiones y recomendaciones⁴⁰². El comité identificó graves deficiencias en el procesamiento de querellas y los mecanismos de investigación de la PPR. Según la abogada Nora Vargas, miembro del Comité Evaluador Externo:

“Como miembro del Comité Evaluador, participé en el examen del proceso de quejas. Miramos las estadísticas y otros datos suministrados por la Policía, y entrevistamos al jefe de la división. Era aparente el número de quejas que no se resuelven, nunca se investigan o se investigan deficientemente, la falta de capacitación de los encargados de la investigación, el largo proceso y el tiempo que lleva investigar o resolver la reclamación, la falta de notificación y de participación del denunciante. También somos conscientes de la manera en que los agentes disuaden a los ciudadanos de presentar una querella contra agentes de policía”⁴⁰³.

La ACLU detectó también numerosos problemas con la admisión y seguimiento de quejas con los denunciantes, como los siguientes:

- intimidación de posibles denunciantes e intentos de disuadirlos de que presenten o prosigan con una reclamación;
- concentración en socavar el caso denunciado en lugar de documentar la mala conducta denunciada del agente;
- negativa a procesar una querella o realizar una investigación porque la víctima no podía identificar el nombre y el número de placa del agente responsable del abuso;
- falta de información a los denunciantes sobre la situación de su reclamación, la situación o las conclusiones de la investigación, o cualquier medida disciplinaria adoptada;
- negativa a aceptar o procesar quejas.

Las víctimas, sus familiares y sus abogados informaron a la ACLU que, cuando intentaron denunciar la mala conducta policial, los agentes se mostraron intimidantes y hostiles, y estaba claro que no querían aceptar una reclamación sobre un colega. En algunos casos, **los agentes amenazaron o intentaron disuadir a los posibles denunciantes**, o expresaron su incredulidad acerca de sus alegaciones.

El abogado Enrique G. Juliá Ramos (quien representa al menos a 40 estudiantes de la UPR, ha ejercido de abogado penal y civil durante muchos años, y ha representado a numerosas víctimas de abuso policiaco en demandas civiles contra la PPR y sus agentes) describió los numerosos obstáculos a los que se han enfrentado tanto él como sus clientes cuando han intentado denunciar el abuso policial. Dijo a la ACLU: “En primer lugar, [la policía] desvía el proceso. Cuando presentas una queja, alguien de la División Legal toma una declaración jurada y desvía el proceso con sus preguntas. Por ejemplo, en un caso de abuso policiaco en una gasolinera, su primera pregunta es: ‘¿Cuánto alcohol consumió ese día?’ La investigación del funcionario se centra en menoscabar al

denunciante, en lugar de determinar qué pasó realmente”.⁴⁰⁴ Juliá Ramos agregó: “En segundo lugar, la queja no va a ningún sitio. El agente que disparó en [la protesta de] el Capitolio tenía siete u ocho querellas contra él en ese momento; y fue ascendido de sargento a teniente a pesar de todas estas quejas. En todos estos casos de brutalidad policiaca, los agentes tienen múltiples quejas contra ellos”.⁴⁰⁵ Prosiguió diciendo: “En tercer lugar, si logras que la queja supere la vista inicial, todos los agentes son miembros del sindicato policial y empiezan a movilizar a la comunidad”.⁴⁰⁶ Juliá Ramos señaló que ahora duda de molestarse siquiera en presentar quejas debido a estos obstáculos.

En numerosos casos documentados por la ACLU, las víctimas de abuso policiaco señalaron que los agentes de la PPR les habían dicho que **no podían proceder con una queja o una investigación porque no podían identificar el nombre o el número de placa del agente involucrado**. Juliá Ramos describió el caso de uno de sus clientes, José “Osito” Pérez Reisler, que fue electrocutado múltiples veces por la policía cuando estaba protestando en el Hotel Sheraton, el 20 de mayo de 2010, y a quien la policía había golpeado y le había sustraído su computadora portátil días antes en el campus de la UPR⁴⁰⁷. Juliá Ramos dijo que ni él ni su cliente recibieron respuesta alguna después de presentar una queja ante la PPR el 14 de mayo de 2010, y de enviar una carta de seguimiento el 4 de agosto de 2010, en la que se explicaban en detalle ambos incidentes.⁴⁰⁸ Él y su cliente regresaron a la comisaría de la policía el 24 de noviembre de 2010 para preguntar en persona por el estado de la querella.

Según Juliá Ramos, la agente de la PPR que los atendió en la comisaría era “muy negativa” y “dijo que era difícil porque hay muchos policías de todas partes de la isla y tenía que saber quién fue el agente que lo arrestó” para poder poner en marcha una investigación⁴⁰⁹. Aunque el incidente con la pistola paralizante fue grabado en vídeo, en las imágenes no se ve parte de la cara del agente y la ficha policial de Pérez Reisler no contiene el nombre del agente que efectuó el arresto. Juliá Ramos dice que, cuando preguntó por la computadora de su cliente, la agente le preguntó si Pérez Reisler había ido a las casas de empeños para ver si habían empeñado su computadora⁴¹⁰. En diciembre de 2010, Juliá Ramos envió un DVD con las imágenes de la electrocución a la PPR y, el 5 de abril de 2011, se comunicó por última vez con la PPR acerca de la queja, y un agente de policía le dijo que no podían hacer nada porque “era tan difícil identificar al agente” que electrocutó a Pérez Reisler⁴¹¹.

Varias víctimas de la mala conducta policial que sí presentaron quejas dijeron a la ACLU que se habían desplazado a la comisaría a presentar una reclamación, para lo que tuvieron que suministrar su dirección particular, y que estaban aterrorizados cuando la policía se presentó posteriormente en su casa. Estos hombres y mujeres dijeron a la ACLU que no estaban seguros de por qué los agentes los habían visitado o intentado visitarles en sus casas. En varios de estos casos, los denunciantes dijeron a la ACLU que **retiraron posteriormente la querella por miedo a las represalias de la policía**, y consideraron que la visita de los agentes era una muestra intencional de que estaban vigilándoles y sufrirían represalias si proseguían con su querella.

También documentamos numerosos casos en los que los agentes se negaron a iniciar y procesar querellas de civiles que se dirigieron a ellos para presentar quejas en el terreno o en una comisaría en relación con el uso excesivo de la fuerza u otros abusos policiales. Por ejemplo, como consecuencia de los eventos del Capitolio del 30 de enero de 2010, numerosos manifestantes que habían sufrido el abuso policial intentaron presentar quejas a la policía, pero los agentes se negaron a aceptar o registrar las denuncias. En su informe sobre los incidentes ocurridos en el Capitolio el 30 de junio de 2010, la Comisión Especial del Colegio de Abogados de Puerto Rico también concluyó que: “En varias ocasiones los policías se negaron a aceptar las querellas criminales de ciudadanos que deseaban denunciar la conducta criminal de otros agentes del orden público”⁴¹². La Comisión Especial documentó varios casos específicos de personas que intentaron presentar quejas y no les dejaron, o que presenciaron cómo los agentes de la policía rechazaban otras posibles denuncias⁴¹³.

El abogado Hans Perl-Matanzo, quien ha representado a varias víctimas de la brutalidad policiaca, dijo a la ACLU que presenció cómo un agente de la PPR se negó a aceptar quejas en tres ocasiones. Explicó: “Hay innumerables personas, incluidos abogados, a los que los agentes de la policía les han negado directamente, sin ninguna razón legítima, su derecho a presentar una querella o formular cargos. Esta negativa directa a recibir quejas ha ocurrido de manera sistemática y generalizada, y sucede incluso cuando se intenta pedir a agentes superiores, entre ellos oficiales de alto rango, que acepten las quejas u ordenen a sus subordinados que cumplan su obligación legal”⁴¹⁴.

Es más, un número significativo de víctimas de abuso policiaco dijeron a la ACLU que **no presentaron una queja porque no tienen fe en los sistemas de investigación y disciplina de la PPR**. Una víctima de abuso policiaco dijo a la ACLU: “Una queja no valdría ni el valor del papel en el que está escrita”. Otra dijo a la ACLU: “No presenté una queja a la policía porque sentí que no serviría de nada —no tengo confianza en la policía”⁴¹⁵. Consideran correctamente que es muy poco probable que se exijan responsabilidades a los agentes que los maltrataron.

Numerosas víctimas de abuso policiaco dijeron a la ACLU que **decidieron no presentar una queja por miedo a las represalias** de los agentes involucrados. La estudiante de la UPR, Amada García, dijo a la ACLU: “Primero, no podía presentar una queja porque no tenía el número del agente de policía porque él no llevaba una placa de identificación. Segundo, habría tenido que poner mi información de contacto en la querella, y no me siento segura si la policía tiene mi nombre, mi dirección y mis números de teléfono. Todos tenemos miedo de lo que vaya a pasar si presentamos una queja. Realmente es un miedo colectivo, de que nos vayan a poner bajo vigilancia o perseguirnos, y lo que nos pasará en nuestro futuro profesional”⁴¹⁶. Otros estaban preocupados porque la presentación de una queja afectara los cargos que tenían pendientes como consecuencia del arresto en el que se produjo el incidente de abuso.

Finalmente, la PPR deja la responsabilidad en manos de las víctimas que tienen que presentar una queja y, en la práctica, generalmente, no han puesto en marcha investigaciones, incluso cuando los medios de comunicación han expuesto pruebas

creíbles del abuso, basándose en que las víctimas no se decidieron a iniciar una querrela. Los funcionarios del Gobierno han reiterado a la ACLU que no podían investigar los presuntos abusos, incluso los incidentes bien conocidos en los que era fácil identificar a los agentes responsables, porque las víctimas no habían presentado quejas. La PPR tiene autoridad para iniciar una investigación interna de la presunta brutalidad policiaca sin una queja formal, y debería hacerlo.

b. Fracaso del sistema de disciplina de la policía: Falta de responsabilizar a los agentes

La ACLU documentó numerosos problemas en el proceso interno de sanciones disciplinarias de la PPR que provocaron la impunidad por el uso excesivo de fuerza y otros abusos policiales. Las graves deficiencias del sistema disciplinario que identificamos incluyen lo siguiente:

- falta de sanciones, sanciones menores, temporales o inadecuadas por la mala conducta y el abuso;
- anulación o reducción sistemática de las sanciones disciplinarias recomendadas, incluyendo las suspensiones temporales o los despidos permanentes, por los organismos encargados de evaluar y establecer posibles medidas disciplinarias;
- falta de atención a la conducta reincidente de los agentes que usan repetidamente la fuerza excesiva o agentes contra los que se han presentado múltiples quejas, lo que indica que existe un alto riesgo de que cometan abusos nuevamente;
- falta de desarme de los agentes involucrados en incidentes de uso excesivo de la fuerza, incluyendo uso de fuerza mortal, contra sospechosos desarmados;
- rearme rápido de los agentes después de los incidentes;
- retrasos excesivos en el proceso disciplinario administrativo, durante el cual los agentes investigados generalmente se mantienen armados y pueden continuar operando;
- evaluaciones pro forma;
- falta de cumplimiento de las políticas relativas a los agentes que regresan al servicio después de suspensiones por motivos disciplinarios;
- posibilidad de los agentes negarse a declarar durante las investigaciones disciplinarias administrativas.

Es raro que los agentes tengan que rendir cuentas por los abusos. Según los registros de la PPR, de 2004 a 2010, los ciudadanos presentaron 27,395 quejas de la mala conducta de agentes de la PPR. Durante ese período, sólo se recomendó la expulsión de 884 agentes, una cifra que equivale a poco más del 3% de las quejas presentadas. Es probable que el número de agentes realmente expulsados de la fuerza sea significativamente inferior debido a que las órdenes se anulan con frecuencia⁴¹⁷. Durante ese período, no se sometieron quejas administrativas al máximo organismo de apelación que examina las medidas disciplinarias, la Comisión de Investigaciones, Procesos y Apelaciones (CIPA)⁴¹⁸.

El sistema disciplinario de la PPR es prácticamente idéntico al sistema existente en 1989, cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictaminó, en el caso *Gutiérrez-Rodríguez v. Cartagena*, que el sistema disciplinario de la PPR era “tremendamente deficiente” y confirmó una indemnización por daños contra el superintendente de la PPR y otros supervisores⁴¹⁹. En dicho caso, el tribunal del Primer Circuito concluyó: “Como declaró el experto en prácticas y procedimientos policiales, se trataba de un sistema disciplinario que repetía los mismos trámites procesales sin ninguna intención de encontrar la verdad”⁴²⁰.

El experto en prácticas policiales en ese caso, Lou Reiter, fue el anterior jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles y ejerció como agente de policía en activo durante 20 años. Ha sido citado como perito en prácticas policiales en alrededor de 40 casos civiles en Puerto Rico y fue nombrado monitor en la corte federal para un acuerdo en California. Recientemente, como perito en una demanda civil presentada por la viuda y los hijos de Miguel Cáceres Cruz (el padre de tres hijos cuya muerte por tres disparos de la policía fue grabada en vídeo), Reiter concluyó que en 2010 el sistema disciplinario de la PPR continúa promoviendo la impunidad y no exige cuentas a los agentes por los abusos. Reiter también concluyó que la PPR “ha decidido crear un sistema y un entorno organizativo destinado a no exigir cuentas a los agentes por la mala conducta y el abuso de los ciudadanos” y que esto “puede conducir a usos no razonables de la fuerza y la fuerza mortal”⁴²¹. Concluyó que los supervisores se mostraban “deliberadamente indiferentes en su supervisión, control y monitoreo del uso de la fuerza, incluso la fuerza mortal, por los agentes sobre el terreno”⁴²². También concluyó que los agentes están conscientes de la impunidad general por el uso no razonable de la fuerza y uso de fuerza mortal “y de la falta de exigencia de cuentas a los agentes por la mala conducta o el uso inapropiado, no razonable y excesivo de la fuerza”⁴²³. Finalmente, observó que sería esencial la creación de sistemas que sigan prácticas razonables para las investigaciones disciplinarias administrativas para establecer “el ambiente dentro del... organismo para que los agentes sepan que tendrán que rendir cuentas por sus actuaciones”⁴²⁴.

La ACLU encontró que **no hay un proceso para hacer un seguimiento o monitorear los expedientes disciplinarios de los agentes con el fin de detectar la conducta abusiva reiterada**, identificar patrones de mala conducta o adoptar medidas para sacar a los agentes reincidentes de la fuerza policial. La PPR no revisa o da seguimiento a los historiales de cada agente con el fin de detectar agentes sobre los que pesan múltiples quejas o existen otras indicaciones que existe un alto riesgo de que cometan abusos, con el fin de que los supervisores puedan adoptar medidas adecuadas para prevenir nuevos episodios de mala conducta. De hecho, la PPR no realiza ningún examen periódico de los expedientes disciplinarios de su personal, que incluyen información sobre el número de quejas contra un agente, las características de las denuncias y su resolución. La PPR no cuenta con una base de datos automatizada y digitalizada para identificar a los agentes contra los que se han presentado múltiples quejas, y mantiene muchos expedientes disciplinarios en papel, en lugar de archivos digitalizados. La PPR carece de este tipo de sistema de alerta temprana a pesar de su Orden Especial 90-5 sobre “conducta repetitiva”, que requiere que los supervisores observen la conducta que podría acarrear problemas

que requieran un nuevo adiestramiento, para someter dicha conducta a la atención del superintendente⁴²⁵.

El proceso disciplinario administrativo está plagado de **retrasos excesivos**, durante el cual los agentes investigados se mantienen generalmente armados y pueden continuar en sus funciones. El retraso del proceso de investigación se debe en parte a que, después de que la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional completa su investigación de una queja, no impone una medida disciplinaria; en cambio, el expediente se remite a la División Legal, la cual decide si recomienda una medida disciplinaria⁴²⁶. Hay **retrasos** en estos dos niveles⁴²⁷. A partir de ese momento, el expediente se remite al Superintendente, quien tiene plena discrecionalidad para decidir si está de acuerdo o no con la medida disciplinaria recomendada por la División Legal⁴²⁸. Dado que la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional procesa todas las quejas de mala conducta en el orden en que se reciben —incluidas las quejas por infracciones leves como desobedecer órdenes e ineptitud, así como por abusos graves como arresto ilegal y agresión injustificada— existe un retraso y no se da prioridad a los casos en función de la gravedad de la presunta infracción⁴²⁹. La PPR ha afirmado que tiene previsto modificar el proceso de investigación, lo que conllevaría la creación de una matriz de investigación que establecería distintos procesos en función del nivel de fuerza empleada, pero no ha introducido ni implementado los nuevos procedimientos⁴³⁰.

El proceso de investigación administrativa, que conlleva 14 pasos discrecionales, ofrece a los agentes **muchas oportunidades de apelar las sanciones propuestas** y, en muchos casos, los agentes acusados de mala conducta se salen con la suya. Cuando la PPR intenta despedir a un agente, éste o ésta puede apelar la orden de despido ante múltiples organismos. Dado que los supervisores y los organismos que evalúan e instituyen las posibles medidas disciplinarias están claramente a favor de los agentes, muchos agentes abusivos evitan la suspensión temporal, el despido permanente y otras sanciones disciplinarias. Incluso cuando un superintendente propone la suspensión de un agente mediante un “Me propongo” suspender por una queja fundada, estas propuestas no se ejecutan o se anulan con frecuencia.

Los 14 pasos del proceso disciplinario son:

- Un ciudadano presenta una queja administrativa.
- La Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (antes de Integridad Pública) refrenda la queja.
- La queja se remite a la División de Investigaciones Administrativas (antes Oficina de Integridad Pública) a nivel de región/zona, que puede asumir su investigación o remitirla a otra región/zona.
- Las quejas se investigan primero a nivel de región/zona. El investigador entrega un informe al jefe de región/zona de la División de Investigaciones Administrativas.
- El jefe regional/de zona de la División de Investigaciones Administrativas aprueba un informe que incluye las conclusiones relacionadas con cualquier

violación, y puede incluir una recomendación de una sanción administrativa como una advertencia, amonestación, suspensión o expulsión.

- El informe se remite a la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, que abarca toda la isla y puede aceptar o rechazar la recomendación.
- La decisión de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional se somete a la División Legal, que tiene autoridad para modificar la recomendación.
- La recomendación se remite a continuación al Superintendente de la PPR, que tiene plena discrecionalidad para decidir si se impone una sanción y qué sanción se impone.
- El Superintendente de la PPR redacta una carta, denominada Me propongo, en la que propone una sanción disciplinaria. La sanción propuesta no es una decisión final, incluso cuando se trata de una expulsión.
- El agente puede presentar un recurso interno contra cualquier sanción propuesta. El agente puede solicitar una audiencia administrativa ante funcionarios asignados por la División Legal.
- El funcionario de la División Legal encargado de la audiencia emite un informe, que incluye una recomendación de una sanción administrativa, si procede, al Director de la División Legal.
- El caso se vuelve a remitir a la División Legal, que examina las pruebas y puede formular recomendaciones adicionales.
- El caso se remite de nuevo al Superintendente o el Superintendente Asociado de la PPR, que puede aceptar o rechazar la recomendación del funcionario encargado de la audiencia y/o la División Legal.
- La decisión del Superintendente o el Superintendente Asociado es la decisión final del departamento, que el agente puede apelar a la CIPA.

Cualquier medida disciplinaria que supere los 13 pasos anteriores puede recurrirse ante el último organismo de apelación, la CIPA, donde se revocan y reducen o anulan totalmente muchas órdenes de suspensión o expulsión. Este organismo, que ofrece un proceso a los agentes que quieran apelar una sanción disciplinaria impuesta por el Superintendente de la Policía o su Superintendente Asociado. En numerosos casos, la CIPA ha ordenado la readmisión de agentes cuyo despido de la fuerza policial había sido ordenado debido al uso ilegal de la fuerza.

El caso de septiembre de 1993 de Miguel Díaz Martínez, agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales, ilustra los problemas sin resolver que plagan el sistema disciplinario de la PPR. El agente Díaz Martínez tomó como rehenes al superintendente en funciones y otro funcionario a punta de escopeta en una comisaría de policía, después de atacar y amenazar con matar a su esposa⁴³¹. Había sido arrestado ocho veces durante sus primeros cinco años de servicio en la fuerza de policía y, en el momento del incidente de la toma de rehenes, acumulaba cerca de dos docenas de quejas contra él por conducta violenta y/o amenazante. Se suspendió inicialmente y se ordenó la expulsión de Díaz Martínez de la fuerza policial tras el incidente con los rehenes, pero la CIPA ordenó su readmisión en la PPR poco después y le devolvieron su revólver reglamentario⁴³². El día después de su regreso al servicio activo, mientras Díaz Martínez vigilaba un complejo en Bayamón, mató a tiros al joven de 18 años José Rivera, quien estaba desarmado, y

disparó en la pierna a su hermana adolescente, María Rosario Díaz⁴³³. Rivera no se detuvo rápidamente cuando el agente le pidió su identificación a la entrada del complejo donde vivía. De manera asombrosa, Díaz Martínez siguió en la fuerza durante varios meses y recibió una certificación psiquiátrica que lo declaró apto para el servicio activo sin restricciones; hasta que atacó, arrestó y encarceló a Grancid Camilo, un guardia de seguridad de los tribunales que insistió en que el agente de policía no podía estacionarse en el estacionamiento de un juez⁴³⁴.

El caso de Javier Pagán, el agente que disparó a Miguel Cáceres Cruz en 2007, ilustra la enorme falta de exigencia de cuentas en la PPR a los agentes por mala conducta, detección de agentes de alto riesgo y medidas para asegurarse de que no cometen abusos aún más graves. Cuando disparó al padre de tres hijos desarmado, el agente Pagán tenía acumuladas múltiples quejas administrativas, había sido calificado de “bomba de tiempo” por un psicólogo de la policía y dos superintendentes distintos habían recomendado su expulsión debido a su mala conducta anterior⁴³⁵. El agente Pagán había sido ascendido a la Unidad de Operaciones Tácticas cuando estaba pendiente a resolverse la segunda recomendación de expulsión⁴³⁶. Finalmente, las dos expulsiones se rebajaron a suspensiones antes de que matara a Cáceres⁴³⁷. Cuando Pagán fue finalmente expulsado de la fuerza policial tenía dos querellas civiles pendientes, ambas presentadas ocho años antes⁴³⁸.

c. Falta de registro, presentación de informes y examen adecuados del uso de la fuerza, los disparos con agentes involucrados y otros incidentes críticos

La PPR no registra, presenta informes, examina ni analiza incidentes tales como el uso de la fuerza, los disparos con agentes involucrados y otros incidentes críticos como la descarga de un arma de fuego. Según Max Pérez Bouret, ex superintendente auxiliar de Servicios Administrativos, no existen protocolos que exijan ningún informe especial sobre el uso de la fuerza, los disparos con agentes involucrados u otros incidentes críticos. En cambio, sólo se requiere a los agentes de la PPR que presenten informes ordinarios de incidentes después de cualquier uso de la fuerza, incluso de la fuerza mortal contra un civil. Explicó: “No tenemos manera de saber si se usó la fuerza, o cuánta se usó, porque el informe no contiene ningún apartado para informar sobre ello, por lo que los agentes no tienen la obligación de informar del uso de la fuerza”⁴³⁹. Agregó: “Sabemos que no todos informarían del uso de la fuerza, y reconocemos que es un problema”⁴⁴⁰. Dijo que la PPR tiene previsto emitir una orden sobre la presentación de informes sobre el uso de la fuerza, pero que la orden no ha entrado en vigor hasta la fecha.

En su examen sobre la PPR como perito en prácticas policiales para la acusación en la demanda civil por daños por el asesinato de Miguel Cáceres, Lou Reiter concluyó que “la falta de cualquier... protocolo o examen administrativo” de los disparos con agentes implicados “es muy inquietante”⁴⁴¹. Reiter agregó: “Se trata de una cuestión vital para cualquier departamento de policía y para controlar el uso de la fuerza mortal por parte de los agentes. Son protocolos esenciales que deben estar establecidos”⁴⁴². Según Reiter:

“El Departamento ha decidido pasar por alto cualquier posibilidad de aprender de estos trágicos incidentes críticos y analizar sus políticas, adiestramiento, tácticas, equipo y supervisión”⁴⁴³. En su opinión, la falta de protocolos y sistemas para hacer un seguimiento de los agentes involucrados en tiroteos es una “decisión consciente de ignorar este control vital y necesario” y, como consecuencia, la PPR “ha continuado exponiendo a un grave riesgo a la población”⁴⁴⁴.

d. Falta de enjuiciamiento de incidentes de uso excesivo de la fuerza

Los enjuiciamientos penales de agentes abusivos raramente ocurren, y sólo se producen en los casos en que los abusos han recibido una considerable atención mediática y la indignación popular es significativa. Para el 6 de diciembre de 2010, de las 34 muertes a tiros de civiles entre 2005 y 2010, sólo se había condenado a un agente de la PPR por su participación en el asesinato de Miguel Cáceres Cruz⁴⁴⁵. (En ese caso, un transeúnte había grabado los disparos en vídeo, los agentes involucrados y los supervisores habían intentado encubrir este asesinato claramente injustificado y la PPR no había adoptado medidas contra estos agentes involucrados hasta que salió a la luz el vídeo). De los 34 casos en los que agentes de la PPR mataron a tiros a civiles, sólo se formularon cargos en tres de esos casos⁴⁴⁶.

Teniendo en cuenta su autoridad procesal para exigir cuentas a los agentes por las violaciones de la ley, los fiscales pueden y deben contribuir de manera crítica a remediar el problema de los asesinatos policiales y el uso excesivo de la fuerza. Desafortunadamente, los fiscales a menudo deciden no procesar los casos sobre la presunta brutalidad de agentes. La falta de enjuiciamientos penales se debe en parte a la estrecha relación entre los fiscales de distrito y los agentes de policía, que suelen colaborar para enjuiciar a presuntos criminales.

Hay otros obstáculos significativos a la responsabilidad penal por violaciones de los derechos civiles y el uso de fuerza excesiva o mortal por la policía. Con frecuencia, los fiscales utilizan las investigaciones realizadas por el NIE del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que asume la jurisdicción de la investigación cuando se denuncia una conducta criminal de la policía. Sin embargo, el NIE no está capacitado para realizar investigaciones de homicidios, y la División de Homicidios de la PPR no realiza investigaciones concurrentes del uso de la fuerza mortal porque el NIE tiene la jurisdicción exclusiva.

e. Abusadores anónimos: No asegurar que los agentes abusivos puedan ser identificados por las víctimas

Documentamos el hecho sistemático de no asegurar que los agentes abusivos pudieran ser identificados por los ciudadanos que quieran presentar querellas por el uso excesivo de la fuerza. Según numerosos manifestantes y observadores legales, los policías movilizados a las protestas no llevan sus placas de identificación, que se adhieren al uniforme con velcro, u ocultan las placas con la solapa del bolsillo de su uniforme. Estas placas de identificación que llevan el nombre y el número de cada agente en los uniformes o las

gorras empleadas por la UOT son fáciles de quitar o tapar. La ACLU también ha recibido informes de agentes que se intercambian las placas con otros para evitar que los identifiquen y evitar la responsabilidad por sus acciones.

En la mayoría de los casos documentados por la ACLU de manifestantes arrestados por agentes de la PPR que hicieron un uso excesivo de la fuerza durante o antes del arresto, la documentación del arresto no indica el nombre del agente responsable. Como se explicó en detalle en la sección (A) anterior, numerosas víctimas del abuso policial señalaron a la ACLU que los agentes les dijeron en los cuarteles de la PPR que no podían proceder con una queja o una investigación porque no podían identificar el nombre y el número de placa del agente abusivo, o el nombre del agente que efectuó el arresto no estaba incluido en la documentación.

IX. Una fuerza policial sin ley: Falta de directrices para regir el uso de la fuerza y de supervisión, capacitación y transparencia

La ACLU ha identificado una serie de políticas y prácticas problemáticas adicionales de la PPR que contribuyen a un patrón de abuso policial; como la falta de orientación adecuada para regir el uso de la fuerza; la falta de implementación total de una norma sobre la resistencia del gatillo compatible con las normas nacionales de Estados Unidos; la falta de control, supervisión y adiestramiento adecuados; y la falta de recopilación y seguimiento de datos que podrían usarse para corregir estos problemas graves. La salida del cargo de los antiguos superintendentes Díaz Colón y Figueroa Sancha no resuelve estos problemas estructurales en curso, que deben abordarse para poder poner fin al abuso policial constante.

Los agentes de la PPR realizan una función esencial de seguridad pública, y la ACLU reconoce la importante labor que desempeñan todos los días los agentes del departamento. Sin embargo, la PPR no ofrece ni siquiera orientación básica a su personal acerca del desempeño de sus deberes de manera compatible con las normas constitucionales y de derechos humanos. Hasta el 31 de enero de 2012, la PPR no tenía un protocolo general sobre el uso de la fuerza, y el departamento de policía sigue careciendo de protocolos normativos especiales sobre el uso de la fuerza, como directrices sobre el uso de sustancias químicas, armas de impacto, control de protestas y manifestaciones a gran escala, y el manejo de las denuncias de violencia doméstica y sexual.

Los agentes también reciben una formación inadecuada, una supervisión insuficiente y una orientación mínima sobre los límites legales del uso de la fuerza y su conducta. La PPR ni siquiera aplica los protocolos y las leyes vigentes para regular la conducta de los agentes. La supervisión pública y la transparencia de las políticas y las prácticas de la PPR son mínimas, y tampoco existe un mecanismo de examen independiente.

Cabe destacar que la Policía de Puerto Rico ha reconocido la necesidad de reformar las políticas y las prácticas policiales, y ha iniciado un proceso de reforma que incluyó la formulación de una nueva política general sobre el uso de la fuerza en enero de 2012, y se espera que emita otras nuevas políticas, capacite a los cadetes y los agentes sobre estas políticas y adopte otras reformas muy necesarias. Además, no se han materializado todavía la mayoría de las reformas prometidas por el Gobernador Fortuño y la PPR. Es más, aunque la promulgación de un nuevo protocolo sobre el uso de la fuerza es un primer paso positivo, sin medidas eficaces para responsabilizar a los agentes por el uso de la fuerza, la promulgación de una nueva política no garantiza que los agentes vayan a cumplirla ni que se vaya a exigir cuentas a los agentes cuando se produzcan violaciones de los derechos constitucionales y humanos.

a. Falta de directrices para regir el uso de la fuerza

Hasta el 31 de enero de 2012, la PPR no contaba con ninguna política general sobre el uso de la fuerza. Dicha política es un aspecto normal de los departamentos de policía de todo Estados Unidos, y una práctica policial estándar en todo el mundo. La PPR sigue careciendo de protocolos básicos para regir el tipo de fuerza que los agentes están autorizados a emplear. Por ejemplo, la PPR no tiene ningún protocolo sobre el uso de armas de impacto o munición “menos mortal” como proyectiles de perdigones, granadas de perdigones, balas de goma o plástico y proyectiles de bolsas rellenas. También carece de un protocolo sobre el uso de sustancias químicas, a pesar de que la PPR frecuentemente utiliza gases lacrimógenos y gas pimienta contra manifestantes y otros civiles. La PPR no tiene ningún protocolo sobre la interacción con personas con enfermedades mentales, a pesar de los numerosos asesinatos policiales documentados de hombres con discapacidad mental, que podrían haber sido controlados mediante métodos no mortales. También carece de un protocolo que rija el trato a manifestantes y el manejo de manifestaciones públicas, especialmente el uso de la fuerza contra manifestantes.

La PPR tampoco tiene una política integral para responder e investigar las denuncias de violencia doméstica y sexual. La PPR no cuenta con un protocolo que se ocupe de la manera en que se atienden las llamadas al número de emergencia 911 sobre violencia doméstica y sexual; las entrevistas iniciales y de seguimiento con las víctimas, lo que incluye la manera de comunicarse de forme segura con las víctimas; la identificación y la documentación de las lesiones de las víctimas; el examen forense de las víctimas; la entrevistas y los exámenes forenses de los sospechosos; la preservación de evidencia y la escena del crimen; la ejecución de órdenes de protección; las investigaciones de seguimiento, incluso en los casos en que el sospechoso haya huido del lugar; la colaboración con los abogados de la víctima; y los servicios y la asistencia que se prestan a las víctimas.

Las políticas existentes de la PPR incumplen las normas constitucionales y las prácticas policiales de Estados Unidos. Por ejemplo, las políticas de la PPR no incorporan los requisitos legales actuales que gobiernan el uso de la fuerza por parte de los agentes, no insisten en el uso de alternativas a la fuerza física y no exigen que se recurra a medidas para evitar o minimizar el uso de la fuerza necesario. Las políticas existentes no

establecen un protocolo claro sobre los niveles de fuerza permitidos para responder a diferentes niveles de resistencia de los sospechosos. Las políticas existentes tampoco ofrecen ninguna orientación acerca de los tipos de fuerza, distintos de las armas de fuego, que pueden considerarse mortales, como los estrangulamientos, la presión sobre la carótida y los golpes en la cabeza con macanas y otras armas contundentes. Las políticas existentes ni siquiera reconocen que estos tipos de uso de la fuerza pueden ser mortales, lo que supone una omisión grave.

La política sobre armas de fuego de la PPR, OG 2004-3, es completamente incompatible con la norma legal correspondiente, que requiere que un agente tenga causa probable para creer que el sospechoso plantea un riesgo significativo de muerte o graves lesiones físicas para el agente u otras personas. La política es vaga y no define términos esenciales. Por ejemplo, permite una cantidad de fuerza “que sea consistente con lograr la misión” sin definir realmente el significado de “lograr la misión”⁴⁴⁷. La política tampoco define las circunstancias en las cuales los oficiales pueden disparar o no dispararle a sospechosos que se den a la fuga, ni tampoco aborda la legalidad de los disparos de advertencia.

La orden de la PPR que rige el uso de *taser* y otros dispositivos de descarga eléctrica (DDE), OG 2008-2, es deficiente y tampoco cumple con las normas constitucionales⁴⁴⁸. La orden no ofrece orientación adecuada a los agentes sobre el uso de DDE. La orden no especifica ninguna norma legal para el uso de DDE, ni ningún factor que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar el uso adecuado de DDE, como el nivel de resistencia del sujeto o la gravedad del presunto delito. Lo más problemático es que la orden de la PPR que rige el uso de DDE no reconoce que los DDE pueden ser mortales, en cambio los califica como armas “no letales”. Como se explica en detalle en la sección V anterior, los *taser* y otros DDE pueden causar lesiones mortales.

Cabe reconocer que la PPR ha contratado a un equipo de expertos cualificados para que asistan en la formulación de nuevas políticas, lo que resultó en la publicación de una nueva política general sobre el uso de la fuerza a finales de enero de 2012. Sin embargo, la nueva política de Puerto Rico sobre el uso de la fuerza no cumple las normas constitucionales y nacionales de Estados Unidos, y ha sido criticada por activistas de derechos civiles y derechos humanos por ser vaga y carecer de criterios objetivos sobre el uso de la fuerza mortal por parte de agentes de la PPR. Un borrador inicial de la política sobre el uso de la fuerza incluyó la norma constitucional sobre la razonabilidad objetiva, que se eliminó en la versión final. En cambio, la política actualmente vigente sobre el uso de la fuerza usa una norma simple de la razonabilidad que permite que los agentes hagan un juicio subjetivo para determinar el nivel de fuerza legalmente permisible, y los autoriza a usar la fuerza mortal en función de su “percepción” del peligro, no de criterios objetivos.

Es más, la formulación de nuevas políticas no significa que los agentes vayan a cumplirlas. Sin un adiestramiento y una aplicación adecuada para exigir responsabilidades a los agentes cuando se produzcan violaciones, estas nuevas políticas no tendrán ningún sentido. Aunque la emisión de una nueva política general sobre el uso

de la fuerza es alentadora, la PPR no ha implementado totalmente la política y no ha capacitado todavía a todo su personal acerca de la nueva política.

Además, para los agentes, los cuales no reciben una copia de las políticas, no es fácil comprender ni acceder las órdenes generales y especiales de la PPR que regulan las prácticas policiales. Las órdenes, que comienzan a partir de 1969, están numeradas consecutivamente por año y no están organizadas por temas ni indexadas. El DOJ constató que la PPR no entrega ejemplares de las órdenes a los agentes, y algunos supervisores ni siquiera pudieron mostrar al DOJ una serie completa de estas órdenes⁴⁴⁹. Un antiguo superintendente auxiliar dijo a la ACLU que las órdenes son un “desastre” y están “dispersadas y no están recopiladas en un solo archivo”⁴⁵⁰. Dijo: “Ahora es un lío para los agentes descubrir siquiera que órdenes están vigentes”; y dijo a la ACLU que la PPR tiene la intención de crear un nuevo catálogo de órdenes organizado y facilitar a los agentes la localización de políticas⁴⁵¹. En este momento, el sitio web de la PPR contiene enlaces a políticas emitidas hasta 2011, pero se limita a enumerarlas en el orden en que se emitieron, a partir de 1969. La nueva política sobre el uso de la fuerza no está siquiera en el sitio web de la PPR para que la población pueda consultarla.

b. Falta de implementación total de un peso normalizado del gatillo

Hasta febrero de 2011, la PPR no utilizaba una norma sobre la resistencia del gatillo, y dejaba la configuración de fábrica de 5.5 y 6.5 libras en todas las armas de servicio, lo que es considerablemente inferior a los pesos estándar de los departamentos metropolitanos de policía de Estados Unidos, como el NYPD, que requiere un peso de 12 libras del gatillo en todas las armas reglamentarias. La muerte por disparos en septiembre de 2010 de José Alberto Vega Jorge, de 22 años, a manos de un agente de policía hizo que la PPR evaluara la resistencia del gatillo de sus armas⁴⁵². El agente de la PPR Abimalet Natalo Rosado disparó en la nuca a este transeúnte desarmado. Después de haber presenciado un robo en un Burger King de Altamira, Vega Jorge se había quedado en el lugar para dar información a la policía y no era un sospechoso. Después de que se disparara accidentalmente el arma de uno de los cinco agentes en el lugar, el agente Natal Rosado abrió fuego y disparó diez balas, una de las cuales impactó mortalmente en la nuca al joven⁴⁵³.

En febrero de 2011, el superintendente de la PPR emitió una orden para que se fijara un peso estándar de 8.5 libras del gatillo de todas las armas de servicio de la PPR. Las pistolas reglamentarias Glock de la PPR (el modelo Glock del calibre 40) estaban configuradas previamente con la resistencia del gatillo de fábrica de 5.5 libras; y los revólveres reglamentarios Smith & Wesson (el modelo MP-40 de Smith & Wesson) estaban configuradas a 6.5 libras. El Superintendente ordenó que se modificaran los resortes de resistencia de los gatillos paulatinamente “para no afectar la prestación de servicios de los miembros de la Policía”⁴⁵⁴. A junio de 2011, la PPR todavía contaba con 9,000 armas reglamentarias cuya resistencia estándar del gatillo no se ha modificado⁴⁵⁵.

El exceso de sensibilidad de los gatillos provoca disparos no intencionados durante la interacción de la policía con civiles y situaciones con disparos excesivos, en las que los agentes disparan más tiros de los que dispararían con armas con mayor resistencia del

gatillo. De hecho, en 1988, el FBI predijo que la sensibilidad del gatillo de la pistola Glock estandarizada “provocaría inevitablemente un disparo no intencionado en el peor momento”⁴⁵⁶. Es esencial que la PPR modifique el gatillo de todas sus armas de servicio para que tenga un peso mínimo de 8.5 libras, y lo ideal sería que aumente su resistencia estándar del gatillo a un nivel comparable al de los departamentos de policía de ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Por ejemplo, todas las pistolas estandarizadas que se autorizan para el uso reglamentario de agentes del NYPD tienen que tener una resistencia de gatillo de 12 libras; los gatillos de las pistolas Glock, Sig Sauer y Smith & Wesson del NYPD se modifican para que tengan esta resistencia⁴⁵⁷. A mediados de la década de 1990, el NYPD incrementó el peso obligatorio del gatillo de las armas de servicio de 8 libras (denominado gatillo NY-1) a 12 libras (denominado gatillo NY-2), con el fin de minimizar los disparos no intencionados⁴⁵⁸.

c. Falta de supervisión independiente

No existe una supervisión independiente eficaz y externa de la PPR. El Gobernador de Puerto Rico tiene la autoridad última sobre la PPR: nombra a un superintendente para que administre la PPR, que está sujeto a la confirmación del Senado de Puerto Rico. El Gobernador aprueba las designaciones de puestos superiores en la PPR, desde los inspectores hasta los coroneles. A diferencia de 49 de los 50 estados, Puerto Rico no tiene un organismo para todo el estado encargado de establecer normas mínimas y requisitos de adiestramiento⁴⁵⁹. El Superintendente tiene amplia discreción para promulgar o cambiar políticas sin un examen externo. Por ejemplo, el Superintendente tiene plena potestad para reducir o modificar el programa de adiestramiento previo al servicio, establecer nuevas normas sobre el uso de la fuerza o armas específicas sin ningún comentario público ni examen legal externo, o rechazar medidas disciplinarias propuestas contra personal de la PPR.

La PPR carece de cualquier consejo civil o auditor independiente encargado de examinar las operaciones policiales y emitir conclusiones públicas, u otros mecanismos independientes de auditoría. No existen organismos de supervisión que ejerzan actualmente una labor de control sobre la PPR en la práctica. Sólo dos organismos tienen autoridad para investigar quejas de los ciudadanos sobre la mala conducta policial, pero no lo hacen. Estos organismos son la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que no ofrece ninguna supervisión externa de la PPR, y la CIPA, que en la práctica sólo examina la validez de las medidas disciplinarias impuestas a agentes de la PPR.

Se creó un tercer organismo por orden ejecutiva para que operara de manera temporal, pero en la práctica no realizó ninguna supervisión significativa de la PPR. El 19 de octubre de 2010, el Gobernador de Puerto Rico creó, mediante Orden Ejecutiva, la Oficina del Monitor Independiente de la Policía de Puerto Rico. En junio de 2011, nueve meses después de la creación de la oficina, el Monitor Independiente de la Policía renunció al puesto y concluyó que se habían cumplido los objetivos de su organismo. El monitor señaló que la PPR había anunciado un plan integral de reforma para asegurar que los derechos civiles estuvieran garantizados en Puerto Rico, e informó con optimismo de que la PPR ya estaba aplicando todas sus recomendaciones. El 30 de junio de 2011, el Monitor Independiente de la Policía, Efraín Rivera Pérez, concluyó su mandato con la

publicación de un informe superficial de 21 páginas que encubrió los problemas graves que afectan a la PPR y no incluyó ningunos datos estadísticos ni información sobre casos específicos.

El Monitor Independiente de la Policía no tenía ninguna autoridad para hacer cumplir las recomendaciones de reformas policiales o ni siquiera de las políticas existentes. El Monitor Independiente contó con un mandato limitado que no incluyó la autoridad para aceptar quejas, remitirlas a la PPR para que las investigara; o el seguimiento de cualquier estadística sobre el uso de la fuerza excesiva o mortal por la PPR, las investigaciones iniciadas o concluidas o cualquier medida disciplinaria adoptada. De hecho, en respuesta a las preguntas de la ACLU acerca del número de querellas de ciudadanos por el uso excesivo de la fuerza, el Monitor Independiente de la Policía respondió que, aunque no sabía las estadísticas precisas, estimaba que sólo se habían presentado quejas contra el 1% al 2% de los agentes de policía, como mucho⁴⁶⁰. El personal de la Oficina del Monitor posteriormente se puso en contacto con la ACLU para aclarar que, de hecho, el número se acercaba probablemente más al 0.2% de la fuerza policial⁴⁶¹, una cifra absurdamente baja desmentida por las estadísticas reconocidas por el PPR al DOJ, y por el Comité Externo de Evaluación que examinó a la PPR en 2007.

d. Falta de adiestramiento y supervisión

Documentamos graves deficiencias en el adiestramiento y la supervisión de los agentes. La PPR imparte un adiestramiento inadecuado previo al servicio a los cadetes en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico (la academia de policía de Puerto Rico). Por ejemplo, la PPR no ofrece una formación especializada sobre el uso de sustancias químicas como los gases lacrimógenos y el gas pimienta⁴⁶². Además, la PPR prácticamente no ofrece ninguna formación de seguimiento durante el servicio a los agentes y supervisores después del adiestramiento previo al servicio. Un antiguo superintendente auxiliar reconoció: “Tenemos una falta de adiestramiento —una vez en servicio, algunos agentes no regresaron a la academia de policía después de su formación inicial”⁴⁶³.

Hay graves deficiencias en la supervisión de los agentes de la PPR, y esta falta de supervisión contribuye a las violaciones rampantes de los derechos constitucionales y humanos que se documentan en este informe. Según el DOJ, hay una crisis en la supervisión de la PPR. La proporción de supervisores por cada agente en la zona de San Juan es de 1 a 30; aunque la proporción generalmente aceptada para las unidades de patrulla no debería exceder el máximo de 1 por cada 10, y se recomienda un supervisor por cada cinco agentes⁴⁶⁴. También observamos que los supervisores de alto nivel no establecen protocolos para supervisar de manera adecuada a los agentes que han cometido infracciones.

e. Falta de transparencia: Falta de mantenimiento y publicación de estadísticas sobre la brutalidad policial

La PPR no hace público ningún dato sobre el número de quejas presentadas sobre el uso de la fuerza excesiva o mortal, las investigaciones iniciadas o concluidas, o las medidas disciplinarias adoptadas⁴⁶⁵. La PPR tampoco recopila y mantiene información exhaustiva sobre prácticas policiales como el número de denuncias relacionadas con la violencia doméstica presentadas o las órdenes de protección emitidas. Puerto Rico carece de una ley sobre registros públicos como una ley sobre libertad de acceso a la información que otorgue a los puertorriqueños el derecho a obtener documentos oficiales. Como consecuencia, es raro que se hagan públicos los datos sobre brutalidad policial, las querellas presentadas contra agentes individuales y otra información, que a menudo sólo pueden obtener a través del proceso de descubrimiento de prueba previo a un litigio.

X. Derechos constitucionales y derechos humanos relevantes

a. Normas constitucionales sobre el uso de la fuerza

La fuerza excesiva es la fuerza que excede lo objetivamente razonable y necesario para someter a una persona, según las circunstancias que confronta un agente. El uso excesivo de la fuerza por agentes de la policía en el transcurso de un arresto, una detención para investigar u otras retenciones violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos⁴⁶⁶. El uso excesivo de la fuerza puede violar la Cuarta Enmienda incluso cuando sólo se provocan lesiones leves⁴⁶⁷.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido directrices sobre el uso de la fuerza por la policía. En *Tennessee v. Garner* (1985), el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la policía puede usar la fuerza mortal cuando persigue un sospechoso en fuga, sólo si el sospechoso plantea un riesgo significativo de muerte o graves lesiones físicas a otras personas⁴⁶⁸. El Tribunal definió la fuerza mortal como “cualquier uso de fuerza que genere considerables posibilidades de provocar la muerte o graves daños corporales”⁴⁶⁹. En el caso *Garner*, el Tribunal también afirmó que la policía no puede disparar para detener a un alegado sospechoso desarmado y que no representa peligro. En las circunstancias en las que se justifica la fuerza mortal contra un sospechoso en fuga, la policía debe dar una advertencia antes de hacer uso de ese tipo de fuerza⁴⁷⁰.

En *Graham v. Connor* (1989), el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que cualquier uso de la fuerza debe ser objetivamente razonable; el “cálculo de lo razonable” debe tener en cuenta factores tales como la gravedad del crimen, si el sospechoso plantea una amenaza inmediata para la seguridad, o si el sospechoso se está resistiendo activamente al arresto o intentando evitarlo⁴⁷¹. El análisis del uso de la fuerza requiere sopesar el carácter y las circunstancias de la intrusión en los intereses individuales protegidos por la Cuarta Enmienda con los intereses del Gobierno⁴⁷². La determinación de la razonabilidad objetiva del uso de la fuerza por los agentes de policía se basa en la

totalidad de las circunstancias⁴⁷³. En el caso *Graham*, el Tribunal Supremo también afirmó que el requisito de la Cuarta Enmienda de razonabilidad por parte de la policía se aplica a “todas las alegaciones de que los agentes de la ley han hecho un uso excesivo de la fuerza —mortal o no— en el transcurso de un arresto, una detención para investigar u otra retención de una persona en libertad”⁴⁷⁴.

Generalmente, los tribunales evalúan la constitucionalidad del uso de la fuerza aplicando los criterios de razonabilidad objetiva establecidos en el caso *Graham*. Por ejemplo, en *Scott v. Harris* (2004), el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó una alegación del uso excesivo de la fuerza que violaba la Cuarta Enmienda (un agente de policía arremetió su patrulla contra el automóvil de un sospechoso que huía, lo que lo dejó tetraplégico) usando la prueba de la razonabilidad objetiva del caso *Graham*⁴⁷⁵. En el caso *Scott*, para determinar la razonabilidad de la fuerza usada por la policía, el Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó la inminencia de la amenaza real que planteaba el sospechoso contra las vidas de otras personas. El Tribunal concluyó que para poder justificar el uso de la fuerza, el sospechoso tenía que plantear una amenaza real, considerable e inminente contra las vidas de otras personas.

Los disparos con arma de fuego contra un sospechoso constituyen un uso de la fuerza mortal y requieren el máximo nivel de justificación para considerarse razonables. Los tribunales han determinado que la fuerza mortal no es razonable “a menos que sea necesaria para impedir la huida o que el agente tenga causas probables para creer que el sospechoso plantea una amenaza significativa de muerte o graves lesiones físicas contra el agente u otras personas”⁴⁷⁶. Además, los tribunales han concluido que, aunque se puede determinar que los disparos iniciales contra un sospechoso están justificados, los disparos subsiguientes contra el sospechoso podrían no estar justificados⁴⁷⁷.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico salvaguarda el derecho a la vida, la libertad y la dignidad humana como derechos fundamentales. La sección séptima de la Carta de Derechos (artículo II) dispone que: “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad”, y la sección primera declara: “La dignidad del ser humano es inviolable”. La sección décima protege “el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”.

b. Normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza

Las normas legales internacionales que rigen el uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley se basan en “la dignidad inherente a la persona humana”,⁴⁷⁸ “el derecho inherente a la vida”⁴⁷⁹ y “el derecho a la libertad y a la seguridad personal”⁴⁸⁰ tal como se estipula en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992. Estos principios también están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que considera que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”⁴⁸¹. De manera similar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre declara: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”⁴⁸². El

derecho a la vida es inderogable y se aplica a todas las personas bajo la autoridad o el control de un país; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado específicamente que “ninguna persona bajo la autoridad y control de un Estado, independientemente de sus circunstancias, está privada de la protección legal de sus derechos humanos fundamentales y no derogables”⁴⁸³.

El PIDCP y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), ratificada también por Estados Unidos, prohíben estrictamente el uso de la tortura⁴⁸⁴, y el trato cruel, inhumano o degradante en todas las circunstancias⁴⁸⁵. El Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Principios sobre Detención) declara explícitamente que “no podrá invocarse circunstancia alguna” como justificación de estos actos⁴⁸⁶.

Además, los tratados internacionales ratificados por Estados Unidos garantizan que todas las personas disfruten de igualdad de protección ante la ley y protección frente a la discriminación⁴⁸⁷. Según el PIDCP: “A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”⁴⁸⁸. Asimismo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR) prohíbe cualquier tipo de “distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias” y obliga a los gobiernos a prohibir y eliminar dicha discriminación, así como a asegurar que todas las personas tengan acceso a protecciones y remedios efectivos⁴⁸⁹. Estas protecciones también están consagradas en los Principios sobre Detención y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre⁴⁹⁰.

Teniendo en cuenta la importancia que el derecho internacional otorga a la libertad y la seguridad de la persona, las normas internacionales disponen que los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden usar la fuerza en ciertas circunstancias. Unas normas acordadas internacionalmente regulan el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes de la policía. Entre estas normas están los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Las normas internacionales estipulan claramente el nivel mínimo necesario para el uso legítimo de la fuerza. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispone que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”⁴⁹¹. Sólo se permite el uso de la fuerza o las armas de fuego “cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”⁴⁹². En dichas situaciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”⁴⁹³.

Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen normas mínimas sobre el uso de la fuerza, el reclutamiento y el adiestramiento. Exigen proporcionalidad en la fuerza empleada por los agentes cuando sea necesaria, y la adopción de requisitos de presentación de informes cuando se usen la fuerza o armas de fuego. Estipulan que: “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”⁴⁹⁴. Con el fin de minimizar en la mayor medida posible “el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes”, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza también disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “utilizarán en la medida posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego” y “podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”⁴⁹⁵. Es más, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar armados con armas tanto mortales como no mortales⁴⁹⁶.

Las restricciones del uso de la fuerza se mantienen vigentes cuando las personas están detenidas. De acuerdo con el PIDCP y los Principios sobre Detención, toda persona en cualquier forma de detención “será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”⁴⁹⁷. Además, “no se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres sobre las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”⁴⁹⁸. En concreto, de conformidad con los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas” y “no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención” que presente un grave peligro⁴⁹⁹.

Las víctimas tienen derecho a presentar quejas por el uso de la fuerza excesiva o mortal por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En virtud de la CCT, los gobiernos deben investigar de manera rápida e imparcial las situaciones en las que se hayan podido producir actos de tortura o un trato cruel, inhumano o degradante, y deben asegurar que las víctimas puedan presentar quejas a través de su sistema legal⁵⁰⁰. Además, se debe informar inmediatamente de las lesiones o las muertes derivadas del uso de la fuerza o las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipulan que los gobiernos se asegurarán de que “se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”⁵⁰¹.

Los organismos internacionales encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos han señalado continuamente el hecho de que Estados Unidos no cumple las normas internacionales relativas al uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En su informe de 1995, el Comité de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar todo uso excesivo de la fuerza por la policía” y garantizar “que las reglas y los reglamentos que gobiernan el empleo de armas por la policía y las fuerzas de seguridad sean totalmente compatibles con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; que toda violación de estas reglas se investigue de manera sistemática con el fin de llevar ante los tribunales aquellos que hayan cometido dichos actos; que se castigue a los que sean encontrados culpables y se compense a las víctimas”.⁵⁰² El Comité reiteró estas recomendaciones en su informe de 2006⁵⁰³. El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias⁵⁰⁴ y el Comité Contra la Tortura formularon críticas y recomendaciones similares⁵⁰⁵. En sus informes de 2001 y 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su especial preocupación por el uso de la fuerza excesiva o mortal contra grupos minoritarios o extranjeros, y recomendó que Estados Unidos ofreciera una preparación adecuada a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para combatir los prejuicios⁵⁰⁶. El conjunto de informes de los distintos organismos internacionales a lo largo de un período de más de una década destacan la falta constante de Estados Unidos en el cumplimiento de las normas internacionales relativas al uso de la fuerza.

c. Normas constitucionales sobre la libertad de palabra, expresión y reunión

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos estipula un derecho fundamental a protestar. La Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de palabra y expresión, el derecho a las reuniones pacíficas y el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios, todo lo cual claramente forma parte del derecho a protestar. El derecho a protestar en lugares públicos engloba las grandes convocatorias (como desfiles en las calles y mítines en parques), pequeños encuentros (como piquetes en las aceras y vigilias en plazas gubernamentales) y expresiones solitarias (como una persona con una pancarta o distribuyendo panfletos). La cláusula sobre “libertad de prensa” de la Primera Enmienda protege por igual el derecho de las personas, los periodistas profesionales y otros a reunir y publicar información sobre protestas. La Constitución de Estados Unidos también protege las acciones que expresan de manera simbólica un punto de vista. Algunos ejemplos de estas formas simbólicas de expresión son la música, el teatro, las películas, el baile, llevar máscaras y disfraces o celebrar una vigilia con velas.

Además, la Primera Enmienda lleva implícito el derecho bien protegido a asociarse para expresarse: es decir, el derecho a unirse a personas con ideas afines para expresar colectivamente un mensaje compartido, mediante una protesta u otros medios⁵⁰⁷. Según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “la práctica de la reunión de personas que comparten ideas comunes para lograr un fin común está profundamente integrada en el proceso político estadounidense”⁵⁰⁸.

La Primera Enmienda se basa en parte en el reconocimiento de la importancia de proteger las protestas relacionadas con el desempeño de los funcionarios del Gobierno y otras cuestiones que preocupen a la población⁵⁰⁹, y de proteger las protestas en lugares públicos⁵¹⁰. En general, la Constitución salvaguarda todos los tipos de palabra y expresión en “foros públicos tradicionales” como las calles, las aceras y los parques⁵¹¹. Las escaleras de un ayuntamiento o las plazas públicas también constituyen foros públicos tradicionales⁵¹². Además, se permite que las actividades de expresión se realicen en otros lugares dispuestos por el Gobierno para ello. Una vez que el Gobierno considere que se pueden realizar actividades no comerciales de expresión en un lugar, dicho lugar debe ponerse a disposición de todos.

Los gobiernos no pueden restringir las protestas debido al punto de vista de los manifestantes. Por el contrario, los gobiernos deben mantenerse neutrales entre mensajes y mensajeros⁵¹³. Las protestas pueden ser polémicas, impopulares, ofensivas y hasta odiosas. Los manifestantes pueden expresarse en defensa de actividades ilegales, violencia o incluso el derrocamiento de un gobierno. El Gobierno no puede discriminar basándose en el punto de vista, ni siquiera en un foro no público⁵¹⁴.

Los gobiernos pueden regular el momento, el lugar y la forma de una protesta; por ejemplo, diversos reglamentos gubernamentales sobre las protestas se ocupan de la alteración del tráfico de peatones y vehículos, el bloqueo de la entrada a edificios, el hostigamiento y la amplificación del sonido u otros fuertes ruidos. Sin embargo, los gobiernos sólo pueden regular el momento, el lugar y la forma de una protesta si los reglamentos se relacionan de manera razonable con un interés oficial importante, están claramente adaptados a la situación de manera que no impidan considerablemente más expresión de la necesaria para lograr los objetivos del Gobierno, y no se discrimine sobre la base de los puntos de vista que quieren expresar los manifestantes⁵¹⁵. Una ordenanza para regular las protestas carece de validez si su nivel de exigencia es irrazonable o innecesario, si impide que los manifestantes comuniquen su mensaje, si cuenta con normas vagas o inexistentes, o si se aplica de manera selectiva⁵¹⁶. Las restricciones también deben dejar abiertas alternativas amplias de comunicación para que los manifestantes tengan una oportunidad razonable de comunicar eficazmente su mensaje a la audiencia a la que va destinado⁵¹⁷. Además, se debe permitir que una protesta se celebre en un lugar a la “vista y el oído” de la audiencia a la que va destinada⁵¹⁸. Si los manifestantes están cumpliendo restricciones razonables sobre el tiempo, el lugar y la forma, la policía no puede disolver una protesta o manifestación a menos que exista un “peligro claro y presente de motín, altercado, interferencia con el tráfico en vías públicas u otra amenaza inmediata para la seguridad pública”⁵¹⁹.

La Primera Enmienda también prohíbe a los funcionarios del Gobierno someter a una persona a medidas de represalia por expresiones protegidas por la Constitución. En *Hartman v. Moore*, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que las represalias oficiales por las expresiones protegidas constituyen una ofensa a la Constitución porque amenazan con inhibir el ejercicio del derecho protegido a la libertad de expresión⁵²⁰. Además, los agentes de policía no pueden usar su autoridad con un “efecto paralizador”

sobre las personas que quieran expresar sus opiniones⁵²¹. En su análisis de la posibilidad de que medidas del Gobierno violen la Primera Enmienda, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos considera si dichas medidas paralizan o intimidan la expresión, y si están motivadas por una “intención o un deseo de frenar... la expresión”⁵²². Además, el Primer Circuito ha declarado que la amenaza de arrestar a manifestantes puede constituir una medida paralizadora que viola la Primera Enmienda⁵²³.

Solo unas limitadas categorías de expresiones y palabras están fuera del ámbito de protección de la Primera Enmienda. La Primera Enmienda no protege la “incitación”, es decir, las expresiones cuyo objetivo probable es provocar violencia y violaciones de las leyes⁵²⁴. Por ejemplo, la Primera Enmienda no protege a un portavoz que insta a una multitud indignada a que ataque inmediatamente a alguien o destruya su propiedad. Además, la Primera Enmienda no protege las “amenazas reales” dirigidas contra cierta persona, que consideraría razonablemente que el mensaje genera un peligro de violencia⁵²⁵. En *Whitney v. California*, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó: “El temor a una lesión grave no puede justificar por sí mismo la represión de la libertad de expresión y reunión... Para justificar la supresión de la libertad de expresión, deben existir motivos razonables para temer que se producirán graves males si se practica la libertad de expresión... que el peligro percibido es inminente... que el mal a prevenir es grave”⁵²⁶.

Las “palabras belicosas” tampoco están protegidas. Estas son las palabras dirigidas a una persona concreta, cara a cara, que podrían provocar que una persona ordinaria razonable recurriera a la violencia⁵²⁷. Esta categoría limitada de palabras y expresiones no protegidas no incluye mensajes políticos dirigidos a una audiencia general, aunque sean especialmente incendiarios, como la quema de banderas, o el despliegue de la cruz gamada en una reunión neonazi en una comunidad judía, o llevar una chaqueta con el texto “a la mierda el servicio militar” en un tribunal, todo lo cual los tribunales han considerado una forma de palabra y expresión protegida por la Constitución⁵²⁸. Es menos probable que las expresiones abusivas se consideren “palabras belicosas” no protegidas cuando van dirigidas a agentes de la policía, de los que se espera un mayor autocontrol, debido a su cargo y adiestramiento⁵²⁹. Las tres excepciones de la Primera Enmienda — incitación, amenazas reales y palabras belicosas— son muy limitadas y los tribunales las aceptan raramente cuando se invocan para justificar la represión de la expresión.

La desobediencia civil es la negativa activa a cumplir ciertas leyes como una forma de protesta. La Primera Enmienda no protege generalmente dichos actos cuando conllevan una conducta ilegal. Los agentes de policía pueden arrestar a los que practican la desobediencia civil, pero no pueden arrestar a los manifestantes que cumplan las leyes, transeúntes, observadores y otras personas que se encuentren en las cercanías. La mejor práctica policial es ofrecer a los que realizan actos de desobediencia civil una oportunidad realista de cumplir la ley, y distinguir entre los que están violando la ley y los transeúntes y manifestantes que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda que no están desobedeciendo las leyes. Es más, la desobediencia civil no justifica nunca el uso excesivo de la fuerza por la policía.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico también garantiza la libertad de expresión y reunión. La sección cuarta de la Carta de Derechos (artículo II) dispone: “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.

d. Normas de derechos humanos sobre la libertad de palabra, expresión y reunión

Los derechos humanos a la libertad de palabra, expresión y reunión pacífica están universalmente reconocidos y consagrados en numerosos tratados como el PIDCP⁵³⁰, que Estados Unidos ha ratificado, y la DUDH⁵³¹. Como se declara en el PIDCP y la CEDR, estas libertades se aplican a *todas las personas* independientemente de su raza, color, descendencia, origen nacional o étnico y otras características⁵³². Las libertades de expresión y reunión son fundamentales, de hecho, el Comité de Derechos Humanos las considera “la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” y “la base para el pleno goce de una amplia gama de otros derechos humanos”⁵³³.

Teniendo en cuenta el carácter fundamental de estos derechos, sólo pueden restringirse en circunstancias muy limitadas. De acuerdo con el PIDCP, cualquier restricción del derecho a la libertad de expresión y reunión debe ser compatible con la ley y estrictamente necesaria para salvaguardar la seguridad nacional o la seguridad pública, el orden público, la salud y la moral pública o proteger los derechos y las libertades del resto de la población⁵³⁴. Cualquier restricción de este tipo debe ser proporcional con el propósito legítimo y no discriminatorio, incluyendo cuando se trate de opiniones políticas.

En su Informe General Núm. 34, que analiza el derecho a la libertad de palabra y expresión, el Comité de Derechos Humanos, que se encarga de interpretar el PIDCP, estipuló que la norma que limita la libertad de expresión y reunión “debe estar formulada con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella”⁵³⁵ y “hacerse accesible al público”⁵³⁶. Es más, “las leyes no pueden conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión”⁵³⁷. Además, las leyes que restringen estas libertades fundamentales deben ser compatibles con las normas universales de derechos humanos. “Han de ser compatibles con las disposiciones, fines y objetivos del [PIDCP]”⁵³⁸ y no deben “vulnerar las disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación”⁵³⁹. Todas las limitaciones basadas en la moral “han de entenderse en el contexto de la universalidad de los derechos humanos y el principio de no discriminación”⁵⁴⁰. Incluso cuando estén en juego los intereses antes mencionados, las limitaciones no se pueden hacer valer nunca “como justificación para silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos humanos”⁵⁴¹, al igual que las restricciones de la libertad de expresión “no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho”⁵⁴².

En su Informe General Núm. 34, el Comité de Derechos Humanos también afirmó que las restricciones de la libertad de expresión y reunión “deben guardar proporción con el

interés que debe protegerse”⁵⁴³. El principio de proporcionalidad “debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen”⁵⁴⁴. Las restricciones deben ajustarse aún más y “deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado”⁵⁴⁵. De hecho, el Estado “deberá demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se haya adoptado, particularmente estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza”, cuando haga valer una razón legítima para restringir la libertad de expresión⁵⁴⁶.

En los casos en que las restricciones del derecho de reunión sean justificables en virtud del derecho internacional, la respuesta policial a las manifestaciones debe ser compatible con las normas internacionales. Estas normas prohíben el uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a menos que sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para el desempeño de su deber, y sólo permiten el uso de armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida⁵⁴⁷. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley reconocen expresamente que “todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas”⁵⁴⁸. Por consiguiente, sólo se permite el uso de la fuerza para disolver reuniones *ilícitas* y *violentas* “cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la medida mínima necesaria”⁵⁴⁹. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario”⁵⁵⁰.

Como han subrayado los órganos de vigilancia de los tratados internacionales, las libertades de expresar las opiniones propias y de reunirse pacíficamente son elementos fundamentales de una sociedad democrática. Cualquier restricción de estos derechos, y la aplicación de dicha restricción, debe ser compatible con el derecho internacional.

XI. Recomendaciones

Partiendo de las conclusiones de la investigación de la ACLU, que incluye nuestras observaciones de numerosas políticas y prácticas problemáticas que contribuyen al patrón de abuso policial, la ACLU ha formulado recomendaciones claras para las tan necesarias reformas. Estas reformas son esenciales para que la PPR cumpla las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico y la legislación de derechos humanos. Además, las reformas recomendadas ayudarán a la PPR a combatir la crisis de seguridad pública a la que se enfrenta actualmente. Las prácticas policiales que respeten los derechos civiles y humanos de los puertorriqueños son esenciales para sembrar la confianza del público en el departamento de policía, un elemento fundamental para mejorar la seguridad pública.

A la Policía de Puerto Rico:

- Políticas sobre el uso de la fuerza:
 - Desarrollar, revisar e implementar políticas integrales sobre el uso de la fuerza mortal y menos mortal y los encuentros con la población civil compatibles con las normas nacionales, constitucionales y de derechos humanos. En el caso de dispositivos para el uso de la fuerza, asegurar que estas políticas también se ajusten a las especificaciones del fabricante. Estas políticas sobre el uso de la fuerza deben incluir normas detalladas para descargar, sacar y apuntar armas de fuego; el uso de sustancias químicas como gas pimienta y gases lacrimógenos; presiones sobre la carótida y estrangulamientos; técnicas de puntos de presión; munición “menos mortal” como cargadores de perdigones, granadas de perdigones, balas de goma o plástico y proyectiles con bolsas rellenas de perdigones; perros; macanas; pistolas paralizantes y otros dispositivos de descarga eléctrica; y restricciones físicas.
 - Examinar la política actual sobre el uso de la fuerza para autorizar solamente un uso objetivamente razonable (en lugar del texto actual que autoriza simplemente la fuerza razonable), y asegurarse de que la política aclare con precisión el significado de la fuerza objetivamente razonable. Revisar la política actual sobre el uso de la fuerza para aclarar que los agentes sólo pueden usar la fuerza mortal cuando exista un peligro objetivamente razonable y aparentemente inminente de muerte o lesiones corporales graves, en lugar del texto actual que permite a los agentes actuar en función de su percepción o creencia de un peligro inminente.
 - Desarrollar, revisar e implementar políticas que requieran la adopción de medidas para evitar el uso de la fuerza o minimizar el uso de la fuerza necesaria. Estas medidas deben incluir dialogar, contener la escalada en los encuentros con bajo nivel de violencia, retirarse, esperar a que el sujeto reaccione, contener un área, advertir, persuadir verbalmente, advertir a los sospechosos que se detengan y/o se sometan al arresto, ordenar la disolución y pedir la asistencia de refuerzos, expertos en salud mental y otro personal especializado.

- Desarrollar e implementar políticas sobre interacciones con personas con enfermedades mentales, como evitar el uso de la fuerza en interacciones con personas con enfermedades mentales y otras consideraciones especiales a la hora de usar la fuerza contra personas con enfermedades mentales.
- Las políticas sobre el uso de la fuerza deben dejar claro que, aunque la fuerza esté justificada inicialmente, la continuación de su uso puede hacerse excesiva y no razonable en el transcurso de un arresto, detenciones para investigar u otras actividades, si el nivel de fuerza inicial deja de ser necesario.
- Las políticas sobre el uso de la fuerza también deben establecer claramente el nivel de fuerza autorizado cuando se persigue a un sospechoso, y deben ofrecer orientaciones detalladas acerca del manejo de arrestos tras una persecución. Las políticas deben prohibir que los agentes disparen contra vehículos en movimiento o desde ellos, a menos que el uso de la fuerza mortal esté justificado.
- Las políticas sobre el uso de la fuerza también deben exigir a los agentes que procuren inmediatamente cualquier atención médica necesaria para los civiles lesionados a consecuencia del uso de la fuerza por los agentes.
- Desarrollar e implementar políticas que requieran que los agentes fuera de servicio informen a los agentes o supervisores de servicio antes de usar la fuerza o tomar cualquier otra medida policial, con el fin de poder enviar al lugar a personal de servicio para que se haga cargo del incidente, a menos que las circunstancias exijan una actuación inmediata del agente fuera de servicio. Garantizar que las políticas dispongan claramente que, cuando las circunstancias exijan una actuación inmediata, los agentes fuera de servicio sólo pueden usar el nivel de fuerza autorizado legalmente y, en caso de que lleguen a usar la fuerza, deben usar el nivel mínimo de fuerza necesario. Prohibir que los agentes fuera de servicio usen la fuerza o tomen cualquier otra medida policial cuando su juicio esté deteriorado, por ejemplo, por los efectos del alcohol.
- Aplicar plenamente las políticas sobre el uso de la fuerza en todos los departamentos de la PPR.
- Políticas sobre protestas y manifestaciones, y otras orientaciones para los agentes:
 - Desarrollar e implementar una política oficial para regir el trato a los manifestantes y el manejo de manifestaciones públicas, especialmente el uso de la fuerza contra manifestantes, que cumpla las normas nacionales, constitucionales y de derechos humanos, y que (i) permita que las manifestaciones se celebren con seguridad; (ii) permita únicamente restricciones razonables del momento, el lugar y la forma de las manifestaciones; (iii) prohíba el uso de Unidades de Operaciones Tácticas, incluida la Fuerza de Choque, para coaccionar a las personas para que no ejerzan sus derechos protegidos por la Primera Enmienda; (iv) requiera que la PPR advierta e informe claramente a los manifestantes cuando la policía considere que se han violado las restricciones claramente definidas

sobre el tiempo, el lugar y la forma; y requiera que la PPR formule dichas advertencias y ofrezca una oportunidad razonable de cumplirlas antes de permitir que los agentes arresten a alguien; (v) sólo se permita el arresto de manifestantes cuando exista una causa probable para creer que se está cometiendo o se ha cometido un delito; y (vi) requiera que los agentes de la PPR no usen más fuerza de la necesaria teniendo en cuenta las circunstancias cuando no exista una causa probable de que se está cometiendo o se ha cometido un delito.

- Desarrollar e implementar políticas claras e integrales sobre los encuentros con personas y el trato a personas con condiciones médicas, enfermedades mentales y menores de edad, que cumplan las normas nacionales, constitucionales y de derechos humanos.
- Crear un sistema para que las políticas existentes sean fáciles de localizar y entender por la policía y el público. Esto debería incluir un manual de políticas organizado por temas y nivel de importancia, que debe desglosarse para facilitar su uso. Asegurarse de que todos los miembros de la PPR reciban un ejemplar del manual de políticas.
- Políticas para la investigación de la violencia doméstica y sexual:
 - Adoptar e implementar políticas claras y basadas en las pruebas para investigar la violencia doméstica y sexual, lo que incluye políticas sobre los actos de violencia cometidos por agentes. Deben incluir protocolos que se ocupen de lo siguiente: (i) atender las llamadas al número de emergencia 911 sobre violencia doméstica y sexual; (ii) las entrevistas iniciales y de seguimiento con las víctimas, incluyendo comunicarse con la víctima de una manera segura; (iii) la identificación y la documentación de las lesiones de las víctimas; (iv) el examen forense de las víctimas; (v) las entrevistas y los exámenes forenses de los sospechosos; (vi) la preservación de la evidencia y la gestión de la escena del crimen; (vii) la ejecución de órdenes de protección; (viii) las investigaciones de seguimiento, incluso en los casos en que el sospechoso haya huido del lugar; (ix) la colaboración con los abogados de la víctima; (x) y los servicios y la asistencia que se prestan a las víctimas.
 - Asegurarse de que los protocolos policiales se ocupan de los obstáculos para responder a la violencia doméstica y sexual en áreas rurales.
- Procedimiento de quejas de ciudadanos:
 - Eliminar las barreras para la presentación de quejas y querellas de ciudadanos mediante la reforma del proceso de recopilación de quejas de civiles. Esto debe incluir protocolos sobre la recepción de querellas de civiles para garantizar que los ciudadanos que quieran denunciar casos de conducta abusiva de agentes puedan hacerlo, y procedimientos disciplinarios como la sanción de agentes que incumplan los protocolos de recopilación de quejas e intenten disuadir o intimidar a un querellante. Proporcionar a los civiles que quieran denunciar casos de mala conducta instrucciones claras, formularios fáciles de obtener y completar,

información detallada sobre el proceso de queja e investigación, y un número de teléfono de contacto para consultar el estado de la investigación.

- Aceptar quejas anónimas o de terceras partes con el fin de proseguir con la investigación.
 - Proporcionar a los querellantes información actualizada por escrito y revisada sobre el estatus de sus quejas y el progreso de la investigación consiguiente. Esto debe incluir información sobre las audiencias y las medidas disciplinarias adoptadas, cualquier decisión final en relación con la queja y la investigación correspondiente, y explicaciones detalladas de las razones para el resultado.
 - Crear un proceso para que los civiles puedan apelar la decisión de cerrar una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de un agente, y crear un procedimiento para que los ciudadanos puedan acceder al expediente de la investigación sobre su caso.
 - Realizar iniciativas de sensibilización con las comunidades para ofrecerles información sobre la presentación de quejas y fomentar que los civiles presenten y den seguimiento a quejas cuando hayan sufrido el abuso o la mala conducta policial.
- Investigaciones de presuntos actos de mala conducta o abuso:
 - Desarrollar e implementar totalmente procedimientos integrales para investigar las denuncias de abuso policial y otras quejas de la población civil de manera inmediata, exhaustiva e imparcial. Esto debe incluir procedimientos que requieran que los investigadores identifiquen y entrevisten a todos los agentes implicados y los testigos presenciales, y graben sus testimonios; determinen la cantidad de disparos realizados y localicen todos los casquillos de bala; preserven y efectúen pruebas forenses de toda la evidencia relevante en la escena del crimen, los agentes involucrados y la víctima, incluyendo pruebas de residuos de disparos y de trayectoria de balas.
 - Asegurarse de que los agentes que presencien, o sean responsables de disparos a civiles o usen la fuerza mortal contra un civil tengan que dar su testimonio inmediatamente a los investigadores, en cumplimiento de las garantías procesales adecuadas.
 - Iniciar investigaciones incluso cuando no se hayan presentado quejas, en los casos en que haya salido a la luz información —ya sea a través de informaciones de prensa, demandas civiles sobre el abuso policial, quejas anónimas u otros medios— que sugiera que un agente, tanto de servicio como fuera de servicio, ha cometido un acto de abuso o mala conducta.
 - Cuando sea posible, las investigaciones internas deben conllevar procesos administrativos y penales concurrentes, teniendo debida en cuenta los derechos del agente acusado.
 - En el caso del uso de la fuerza o la muerte durante la custodia, los investigadores de la División de Homicidios de la PPR, la

Superintendencia de Responsabilidad Profesional de la PPR y el DJPR deben realizar investigaciones concurrentes.

- Cuando una querrela civil presentada ante la PPR o cualquier organismo independiente de supervisión o investigación alegue una posible conducta criminal, se debe remitir al examen de los fiscales.
- Presentación de informes y examen del uso de la fuerza e incidentes críticos:
 - Crear y aplicar totalmente un sistema de presentación de informes sobre el uso de la fuerza adecuado para documentar *todos* los episodios de uso de la fuerza por la PPR. El sistema de presentación de informes debe incluir protocolos detallados para informar los disparos en los que estén implicados agentes y las descargas de armas de fuego estando tanto en horario de servicio como fuera de servicio, y la preparación y presentación de informes por escrito sobre incidentes críticos. Los informes sobre el uso de la fuerza deben requerir que los agentes documenten todos los usos de la fuerza y ofrezcan una descripción detallada de los eventos que llevaron al uso de la fuerza y las circunstancias de dicho uso de la fuerza. En los informes sobre el uso de la fuerza los agentes también deberán documentar cualquier lesión infligida y señalar si se prestó asistencia médica.
 - Desarrollar e implementar a totalidad una política para examinar todos los informes sobre el uso de la fuerza e incidentes críticos de manera puntual. Requerir que supervisores no relacionados con el caso o un equipo de examen a nivel de mandos revise cada caso de uso de la fuerza para determinar si se cumplieron las normas constitucionales y otras leyes aplicables, las políticas de la PPR y las especificaciones del fabricante (en el caso de los dispositivos para el uso de la fuerza). El supervisor encargado del examen o el equipo de examen deben entrevistar a los testigos del uso de la fuerza y la víctima de dicho uso, y deben obtener y evaluar todas las pruebas relevantes, lo que incluye balística, evidencias médicas, pruebas fotográficas y videográficas, y otras evidencias de las lesiones provocadas por el uso de la fuerza.
 - El supervisor encargado del examen o el equipo de examen deben preparar un informe que incluya una descripción del incidente y todas las pruebas, observaciones y determinaciones pertinentes acerca de (i) si todos los usos de la fuerza cumplieron la legislación y las políticas de la PPR aplicables, (ii) si los agentes emplearon tácticas adecuadas, (iii) si razonablemente se pudieron haber utilizado medidas alternativas con menos fuerza, (iv) si se podían o debían haber empleado tácticas diferentes, y (v) si se podría haber evitado totalmente el uso de la fuerza. Cuando el uso de la fuerza sea incompatible con las leyes y políticas de la PPR aplicables, el supervisor encargado del examen o el equipo de examen deben recomendar medidas disciplinarias. El informe y las medidas disciplinarias recomendadas deben remitirse a la cadena de mando hasta llegar al Superintendente, para que los revisen y adopten medidas.

- Requerir que se documente en el informe sobre el uso de la fuerza, el informe del arresto y otra documentación relevante, sin excepción, así como la identidad del agente que ejecutó el arresto, el agente que realizó los disparos y todos los agentes que participaron o presenciaron el incidente, y cualquier otro testigo.
- Procedimientos y sanciones disciplinarias:
 - Crear y aplicar procedimientos de disciplina justos y expeditivos para imponer sanciones disciplinarias a los agentes que no cumplan los protocolos, lo que incluye desarmarlos, retirarlos del servicio activo y suspenderlos temporera o permanentemente, cuando proceda. Estos procedimientos disciplinarios deben garantizar también que no se vuelva a armar a los agentes desarmados antes de que un organismo de investigación o disciplina encargado de examinar el incidente de uso de la fuerza determine que el rearme es adecuado.
 - Los procedimientos disciplinarios deben establecer también claramente el momento y la manera en que los agentes deben dejar el servicio y entregar sus armas, de acuerdo con lo estipulado por las políticas de la PPR, la legislación federal y la legislación nacional. Estos procedimientos deben implementarse y aplicarse de manera sistemática.
 - Los procedimientos disciplinarios también deben establecer claramente protocolos para los agentes que regresan al servicio después de suspensiones por razones de disciplina. Estos procedimientos deben implementarse y aplicarse de manera sistemática.
 - Reformar el sistema interno de disciplina para que los superintendentes puedan despedir a los agentes que hayan cometido abusos graves o hayan sido considerados no aptos para la labor policial. Asegurarse de que las expulsiones de agentes abusivos se confirmen, teniendo en cuenta los derechos del agente acusado, y que las expulsiones no sean revocadas de manera rutinaria.
 - Reformar el sistema interno de disciplina para examinar periódicamente el expediente disciplinario de los agentes con el fin de detectar la conducta reincidente de agentes que usan repetidamente la fuerza excesiva o cometen abusos tanto de servicio como fuera de éste, y evaluar el riesgo de conducta ilegal en el futuro. Este sistema de alerta temprana debe conllevar la detección de agentes que son repetidamente objeto de quejas y/o demandas civiles, y la adopción de medidas adecuadas correctivas y disciplinarias (como la exigencia de más adiestramiento, el desarme, la suspensión o la expulsión).
 - Realizar un examen exhaustivo del historial disciplinario de todos los agentes de la PPR para determinar cuáles agentes deben ser expulsado de la fuerza debido a la mala conducta. Este examen debe basarse en criterios objetivos, como la mala conducta reincidente o la gravedad de los abusos cometidos en el pasado.
 - Garantizar que los supervisores denuncien y no toleren la conducta abusiva de sus subordinados. Imponer medidas disciplinarias adecuadas a

- los oficiales superiores que no intervengan para frenar los abusos cometidos por cualquiera de los agentes que supervisan.
- Asegurarse de que los supervisores realicen evaluaciones regulares del desempeño de los agentes subordinados a su mando. Garantizar que estas evaluaciones del desempeño sean significativas y exhaustiva, en lugar de pro forma, y que resulten en la inclusión de una evaluación escrita en el expediente disciplinario del agente.
 - Asegurarse de que se exige responsabilizar a los agentes acusados de cometer actos de violencia doméstica y sexual. Los sistemas de reclutamiento, adiestramiento, supervisión, examen del uso de la fuerza, investigaciones internas y procedimientos disciplinarios deben incorporar normas para la evaluación de agentes que hayan sido acusados de cometer actos de violencia doméstica y sexual, y para denunciar penalmente el caso cuando proceda.
 - Garantizar que los agentes porten sus nombres y placas cuando estén de servicio, especialmente durante manifestaciones masivas. Exigir cuentas a los agentes cuando incumplan este requisito.
- Recopilación de datos y transparencia:
 - Reunir e informar públicamente las estadísticas sobre el uso de la fuerza por parte de la PPR, las investigaciones internas iniciadas y completadas y las medidas disciplinarias adoptadas.
 - Adiestramiento y supervisión:
 - Asegurarse de que todos los agentes de la PPR reciban una formación continuada y periódica sobre el uso de la fuerza. Implementar eficazmente políticas sobre el uso de la fuerza mediante la formación de los agentes para que cumplan todas las políticas y leyes aplicables sobre el uso de la fuerza. Esto debe incluir adiestramiento sobre el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y otras sustancias químicas; macanas; munición “menos mortal” como balas de goma o plástico, granadas de perdigones y proyectiles de bolsas rellenas de perdigones; presión sobre la carótida y técnicas de puntos de presión; pistolas paralizantes y otros dispositivos de descarga eléctrica; descargar, sacar y apuntar armas de fuego; y la manera de abordar capturas tras una persecución.
 - Asegurarse de que los adiestramientos hacen hincapié en que el uso excesivo de la fuerza acarrea medidas disciplinarias, enjuiciamiento penal y/o responsabilidad civil para los agentes.
 - Desarrollar e implementar un programa de formación que subraye las normas constitucionales y de derechos humanos, como las relacionadas con el uso de la fuerza, los registros y las incautaciones y la respuesta a protestas.
 - Garantizar que todos los agentes reciban una formación continuada y periódica sobre los protocolos de queja de la población civil, los protocolos de investigación, los protocolos de presentación de informes y el sistema disciplinario.

- Asegurarse de que todos los agentes reciben una formación continuada y periódica sobre la repuesta a la violencia doméstica y sexual. La formación debe incluir evaluación y orientación sobre el riesgo y el nivel de mortalidad para los agentes, de manera que sus acciones (o inacción) no aumenten el riesgo de exponer al denunciante a un mayor peligro. Los agentes asignados a casos de violencia doméstica y sexual deben recibir formación especializada sobre cuestiones tan fundamentales como las entrevistas a víctimas, sospechosos y testigos o víctimas menores de edad; la investigación de las agresiones sexuales por parte de conocidos y propiciadas por las drogas y el alcohol; la documentación de la violencia sexual y doméstica, como los estrangulamientos; y la determinación del agresor principal.
- Asegurarse de que todos los agentes reciben una formación continuada y periódica sobre el trato a personas con condiciones médicas, personas con enfermedades mentales y menores de edad.
- Garantizar que todos los agentes reciben una formación continuada y periódica sobre el trato a manifestantes y el manejo de manifestaciones públicas, y en particular el uso de la fuerza contra manifestantes y la determinación de una causa probable para arrestar a manifestantes.
- Asegurarse de que todos los agentes reciben una formación continuada y periódica sobre la prohibición de la discriminación y los requisitos constitucionales relacionados con la igualdad ante la ley. Esto debe incluir adiestramiento sobre la lucha contra los prejuicios raciales y étnicos, los estereotipos y la discriminación por motivos de raza, origen étnico y nacional.
- Garantizar que los supervisores reciban una formación continuada y periódica sobre la promoción de responsabilizar a los agentes, la detección de conductas reincidentes, la identificación de agentes de alto riesgo o abusivos, y medidas disciplinarias adecuadas para abordar el abuso por parte de subordinados o colegas.
- Ofrecer una supervisión adecuada para garantizar el cumplimiento de las políticas sobre el uso de la fuerza y otras políticas.
- Respuesta policial a la violencia doméstica y sexual:
 - Asegurarse de que los agentes acepten y registren todas las denuncias y clasifiquen adecuadamente los delitos. Los incidentes de violencia sexual y doméstica no deben clasificarse como infracciones, o desestimarse sumariamente desde el principio cuando parezcan existir elementos delictivos, o porque el agente considera que la víctima no coopera o no está segura de lo ocurrido, o concluye que las pruebas refutan la alegación.
 - Garantizar que los agentes investiguen incidentes de violencia doméstica y sexual con el mismo cuidado y atención que dedican a delitos similares, y que las respuestas policiales no se basen en estereotipos sobre las víctimas o la manera en que se comete agresión. El entrenamiento del personal debe ser suficiente para que puedan realizarse exámenes totales y completos de la escena del crimen e investigaciones de seguimiento. Se

deben registrar las denuncias, que preserven los testimonios detallados de víctimas y testigos y describan el aspecto de la escena, las lesiones de las víctimas, la necesidad de asistencia médica, y los resultados de los exámenes forenses y los análisis clínicos. Las pruebas deben recopilarse de acuerdo con directrices estándar, como interrogar a sospechosos, determinar el historial de violencia, tomar fotos y reunir otras pruebas físicas y forenses. La recopilación debe ser lo más completa posible, incluso cuando haya pasado tiempo desde que se cometió el crimen. Los informes de investigación deben incluir todos los informes preparados por agentes de patrulla u otros que intervinieron inmediatamente.

- Asegurarse de que la situación migratoria u orientación sexual de la víctima no influya en las respuestas policiales a los incidentes de violencia doméstica o sexual.
 - Implementar mecanismos de seguimiento para asegurar que las investigaciones de violencia doméstica o sexual se realicen de acuerdo a la ley. Los supervisores deben encargarse de comprobar si se están clasificando e investigando las denuncias de violencia doméstica o sexual, y si se está acusando o exculpando adecuadamente a los responsables. Los supervisores deben comunicarse con prontitud y eficazmente con los fiscales, y deben responder inmediatamente a las preocupaciones que denunciantes, activistas, fiscales y otras personas puedan haber planteado con respecto a ciertos casos. El proceso de investigación interna debe identificar vías claras para la resolución, las medidas disciplinarias y el enjuiciamiento penal, si fuera necesario.
- Cultura organizativa y actitudes frente a la actividad policial:
 - Institucionalizar la reforma abordando la cultura entre los supervisores y los agentes, lo que incluye enfrentar las conductas, las actitudes y las creencias de los agentes con respecto a la actividad policial. Adoptar objetivos claros y una comunicación eficaz con los agentes acerca de las reformas, examinar la formación sobre reformas y la transformación de la cultura de la fuerza, revisar los criterios de ascenso y las evaluaciones del desempeño que tienen en cuenta las conductas y las actitudes de los agentes con respecto a la reforma y la actividad policial constitucional, e incorporar a todos los niveles de la PPR a las iniciativas de reforma.
 - Los líderes de la PPR deben enviar un mensaje firme y claro a los agentes con palabras y acciones que demuestren que no se tolerarán las violaciones de la constitución y los derechos humanos, y que se aplicarán estrictamente la ley y las políticas de la PPR.

Al Gobernador de Puerto Rico:

- Colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para implementar todas las reformas recomendadas en su carta de conclusiones contrayendo un acuerdo ejecutable y supervisado por un tribunal para aplicar un plan detallado de reformas.

A la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

- Crear mecanismos de supervisión eficaces e independientes que tengan plena autoridad y financiamiento adecuado para desempeñar su mandato. Estos mecanismos deben ser transparentes y totalmente independientes de la PPR y la Oficina del Gobernador de Puerto Rico:
 - Crear un organismo de supervisión eficaz e independiente para hacer seguimiento del cumplimiento de todas las leyes aplicables por parte de la PPR. El organismo de supervisión debe identificar las políticas y las prácticas problemáticas de la PPR, así como las políticas y las prácticas problemáticas, detectadas por el DOJ y la ACLU, que contribuyen a un patrón de abuso policial. El organismo de supervisión debe examinar también las investigaciones internas de la PPR, tener autoridad para ordenar investigaciones adicionales sobre alegaciones de mala conducta policial cuando sea necesario, recomendar reformas, comprobar la implementación de sus recomendaciones, dar seguimiento a las demandas civiles relacionadas con la mala conducta policial e identificar patrones en las denuncias del abuso y los agentes citados en las querellas, participar en las audiencias disciplinarias y otros procesos de examen disciplinario. El organismo debe cumplir las normas internacionales sobre independencia, competencia y eficacia.
 - El organismo de supervisión independiente debe colaborar estrechamente con las partes interesadas pertinentes, y debe generar informes públicos periódicos sobre sus actividades y sus conclusiones.
 - El organismo de supervisión independiente debe asegurarse de que las investigaciones de la violencia doméstica o sexual se realizan de acuerdo con la ley. El organismo de supervisión debe comprobar si se están clasificando e investigando las denuncias de violencia doméstica o sexual, y si se están acusando o exculpando adecuadamente a los responsables.
 - Crear un organismo de investigación independiente encargado de recibir e investigar las quejas de civiles por la mala conducta policial. El organismo de investigación independiente debe contar con autoridad suficiente y específica para investigar con el fin de poder realizar investigaciones completas y eficaces. Por ejemplo, el organismo debe tener potestad para citar a declarar a testigos, como los agentes presuntamente involucrados, y debe tener autoridad para reclamar documentos, obtener órdenes de registro, incautar documentos y otras pruebas, proteger a testigos y obligar a la policía a cooperar. El organismo debe disponer de todos los recursos técnicos necesarios para realizar investigaciones eficaces, como recursos para la recopilación evidencia y análisis forense.
 - El organismo de investigación independiente debe contar con autoridad para asegurar que la PPR y los fiscales adoptan medidas en relación con sus conclusiones. Debe tener potestad para recomendar medidas disciplinarias para los agentes que cometan abusos, y autoridad para hacer cumplir sus recomendaciones disciplinarias.

- El organismo de investigación independiente debe realizar iniciativas de sensibilización con las comunidades para ofrecerles información sobre la presentación de quejas ante la PPR y el organismo, y fomentar que los civiles presenten y persigan quejas cuando hayan sufrido el abuso o la mala conducta policial.
- Dotar al organismo de supervisión independiente y al organismo de investigación independiente de recursos adecuados para ejecutar eficazmente sus mandatos.
- Promulgar legislación sobre la libertad de información que garantice el acceso del público a los registros oficiales.

Al Departamento de Justicia de Puerto Rico:

- Asegurarse de que, cuando hayan pruebas de una conducta delictiva de los agentes de la PPR, como el uso excesivo de la fuerza, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) realice una investigación exhaustiva e imparcial inmediatamente.
- Iniciar enjuiciamiento cuando exista una causa probable para formular cargos contra un agente de la PPR por un delito relacionado con el uso excesivo de la fuerza.

Al Departamento de Justicia de Estados Unidos:

- El DOJ debe contraer un acuerdo con la PPR que pueda ser ejecutado y contralado por un tribunal. El acuerdo debe incluir un plan detallado y ejecutable por un tribunal para la adopción de reformas integrales que aborden todas las observaciones y recomendaciones contenidas en la carta de conclusiones del DOJ, y en la medida de lo posible, las conclusiones contenidas en este informe.
- Garantizar que todo acuerdo de avenencia o de otro tipo con la PPR incluya medidas para abordar los problemas graves con la actual respuesta policial a la violencia doméstica y sexual. Dichas medidas deben incluir la adopción de políticas claras y mejoradas sobre la respuesta policial, la investigación y la recopilación de evidencia, la clasificación de los delitos y las decisiones sobre los cargos, la capacitación de los agentes, la supervisión y responsabilidad por la mala conducta policial con respecto a la violencia doméstica y sexual, y la respuesta a los casos de violencia doméstica o sexual cometidos por agentes.
- Garantizar que todo acuerdo de avenencia o de otro tipo con la PPR incluya medidas para abordar el trato a los manifestantes y el manejo de las manifestaciones públicas, especialmente el uso de la fuerza contra manifestantes. Dichas medidas deben incluir la adopción de una política especial que (i) permita que las manifestaciones se celebren con seguridad; (ii) permita únicamente restricciones razonables del momento, el lugar y la forma de las manifestaciones; (iii) prohíba el uso de Unidades de Operaciones Tácticas, incluyendo la Fuerza de Choque, para coaccionar a las personas para que no ejerzan sus derechos protegidos por la Primera Enmienda; (iv) requiera que la PPR advierta e informe claramente a los manifestantes cuando la policía considere que se han violado las

- restricciones claramente definidas sobre el tiempo, el lugar y la forma; y requiera que la PPR formule dichas advertencias y ofrezca una oportunidad razonable de cumplirlas antes de permitir que los agentes arresten a alguien; (v) sólo permita el arresto de manifestantes cuando exista causa probable para creer que se está cometiendo o se ha cometido un delito; y (vi) requiera que los agentes de la PPR no usen más fuerza de la necesaria teniendo en cuenta las circunstancias cuando no exista causa probable que se está cometiendo o se ha cometido un delito.
- Asegurarse de que los beneficiarios o subbeneficiarios de financiamiento federal respetan la prohibición de la discriminación por motivos de sexo, raza y origen nacional, y las protecciones garantizadas por las leyes federales.

XII. Metodología y agradecimientos

Desde 2004, la ACLU de Puerto Rico ha documentado numerosos casos de brutalidad policial en Puerto Rico, y lleva documentando la represión policial de los derechos protegidos por la Primera Enmienda desde 2009. Entre marzo y septiembre de 2011, la oficina nacional de la ACLU realizó una investigación documental sobre derechos humanos en Puerto Rico para seguir documentando las quejas de brutalidad policial. Adicionalmente, en mayo de 2011, una delegación de la ACLU realizó un proyecto en Puerto Rico para atraer la atención sobre los abusos policiales contra manifestantes. La delegación contó con la participación de la actriz Rosie Pérez; la leyenda del béisbol Carlos Delgado; Juan Cartagena, presidente de LatinoJustice PRLDF; Angelo Falcón, presidente del National Institute for Latino Policy; y Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.

Este informe se basa en una investigación integral de seis meses, durante los cuales la ACLU realizó entrevistas en Puerto Rico con funcionarios del Gobierno y víctimas de la brutalidad policial, sus familiares con vida o abogados, durante marzo, abril, mayo y septiembre de 2011. Nos concentramos en los incidentes ocurridos durante un período de cinco años que va de 2007 a 2011, y hemos continuado el seguimiento de los incidentes, las políticas y las prácticas. En junio de 2011, publicamos un informe preliminar sobre las observaciones de nuestra investigación⁵⁵¹; esta versión ampliada del informe contiene todos nuestros hallazgos basados en investigación de campo e información documental adicional sobre el continuado abuso policial continuado en Puerto Rico.

Este informe se basa en 76 entrevistas realizadas por la ACLU en Puerto Rico y 14 testimonios de estudiantes recopilados en un encuentro en la Universidad de Puerto Rico. En la mayoría de los casos, las entrevistas se realizaron en español; en el caso de los entrevistados que dominaban el inglés, se realizaron en ese idioma.

La ACLU entrevistó a estudiantes universitarios, líderes sindicales y otros ciudadanos que experimentaron el uso excesivo de la fuerza y la violencia policial cuando participaron en protestas pacíficas a lo largo de los últimos tres años. La ACLU entrevistó también a periodistas y estudiantes de periodismo que sufrieron la violencia policial y otras restricciones cuando intentaban informar de estos incidentes. La ACLU también entrevistó a personas que habían sido víctimas de la brutalidad policial extrema desde 2007, y a abogados que habían representado a víctimas de esta grave brutalidad policial. En los casos en que la policía había matado o provocado graves daños cerebrales a la víctima, la ACLU entrevistó a los padres, viudas, hijos o abogados de las víctimas.

Adicional a esto, la ACLU se reunió y obtuvo información de ocho representantes de la Oficina del Gobernador, entre ellos el jefe del Gabinete del Gobernador, el Fiscal General y el Secretario de Estado; cinco representantes de la Universidad de Puerto Rico, entre ellos el presidente y la rectora del campus de Río Piedras; cinco representantes de la Policía de Puerto Rico, entre ellos el Superintendente de la Policía en ese momento y

varios superintendentes auxiliares y adjuntos; así como cuatro senadores y representantes de los partidos mayoritarios y minoritarios.

Jennifer Turner, investigadora sobre derechos humanos de la ACLU, se encargó de la investigación y la redacción de este informe. William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU de Puerto Rico; Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos; y Chris Hansen, abogado (“Senior Staff Attorney”) del Programa sobre Expresión, Privacidad y Tecnología, revisaron y editaron borradores de este informe. Allison Frankel, asistente legal, y Jonathan Sands, asistente, también colaboraron en la investigación.

La ACLU quiere agradecer la valiosa colaboración con innumerable información y asistencia de William Ramírez, Josué González Ortiz, Milagros Benezario-Fuentes y Virgenmina Rivera de la ACLU de Puerto Rico, que hicieron posible este proyecto. También queremos dar las gracias a los muchos líderes comunitarios, activistas, abogados, líderes sindicales y líderes estudiantiles que nos ayudaron a identificar a personas para entrevistar y facilitaron esta investigación. Queremos dar las gracias especialmente a la líder estudiantil Xiomara Caro Díaz, que contribuyó de manera incansable a facilitar esta investigación. La ACLU está profundamente agradecida a las muchas personas que aceptaron que las entrevistáramos para este informe.

¹ Departamento de Justicia de Estados Unidos, División de Derechos Civiles, *Investigación de la Policía de Puerto Rico* (5 de septiembre de 2011), disponible en http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/prpd_letter_espanol.pdf (en adelante, informe del DOJ).

² Rachel Hiskes y Omar Silva-Meléndez contra José Figueroa Sancha, José A. Rosa Carrasquillo y otros, D.P.R., Caso Núm. 10-2246-JAG, Oposición a la petición de autorización para modificar los cargos; véase también Danica Coto, *Puerto Rico Justice Department Denounces Federal Report Criticizing Police Force*, ASSOCIATED PRESS, 8 de octubre de 2011.

³ Ricardo Cortés Chico, *Cuesta arriba para Chief Pesquera*, EL NUEVO DÍA, 22 de abril de 2012.

⁴ Javier Colón y Limarys Suárez, *Repelerán ataques con fuerza*, EL NUEVO DÍA, 8 de mayo de 2012.

⁵ ACLU, *Preliminary Findings of the ACLU Human Rights Documentation Research in Puerto Rico* (13 de junio de 2011), disponible en <http://www.aclu.org/human-rights/aclu-investigation-reveals-systematic-pattern-police-brutality-and-abuse-puerto-rico> y http://www.aclu.org/files/assets/puerto_rico_preliminary_findings_6_13_11_final.pdf.

⁶ Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Programas Judiciales, Buró de Estadísticas Judiciales, *Local Police Departments 2007*, Law Enforcement Management and Administrative Statistics, página 9 (Diciembre de 2010); informe del DOJ, página 12.

⁷ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁸ *Id.*

⁹ Arthur Garfield Hayes, fundador y consejero general de la ACLU, presidió una comisión independiente encargada de investigar estos incidentes. Véase Arthur Garfield Hays y otros, *Report on the Commission of Inquiry on Civil Rights in Puerto Rico*, 22 de mayo de 1937.

¹⁰ Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, *Informe especial sobre los Derechos Civiles y las intervenciones de los policías con los ciudadanos*, páginas 31-50 (San Juan: 1967).

¹¹ Informe del DOJ, página 14.

¹² Según los datos suministrados por la PPR al DOJ, 1.709 agentes de la PPR fueron arrestados entre enero de 2005 y noviembre de 2010. Partiendo de un examen de los artículos de prensa y los casos ante los tribunales locales y federales, el DOJ pudo documentar otros 21 arrestos de agentes que no se habían incluidos en la información proporcionada por la PPR. Véase informe del DOJ, páginas 14-16.

¹³ Informe del DOJ, página 14.

¹⁴ Los informes de la Oficina de Asuntos Internos del NYPD, que incluyen los datos sobre arrestos de agentes, fueron obtenidos por la New York Civil Liberties Union (NYCLU) mediante una petición de libre acceso a la información, y pueden consultarse en <http://www.nyclu.org/news/nyclu-releases-16-years-of-nypd-corruption-reports>.

¹⁵ Informe del DOJ, página 16.

¹⁶ *Id.*, página 17.

¹⁷ Lizette Álvarez, *Murder Rate and Fear Rise in Puerto Rico*, N.Y. TIMES, 20 de junio de 2011.

¹⁸ Informe del DOJ, página 13.

¹⁹ Lisa Evans, *Mapping Murder throughout the World*, GUARDIAN (Reino Unido), 10 de octubre de 2011; *PR Murder Rate Among Highest in World*, PUERTO RICO DAILY SUN, 14 de octubre de 2011.

²⁰ Departamento de Justicia de Estados Unidos, División de Derechos Civiles, *Investigación de la Policía de Puerto Rico* (5 de septiembre de 2011), disponible en http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/prpd_letter_espanol.pdf (en adelante, informe del DOJ).

²¹ Rachel Hiskes y Omar Silva-Meléndez contra José Figueroa Sancha, José A. Rosa Carrasquillo y otros, D.P.R., Caso Núm. 10-2246-JAG, Oposición a la petición de autorización para modificar los cargos; véase también Danica Coto, *Puerto Rico Justice Department Denounces Federal Report Criticizing Police Force*, ASSOCIATED PRESS, 8 de octubre de 2011.

²² Ricardo Cortés Chico, *Cuesta arriba para Chief Pesquera*, EL NUEVO DÍA, 22 de abril de 2012.

²³ Entrevista de la ACLU con José Figueroa Sancha, entonces superintendente de la PPR (ahora retirado), 3 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴ Entrevista de la ACLU con [nombre oculto a petición del entrevistado], San Juan, Puerto Rico.

²⁵ Memorandum of Understanding between the Department of Justice for the Commonwealth of Puerto Rico, the Puerto Rico Police Department, and the United States Attorney's Office for the District of Puerto Rico for the Referral and Handling of Cases where there is Concurrent and State Federal Jurisdiction, 2 de febrero de 2010.

²⁶ *Id.*

²⁷ Véase, por ejemplo, la demanda presentada por la ACLU en representación de la *Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club de Puerto Rico, y otros contra Overseas Press Club of Puerto Rico, et al.*, v. *Robert Mueller y diez agentes desconocidos del Buró Federal de Investigaciones, y otros*, toda la documentación legal *está disponible en* <http://www.aclu.org/free-speech/puerto-rico-journalists-association-v-mueller>. Un juez federal dictaminó en contra de los reporteros en junio de 2007, pero un tribunal federal de apelaciones revocó la decisión en 2008 y afirmó que el tribunal inferior se había equivocado al desestimar las denuncias del uso excesivo de la fuerza conforme a la Cuarta Enmienda. En agosto de 2009, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos volvió a desestimar la demanda de los periodistas. Aunque reconoció que los agentes del FBI podían haber violado los derechos de los reporteros, el juez dictaminó no obstante que los periodistas no podían ser indemnizados ni obtener una orden judicial que prohibiera al FBI volver a atacarlos. La ACLU recurrió el fallo al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que emitió un dictamen el 16 de mayo de 2012 en el que afirmó la decisión penal firme del tribunal de distrito.

²⁸ En este informe, el término “civil” se refiere a los ciudadanos y residentes de Puerto Rico que no forman parte de la PPR.

²⁹ Eugenio Hopgood Dávila, *Peligrosa arma en la policía*, EL NUEVO DÍA, 30 de enero de 2012.

³⁰ Informe del DOJ, página 40. Cifra citada a 6 de diciembre de 2010.

³¹ Colegio de Abogados, *Vista Pública Sobre la Situación de Derechos Civiles en Puerto Rico*, 30 de marzo de 2011.

³² Javier Colón y Limarys Suárez, *Agente Delgado: “No deseaba que esas personas murieran”*, EL NUEVO DÍA, 4 de mayo de 2012; *Muere un joven baleado por un agente en Manatí*, EL NUEVO DÍA, 30 de abril de 2012; *Dan de alta a policía golpeado ayer en Manatí*, Primera Hora, 2 de abril de 2012.

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*; Javier Colón Dávila, *Alegan que muerte de joven a manos de agente fue un abuso*, EL NUEVO DÍA, 1 de mayo de 2012.

³⁵ *Id.*; Javier Colón Dávila, *Alegan que muerte de joven a manos de agente fue un abuso*, EL NUEVO DÍA, 1 de mayo de 2012.

³⁶ Véase informe del DOJ, páginas 40-41.

³⁷ *Id.*

³⁸ Los datos sobre casos documentados por la ACLU incluyen muertes a manos de la PPR no provocadas por disparos.

³⁹ Javier Colón Dávila, *Con muerte cerebral menor baleado por la Policía*, EL NUEVO DÍA, 9 de diciembre de 2011; Maribel Hernández Pérez, *Vecinos claman por la vida de niño que recibió disparo en la cabeza*, PRIMERA HORA, 10 de diciembre de 2011; Javier Colón Dávila, *Con muerte cerebral al adolescente*, EL NUEVO DÍA, 10 de diciembre de 2011; Joel Ortiz Rivera, *Ante el NIE el caso del menor baleado*, EL NUEVO DÍA, 11 de diciembre de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Sepultan al joven baleado por la Policía en Vega Baja*, EL NUEVO DÍA, 14 de diciembre de 2011; Wilma Maldonado Arrigoitia, *Familia despierta a Beto exigiendo investigación por abuso policiaco*, PRIMERA HORA, 14 de diciembre de 2011.

⁴⁰ Daniel Rivera Vargas, *Policía le dispara a asaltante en Caguas*, EL NUEVO DÍA, 5 de diciembre de 2011; Ariel Rivera Vázquez, *Asaltante muere en medio de robo en Caguas*, WAPA.TV, 4 de diciembre de 2011.

⁴¹ Este caso es un ejemplo del uso de la fuerza mortal por agentes de la policía municipal. Como se señaló anteriormente, se incluye este caso porque los agentes de la policía municipal han recibido adiestramiento junto con agentes de la PPR en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico (la academia de policía de Puerto Rico), y sus presuntos crímenes se someten al mismo procedimiento de investigación. Este caso se incluye como un ejemplo relacionado e instructivo porque los departamentos de la policía municipal de Puerto Rico están afectados por los mismos problemas de orientación inadecuada de sus agentes en relación con el uso de la fuerza, impunidad por los abusos y adiestramiento inadecuado que plagan la PPR.

⁴² Javier Colón Dávila, *Evidencia apunta a que motociclista no disparó: Policías lo balearon durante persecución*, EL NUEVO DÍA, 15 de noviembre de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Testigo desmiente versión oficial: La novia del joven muerto niega que apuntara con arma*, EL NUEVO DÍA, 17 de noviembre de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Policías alegan que el joven les apuntó con arma*, EL NUEVO DÍA, 13 de noviembre de 2011; *Velorio de joven muerto a manos de guardias municipales de Guaynabo*, EL NUEVO DÍA, 16 de noviembre de 2011.

-
- ⁴³ *Agente franco de servicio mata asaltante en Caguas*, PRIMERA HORA, 13 de septiembre de 2011.
- ⁴⁴ *Presunto asaltante muere a manos de policía en farmacia de Guaynabo*, EL NUEVO DÍA, 9 de marzo de 2011; *Muere al intentar un asalto con arma falsa*, EL NUEVO DÍA, 10 de marzo de 2011.
- ⁴⁵ Maribel Hernández Pérez and Bárbara Figueroa, *Muere policía a manos de compañero policía en Luquillo*, PRIMERA HORA, 30 de septiembre de 2010; Eugenio Hopgood Dávila, *Sacudida la fuerza*, EL NUEVO DÍA, 1 de octubre de 2010; Miguel Díaz Román, “Él sabe lo que es una pistola de verdad”, EL NUEVO DÍA, 2 de octubre de 2010; Bárbara J. Figueroa Rosa, *Continúa pesquisa sobre la muerte del policía George Edill Vega*, PRIMERA HORA, 4 de octubre de 2010; Javier Colón Dávila, *Acusarán a agente que mató a colega en Luquillo*, EL NUEVO DÍA, 25 de octubre de 2010; Pedro Rosa Nales, *Jurado encuentra culpable a policía*, WAPA, 29 de julio de 2011.
- ⁴⁶ Raúl Colón, *Another Citizen Killed by Police Officers*, PUERTO RICO DAILY SUN, 30 de septiembre de 2010; Danica Coto, *Puerto Rican Police Under Intense Scrutiny After Second Killing in 1 Week; Feds Investigating*, ASSOCIATED PRESS, 29 de septiembre de 2010; *Crímenes en PR Causan Polémica: Ponen en duda la preparación policiaca*, UNIVISIÓN, 1 de octubre de 2010.
- ⁴⁷ *Jorge Molina y otros contra Natal Rivera y otros*, Demanda, D.P.R., Caso Núm. 3:2011cv01882, presentada el 7 de septiembre de 2011; *Superintendente confirma se radicarán cargos por asesinato en segundo grado a policía que mató a joven deportista*, EL NUEVO DÍA, 28 de septiembre de 2010; Frances Rosario y Javier Colón, *Súper pide espacio para pesquisa de incidente de joven baleado*, EL NUEVO DÍA, 23 de septiembre de 2010; *Causa para juicio contra ex policía Abimalet Natal Rivera*, PRIMERA HORA, 17 de marzo de 2011; Maribel Hernández Pérez, *Joven baleado por la Policía pierde la batalla*, PRIMERA HORA, 25 de septiembre de 2010.
- ⁴⁸ Juan Nadal Nolasco, *Policías matan a tiros dominicano en Río Piedras Puerto Rico*, EL NUEVO DIARIO (República Dominicana), 22 de agosto de 2010; Sara M. Justicia Doll, *Identifican hombre que murió en Río Piedras*, PRIMERA HORA, 22 de agosto de 2010; Sara M. Justicia Doll, *Agentes de la DOE dan muerte a un hombre en medio de incidente de violencia*, PRIMERA HORA, 22 de agosto de 2010; Leysa Caro González, *Velan a joven muerto en medio de incidente con agentes policíacos*, PRIMERA HORA, 26 de agosto de 2010.
- ⁴⁹ Este caso es un ejemplo del uso de la fuerza mortal por agentes de la policía municipal. Como se señaló anteriormente, se incluye este caso porque los agentes de la policía municipal han recibido adiestramiento junto con agentes de la PPR en el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico (la academia de policía de Puerto Rico), y sus presuntos crímenes se someten al mismo procedimiento de investigación. Este caso se incluye como un ejemplo relacionado e instructivo porque los departamentos de la policía municipal de Puerto Rico están afectados por los mismos problemas de orientación inadecuada de sus agentes en relación con el uso de la fuerza, impunidad por los abusos y adiestramiento inadecuado que plagan la PPR.
- ⁵⁰ Sara M. Justicia Doll, *Hermana de paciente mental que murió en manos de agentes municipales cuestiona la intervención*, PRIMERA HORA, 11 de agosto de 2010; *Respuesta mortal a ataque a machetazos*, EL NUEVO DÍA, 31 de julio de 2010; Eugenio Hopgood Dávila, *Sin protocolo para pacientes mentales*, EL NUEVO DÍA, 30 de enero de 2012.
- ⁵¹ Osman Pérez Méndez, *Sargento es acusado por tres cargos y le imponen fianza de \$70 mil*, EL NUEVO DÍA, 5 de octubre de 2010; Mike Melia, *Another Puerto Rico Police Charged with Murder*, ASSOCIATED PRESS, 6 de octubre de 2010.
- ⁵² Maribel Hernández Pérez, *Muerto a tiros paciente mental*, PRIMERA HORA, 27 de marzo de 2010; Miguel Díaz Román, *Prematuro honor a dos agentes: Son reconocidos sin que termine pesquisa sobre incidente mortal*, EL NUEVO DÍA, 1 de marzo de 2011.
- ⁵³ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico; Rosita Marrero, *Denuncian abusos y persecución de la Policía contra dominicanos*, PRIMERA HORA, 4 de octubre de 2010; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, *Informe Médico – Forense, Autopsia Núm. 4402-9, Franklin Cáceres Osorio*, 6 de julio de 2010 (informe de la autopsia en los archivos de la ACLU); Instituto Nacional de Ciencias Forenses, *Procuraduría General de la República, Expediente #A-011-10, Franklin Cáceres Osorio*, 15 de febrero de 2010 (informe de la autopsia en los archivos de la ACLU).
- ⁵⁴ Departamento de Justicia de Puerto Rico, *NIE asume jurisdicción en incidente en Mayagüez*, comunicado de prensa, 17 de julio de 2009; *Muere sujeto a manos de la Policía*, ASSOCIATED PRESS, 17 de julio de 2009; Maelo Vargas Saavedra, *Dos muertos en complicada secuencia de hechos en el oeste*, PRIMERA HORA, 17 de julio de 2009.

-
- ⁵⁵ Aixa Vázquez, *Asaltante muere a manos de policías*, WAPA.TV, 26 de julio de 2009; Darisabel Texidor Guadalupe, *Policías matan asaltante durante robo en Villalba*, PRIMERA HORA, 26 de julio de 2009; *Justicia y el NIE investigan caso de muerte de asaltante en Villalba*, PRIMERA HORA, 26 de julio de 2009.
- ⁵⁶ José Luis Irizarry Muñiz, *Betsy Jeannette Pérez Rivera y otros contra Eric Rivera Nazario, Jaime Rodríguez Vega y otros*, demanda 11-01337 (13 de abril de 2011); Óscar J. Serrano y Melissa Solórzano García, *Demanda por policías que mataron al joven en Yauco*, NOTICEL, 19 de abril de 2011; *Podrían demandar al agente*, EL NUEVO DÍA, 18 de octubre de 2010; *Objetan desaparición de vídeo en caso de brutalidad policiaca*, EL NUEVO DÍA, 2 de julio de 2010; Keila López Alicea, *Justicia no se rinde*, EL NUEVO DÍA, 4 de febrero de 2009; *Causa para juicio contra policía estatal*, EL NUEVO DÍA, 26 de junio de 2009.
- ⁵⁷ Sara M. Justicia Doll, *Policía mata hombre armado*, PRIMERA HORA, 1 de septiembre de 2008; *Muere hombre en medio de intervención policiaca*, EL NUEVO DÍA, 31 de agosto de 2008.
- ⁵⁸ Maribel Hernández Pérez, *Un tiro en la espalda*, PRIMERA HORA, 7 de agosto de 2008.
- ⁵⁹ Jalibeth Rodríguez, *Policía mata a escalador en Mayagüez*, WAPA.TV, 28 de abril de 2008.
- ⁶⁰ Maribel Hernández Pérez, *Reclamo de nueva investigación en caso de paciente mental asesinado por un policía*, PRIMERA HORA, 4 de abril de 2011.
- ⁶¹ Entrevista de la ACLU con Ruth Jiménez de Jesús, San Juan, Puerto Rico, 28 de marzo de 2011.
- ⁶² Maribel Hernández Pérez, *Policía mata a un sospechoso*, PRIMERA HORA, 16 de marzo de 2007.
- ⁶³ Carmen Enid Acevedo, *Testigo del abusado y victimario de un ciudadano*, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, 6 de abril de 2011; Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentada el 15 de marzo de 2011.
- ⁶⁴ Bárbara J. Figueroa Rosa, *Julio Voltio y Residente desahogan su sufrimiento*, PRIMERA HORA, 20 de agosto de 2007.
- ⁶⁵ Rosita Marrero, *Ponen en duda versión del NIE sobre muerte de tres jóvenes*, PRIMERA HORA, 28 de julio de 2011; Rosita Marrero, *Recrean escena del crimen en la Placita Bolívar en Santurce*, PRIMERA HORA, 16 de agosto de 2011; Limarys Suárez Torres, *Reviven incidente en detalle*, EL NUEVO DÍA, 17 de agosto de 2011; Rosita Marrero, *A madre le cuesta aceptar que no le notificaron muerte de su hijo a manos del NIE*, PRIMERA HORA, 3 de agosto de 2011; Rosita Marrero, *Vieron cuando arrastraron a joven por el pavimento y lo remataron*, PRIMERA HORA, 5 de agosto de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Justicia exonora a agente del NIE que mató a tres*, EL NUEVO DÍA, 28 de diciembre de 2011; *Culmina investigación sobre asesinato de tres jóvenes*, PRIMERA HORA, 28 de diciembre de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Espalдарazo de Justicia al agente que mató a tres*, EL NUEVO DÍA, 29 de diciembre de 2011.
- ⁶⁶ *Id.*
- ⁶⁷ *Id.*
- ⁶⁸ Rosita Marrero, *Vieron cuando arrastraron a joven por el pavimento y lo remataron*, PRIMERA HORA, 5 de agosto de 2011.
- ⁶⁹ Rosita Marrero, *Ponen en duda versión del NIE sobre muerte de tres jóvenes*, PRIMERA HORA, 28 de julio de 2011; Rosita Marrero, *A madre le cuesta aceptar que no le notificaron muerte de su hijo a manos del NIE*, PRIMERA HORA, 3 de agosto de 2011.
- ⁷⁰ Rosita Marrero, *Vieron cuando arrastraron a joven por el pavimento y lo remataron*, PRIMERA HORA, 5 de agosto de 2011.
- ⁷¹ Rosita Marrero, *Recrean escena del crimen en la Placita Bolívar en Santurce*, PRIMERA HORA, 16 de agosto de 2011; Limarys Suárez Torres, *Reviven incidente en detalle*, EL NUEVO DÍA, 17 de agosto de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Justicia exonora a agente del NIE que mató a tres*, EL NUEVO DÍA, 28 de diciembre de 2011; *Culmina investigación sobre asesinato de tres jóvenes*, PRIMERA HORA, 28 de diciembre de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Espalдарazo de Justicia al agente que mató a tres*, EL NUEVO DÍA, 29 de diciembre de 2011.
- ⁷² Eugenio Hopgood Dávila, *Justicia exonora a agente del NIE que mató a tres*, EL NUEVO DÍA, 28 de diciembre de 2011; *Culmina investigación sobre asesinato de tres jóvenes*, PRIMERA HORA, 28 de diciembre de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Espalдарazo de Justicia al agente que mató a tres*, EL NUEVO DÍA, 29 de diciembre de 2011.
- ⁷³ Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011; *Pueblo v. Pagán Cruz*, P.R., HSCR2007-1965-

1966; informe del DOJ, páginas 20-21; entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011.

⁷⁸ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011; *Pueblo v. Pagán Cruz*, P.R., HSCR2007-1965-1966; informe del DOJ, páginas 20-21; entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.*

⁸³ *Id.*

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011; *Pueblo v. Pagán Cruz*, P.R., HSCR2007-1965-1966; informe del DOJ, páginas 20-21; entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ *Id.*

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ Imágenes de vídeo disponibles en http://www.youtube.com/watch?v=OdTXUavJ_0A.

⁹² *Pueblo contra Pagán Cruz*, P.R., HSCR2007-1965-1966.

⁹³ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Opinión y Orden, J. Besosa, 22 de diciembre de 2011.

⁹⁴ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011; entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.*

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ *Id.*; Carmen Enid Acevedo, *Testigo del abusado y victimario de un ciudadano*, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, 6 de abril de 2011

¹⁰⁴ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso No. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011.

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ Entrevista de la ACLU con Ruth Jiménez de Jesús, San Juan, Puerto Rico, 28 de marzo de 2011.

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Id.*

-
- ¹¹⁰ Entrevista de la ACLU con Ruth Jiménez de Jesús, San Juan, Puerto Rico, 28 de marzo de 2011.
- ¹¹¹ *Id.*
- ¹¹² *Id.*
- ¹¹³ *Id.*
- ¹¹⁴ *Id.*
- ¹¹⁵ *Id.*
- ¹¹⁶ *Id.*
- ¹¹⁷ Informe del DOJ, página 21.
- ¹¹⁸ *Puerto Rico: Más abuso en residencial Villa Esperanza*, INDYMEDIA, 26 de octubre de 2010.
- ¹¹⁹ Colectivo Candelaria Pa'lante, *Mayagüez: Denuncian Operativo Policial de Represión Contra Activista*, INDYMEDIA, 18 de abril de 2009.
- ¹²⁰ Gabriel Rodríguez and Laura Moscoso Candelas, *Peligro de desalojo de La Perla se repite en otras comunidades pobres*, PRENSA COMUNITARIA, 13 de julio de 2011.
- ¹²¹ Entrevista de la ACLU con Mauricio Alejandro Castillo Shaw, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ¹²² *Id.*
- ¹²³ *Id.*
- ¹²⁴ *Id.*
- ¹²⁵ *Id.*
- ¹²⁶ *Id.*
- ¹²⁷ *Id.*
- ¹²⁸ *Id.*
- ¹²⁹ *Id.*
- ¹³⁰ Entrevista de la ACLU de Puerto Rico con Rossmaly Cirino, 16 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ¹³¹ *Id.*
- ¹³² *Id.*
- ¹³³ *Id.*
- ¹³⁴ *Id.*
- ¹³⁵ *Id.*
- ¹³⁶ ACLU de Puerto Rico, *Vista Pública de la Unión Americana de Libertas Civiles sobre Incidentes de Abuso Policiaco en La Perla, Viejo San Juan, Puerto Rico*, Testimonio de Rafael Ortiz, 4 de agosto de 2011.
- ¹³⁷ *Id.*
- ¹³⁸ ACLU de Puerto Rico, *Vista Pública de la Unión Americana de Libertas Civiles sobre Incidentes de Abuso Policiaco en La Perla, Viejo San Juan, Puerto Rico*, Testimonio de Tania Amigón, 4 de agosto de 2011.
- ¹³⁹ *Id.*
- ¹⁴⁰ Entrevista de la ACLU con Luis Ayala, 31 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ¹⁴¹ *Id.*
- ¹⁴² *Id.*
- ¹⁴³ *Id.*
- ¹⁴⁴ *Id.*
- ¹⁴⁵ *Id.*
- ¹⁴⁶ *Id.*
- ¹⁴⁷ *Id.*
- ¹⁴⁸ Entrevista de la ACLU con Evelyn M. Rivera, 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ¹⁴⁹ *Id.*
- ¹⁵⁰ *Id.*
- ¹⁵¹ *Id.*
- ¹⁵² *Id.*
- ¹⁵³ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico.
- ¹⁵⁴ *Id.*
- ¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ Véase, por ejemplo, Rosita Marrero, *Discrimen y persecución bochornosa contra dominicanos*, PRIMERA HORA, 26 de mayo de 2011; Eugenio Hopgood Dávila, *Dominicanos denuncian persecución de parte de la Policía*, EL NUEVO DÍA, 26 de mayo de 2011; Claudio Matos, *Denuncian constante violación de los derechos de los inmigrantes dominicanos*, PRIMERA HORA, 27 de abril de 2011.

¹⁵⁷ *Id.*

¹⁵⁸ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico.

¹⁵⁹ *Id.*

¹⁶⁰ *Id.*; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, *Informe Médico – Forense, Autopsia Núm. 4402-9, Franklin Cáceres Osorio*, 6 de julio de 2010 (informe de la autopsia en los archivos de la ACLU); Instituto Nacional de Ciencias Forenses, *Procuraduría General de la República, Expediente #A-011-10, Franklin Cáceres Osorio*, 15 de febrero de 2010 (informe de la autopsia en los archivos de la ACLU).

¹⁶¹ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico.

¹⁶² *Id.*

¹⁶³ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico; Rosita Marrero, *Denuncian abusos y persecución de la Policía contra dominicanos*, PRIMERA HORA, 4 de octubre de 2010.

¹⁶⁴ *Id.*

¹⁶⁵ *Id.*

¹⁶⁶ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico.

¹⁶⁷ *Id.*

¹⁶⁸ Rosita Marrero, *Denuncian abusos y persecución de la Policía contra dominicanos*, PRIMERA HORA, 4 de octubre de 2010.

¹⁶⁹ Entrevista de la ACLU con Laura Mota, 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

¹⁷⁰ *Id.*

¹⁷¹ *Id.*

¹⁷² *Id.*

¹⁷³ *Id.*

¹⁷⁴ *Id.*

¹⁷⁵ *Id.*

¹⁷⁶ *Id.*

¹⁷⁷ *Id.*

¹⁷⁸ Entrevista de la ACLU con Joel Félix, 7 de abril de 2011, Santurce, Puerto Rico.

¹⁷⁹ *Id.*

¹⁸⁰ *Id.*

¹⁸¹ *Id.*

¹⁸² *Id.*

¹⁸³ *Id.*

¹⁸⁴ *Id.*

¹⁸⁵ *Id.*

¹⁸⁶ *Id.*

¹⁸⁷ *Id.*

¹⁸⁸ Representante Luis V. Gutiérrez, Cámara de Representantes de Estados Unidos, Observaciones en la sesión parlamentaria, 16 de febrero de 2011, *disponible en*

http://www.gutierrez.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=642%3Aremarks-by-rep-luis-v-gutierrez&catid=48&Itemid=72 y

<http://www.youtube.com/watch?v=QJhmoV01xQI&feature=youtu.be> (vídeo).

¹⁸⁹ Entrevista de la ACLU con Luisa Acevedo Zambrano, 2 de mayo de 2011 y 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

¹⁹⁰ Entrevista de la ACLU con Shariana Ferrer Núñez, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

¹⁹¹ Informe del DOJ, página 19.

¹⁹² *Id.*, página 25.

¹⁹³ Entrevista de la ACLU con Roberto Morales, 1 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

¹⁹⁴ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

¹⁹⁵ *Id.*

- ¹⁹⁶ Oficina del Cirujano General, U.S. Army and Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center, compilado por Shirley D. Tuorinsky, *Riot Control Agents*, MEDICAL ASPECTS OF CHEMICAL WARFARE, página 462 (2008), disponible en http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/chemwarfare/Ch13_Pg441_484.pdf.
- ¹⁹⁷ *Id.*, página 460.
- ¹⁹⁸ *Id.*, página 452.
- ¹⁹⁹ Deborah Blum, *About Pepper Spray*, Scientific American Blog, 11 de noviembre de 2011, disponible en <http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2011/11/21/about-pepper-spray/>.
- ²⁰⁰ Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, abierta a firma el 13 de enero de 1993, 32 I.L.M. 800, en vigor desde el 29 de abril de 1997.
- ²⁰¹ ACLU of Southern California, *Pepper Spray Update: More Fatalities, More Questions* (1995), disponible en http://www.aclu-sc.org/attach/p/Pepper_Spray_New_Questions.pdf.
- ²⁰² *Id.*
- ²⁰³ Deborah Blum, *About Pepper Spray*, Scientific American Blog, 11 de noviembre de 2011.
- ²⁰⁴ Deborah F. Bilmire y otros, *Pepper-Spray-induced Respiratory Failure Treated With Extracorporeal Membrane Oxygenation*, PEDIATRICS Vol. 98 No. 5, páginas 961-63 (1 de noviembre de 1996), disponible en <http://pediatrics.aappublications.org/content/98/5/961.short>.
- ²⁰⁵ Minna Vesaluoma y otros, *Effects of Oleoresin Capsicum Pepper Spray on Human Corneal Morphology and Sensitivity*, INVEST. OPHTHALMOL. VIS. Sci. julio de 2000, vol. 41 núm. 8, páginas 2138-2147, disponible en <http://www.iovs.org/content/41/8/2138.full>.
- ²⁰⁶ Harry Salem, E.J. Olajos y otros, *Capsaicin Toxicology Review*, U.S. Army ERDEC, Life Sciences Department (1993).
- ²⁰⁷ C. Gregory Smith y Woodhall Stopford, *Health Hazards of Pepper Spray* (2004), disponible en <http://web.archive.org/web/20000817004624/http://www.ncmedicaljournal.com/Smith-OK.htm>.
- ²⁰⁸ Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico* (21 de diciembre de 2007), disponible en <http://www.claridadpuertorico.com/documents/articles/02%20Informe%20Polic%C3%ADa%2021%20Dic%202007.pdf>.
- ²⁰⁹ Khonsari RM, Fleuridas G, Arzul L. y otros, *Severe Facial Rubber Bullet Injuries: Less Lethal but Extremely Harmful Weapons*, INJURY INT'L J. OF THE CARE OF THE INJURED 41, páginas 73-76 (2010). Charlier P, Alvarez J.D., Durigon M. y otros, *Unusual Death by Rubber Bullet: Should these Guns be Reclassified as Lethal Weapons?*, AM. J. FORENS. MED. PATHOL. 33(1) e4 (marzo de 2012).
- ²¹⁰ Cristen Conger, *Can Rubber Bullets Kill You?*, DISCOVERY NEWS (15 de agosto de 2011).
- ²¹¹ Ahmad Mahajna y otros, *Blunt and Penetrating Injuries Caused by Rubber Bullets during the Israeli-Arab Conflict in October, 2000: A Retrospective Study*, THE LANCET Vol. 359, Núm. 9320, páginas 1795-1800 (25 de mayo de 2002) disponible en [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(02\)08708-1/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)08708-1/fulltext). Véase también *The Official Summation of the OR Commission Report*, HA'RETZ (Israel), 2 de septiembre de 2003 (que concluye: "El comité determinó que el uso de balas recubiertas de goma no es adecuado debido a sus riesgos. Se determinó que la policía debe suspender su uso. Se insistió en que esto no impide que la policía utilice otros métodos cinéticos, como los compuestos de goma. No obstante, el principio rector debe ser que un método con posibles consecuencias mortales sólo puede usarse en situaciones de peligro real e inmediato contra la vida, y sólo si su nivel de precisión le permite hacer impacto contra el origen de este peligro contra la vida y a nadie más. En otras situaciones, la policía tiene que usar métodos más mortales").
- ²¹² *Police Ban Use of Rubber Bullets on Protesters*, MAIL & GUARDIAN (Sudáfrica), 14 de enero de 2012.
- ²¹³ ACLU de Minnesota, *Shocking: The Lack of Responsible Taser Policy in Minnesota* (9 de diciembre de 2011), disponible en http://www.aclu.org/files/assets/aclu_report_on_taser_policy_12_2011.pdf.
- ²¹⁴ Entrevista de la ACLU con Enrique G. Juliá Ramos, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ²¹⁵ Informe del DOJ, página 34.
- ²¹⁶ Amnistía Internacional, "Less than Lethal"? *The Use of Stun Weapons in U.S. Law Enforcement* (2008), disponible en <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/010/2008/en/530be6d6-437e-4c77-851b-9e581197ccf6/amr510102008en.pdf>; Amnistía Internacional, *List of Deaths Following Use of Stun Weapons in U.S. Law Enforcement, June 2001 to 31 August 2008*, disponible en

<http://amnesty.org/en/library/asset/AMR51/146/2008/en/a4e3aa10-cb62-11dd-9ec2-e57da9519f8c/amr511462008en.pdf>.

²¹⁷ Amnistía Internacional, “*Less than Lethal*”? *The Use of Stun Weapons in U.S. Law Enforcement* (2008).

²¹⁸ *Id.*

²¹⁹ ACLU de Minnesota, *Shocking: The Lack of Responsible Taser Policy in Minnesota* (9 de diciembre de 2011).

²²⁰ Entrevista de la ACLU con Victoria Carro Robledo, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.

²²¹ Testimonio de [nombre oculto], 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.

²²² Ed Morales, *Puerto Rico’s Policing Crisis*, THE NATION, 6 de diciembre de 2011.

²²³ Testimonio de Yaritza Figueroa, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.

²²⁴ *Id.*

²²⁵ *Id.*

²²⁶ *Id.*

²²⁷ Entrevista de la ACLU con Victoria Carro Robledo, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.

²²⁸ *Id.*

²²⁹ Comunicación por correo electrónico de Rachel Hiskes, 4 de mayo de 2011.

²³⁰ Testimonio de Gamelyn Oduardo, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.

²³¹ Testimonio de Mariana López Rosado, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.

²³² Entrevista de la ACLU con Elisa Ramos, 4 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²³³ Ley de Declaración del Estado de Emergencia Fiscal y Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (también conocida como Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico), Ley Núm. 7, H.B. 13, aprobada el 8 de enero de 2010.

²³⁴ Véase *Asociación de Fotoperiodismo contra Rivera Schatz*, Demanda, P.R. (2011); *Eduardo Bhatia Gautier y otros contra Rivera Schatz*, Demanda, P.R. (2011). La Constitución de Puerto Rico ordena que todas las sesiones legislativas deben estar abiertas al público.

²³⁵ Colegio de Abogados de Puerto Rico, Comisión Especial Sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales, *Informe Preliminar* at 16 (12 de julio de 2010), *disponible en* http://www.capr.org/dmdocuments/Informe_Comi_Fiscalizacion.pdf; Sara Justicia y Nydia Bauzá, *Macanazos y gases lacrimógenos a los estudiantes en el Capitolio*, PRIMERA HORA, 30 de junio de 2010.

²³⁶ Comunicación por correo electrónico de Rachel Hiskes, 4 de mayo de 2011.

²³⁷ Entrevista de la ACLU con Shariana Ferrer Núñez, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²³⁸ *Id.*

²³⁹ Entrevista telefónica de la ACLU con Carmen Yulín Cruz Soto, 26 de abril de 2011.

²⁴⁰ *Id.*

²⁴¹ *Id.*

²⁴² *Id.*

²⁴³ Entrevista de la ACLU con Shariana Ferrer Núñez, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴⁴ Entrevista de la ACLU con Betty Peña Peña, 4 de abril de 2011 y 2 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴⁵ Entrevista de la ACLU con Elisa Ramos Peña, 4 de abril de 2011 y 2 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴⁶ Entrevista de la ACLU con Betty Peña Peña, 4 de abril de 2011 y 2 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴⁷ Entrevista de la ACLU con Elisa Ramos Peña, 4 de abril de 2011 y 2 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴⁸ Entrevista de la ACLU con Betty Peña Peña, 4 de abril de 2011 y 2 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁴⁹ Entrevista de la ACLU con Elisa Ramos Peña, 4 de abril de 2011 y 2 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁵⁰ Entrevista de la ACLU con Osvaldo Toledo, 30 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

²⁵¹ *Id.*

²⁵² Para ver imágenes de vídeo del incidente, *puede visitar, por ejemplo*, <http://www.youtube.com/watch?v=AJoWEIVF8vo> ; http://www.youtube.com/watch?v=wkR14_xSMII.

-
- ²⁵³ Entrevista de la ACLU con Hans Perl-Manzano, 4 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁵⁴ Comunicación por correo electrónico de Rachel Hiskes, 4 de mayo de 2011.
- ²⁵⁵ Sara Justicia y Nydia Bauzá, *Macanazos y gases lacrimógenos a los estudiantes en el Capitolio*, PRIMERA HORA, 30 de junio de 2010; *Figueroa Sancha defiende Violencia Policiaca y Advierte que lo hará de Nuevo*, UNIVISIÓN, disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=67LyuNF7NCc> (vídeo); *Reacciona el superintendente*, WAPA.TV, 30 de junio de 2010, disponible en http://www.wapa.tv/noticias/locales/reacciona-el-superintendente_20100630191454.html.
- ²⁵⁶ Comunicación por correo electrónico de Rachel Hiskes, 4 de mayo de 2011.
- ²⁵⁷ Informe del DOJ, página 31.
- ²⁵⁸ Comisión Especial Sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales, Colegio de Abogados de Puerto Rico, *Informe Preliminar* (12 de julio de 2010).
- ²⁵⁹ Informe del DOJ, página 31.
- ²⁶⁰ Entrevista de la ACLU con Roberto Morales, 1 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁶¹ Entrevista de la ACLU con Zulee Aguilar, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁶² *Id.*
- ²⁶³ *Id.*
- ²⁶⁴ Entrevista de la ACLU con Shariana Ferrer Núñez, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁶⁵ Entrevista de la ACLU con Victoria Carro Robledo, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ²⁶⁶ Entrevista de la ACLU con Ricardo Olivero, 7 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁶⁷ Entrevista de la ACLU con Amada García, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ²⁶⁸ *Id.*
- ²⁶⁹ *Id.*
- ²⁷⁰ Véase las imágenes de vídeo, disponibles en <http://www.youtube.com/watch?v=77xiyogluY>.
- ²⁷¹ Imágenes de vídeo disponibles en http://www.youtube.com/watch?v=04TIgF6Cj_U&feature=related.
- ²⁷² Entrevista de la ACLU con Enrique G. Juliá Ramos, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ²⁷³ Para ver imágenes de vídeo, puede visitar por ejemplo <http://www.youtube.com/watch?v=1RV8nzlyOFA> y <http://www.primerahora.com/vevideosdeestudiantesysindicatossacadosapalosdehotelsheaton-388880.html>.
- ²⁷⁴ Entrevista de la ACLU con Luisa Acevedo Zambrano, 2 de mayo de 2011 y 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁷⁵ *Id.*
- ²⁷⁶ *Id.*
- ²⁷⁷ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez Báez, 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁷⁸ Informe del DOJ, página 28.
- ²⁷⁹ Entrevista de la ACLU con Luisa Acevedo Zambrano, 2 de mayo de 2011 y 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁸⁰ Entrevista de la ACLU con José Rodríguez Báez, 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁸¹ *Id.*
- ²⁸² Entrevista de la ACLU con Luisa Acevedo Zambrano, 2 de mayo de 2011 y 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁸³ Nydia Bauzá, *Obreros elevan protestas al Supremo*, PRIMERA HORA, 12 de febrero de 2010.
- ²⁸⁴ Entrevista de la ACLU con Luisa Acevedo Zambrano, 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁸⁵ Informe del DOJ, página 27.
- ²⁸⁶ Testimonio de la abogada Linda Backiel, en representación de su clienta, Michelle Padrón Gauthier, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ²⁸⁷ Entrevista de la ACLU con Hans Perl-Manzano, 4 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁸⁸ *Id.*
- ²⁸⁹ *Id.*
- ²⁹⁰ Entrevista de la ACLU con Luis Torrez, 29 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico; Entrevista de la ACLU con Rocío Villela, 29 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁹¹ Comunicación por correo electrónico de Aníbal J. Núñez González, 2 de mayo de 2011; *Luis M. Pellot Juliá, Aníbal J. Núñez González u otros contra Ana R. Guadalupe, José de la Torre y otros*, Tribunal de Apelaciones, Sentencia, Caso Núm. K PE2010-4829 (904) (11 de enero de 2011).
- ²⁹² Entrevista de la ACLU con Zulee Aguilar, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁹³ Entrevista de la ACLU con Roberto Morales, 1 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

-
- ²⁹⁴ *Id.*
- ²⁹⁵ Testimonio de Gamelyn Oduardo, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ²⁹⁶ Entrevista de la ACLU con Xiomara Caro Díaz, 6 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁹⁷ *Id.*
- ²⁹⁸ Entrevista de la ACLU con Roberto Morales, 1 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ²⁹⁹ Entrevista de la ACLU con Amada García, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ³⁰⁰ *Id.*
- ³⁰¹ Para ver imágenes de vídeo de la primera parte del incidente en el edificio de Ciencias Naturales, consulte <http://www.youtube.com/watch?v=GtUxFD9eoEI&list=UUqXGwsxX5S9Dw8YGgSX8Kvg&index=149&feature=plcp>. Para ver imágenes de vídeo de la segunda parte del incidente en Plaza Universitaria, consulte http://www.youtube.com/watch?v=pp_CNqAWcXI.
- ³⁰² Entrevista de la ACLU con Roberto Morales, 1 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³⁰³ Testimonio de Manuel Ortiz, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ³⁰⁴ Testimonio de Gamelyn Oduardo, 2 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ³⁰⁵ *Id.*
- ³⁰⁶ *Id.*
- ³⁰⁷ *Id.*
- ³⁰⁸ Entrevista de la ACLU con Zulee Aguilar, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³⁰⁹ Entrevista de la ACLU con Ricardo Olivero, 7 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹⁰ *Id.*
- ³¹¹ Entrevista de la ACLU con Zulee Aguilar, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹² Entrevista de la ACLU con Shariana Ferrer Núñez, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico; entrevista de la ACLU con Zulee Aguilar, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹³ Entrevista de la ACLU con Shariana Ferrer Núñez, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹⁴ Entrevista de la ACLU con Roberto Morales, 4 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹⁵ Entrevista de la ACLU con Zulee Aguilar, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹⁶ Entrevista de la ACLU con Guillermo Torres Grajales, 4 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ³¹⁷ *Id.*
- ³¹⁸ Maria Miranda, *21 Women Killed This Year by Partners*, PUERTO RICO DAILY SUN, 14 de julio de 2011.
- ³¹⁹ Centro Reina Sofía, *Tercer Informe internacional: Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, estadísticas y legislación*, páginas 89 a 92 (2010).
- ³²⁰ *The Homicide Report, Circumstances – Domestic Violence*, LOS ANGELES TIMES.
- ³²¹ *Id.*
- ³²² Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Shannan M. Catalano, Michael R. Rand y otros, *Female Victims of Violence* (30 de septiembre de 2009).
- ³²³ Tendencias PR, *Compendio de Estadísticas: Violencia en Puerto Rico, 2009* (2010); EL NUEVO DÍA, *Mujeres en Puerto Rico*; Oficina de la Procuradora de las Mujeres, *Cuando solo una es demasiado: Informe de asesinatos de mujeres por el motivo de violencia doméstica, Puerto Rico 2007* (2008, revisado en 2009); Oficina de la Procuradora de las Mujeres, *Ni una más: Informe de asesinatos de mujeres por el motivo de violencia doméstica, Puerto Rico 2006* (2007, revisado en 2009); Universidad de Puerto Rico, *De cara hacia el futuro*.
- ³²⁴ Las cifras oficiales del Gobierno registraron 26 homicidios por compañeros íntimos en 2011, pero las organizaciones de la sociedad civil informaron de cinco casos adicionales de mujeres asesinadas por sus compañeros durante los últimos días de diciembre de 2011, lo que sitúa la cifra en 30 casos de mujeres asesinadas por sus compañeros. Véase, por ejemplo, Tania Polanco, *El 2011 tuvo alarmantes niveles de violencia en RD y Puerto Rico*, DIARIO LIBRE, 2 de enero de 2011.
- ³²⁵ *The Homicide Report, Circumstances – Domestic Violence*, LOS ANGELES TIMES.
- ³²⁶ Bárbara Figueroa Rosa, *Clamor de justicia en sepelio de enfermera de Ceiba*, PRIMERA HORA, 17 de febrero de 2012; Eugenio Hopgood Dávila, *Llamado a evitar que otra mujer sea asesinada*, EL NUEVO DÍA, 17 de febrero de 2012; Eugenio Hopgood Dávila, *Familiares de mujer asesinada en Ceiba piden justicia*, EL NUEVO DÍA, 16 de febrero de 2012; Bárbara J. Figueroa Rosa, *Clamor de justicia en el entierro de Wandy Camacho*, PRIMERA HORA, 18 de febrero de 2012; *Procuradora de la Mujer exige investigación para fijar responsabilidades*, TELEMUNDO, 15 de febrero de 2012; *Procuradora investiga instalación de*

grillete a presunto asesino de mujer en Ceiba, PRIMERA HORA, 14 de febrero de 2012; Eugenio Hopgood Dávila, *Fracasaron en proteger a mujer asesinada por su ex pareja*, EL NUEVO DÍA, 15 de febrero de 2012.

³²⁷ Procuradora investiga instalación de grillete a presunto asesino de mujer en Ceiba, PRIMERA HORA, 14 de febrero de 2012; Eugenio Hopgood Dávila, *Fracasaron en proteger a mujer asesinada por su ex pareja*, EL NUEVO DÍA, 15 de febrero de 2012.

³²⁸ *Id.*

³²⁹ *Id.*

³³⁰ *Id.*

³³¹ *Id.*

³³² *Id.*

³³³ *Id.*

³³⁴ *Id.*

³³⁵ *Id.*

³³⁶ *Id.*

³³⁷ *Id.*

³³⁸ Bárbara Figueroa Rosa, *Clamor de justicia en sepelio de enfermera de Ceiba*, PRIMERA HORA, 17 de febrero de 2012; Eugenio Hopgood Dávila, *Llamado a evitar que otra mujer sea asesinada*, EL NUEVO DÍA, 17 de febrero de 2012; Eugenio Hopgood Dávila, *Familiares de mujer asesinada en Ceiba piden justicia*, EL NUEVO DÍA, 16 de febrero de 2012; Bárbara J. Figueroa Rosa, *Clamor de justicia en el entierro de Wandy Camacho*, PRIMERA HORA, 18 de febrero de 2012.

³³⁹ Preso el hombre imputado de matar ex pareja en Ceiba, PRIMERA HORA, 14 de febrero de 2012.

³⁴⁰ Wilma Maldonado Arrigoitia y Sara M. Justicia Doll, *Juntos hasta la tumba*, PRIMERA HORA, 12 de enero de 2011.

³⁴¹ Barbara J. Figueroa Rosa, *Padre presintió que su hija moriría*, PRIMERA HORA, 11 de enero de 2011; Barbara J. Figueroa Rosa, *Arrestan a hombre acusado de matar a compañera en Patillas*, PRIMERA HORA, 10 de enero de 2011; Darisabel Texidor Guadalupe, *Despiden entre llantos y aplausos a mujer asesinada en Patillas*, PRIMERA HORA, 12 de enero de 2011; Darisabel Texidor Guadalupe, *Declaran no procesable a hombre que asesinó a ex compañera en Patillas*, PRIMERA HORA, 24 de febrero de 2011; *Acusan hombre por asesinato de ex pareja*, EL NUEVO DÍA, 11 de enero de 2011.

³⁴² Javier Colón Dávila, *Degollada por ex pareja*, EL NUEVO DÍA, 27 de enero de 2011; Wilma Maldonado Arrigoitia, *Asesinada frente al hijo*, PRIMERA HORA, 27 de enero de 2011; *Transportan al hospital al hombre que asesinó a su ex pareja en Túnel Guajataca*, PRIMERA HORA, 26 de enero de 2011.

³⁴³ Maelo Vargas Saavedra, *Víctima fatal por violencia doméstica en Mayagüez*, PRIMERA HORA, 23 de enero de 2011; Maelo Vargas Saavedra, *Ingresan a prisión imputado por la muerte de su ex pareja, Sacha Hernández Alemar*, PRIMERA HORA, 24 de enero de 2011.

³⁴⁴ Luis Dalmau D., *Dominicano mata en PR a su ex mujer y se suicida*, EL NACIONAL (República Dominicana), 29 de enero de 2011.

³⁴⁵ Ivelisse Rivera Quiñones, *A la cárcel con fianza millonaria asesino de mujer en Loíza*, PRIMERA HORA, 5 de febrero de 2011; Alberto Rullán, *La asesinan frente a su hijo*, WAPA.TV, 5 de febrero de 2011; Darisabel Texidor Guadalupe, *Dan último adiós a mujer asesinada*, PRIMERA HORA, 9 de febrero de 2011; *Asesina a su ex pareja en disputa por pensión*, EL NUEVO DÍA, 5 de febrero de 2011.

³⁴⁶ Frances Rosario, *Muere mujer que fue baleada en la cabeza por su esposo*, EL NUEVO DÍA, 10 de marzo de 2011; Darisabel Texidor Guadalupe y Arys Rodríguez Andino, *Asombrados por tragedia*, PRIMERA HORA, 5 de marzo de 2011; Darisabel Texidor Guadalupe, *Conmoción por la muerte de mujer*, PRIMERA HORA, 5 de marzo de 2011.

³⁴⁷ *Víctimas de violencia machista*, EL VOCERO, 13 de julio de 2011.

³⁴⁸ Javier Colón Dávila, *Despiadado asesinato*, EL NUEVO DÍA, 17 de marzo de 2011; Maribel Hernández Pérez y Pedro Menéndez, *No salen de su asombro familiares de pareja muerta en hecho de violencia doméstica*, PRIMERA HORA, 17 de marzo de 2011.

³⁴⁹ Daniel Rivera Vargas, *Otra mujer asesinada por su pareja*, EL NUEVO DÍA, 28 de marzo de 2011.

³⁵⁰ Ricardo Cortés Chico, *Hombre confiesa que asesinó por celos a su pareja y a un acompañante*, EL NUEVO DÍA, 30 de marzo de 2011; Maelo Vargas Saavedra, *Posponen vista contra hombre que confesó asesinato de su ex esposa y acompañante*, PRIMERA HORA, 13 de abril de 2011.

- ³⁵¹ Darisabel Texidor Guadalupe, *Duerme en la cárcel mujer acusada de asesinar a su novia*, PRIMERA HORA, 7 de abril de 2011; Javier Colón Dávila, *Policía inspecciona auto y su posible relación con muerte de mujer*, EL NUEVO DÍA, 4 de abril de 2011.
- ³⁵² Darisabel Texidor Guadalupe, *El novio asesinó a Frances*, PRIMERA HORA, 9 de abril de 2011; Darisabel Texidor Guadalupe, *Un duro golpe la muerte de Frances*, PRIMERA HORA, 12 de abril de 2011.
- ³⁵³ Istra Pacheco, *Claman por castigo para el asesino de Aida*, PRIMERA HORA, 27 de abril de 2011; Sara M. Justicia Doll, *Sujeto cumplió amenaza al degollar a su pareja*, PRIMERA HORA, 24 de abril de 2011; Alberto Rullán, *Sexagenario asesina a su pareja*, WAPA.TV, 24 de abril de 2011.
- ³⁵⁴ Javier Colón Dávila, *Trágico fin de convulsa relación*, EL NUEVO DÍA, 7 de mayo de 2011; Ivelisse Rivera Quiñones, *Escala ocho pisos y mata a su ex pareja frente a sus hijos en Aguadilla*, PRIMERA HORA, 6 de mayo de 2011; Maelo Vargas Saavedra, *Reclaman cese a la violencia doméstica durante sepelio de mujer en Aguadilla*, PRIMERA HORA, 10 de mayo de 2011.
- ³⁵⁵ Yainary López Quintana, *Sospechan del novio en brutal crimen de mujer*, EL NUEVO DÍA, 9 de julio de 2011; Osman Pérez Méndez, *Matan a cuchilladas a una madre de cuatro*, EL NUEVO DÍA, 9 de junio de 2011; Maelo Vargas, *Le roban la vida a puñaladas*, PRIMERA HORA, 10 de junio de 2011; Yainary López Quintana, *“Varias veces él dijo que la iba a matar”*, EL NUEVO DÍA, 10 de junio de 2011.
- ³⁵⁶ Wilma Maldonado Arrigoitia, *Sentencian a 65 años de cárcel sujeto que mató a su esposa en Arecibo*, PRIMERA HORA, Sept. 29, 2011; Wilma Maldonado Arrigoitia, *Preso en Guerrero esposo de Josmarie Serrano Fonseca*, PRIMERA HORA, 21 de junio de 2011.
- ³⁵⁷ Maelo Vargas, *Hombre que asesinó a su compañera se declara culpable*, PRIMERA HORA, 7 de diciembre de 2011; Ivelisse Rivera Quiñones, *Hombre mata a su pareja de un machetazo en Lajas*, PRIMERA HORA, 12 de julio de 2011; Ivelisse Rivera Quiñones, *Degüella a pareja con machete*, PRIMERA HORA, 13 de julio de 2011.
- ³⁵⁸ Maribel Hernández Pérez, *Acribilla a pareja y se suicida*, PRIMERA HORA, 19 de julio de 2011.
- ³⁵⁹ Alex Figueroa Cancel, *Hombre asesina a su pareja y luego se suicida en Toa Alta*, PRIMERA HORA, 25 de agosto de 2011; Javier Colón Dávila, *Familiares y vecinos lamentan caso de violencia doméstica en Toa Alta*, EL NUEVO DÍA, 25 de agosto de 2011; Francisco Rodríguez-Burns, *Macabro crimen en comunidad remota de Toa Alta*, PRIMERA HORA, 25 de agosto de 2011.
- ³⁶⁰ Eugenio Hopgood Dávila, *Grave denuncia a dos jueces*, EL NUEVO DÍA, 26 de noviembre de 2011; *Procuradora de las Mujeres acusa a juez de negligente*, EL NUEVO DÍA, 25 de noviembre de 2011; *Procuradora de las Mujeres pide investigar posible violación a la ley en caso de ataque en Aguadilla*, EL NUEVO DÍA, 12 de noviembre de 2011.
- ³⁶¹ Ivelisse Cortes Kercado, *Exigen esclarecer ocho asesinatos por violencia doméstica*, TELEMUNDO, 30 de diciembre de 2011; *Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y Coalición Coordinadora Paz para la Mujer*, comunicado de prensa, *Organizaciones pro mujeres exigen esclarecer 8 asesinatos por violencia doméstica del 2011*, 29 de diciembre de 2011.
- ³⁶² Maria Miranda, *21 Women Killed This Year by Partners*, PUERTO RICO DAILY SUN, 14 de julio de 2011.
- ³⁶³ Informe del DOJ, página 58.
- ³⁶⁴ Díaz Colón saca la Policía de diferentes asuntos, WAPA.TV, 7 de septiembre de 2011.
- ³⁶⁵ Organización Mundial de la Salud, *Informe mundial sobre la violencia y la salud*, página 25 (2002).
- ³⁶⁶ *Cuando solo una es demasiado: Informe de asesinatos de mujeres por el motivo de violencia doméstica, Puerto Rico 2007*, página 7 (2008, revisado en 2009).
- ³⁶⁷ “[T]odo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, aunque no mediere una orden a esos efectos, si tuviere motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha cometido, aunque no fuere en su presencia, o está cometiendo en su presencia una violación a las disposiciones delictivas de esta Ley”. PR ST T. 8 § 638.
- ³⁶⁸ Emily J. Sack, *Report on Domestic Violence Practices and Services of the Puerto Rico Court System and its Partners: Assessment, Evaluation and Recommendations*, página 6 (17 de mayo de 2006).
- ³⁶⁹ *Id.*, páginas 23, 27.
- ³⁷⁰ Jodie G. Roure, *Gender Justice in Puerto Rico: Domestic Violence, Legal Reform, and the Use of International Human Rights Principles*, 33 HUMAN RIGHTS QUARTERLY, páginas 790, 798-99 (2011).
- ³⁷¹ Emily J. Sack, *Report on Domestic Violence Practices and Services of the Puerto Rico Court System and its Partners: Assessment, Evaluation and Recommendations*, página 23 (17 de mayo de 2006).
- ³⁷² *Id.*
- ³⁷³ *Id.*

³⁷⁴ Departamento de Justicia de Estados Unidos, National Institute of Justice, *Practical Implications of Current Domestic Violence Research: For Law Enforcement, Prosecutors and Judges*, página 36 (junio de 2009).

³⁷⁵ *Id.*, página 27.

³⁷⁶ *Id.*, página 6.

³⁷⁷ *Id.*

³⁷⁸ Oficina de la Procuradora de las Mujeres, *Estadísticas de violencia doméstica, Incidentes de violencia doméstica*; Tendencias PR, *Compendio de Estadísticas: Violencia en Puerto Rico, 2009* (2010); Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas, *Incidentes de violencia doméstica por área*; Entreparedes.org, *Datos que te harán actuar*.

³⁷⁹ Maricarmen Rivera, *Víctimas con las manos vacías: Procuradora de la Mujer denuncia inacción en muchas salas de justicia ante la violencia doméstica*, VOCERO, 8 de abril de 2012; Tendencias PR, *Compendio de Estadísticas: Violencia en Puerto Rico, 2009* (2010); Oficina de la Procuradora de las Mujeres, *Estadísticas de violencia doméstica, Incidentes de violencia doméstica*; Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas, *Incidentes de violencia doméstica por área*.

³⁸⁰ Departamento de Salud, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, *Violencia Sexual en Puerto Rico*, página 3 (2007).

³⁸¹ *Id.*

³⁸² Tendencias PR, *Compendio de Estadísticas: Violencia en Puerto Rico, 2009*, página 106 (2010); informe del DOJ, página 57.

³⁸³ Informe del DOJ, página 16.

³⁸⁴ *Id.*, página 17.

³⁸⁵ *Id.*, página 5.

³⁸⁶ *Id.*, página 58.

³⁸⁷ Entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

³⁸⁸ Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico* (21 de diciembre de 2007), disponible en <http://www.claridadpuertorico.com/documents/articles/02%20Informe%20Polic%C3%ADa%2021%20Dic%202007.pdf>; Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico: La Corrupción en la Policía de Puerto Rico* (1 de mayo de 2008), disponible en <http://pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?reference=/images/file/Informe%202008.pdf>.

³⁸⁹ Entrevista de la ACLU con Ruth Jiménez de Jesús, San Juan, Puerto Rico, 28 de marzo de 2011. El agente implicado en los casos de Polaco y de Cirino, Isaac Joel Pizarro Pizarro, murió posteriormente por disparos en un incidente diferente en diciembre de 2011.

³⁹⁰ José Luis Irizarry Muñiz, Betsy Jeannette Pérez Rivera y otros contra Eric Rivera Nazario, Jaime Rodríguez Vega y otros, demanda 11-01337 (13 de abril de 2011); Óscar J. Serrano y Melissa Solórzano García, *Demanda por policías que mataron al joven en Yauco*, NOTICEL, 19 de abril de 2011; *Podrían demandar al agente*, EL NUEVO DÍA, 18 de octubre de 2010; *Objetan desaparición de vídeo en caso de brutalidad policiaca*, EL NUEVO DÍA, 2 de julio de 2010; Keila López Alicea, *Justicia no se rinde*, EL NUEVO DÍA, 4 de febrero de 2009; *Causa para juicio contra policía estatal*, EL NUEVO DÍA, 26 de junio de 2009.

³⁹¹ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

³⁹² Informe del DOJ, página 70.

³⁹³ Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico* (21 de diciembre de 2007), disponible en <http://www.claridadpuertorico.com/documents/articles/02%20Informe%20Polic%C3%ADa%2021%20Dic%202007.pdf>; Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico: La Corrupción en la Policía de Puerto Rico* (1 de mayo de 2008).

³⁹⁴ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

³⁹⁵ Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico* (21 de diciembre de 2007).

³⁹⁶ Entrevista de la ACLU con Ruth Jiménez de Jesús, San Juan, Puerto Rico, 28 de marzo de 2011.

-
- ³⁹⁷ *Id.*
- ³⁹⁸ *Id.*
- ³⁹⁹ *Id.*
- ⁴⁰⁰ *Id.*
- ⁴⁰¹ *Id.*
- ⁴⁰² Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico* (21 de diciembre de 2007), disponible en <http://www.claridadpuertorico.com/documents/articles/02%20Informe%20Polic%20C3%ADa%2021%20Dic%202007.pdf>; Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico, *Informe del Comité Evaluador Externo de la Policía de Puerto Rico: La Corrupción en la Policía de Puerto Rico* (1 de mayo de 2008).
- ⁴⁰³ Comunicación por correo electrónico de Nora Vargas con la ACLU, 5 de mayo de 2011.
- ⁴⁰⁴ Entrevista de la ACLU con Enrique G. Juliá Ramos, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ⁴⁰⁵ *Id.*
- ⁴⁰⁶ *Id.*
- ⁴⁰⁷ *Id.*
- ⁴⁰⁸ *Id.*
- ⁴⁰⁹ *Id.*
- ⁴¹⁰ *Id.*
- ⁴¹¹ *Id.*
- ⁴¹² Colegio de Abogados de Puerto Rico, Comisión Especial Sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales, *Informe Preliminar*, páginas 20-21 (12 de julio de 2010), disponible en http://www.capr.org/dmdocuments/Informe_Comi_Fiscalizacion.pdf.
- ⁴¹³ Por ejemplo, *id.*, página 76.
- ⁴¹⁴ Entrevista de la ACLU con Hans Perl-Matanzo, 4 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico; Comunicación por correo electrónico de Hans Perl-Matanzo, 3 de mayo de 2011.
- ⁴¹⁵ Entrevista de la ACLU con Luis Torrez, martes, 29 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ⁴¹⁶ Entrevista de la ACLU con Amada García, 5 de mayo de 2011, Río Piedras, Puerto Rico.
- ⁴¹⁷ Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional, *Relación Annual de Querellas Administrativas por Acciones Disciplinarias Recomendadas y Referidas a la Oficina de Asuntos Legales*.
- ⁴¹⁸ *Id.*
- ⁴¹⁹ *Gutiérrez-Rodríguez v. Cartagena*, 882 F.2nd, páginas 553, 581-82, 565-66 (Primer Circuito, 1989).
- ⁴²⁰ *Gutiérrez-Rodríguez*, 882 F.2nd, página 582.
- ⁴²¹ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, Prueba JJJ, Informe de Lou Reiter presentado bajo pena de cometer perjurio, 15 de marzo de 2011.
- ⁴²² *Id.*
- ⁴²³ *Id.*
- ⁴²⁴ *Id.*
- ⁴²⁵ PPR, *Orden Especial 90-5*.
- ⁴²⁶ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ⁴²⁷ *Id.*
- ⁴²⁸ *Id.*
- ⁴²⁹ *Id.*
- ⁴³⁰ *Id.*
- ⁴³¹ Entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico; véase, *Camilo-Robles v. Zapata*, 175 F.3d 141 (Primer Circuito, 1999); *Camilo-Robles v. Hoyos*, 151 F.3s 1 (Primer Circuito, 1998); *Rosario Díaz v. González*, 140 F.3d 312 (Primer Circuito, 1998); *Díaz v. Martínez*, 112 F.3d (Primer Circuito, 1998).
- ⁴³² *Id.*
- ⁴³³ *Id.*
- ⁴³⁴ *Id.*

⁴³⁵ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso Núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, presentado el 15 de marzo de 2011; entrevista de la ACLU con Judith Berkan, 5 de abril de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁴³⁶ *Id.*

⁴³⁷ *Id.*

⁴³⁸ *Id.*

⁴³⁹ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁴⁴⁰ *Id.*

⁴⁴¹ *Evelyn Ramírez Lluveras y otros contra Javier Pagán Cruz y otros*, D.P.R., Caso núm. 3:08-cv-01486-FAB, Declaración del demandante de los hechos en contra de la petición de juicio sumario para determinar la responsabilidad, Prueba JJJ, Informe de Lou Reiter presentado bajo pena de cometer perjurio, 15 de marzo de 2011.

⁴⁴² *Id.*

⁴⁴³ *Id.*

⁴⁴⁴ *Id.*

⁴⁴⁵ Informe del DOJ, página 40.

⁴⁴⁶ *Id.*

⁴⁴⁷ PPR, *Orden General* 2004-3.

⁴⁴⁸ PPR, *Orden General* 2008-2. Véase informe del DOJ, página 34.

⁴⁴⁹ Informe del DOJ, página 60.

⁴⁵⁰ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁴⁵¹ *Id.*

⁴⁵² *Id.*

⁴⁵³ *Jorge Molina y otros contra Natal Rivera y otros*, Demanda, D.P.R., Caso Núm. 3:2011cv01882, presentada el 7 de septiembre de 2011; *Superintendente confirma se radicarán cargos por asesinato en segundo grado a policía que mató a joven deportista*, EL NUEVO DÍA, 28 de septiembre de 2010; Frances Rosario y Javier Colón, *Súper pide espacio para pesquisa de incidente de joven baleado*, EL NUEVO DÍA, 23 de septiembre de 2010; *Causa para juicio contra ex policía Abimalet Natal Rivera*, PRIMERA HORA, 17 de marzo de 2011; Maribel Hernández Pérez, *Joven baleado por la Policía pierde la batalla*, PRIMERA HORA, 25 de septiembre de 2010.

⁴⁵⁴ Memorando, Oficina del Monitor Independiente, *Informe: Implementación de la presión del gatillo “trigger weight” en las armas de reglamento de la Policía de Puerto Rico*, 23 de junio de 2011.

⁴⁵⁵ Según el memorando de la Oficina del Monitor Independiente de la Policía, entre las armas reglamentarias que seguían siendo usadas por los agentes y cuya resistencia del gatillo no se había modificado o no se habían intercambiado por nuevas armas de fuego había 7.508 pistolas Smith & Wesson 5906, 330 pistolas Smith & Wesson 5903, 30 pistolas Smith & Wesson 6904, y 1.203 pistolas Smith & Wesson 6906. Memorando, Oficina del Monitor Independiente, *Informe: Implementación de la presión del gatillo “trigger weight” en las armas de reglamento de la Policía de Puerto Rico*, 23 de junio de 2011.

⁴⁵⁶ Lynn Hamilton, *Light Triggers, Heavy Pulls*, MOTHER JONES, 26 de enero de 2000.

⁴⁵⁷ New York City Police Department, *Annual Firearms Discharge Report 2010*, página 45 (2011).

⁴⁵⁸ Véase *Id.*; Melvin Claxton, *Top Police Gun Prone to Accidental Firing*, DETROIT NEWS, 15 de diciembre de 2003.

⁴⁵⁹ Informe del DOJ, página 83. El único estado de Estados Unidos que no tiene este tipo de organismo es Hawaii.

⁴⁶⁰ Entrevista de la ACLU con Efraín Rivera Pérez, Monitor Independiente de la Policía, 29 de marzo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁴⁶¹ Comunicación por correo electrónico de Xiomara Colón-Rodríguez, asesora legal de la Oficina del Monitor Independiente, 30 de marzo de 2011.

⁴⁶² Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.

⁴⁶³ *Id.*

⁴⁶⁴ Informe del DOJ, página 67.

- ⁴⁶⁵ Entrevista de la ACLU con Max Pérez Bouret, entonces superintendente auxiliar de Servicios Administrativos de la PPR, 6 de mayo de 2011, San Juan, Puerto Rico.
- ⁴⁶⁶ *Graham v. Connor*, 490 U.S., páginas 386, 394-95 (1989).
- ⁴⁶⁷ *Bastien v. Goddard*, 279 F.3d 10, 14 (Primer Circuito, 2002); *Alexis v. McDonalds Restaurants of Massachusetts, Inc.*, 67 F.3d 341, 353 (Primer Circuito, 1995); véase también *Glenn v. City of Tyler*, 242 F.3d 307, 314 (Quinto Circuito, 2001); *Headwaters Forest Defense v. County of Humboldt*, 240 F.3d 1185, 1199 (Noveno Circuito), *vacated and remanded on other grounds sub. nom., County of Humboldt v. Headwaters Forest Defense*, 534 U.S. 801 (2001) (que afirma que: “El hecho de que el uso de la fuerza plantee un peligro de lesión permanente o significativa es un factor a considerar a la hora de evaluar la necesidad de la fuerza querellada en un caso particular —pero no es ciertamente determinante”).
- ⁴⁶⁸ *Tennessee v. Garner*, 471 U.S. 1 (1985).
- ⁴⁶⁹ *Garner*, 471 U.S., página 19.
- ⁴⁷⁰ *Garner*, 471 U.S., página 11.
- ⁴⁷¹ *Graham v. Connor*, 490 U.S., páginas 386, 394-96 (1989).
- ⁴⁷² *Graham*, 490 U.S., página 396; *United States v. Place*, 462 U.S. 696, 703 (1983).
- ⁴⁷³ *Graham*, 490 U.S., páginas 394-96.
- ⁴⁷⁴ *Graham*, 490 U.S., página 386.
- ⁴⁷⁵ *Scott v. Harris*, 550 U.S., páginas 372, 384 (2007).
- ⁴⁷⁶ *Garner*, 471 U.S., página 3; véase también *Whitfield v. Meléndez-Rivera*, 431 F.3d 1 (Primer Circuito, 2005); *Jarret v. Town of Yarmouth*, 331 F.3d 140, 149 (Primer Circuito, 2003).
- ⁴⁷⁷ Véase *Napier v. Town of Windham*, 187 F.3d, páginas 177, 185-87 (Primer Circuito, 1999).
- ⁴⁷⁸ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución de la Asamblea General 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el* 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, preámbulo.
- ⁴⁷⁹ *Id.*, artículo 6 (1).
- ⁴⁸⁰ *Id.*, artículo 9.
- ⁴⁸¹ Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Resolución de la Asamblea General 217A(III), U.N. Doc A/810, página 78 (1948), adoptada el 10 de diciembre de 1948, artículos 1, 3.
- ⁴⁸² Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Resolución XXX de la OEA, adoptada en la Novena Conferencia de Estados Americanos (1948), artículo 1.
- ⁴⁸³ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución de la Asamblea General 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el* 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículos 4(2) y 5.
- ⁴⁸⁴ La tortura se define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), adoptada el 10 de diciembre de 1984, Resolución 39/46 de la Asamblea General, anexo, 39 U.N. GAOR Supp. (núm. 51), página 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), *en vigor desde el* 26 de junio de 1987, ratificada por Estados Unidos el 21 de octubre de 1994).
- ⁴⁸⁵ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución de la Asamblea General 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el* 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículos 7 y 8; Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), adoptada el 10 de diciembre de 1984, Resolución 39/46 de la Asamblea General, anexo, 39 U.N. GAOR Supp. (núm. 51), página 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), *en vigor desde el* 26 de junio de 1987, ratificada por Estados Unidos el 21 de octubre de 1994, artículos 2 y 16.
- ⁴⁸⁶ Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, A/Res/43/173, 76ª sesión plenaria, (1998), principio 6.
- ⁴⁸⁷ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución de la Asamblea General 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el* 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículo 26. Véase también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR), adoptada el 21 de diciembre de 1965, Resolución 2106 (XX), anexo, 20 U.N. GAOR Supp. (Núm. 14),

página 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, en vigor desde el 4 de enero de 1969, ratificada por Estados Unidos el 21 de octubre de 1994.

⁴⁸⁸ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución Resolución 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el 23 de marzo de 1976*, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículo 26.

⁴⁸⁹ Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR), adoptada el 21 de diciembre de 1965, Resolución 2106 (XX), anexo, 20 U.N. GAOR Supp. (Núm. 14), página 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, ratificada por Estados Unidos el 21 de octubre de 1994, artículos 1(1), 5(b) y 6.

⁴⁹⁰ Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, A/Res/43/173, 76ª sesión plenaria, (1998), principio 5; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Resolución XXX de la OEA, adoptada en la Novena Conferencia de Estados Americanos (1948), artículo 2.

⁴⁹¹ Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Resolución de la Asamblea General 34/169 (aprobada el 17 de diciembre de 1979).

⁴⁹² Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 (1990), artículo 4.

⁴⁹³ *Id.*, artículo 5.

⁴⁹⁴ Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Resolución de la Asamblea General 34/169 (aprobada el 17 de diciembre de 1979).

⁴⁹⁵ *Id.*, principio 4.

⁴⁹⁶ *Id.*, principio 2.

⁴⁹⁷ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución Resolución 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el 23 de marzo de 1976*, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículo 10(1); Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, A/Res/43/173, 76ª sesión plenaria, (1998), principio 1.

⁴⁹⁸ Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, A/Res/43/173, 76ª sesión plenaria, (1998), principio 3.

⁴⁹⁹ Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Resolución de la Asamblea General 34/169 (aprobada el 17 de diciembre de 1979), principios 15 y 16.

⁵⁰⁰ Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), adoptada el 10 de diciembre de 1984, Resolución 39/46 de la Asamblea General, anexo, 39 U.N. GAOR Supp. (núm. 51), página 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), en vigor desde el 26 de junio de 1987, ratificada por Estados Unidos el 21 de octubre de 1994, artículos 12 y 14(1).

⁵⁰¹ Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Resolución de la Asamblea General 34/169 (aprobada el 17 de diciembre de 1979), principio 7.

⁵⁰² Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Estados Unidos de América, U.N.Doc.CCPR/C/79/Add.50,A/50/40 (1995), párrafo 297.

⁵⁰³ Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Estados Unidos de América, 87ª Sesión, CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 (2006).

⁵⁰⁴ Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de la resolución 1996/74 de la Comisión de Derechos Humanos. Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo, especialmente en los países y territorios coloniales y dependientes, E/CN.4/1997/60, 53ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos (1996), página 11.

⁵⁰⁵ Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Estados Unidos de América, 36ª Sesión, CAT/C/USA/CO/2 (2006).

⁵⁰⁶ Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial: Estados Unidos de América, U.N. Doc. CERD/C/59/Misc.17/Rev.3 (2001); Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial: Estados Unidos de América, U.N. Doc. CERD/C/SR.1853 (2008).

- ⁵⁰⁷ Véase, por ejemplo, *Hurley v. Irish-American GLB Group*, 515 U.S. 557 (1995); *NAACP v. Button*, 371 U.S. 415 (1963).
- ⁵⁰⁸ *NAACP v. Claiborne Hardware Co.*, 458 U.S. 886, 907 (1982).
- ⁵⁰⁹ Véase, por ejemplo, *Snyder v. Phelps*, 131 S. Ct. 1207, 1215 (2011) (“la expresión sobre cuestiones públicas ocupa el máximo rango en la jerarquía de los valores de la Primera Enmienda”); *Butterworth v. Smith*, 494 U.S. 624, 632 (1990) (“se ha reconocido tradicionalmente que la información relacionada con la presunta mala conducta oficial... es una parte esencial de la Primera Enmienda”); *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254, 269 (1964) (la Primera Enmienda garantiza “el libre intercambio de ideas para generar los cambios políticos y sociales deseados por el pueblo”).
- ⁵¹⁰ Véase, por ejemplo, *Boos v. Barry*, 485 U.S. 312, 318 (1988) (protección de la expresión en aceras colindantes con embajadas extranjeras, porque los foros públicos, “desde tiempos remotos, han sido usados para reunirse y comunicar pensamientos entre ciudadanos, y debatir cuestiones públicas”), citando *Hague v. CIO*, 307 U.S. 496, 515 (1939); *United States v. Grace*, 461 U.S. 171, 180 (1983) (protección de la expresión en las aceras colindantes con la Corte Suprema de Estados Unidos, porque “la propiedad tradicional de los foros públicos ocupa una posición especial en términos de la protección de la Primera Enmienda”).
- ⁵¹¹ *Pleasant Grove City v. Summum*, 129 S.Ct. 1125, 1132 (2009).
- ⁵¹² Véase *Pouillon v. City of Owosso*, 206 F.3d, páginas 711, 716-17 (Sexto Circuito, 2000).
- ⁵¹³ *Forsyth County, Ga. V. Nationalist Movement*, 505 U.S., páginas 123, 134-35 (1992).
- ⁵¹⁴ *Perry Educational Association v. Perry Local Educators’ Association*, 460 U.S., páginas 37, 45-56 (1983).
- ⁵¹⁵ *Forsyth County, Ga. V. Nationalist Movement*, 505 U.S., páginas 123, 130 (1992).
- ⁵¹⁶ Véase, por ejemplo, *City of Lakewood v. Plain Dealer Publishing Co.*, 486 U.S., páginas 750, 769-70 (1988).
- ⁵¹⁷ Véase, por ejemplo, *Bay Area Peace Navy v. U.S.*, 914 F.2d 1224, 1229 (Noveno Circuito, 1990).
- ⁵¹⁸ *Id.*
- ⁵¹⁹ *Papineau v. Parmley*, 465 F.3d, páginas 46, 56-67 (Segundo Circuito, 2006) (omisión de las citas internas).
- ⁵²⁰ *Hartman v. Moore*, 547 U.S., páginas 250, 251 (2006).
- ⁵²¹ Véase, por ejemplo, *Board of County Commissioners v. Umbehr*, 518 U.S., páginas 668, 674 (1996).
- ⁵²² *Tatro v. Kervin*, 41 F.3d 9, 18 (Primer Circuito, 1994).
- ⁵²³ *McGuire v. Reilly*, 386 F.3d 45, 59 (Primer Circuito, 2004).
- ⁵²⁴ *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S., páginas 444, 447 (1969).
- ⁵²⁵ *NAACP v. Claiborne Hardware Co.*, 458 U.S., página 886 (1982); *Virginia v. Black*, 538 U.S., páginas 343, 347-48, 359-60 (2003) (pluralidad).
- ⁵²⁶ *Whitney v. California*, 274 U.S. , páginas 357, 375 (1927) (Brandeis, J., concurrente).
- ⁵²⁷ *Cohen v. California*, 403 U.S., páginas 15, 20 (1971) (que define las palabras belicosas como “un insulto personal directo” que se “dirige personalmente al que lo escucha”); *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S., páginas 568, 573 (1942) (que define las palabras belicosas como una provocación a “la persona a la que se dirigen individualmente los comentarios” durante un enfrentamiento “cara a cara”); *Gower v. Vercler*, 377 F.3d, páginas 661, 670-71 (Séptimo Circuito, 2004) (que afirma que cacarear como una gallina en combinación con ciertas palabras y acciones ofensivas constituyen palabras belicosas).
- ⁵²⁸ *Texas v. Johnson*, 491 U.S., páginas 397, 409 (1989) (quema de banderas); *Collin v. Smith*, 578 F.2d, páginas 1197, 1202-03 (Séptimo Circuito, 1978) (cruz gamada); *Cohen*, 403 U.S., página 20 (“a la mierda el servicio militar”).
- ⁵²⁹ *Lewis v. City of New Orleans*, 415 U.S., páginas 130, 135 (1974) (Powell, J., concurrente) (“se puede esperar de un agente adiestrado adecuadamente que ‘ejerza un mayor grado de control’ que un ciudadano ordinario, y por lo tanto es menos probable que responda de manera beligerante a ‘palabras belicosas’”); *Provost v. City of Newburgh*, 262 F.3d, páginas 146, 159-60 (Segundo Circuito, 2001). Véase también *Payne v. Pauley*, 337 F.3d, páginas 767, 777 (Séptimo Circuito, 2003) (discutir y blasfemar de manera escandalosa con un agente de policía con constituye de por sí una alteración del orden público).
- ⁵³⁰ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución Resolución 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (Núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículos 19, 21 y 22.

⁵³¹ Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Resolución de la Asamblea General 217A(III), U.N. Doc A/810, página 78 (1948), adoptada el 10 de diciembre de 1948, artículos 19-20.

⁵³² Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el* 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículo 26. Véase también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR), adoptada el 21 de diciembre de 1965, Resolución 2106 (XX), anexo, 20 U.N. GAOR Supp. (núm. 14), página 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, *en vigor desde el* 4 de enero de 1969, ratificada por Estados Unidos el 21 de octubre de 1994.

⁵³³ Observación general núm. 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU: Artículo 19, Libertad de Opinión y Libertad de Expresión, 11-29 de julio de 2011.

⁵³⁴ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), página 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, *en vigor desde el* 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992, artículos 19 y 22.

⁵³⁵ Observación general núm. 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU: Artículo 19, Libertad de Opinión y Libertad de Expresión, 11-29 de julio de 2011, párrafo 25.

⁵³⁶ *Id.*

⁵³⁷ *Id.*

⁵³⁸ *Id.*, párrafo 26.

⁵³⁹ *Id.*

⁵⁴⁰ *Id.*, párrafo 32.

⁵⁴¹ *Id.*, párrafo 23.

⁵⁴² *Id.*

⁵⁴³ *Id.*, párrafo 34.

⁵⁴⁴ *Id.*

⁵⁴⁵ *Id.*

⁵⁴⁶ *Id.*, párrafo 35.

⁵⁴⁷ Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Resolución de la Asamblea General 34/169 (aprobada el 17 de diciembre de 1979).

⁵⁴⁸ *Id.*, principio 12.

⁵⁴⁹ *Id.*, principio 13.

⁵⁵⁰ *Id.*, principio 14.

⁵⁵¹ ACLU, *Preliminary Findings of the ACLU Human Rights Documentation Research in Puerto Rico* (13 de junio de 2011), disponible en <http://www.aclu.org/human-rights/aclu-investigation-reveals-systematic-pattern-police-brutality-and-abuse-puerto-rico> y http://www.aclu.org/files/assets/puerto_rico_preliminary_findings_6_13_11_final.pdf.